CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

Casa de la Vall, 26 d'abril de 1994

Sr. Jordi SOLE TURA
President de la "Comisión
de Asuntos Exteriores"
Congreso de los Diputados
MADRID

Distingit Senyor President,

Després de l'entrevista que vam poder mantenir, al Congrés dels Diputats, el passat dia 24 de febrer, i seguint l'esperit d'aquella trobada, la Comissió que presideixo ha acordat proposar-vos formalment una reunió conjunta.

Efectivament, en el marc de l'amistat i bona entesa entre el Regne d'Espanya i el Principat d'Andorra que el tractat que fou ratificat pel Congrés dels Diputats, el dia 24 de febrer, ve a definir i consolidar, la Comissió Legislativa de Política Exterior del Consell General tindria un interès especial en poder-vos rebre a Andorra per mantenir un primer encontre de treball.

Pensem que la data, a fixar de comú acord, podria trobar-se en el mes de juny. Amb el ben entès que si l'agenda de la vostra Comissió no us permet un desplaçament en aquell període, estem disposats a acudir a Madrid, si ho considereu adient.

Quedem doncs a l'espera de la vostra resposta i aprofitem l'avinentesa per saludar-vos molt cordialment.

EL PRESIDENT
DE LA COMISSIO LEGISLATIVA
DE POLITICA EXTERIOR

Jaume BARTUMEU CASSANY

CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

Excmo. Sr.
Presidente
de Asuntos
Congreso
MADRID

Excelentísimo

De acuerdo con
el Congreso
me complace
anterior carta

Esta tarde he
grupos parlamentarios
en Andorra,
Congreso de los

En principio las
lunes día 7 y el

Este mismo
legislativa de
en la cual se
visita a Andorra
Congreso de los

No obstante,
esquema de un

De todas formas
de nuestra
para hacerles

EL PRESIDENT
DE LA COMISSIO LEGISLATIVA
DE POLITICA EXTERIOR

Jaume BARTUMEU CASSANY

CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

PRE PROGRAMA

Lunes, 7 de noviembre

13 horas: Llegada de la delegación del Congreso de los Diputados. Acogida en el hotel y almuerzo con los miembros de la Comissió Legislativa de Política Exterior del *Consell General*.

16 horas: Visita de la Casa de la Vall (sede del *Consell General*)

17 horas: Reunión de trabajo en la Casa de la Vall.

19 horas: Recepción en la Embajada de España.

21 horas: Cena ofrecida por la Síndica.

Martes, 8 de noviembre

9 horas: Visita [illegible] seguida de un tour turístico [illegible]

13 horas: Almuerzo [illegible]

15 horas: Fin de [illegible]

CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

Casa de la Vall, 14 de octubre de 1994

Excmo. Sr. Jordi SOLE TURA
Presidente de la Comisión
de Asuntos Exteriores
Congreso de los Diputados
MADRID

Excelentísimo Señor,

En relación a nuestra carta del pasado dia 10 de octubre en la cual le confirmaba, en nombre de la Comisión Legislativa de Política Exterior, nuestra invitación, cursada en la anterior correspondencia del 26 de abril de 1994, puedo informarle que nuestra Comisión, reunida ayer jueves, adoptó el programa definitivo de la visita a Andorra de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, que acompañamos a la presente.

A la espera de poder recibirles en Andorra, reciba un cordial y afectuoso saludo.

EL PRESIDENT
DE LA COMISSIO LEGISLATIVA
DE POLITICA EXTERIOR

Jaume BARTUMEU CASSANY

CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

VISITA DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS A ANDORRA

PROGRAMA

Lunes, 7 de noviembre

13 horas: Llegada de la delegación del Congreso de los Diputados. Acogida en el hotel y almuerzo con los miembros de la *Comissio Legislativa de Politica Exterior* del *Consell General*.

16 horas: Visita de la *Casa de la Vall* (sede del *Consell General)*

16,30 horas: Reunión de trabajo en la Casa de la Vall.

17 horas: Rueda de prensa.

19 horas: Recepción en la Embajada de España.

21 horas: Cena ofrecida por la Sindicatura.

Martes, 8 de noviembre:

9 horas: Visita turística al Principado.

13 horas: Almuerzo en Erts (La Massana).

16 horas: Fin de la visita.

CONSELL GENERAL
PRINCIPAT D'ANDORRA

DATA: 4 DE NOVEMBRE DE 1994

NUM. DE PLANES INCLOSES LES COBERTES: 1

DESTINATARI: Sr. JORDI SOLE TURA

NUM. DE FAX: 93 - 280 35 45

REMITENT: Sr. JAUME BARTUMEU CASSAN

NUM. DE FAX: 86 2

TEXT:

Pel seu coneixement, li trameto còpia de la nota que ha estat lliurada a la premsa, en relació a la roda de premsa que tindrà lloc el proper dilluns, dia 7 de novembre.

"Amb motiu de la visita a Andorra, d'una delegació de la Comissió d'Afers Exteriors del Congrés de Diputats espanyol, el dilluns, dia 7 de novembre, a les 18 hores, les presidències de les Comissions d'Afers Exteriors espanyola i andorrana oferiran una roda de premsa a les dependències de Casa de la Vall."

SECRETARIA GENERAL DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Dirección de Relaciones Parlamentarias

VIAJE A ANDORRA DE UNA DELEGACION DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES
(Andorra, 7-8 de Noviembre de 1994)

Excmo. Sr. D. Jordi Solé Tura
Presidente de la Comisión. (G.P.Socialista)
Excmo. Sr. D. Alberto Durán
Secretario 1º. (G.P. Popular)
Excmo. Sr. D. Lluis Mª de Puig
Grupo Parlamentario Socialista.
Excmo. Sr. D. Manuel Milián
Grupo Parlamentario Popular.
Excmo. Sr. D. Ramón Espasa
Portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-IC.
Excmo. Sr. D. Joaquim Molins
Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán.
Excmo. Sr. D. Iñaki Anasagasti
Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
Excmo. Sr. D.
Grupo Parlamentario Coalición Canaria
Excmo. Sr. D.
Grupo Parlamentario Mixto.
Ilma. Sra. Dña. Lidia García
Letrada de la Comisión de Asuntos Exteriores.
Dña. María Jesús Algueró
Secretaria Administrativa de Delegaciones Oficiales

BARCELONA-ANDORRA. Lunes 7 de Noviembre de 1994
Salida en autobus desde el aeropuerto de Barcelona a las 09,15 (*)
Llegada a Andorra aproximadamente a las 12,00

Alojamiento en Hotel Andorra Park Hotel
Les Canals 24
tfno: 9738-20.979
fax: 9738-20.983

ANDORRA-BARCELONA. Martes 8 de Noviembre de 1994
Salida de Andorra en Microbús a las 16,00
Llegada a Barcelona a las 18,30 aprox.

SECRETARIA GENERAL DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Dirección de Relaciones Parlamentarias

Desde Barcelona:
Sr. Sole Tura
Sr. Espasa
Sr. Molins
Sr. Puig
Sr. Milián

Desde Bilbao:
Sr. Anasagasti
Día 7 Bilbao-Barcelona IB-4654 07,45 -- 08,45
Día 8 Barcelona-Bilbao IB-4659 21,15 -- 22,00

Desde Santiago:
Sr. Durán
Día 7 Santiago-Barcelona. IB-4494 07,35 -- 09,00
Día 8 Barcelona-Santiago. IB-1564 21,30 --23,05

Desde Madrid:
Dña. Lidia Garcia
Dña. María Jesús Algueró
Día 7 IB-800 08,00 -- 08,55
Día 8 IB-1915 19,15 -- 20,15

(*).- PUNTO DE ENCUENTRO: En el exterior del hall principal de la Terminal de vuelos nacionales (Edificio Centro), junto al Mural de MIRO.

NOTA: Nos comunican de Andorra que ya hay nieve en las montañas por lo que la temperatura es baja (6-8º).

Embajada de España
Paz Agüeras
Cónsul Ld.: J. Mª Fena de la Peña.

SECRETARIA GENERAL DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Dirección de Relaciones Parlamentarias

PROGRAMA

Lunes 7 de Noviembre de 1994

09,15 Salida en Microbús desde el aeropuerto de Barcelona.
12,00 Llegada a Andorra

Alojamiento en Hotel Andorra Park Hotel
Les Canals 24
tfno: 9738-20.979
fax: 9738-20.983

13,00 Almuerzo con los miembros de la Comisión Legislativa de Política Exterior del Consell General.

16,00 Visita de la Casa de la Vall (sede del Consell General).

16,30 Reunión de trabajo en la Casa de la Vall.

18,00 Rueda de Prensa

19,00 Recepción en la Embajada de España
(Prat de la Creu nº 34)
Tfno: (9738) 20.013 ó 68.786

21,00 Cena ofrecida por la Sindicatura

Martes 8 de Noviembre

09,00 Visita turística al Principado

13,00 Almuerzo en Erts (La Massana)

16,00 Salida en Microbús hacia Barcelona

18,30 Llegada a Barcelona

SECRETARIA GENERAL DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Dirección de Relaciones Parlamentarias

VIAJE A ANDORRA DE UNA DELEGACION DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES
(Andorra, 7-8 de Noviembre de 1994)

Relación de miembros de la Comisión de Política Exterior, del Consell General del Principado de Andorra:

Presidente de la Comisión
Excmo. Sr. D. Jaume Bartumeu Cassany
Grupo Parlamentario "Nova Democracia".

Vicepresidente de la Comisión
Excmo. Sr. D. Josep Areny Fité
Grupo Parlamentario "Agrupament Canillo-La Massana".

Excmo. Sr. D. Ladislau Baró Solà
Grupo Parlamentario "Agrupament Nacional Democràtic".

Excmo. Sr. D. Francesc Cerqueda Pascuet
Grupo Parlamentario "LLiberal".

Excmo. Sr. D. Manuel Mas Ribó
Grupo Parlamentario "Coalició Nacional Andorrana".

Excmo. Sr. D. Vicenç Mateu Zamora
Grupo Parlamentario "Mixto".

Dña. Joaquima Sol Ordis
Secretaria de la Comisión de Política Exterior.

SECRETARIA GENERAL DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Dirección de Relaciones Parlamentarias

VIAJE A ANDORRA DE UNA DELEGACION DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES . (7 y 8 de Noviembre de 1994)

INFORMACION GENERAL

R 70.545

ENCICLOPEDIA HISPÁNICA

Sa on

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
BIBLIOTECA
10 ENE. 1990
ENTRADA

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA PUBLISHERS, INC.
BARCELONA, BUENOS AIRES, CARACAS, MADRID, MÉXICO, PANAMÁ, RÍO DE JANEIRO, SÃO PAULO.

Maule, en el centro de Chile, englobando una población de unos doce millones de personas.

Las aportaciones culturales más importantes de los incas a la tradición andina fueron la técnica constructiva basada en el acoplamiento de grandes bloques de piedra de formas irregulares, y el palo cavador o paclla, empleado en los trabajos agrícolas. Las técnicas hidráulicas, la metalurgia del oro, la plata, el cobre y el bronce, la cerámica, la balanza y el sistema de contabilidad mediante quipus (cuerdas anudadas) eran anteriores a los incas, pero éstos extendieron y generalizaron su uso en toda la región andina.

El estado inca se basó en una organización social de tipo comunal, el ayllu, formado por agrupaciones tribales cuyos miembros estaban obligados a realizar prestaciones de trabajo obligatorio al servicio del estado y el clero. La organización política del imperio tenía una estructura piramidal: en la cúspide estaba el inca (emperador), al que se veneraba como un dios; a continuación estaban los prefectos de las cuatro partes del imperio y los gobernadores de las provincias, miembros de la nobleza inca; los curacas, administradores de los ayllus, solían ser los jefes de la nobleza local. La eficacia del aparato estatal se vio favorecida por la construcción de una extensa red de calzadas que recorría de norte a sur en dos líneas paralelas, una por la sierra y otra por la costa, con ramificaciones internas entre ambos niveles.

Según las tradiciones orales incas, la ciudad de Cusco fue fundada en el siglo XII y principios del XIII por Manco Cápac y su familia, quienes civilizaron a los atrasados pueblos que habitaban el valle. En el siglo XIV, durante el reinado de Mayta Cápac, un período de sequía en los Andes centrales empujó a los incas a extender su dominio sobre las tierras de otros valles para asegurarse un abastecimiento suficiente de alimento. Las conquistas de los emperadores Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yahuar Huacac y Viracocha se consolidaron, desde principios del siglo XV, con el establecimiento de guarniciones militares y funcionarios incas en los territorios sometidos.

Pachacútec Inca Yupanqui destacó, a mediados del siglo XV, por sus empresas guerreras y por su labor en la organización política del imperio. Durante su reinado, Tahuantinsuyo se amplió a los territorios situados al sur del lago Titicaca y, por el norte, a la región de Chanchán. Además, Pachacútec embelleció la ciudad de Cusco con importantes edificios y mejoró las condiciones agrícolas del valle mediante la construcción de terrazas y acequias. En el ámbito político, impulsó la difusión del culto al dios creador Viracocha como religión de estado e inició la política de deportaciones forzosas como medio de evitar la resistencia de las poblaciones sometidas.

Entre 1471 y 1493, Túpac Yupanqui conquistó todo el altiplano y los territorios del norte de Chile y noroeste de la Argentina. Su sucesor, Huayna



Vaso de oro, con decoración en relieve y repujado con diseño de cara humana, perteneciente a la cultura de Chimú.

Cápac, tuvo que sofocar diversos levantamientos a lo largo del vasto imperio que había heredado. Tras su muerte, producida por una epidemia de origen europeo, estalló una cruenta guerra civil entre sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. La audacia, la suerte y una hábil utilización del descontento de algunos pueblos sometidos a Tahuantinsuyo posibilitaron a Francisco Pizarro y a sus escasas tropas la conquista del vasto imperio inca. El último emperador, Manco Inca, creó, en la zona montañosa de Vitas, un estado independiente que se mantuvo hasta el año 1572.

→ **Americana, prehistoria; Amerindios, pueblos; Andes; Atahualpa; Chimú, imperio; Huari, cultura; Huáscar; Huayna Cápac; Inca, imperio; Machu Picchu; Manco Cápac I; Manco Cápac II; Nazca, cultura de; Tahuantinsuyo; Tiahuanaco; Túpac Inca Yupanqui.**

Andorra

El pequeño estado andorrano, enclavado en una agreste región de la cordillera pirenaica, ha mantenido durante siglos su independencia política, su lengua y sus tradiciones, sin perder por ello su vinculación con los dos grandes países que lo rodean: Francia y España.

El Principado de Andorra tiene una extensión de 468 km^2, y hace frontera con la provincia española de Lérida (sur y oeste) y con los departamentos franceses de Ariège y Pyrénées-Orientales (norte y este). El país está constituido por profundos valles y altas montañas.

Medio físico. Situado en la zona axial pirenaica, sobre terrenos de la era paleozoica (neis y granito), el relieve de Andorra se deriva de la orogenia

PRODUCTOS IMPORTANTES DE ANDORRA

Agricultura: *Papa o patata, tabaco, heno, centeno, trigo, olivo, vid*

Ganadería: *Ovina, bovina, caballar*

Minería: *Piedra de construcción, alumbre, hierro, plomo*

Industria: *Cerámica, tabaco, bebidas, alimentos, tejidos, joyería, muebles*



Nombre oficial: *Principado de Andorra*

Extensión: *468 km²*

Capital: *Andorra la Vella*

Principales ciudades: *Les Escaldes, Encamp*

Lengua oficial: *Catalán*

Moneda: *Peseta española y franco francés*

Forma de gobierno: *Coprincipado con soberanía compartida por el presidente de Francia y el obispo español de Urgel*

Religión: *Católica*

(surgimiento) herciniana y del rejuvenecimiento alpino, aunque su configuración actual es el resultado de la erosión fluvioglaciar de la era cuaternaria. La mayor cumbre del país es la Coma Pedrosa, de 2.975 m.

Andorra tiene un clima típico de montaña mediterránea. Las precipitaciones (lluvias en verano y nieve en invierno) son modestas, teniendo en cuenta el carácter montañoso de la zona, y aumentan con la altitud, oscilando entre los 711 mm anuales de Sant Julià en la zona baja del valle, y los 1.000 mm de Soldeu. Las temperaturas son muy frías en invierno (17 °C bajo cero en las zonas más elevadas) y suaves en verano.

El territorio de Andorra está avenado por la cuenca del río Valira, afluente del Segre, tributario a su vez del Ebro. El Valira se caracteriza por tener un régimen nivopluvial, un caudal muy irregular con crecidas en junio (por el deshielo), y un gran poder erosivo, al tener que salvar grandes desniveles de pendiente. Otro elemento típico de la hidrografía andorrana son los lagos de origen glaciar (Engolasters, Estanys de Pessons).

Los bosques cubren dos quintas partes de la superficie de Andorra. Las especies más abundantes son las encinas y las coníferas. A partir de los 2.400 m se extiende el prado alpino.

Población. Hasta mediados del siglo XX, Andorra fue una típica región de montaña cuya población tendía a emigrar hacia regiones más desarrolladas de los países vecinos. Sin embargo, desde la década de 1950 se convirtió en un centro comercial al que acudían españoles y franceses a comprar todo tipo de objetos, lo que impulsó el desarrollo económico y la inversión de las tendencias demográficas, pues la intensa inmigración hizo aumentar rápidamente el volumen demográfico (de 5.000 habitantes a principios de la década de 1940 a más de 45.000 en la de 1980). La población se concentra principalmente en la capital, Andorra la Vella, y en Les Escaldes. El resto del país está ocupado por pequeñas aldeas dispersas en los valles pirenaicos. (Para datos demográficos véase DATAPEDIA.)

La lengua oficial es el catalán, pero también se hablan el francés y el castellano.

Economía. Hasta la década de 1950 Andorra era un país con una economía de carácter primario (agrícola y ganadera). Sin embargo, las particularidades de su régimen fiscal dieron lugar a una gran especialización en el comercio y el turismo. La actividad comercial se benefició de los bajos precios de los productos, debido a la inexistencia de impuestos y a las reducidas tasas aduaneras.

Con el auge del comercio y el turismo ha entrado en decadencia el sector primario. Los cultivos más importantes son los de trigo, papa o patata y tabaco. La importancia económica de la ganadería, favorecida por los abundantes pastos, también ha disminuido.

La industria de Andorra se limita a pequeñas empresas textiles, madereras, de tabaco y de artesanía. La orografía del país ofrece grandes posibilidades para el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica. (Para datos sobre economía y sociedad véase DATAPEDIA.)



Andorra (para cartografía detallada véase Atlas en DATAPEDIA).

Historia. Los hallazgos arqueológicos de Sant Julià han revelado la presencia, durante la época romana, de un grupo humano bien caracterizado en la región andorrana.

Desde el año 803, el país formó parte de la Marca Hispánica carolingia, y en el 819, Ludovico Pío cedió su dominio al obispo de Urgel (España). Por sucesivas concesiones, los obispos de Urgel fueron adquiriendo competencias civiles. En el siglo XI Andorra se enfeudó a los señores de Caboet, familia que emparentó con los Castellbó, que a su vez lo hicieron con la casa condal de Foix a principios del siglo XIII. Las intromisiones de los condes de Foix en los derechos pertenecientes al obispo de Urgel plantearon disputas que se resolvieron a través de una serie de sentencias arbitrales, los Pariatges de Andorra, que fijaban un régimen coseñorial, fundamento del actual sistema andorrano. En el siglo XVI, con la llegada al trono de Francia del primer Borbón, Enrique IV, los derechos coseñoriales pasaron a la casa real, que estaba emparentada con los condes de Foix. El equilibrio político entre el estado francés y el obispo de Urgel se rompió con la revolución francesa, pero fue restablecido por Napoleón en 1806. Pos-

teriormente, Andorra conservó su independencia y su peculiar estructura política de soberanía compartida entre el jefe del estado francés y el obispo de Urgel.

El sistema político, administrativo y judicial de Andorra se remonta a 1280, lo que explica sus reminiscencias medievales. El coprincipado lo ejercen dos *veguers*, por delegación del estado francés y del obispo de Urgel. El poder legislativo reside en el Consell General de les Valls, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal, a razón de cuatro por parroquia. El Consell elige, a su vez, a un procurador general, el *síndic*, que ostenta el poder ejecutivo. El poder judicial es ejercido por dos *batlles*, que a su vez designan al juez de apelaciones. Andorra no tiene entidad jurídica internacional, por lo que la representación ante otras naciones corre a cargo del estado francés y del obispado de Urgel.

Arte. La manifestación cultural más importante de Andorra es la arquitectura románica, representada por las iglesias del siglo XII, de una nave y elegante campanario (Encamp, Canilló). Destaca, asimismo, la obra pictórica de los maestros de Santa Coloma y de Andorra, dentro del estilo románico de los siglos XII y XIII.

Andrada, José Bonifácio de

Naturalista y geólogo de reputación internacional, José Bonifácio de Andrada, conocido en Brasil como «el patriarca de la independencia», introdujo en su país las ideas avanzadas que asimiló durante su prolongada estancia en Portugal.

José Bonifácio de Andrada e Silva nació en Santos, Brasil, el 13 de junio de 1763. Estudió derecho y se trasladó a Portugal, donde, tras completar su formación, fue nombrado secretario vitalicio de la Academia de Ciencias de Lisboa y ejerció como profesor en la Universidad de Coimbra.

En 1819, de regreso en Brasil, Andrada entró en contacto con las logias masónicas y, con el apoyo de éstas, cooperó en la proclamación de la independencia de su país. El emperador Pedro I lo nombró ministro del nuevo estado y, el 17 de abril de 1823, Andrada convocó una asamblea constituyente en Río de Janeiro. Aunque había mayoría de diputados conservadores, la minoría liberal partidaria de Andrada desató una fuerte campaña republicana y antiportuguesa. Pedro I se enemistó con Andrada y el 17 de julio de 1823 el primer ministro se vio forzado a dimitir. Pocos meses después se exilió a Francia, donde permaneció hasta 1829. Posteriormente, el emperador volvió a concederle su favor y, tras su abdicación, lo nombró tutor de su hijo, Pedro II.

José Bonifácio de Andrada e Silva murió en Niterói el 6 de abril de 1838.

Andrade, Mário de

Como uno de los grandes impulsores de la cultura brasileña del siglo XX, Andrade luchó por consolidar una nueva literatura nacional que buscaba su identidad más allá de los tópicos tradicionales.

Mário Raul de Morais Andrade nació en São Paulo el 9 de octubre de 1893, y cursó estudios en el conservatorio de su ciudad natal, donde más tarde ocuparía la cátedra de historia de la música. En 1922 fue uno de los organizadores de la Semana de Arte Moderno, momento clave del resurgir cultural del país. Allí presentó su libro de poemas *Paulicéia desvairada*, uno de los primeros exponentes del modernismo brasileño, donde se apreciaba la preocupación del autor por aunar la indagación estética con la claridad expresiva.

En el terreno narrativo, su obra más celebrada fue *Macunaíma, o herói sem nenhum caráter* (1928). Esta novela, en la que Andrade introdujo componentes lingüísticos de diversas regiones del Brasil, supuso un logrado intento de reflejar el mosaico racial y cultural de su patria, empleando para ello tanto el humor como el lirismo.

A partir de 1935, fecha en que fue nombrado director del Departamento de Cultura de São Paulo, Andrade desarrolló una intensa labor pedagógica, traducida en textos como *Música do Brasil* (1941) y *Aspectos da literatura brasileira* (1943), al tiempo que su lenguaje poético se depuraba cada vez más, hasta culminar en la póstuma *Lira paulistana*. La prematura muerte del escritor, acontecida en São Paulo el 25 de febrero de 1945, no impidió su creciente influencia sobre las generaciones posteriores.



Mário de Andrade.

Andrea del Castagno

A partir de un tratamiento esencialmente escultórico y espacial de sus temas, Andrea del Castagno evolucionó a otro en el que predominaban los aspectos emocionales. Su estilo era vigoroso y monumental.

Andrea di Bartolo de Bargilla nació en San Martino a Corella, cerca de Florencia, Italia, hacia 1421; se le apodaría «del Castagno» por el nombre de un pueblo cercano al de su nacimiento. Realizó su primera obra conocida siendo todavía muy joven; se trataba de un mural de carácter ejemplarizante en la fachada del palacio del Podestà, con una escena de unos ahorcados, adversarios de Cosme de Medici. El temperamento fuerte e irascible que se trasluce en su pintura le creó muchos enemigos. Giorgio Vasari recogió una crónica que le atribuía la muerte del pintor Domenico Veneziano, quien en realidad falleció cuatro años después que Andrea.

R. 72.310

ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS

CORPUS

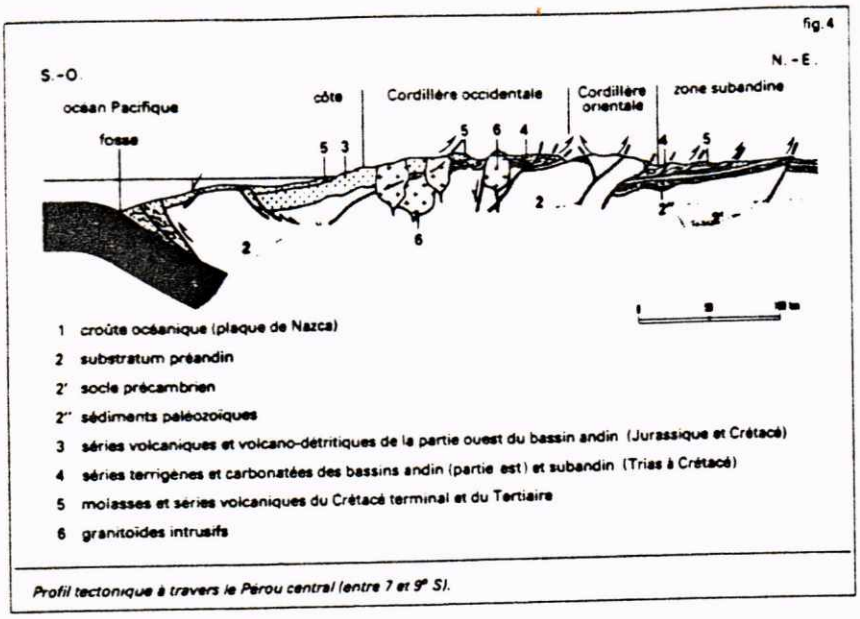
2

ALTMAN - ARNOLD

Salón

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
BIBLIOTECA
ENTRADA

ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS, ÉDITEUR À PARIS



Profil tectonique à travers le Pérou central (entre 7 et 9° S).

centrale et le bloc de Santa Marta, déformés puis soulevés à la fin du Crétacé, limitent vers l'ouest le bassin d'avant-pays d'où naîtra la Cordillère orientale. À l'Éocène, ce bassin est continental, avec des influences marines locales ; à la bordure sud-ouest du bloc de Santa Marta s'y déposent les épaisses couches à charbon du Cerrejón. Au nord-est, il s'ouvre plus largement au Venezuela où l'influence marine est plus nette avec même des faciès profonds à Maracaibo. Cette sédimentation est calme quoique à cette époque (Paléocène-Éocène) et dans ce même bassin, un peu plus au nord-est, vers Barquisimeto et Carora, se produise la mise en place, en grande partie synsédimentaire, des unités allochtones de la chaîne caraïbe, suivie à l'Éocène supérieur par un charriage cisaillant vers le sud-sud-est, sur l'extrémité nord-est des futures Andes de Mérida (fig. 2 b). La sédimentation se poursuit jusqu'au Miocène dans ce bassin qui ne se déformera en partie qu'à la fin du Miocène et au début du Pliocène, que ce soit en Colombie ou au Venezuela. Il n'y aura pas là de grands décollements ni de ceinture plissée et écaillée, mais de vastes plis de fond impliquant le substratum pré-andin. La Cordillère orientale colombienne et la Cordillère de Mérida apparaissent comme des anticlinoriums soulevés en compression de plus de 2 000 mètres, au long de failles bordières raides à déversements opposés. Leur surrection se traduit par l'apparition de conglomérats grossiers d'âge miocène supérieur à pliocène inférieur dans les bassins continentaux résiduels qui entourent ces cordillères. Notons enfin que depuis le Miocène les Andes de Colombie sont le siège d'un volcanisme encore partiellement actif lié à la subduction de la plaque de Nazca. Un alignement de stratovolcans coiffe la Cordillère centrale au sud du 5e degré de latitude nord ; il se raccorde vers le sud à celui de l'Équateur.

Cette vision de la géologie des Andes doit être complétée par l'évocation des mouvements horizontaux de vastes blocs crustaux ou même lithosphériques, au long de failles décrochantes proches de la verticale. Les très grands décrochements à rejeux très récents du type de ceux qui sont liés au système de collision Inde-Asie n'apparaissent que dans les Andes septentrionales, à l'approche du système caraïbe. Le plus grand, qui est long de 1 100 kilomètres, est la faille nord-sud de Dolores-Guayaquil qui, en Colombie, suit les vallées du Cauca et du Patia et passe à la bordure ouest de la vallée interandine d'Équateur avant de rejoindre le golfe de Guayaquil. Elle se superpose à la suture ophiolitique qui marque le contact entre le continent et les blocs occidentaux à substratum océanique ; son mouvement principal serait dextre. La faille de Santa Marta-Bucaramanga est orientée nord-nord-ouest - sud-sud-est et borde à l'ouest le bloc de Santa Marta ; elle mesure 450 kilomètres et le déplacement senestre au long de cette faille au Néogène et au Quaternaire atteindrait 100 kilomètres. Celle d'Oca est est-ouest et limite au nord le bloc de Santa Marta. Cette faille dextre fait partie d'un immense système faillé est-ouest qui joue un rôle important dans la tectonique récente de la partie sud de la plaque caraïbe.

Plus au sud, on ne repère plus dans la morphologie de très grandes failles de ce type, hors celle d'Atacama dans le nord du Chili, dont le rôle est mal précisé. En revanche, on peut démontrer que les grandes failles longitudinales ont joué en décrochements ou en décrochements-chevauchements à certaines époques du Néogène. Au Pérou, les mouvements dextres prédominent au long des failles nord-ouest - sud-est dans les Andes, en dehors de la zone subandine ; ils sont liés à une compression proche de la direction nord-sud datée du Miocène supérieur, vers — 9 millions d'années.

Les Andes n'apparaissent comme une chaîne originale que dans leur partie liminaire et, géologiquement parlant, c'est à elle seule que devrait revenir le qualificatif de *chaîne andine*. Une chaîne andine, au sens strict, a pour caractéristiques principales :
- d'être construite en bordure d'un continent mais intégralement à l'intérieur de ses limites, sans que du matériel océanique participe à sa constitution ;
- d'évoluer continuellement sur une marge continentale active sous laquelle s'effectue la subduction d'une plaque lithosphérique océanique.

Le processus de subduction se traduit le plus souvent :
- dans la bordure de la plaque continentale chevauchante, par un régime de déformation en compression limité au talus contigu à la fosse océanique, et par un régime en distension, favorable à la subsidence et à la sédimentation, sur le reste de la bordure du continent ;
- par un volcanisme et un plutonisme actifs à chimisme calco-alcalin dont les centres sont alignés parallèlement à la fosse.

Lors des phases compressives, le régime de déformation en compression envahit une part plus importante de la bordure du continent. La cause de ce changement réside vraisemblablement dans une diminution de l'angle sous lequel se fait la subduction, se traduisant par un couplage mécanique plus important entre les deux plaques. Une telle variation de l'angle de subduction est à rechercher dans les changements du taux de rapprochement des deux plaques, et aussi dans les variations de la vitesse et de la direction du déplacement propre de la plaque continentale chevauchante par rapport à un point de référence fixe. Ces modifications concernent l'ensemble de la frontière convergente de deux plaques et sont à relier à des phénomènes de réajustements de la cinématique des plaques à l'échelle du globe.

L'intérêt du modèle andin réside dans le fait que dans beaucoup d'autres chaînes de montagne, on reconnaît des périodes andines. C'est le cas dans les Andes septentrionales, qui furent probablement andines au Lias et du Miocène à notre époque, et des Andes de Magellan, peut-être andines au Jurassique supérieur et au Crétacé supérieur, lorsque se mirent en place les batholites, mais plus proches des chaînes de collision à d'autres époques.

FRANÇOIS MÉGARD

Bibliographie

E. J. COBBING, W. S. PITCHER et al., *The Geology of the Western Cordillera of Northern Peru*, Inst. Geol. Sci., Overseas Memoir 5, 1981 / B. DALMAYRAC, G. LAUBACHER & R. MAROCCO, *Géologie des Andes péruviennes*, Trav. et doc. de l'O.R.S.T.O.M., n° 122, O.R.S.T.O.M., Paris, 1980 / R. HOFFSTETTER et al., *Lexique stratigraphique international* (Colombie, Équateur et Venezuela), C.N.R.S., Paris, 1968-1978 / E. M. IRVING, *Structural Evolution of the Northernmost Andes, Colombia*, Geol. Survey Prof. Paper 846, 1975 / D. E. JAMES, « Andean Crustal and Upper Mantle Structure », in *Journal of Geophys. Res.*, vol. LXXVI, pp. 3246-3271, 1971 / C. MARTINEZ, *Géologie des Andes boliviennes*, Travaux et documents de l'O.R.S.T.O.M., n° 119, O.R.S.T.O.M., 1980 / F. MÉGARD, *Étude géologique des Andes du Pérou Central*, Mémoire O.R.S.T.O.M., n° 86, O.R.S.T.O.M., 1978 / *Revue de géographie physique et de géologie dynamique*, n° spéc. sur les Andes, 2e série, vol. XV, fasc. 1-2, 1973 / W. ZEIL, *The Andes, a Geological Review*, vol. XIII de *Beiträge zur Regionalen Geologie der Erde*, Borntraeger, Berlin, 1979 ; *Geologie von Chile*, *ibid.*, 1964.

Corrélats

ALPINES (CHAÎNES), AMÉRIQUE (géologie), ANDES (CORDILLÈRE DES), ARCS INSULAIRES, CHAÎNES DE MONTAGNES (typologie), FOSSES OCÉANIQUES, GONDWANA, HIMALAYENNE (CHAÎNE), LITHOSPHÈRE, MARGES CONTINENTALES, MERS MARGINALES, OPHIOLITES, OROGENÈSE, SUBDUCTION, TECTONIQUE DES PLAQUES.

ANDORRE

La principauté d'Andorre, située sur le versant méditerranéen de la partie orientale de la chaîne des Pyrénées, s'étend sur 468 kilomètres carrés. Limitée au nord par les départements français de

l'Ariège et des Pyrénées-Orientales et au sud par la province catalane de Lérida, l'Andorre est un pays de montagnes, creusé de profondes vallées ; le point culminant (Comapedrosa) atteint 2 942 mètres. Le réseau hydrographique comprend essentiellement le Valira de l'Orient et le Valira du Nord qui se rejoignent pour former le Grand Valira. Le pays comprend une quarantaine de hameaux répartis en sept paroisses : Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria et Escaldes-Engordany. En 1985, la population atteint 42 000 habitants, dont près de 25 000 Espagnols et 3 000 Français ; les Andorrans sont un peu plus de 7 000.

La principale culture est celle du tabac ; l'élevage des chevaux et des bovins est modeste. L'industrie se limite à la fabrication du tabac, à la production hydro-électrique et à la captation d'eau minérale. Le pays vit du tourisme, favorisé par un régime de fiscalité indirecte modérée. Le nombre de touristes approche les 10 millions par an. L'Andorre bénéficie d'une bonne infrastructure hôtelière et d'un réseau routier de près de 200 kilomètres. La route qui mène en France passe par le col d'Envalira, le plus haut des Pyrénées (2 407 m).

Le budget de l'État atteint 5 milliards de pesetas, plus de 90 p. 100 provenant des revenus de taxes sur les marchandises et les carburants. Les impôts directs sont inconnus. La peseta espagnole et le franc français ont cours légal. Il n'existe aucun contrôle des changes. Le service postal est assuré à la fois par la poste espagnole (depuis 1928) et la poste française (depuis 1931) ; le service téléphonique est andorran.

La langue officielle est le catalan.

Les Andorrans paient, alternativement tous les deux ans, une modeste redevance (*qüèstia*) à chacun de leurs co-princes, geste symbolique d'allégeance.

PIERRE RATON

Histoire

La légende selon laquelle l'autonomie aurait été octroyée à l'Andorre par Charlemagne repose sur un faux grossier, fabriqué sans doute au XI^e^ siècle. Au début du IX^e^, la vallée d'Andorre faisait partie du comté d'Urgel, sous la souveraineté carolingienne ; elle appartenait au diocèse d'Urgel, comme le montre l'acte de consécration de la cathédrale, qui énumère les six paroisses d'Andorre (829). Ici, comme ailleurs en Occident, la souveraineté carolingienne s'effaça peu à peu aux IX^e^ et X^e^ siècles ; en 843, Sunifred, comte d'Urgel, reçut de Charles le Chauve la propriété des biens royaux dans la vallée d'Andorre, et, en 988, son successeur la céda à l'évêque d'Urgel. L'un comme l'autre ne tardèrent pas à y exercer également leur autorité. Ainsi se trouvait fondé le pouvoir seigneurial de l'évêque, qui s'étendait aussi sur de nombreux biens donnés par des particuliers. Absorbés par les conquêtes qu'ils menaient au sud aux dépens de l'Espagne musulmane, les comtes le laissèrent se développer.

Cependant, pour se défendre contre les pouvoirs laïques voisins, l'évêque fut amené à s'appuyer sur une famille de seigneurs dévoués, les Caboet et, sans doute au début du XI^e^ siècle, leur céda la vallée d'Andorre en fief. La situation se compliqua lorsque la seigneurie d'Andorre passa par mariage aux Castelbon (vers 1185), puis aux comtes de Foix (vers 1208). La puissance de ces vassaux, leurs efforts d'indépendance, appuyés parfois sur la violence, le soutien qu'ils accordaient aux hérétiques provoquèrent des tensions qui aboutirent par moments à une guerre ouverte.

En fin de compte, l'intervention du roi d'Aragon amena les deux parties à conclure un compromis : le pariage de 1278 forme aujourd'hui encore la base du régime andorran. Ce pariage organisait entre l'évêque d'Urgel et le comte de Foix un condominium pour l'exercice des pouvoirs seigneuriaux dans la vallée d'Andorre : les habitants devaient payer un tribut annuel (la *questia*), alternativement à l'évêque et au comte ; la justice serait exercée en commun par les bailes des deux autorités, ou par l'un d'eux en l'absence de l'autre ; évêque et comte pourraient également réclamer l'aide militaire des habitants, sauf pour se faire la guerre entre eux. Cependant, le pariage précisait que le comte exercerait tous ses droits sous la seigneurie éminente de l'évêque, et lui prêterait hommage comme auparavant : dernier vestige d'une situation dépassée, et que les XIV^e^ et XV^e^ siècles firent disparaître, donnant un caractère purement honorifique à l'hommage et plaçant en fait les deux pouvoirs sur un pied d'égalité.

Le régime andorran s'est depuis lors conservé sans grand changement, aucun des deux pouvoirs n'ayant eu la possibilité ou la volonté d'ouvrir de nouvelles luttes pour cette vallée isolée. L'héritage des comtes de Foix passa aux rois de Navarre qui, lors de l'accession de Henri IV au trône de France, eurent l'État français pour successeur. Suspendus pendant la Révolution, les rapports reprirent en 1806. En 1866, la « réforme », sanctionnée par un plébiscite, étendit à tous les chefs de famille le droit de suffrage, jusqu'alors réservé aux « meilleurs ».

PHILIPPE WOLFF

L'Andorre aujourd'hui

Le développement démographique et social, conséquence de l'essor économique qui s'est produit depuis 1960, a profondément marqué l'Andorre, à tel point que, par décret en date du 15 janvier 1981, les co-princes ont engagé un processus de réforme des institutions qui, tout en accueillant les aspirations du peuple andorran, sauvegardera les prérogatives institutionnelles des co-princes, car la principauté demeure sous « la souveraineté personnelle, exclusive, conjointe et indivise des co-princes » qui délèguent leurs pouvoirs à des représentants : les viguiers, chargés de maintenir l'ordre public et d'exercer certaines fonctions judiciaires, ainsi qu'à deux délégués permanents, celui de l'évêque et celui du président (le préfet des Pyrénées-Orientales), qui disposent du pouvoir législatif et constitutionnel.

Les assemblées élues du peuple andorran

Le droit de vote est désormais accordé à tous les Andorrans et Andorranes âgés de dix-huit ans (décret du 7 sept. 1985). L'éligibilité est possible dès vingt-cinq ans, sauf pour les fonctions de syndic général, sous-syndic général et *cap de govern* pour lesquelles le candidat doit être âgé de trente ans au moins.

Chaque paroisse élit un Conseil avec à sa tête un *consol major* et un *consol menor*. Les sept paroisses d'Andorre élisent, chacune tous les quatre ans, quatre conseillers pour former le « Très Illustre Conseil général des Vallées » qui élit un syndic général et un sous-syndic.

Le Conseil général a élu pour la première fois le 15 janvier 1982 pour quatre ans un cap de govern qui a nommé quatre membres pour former un Conseil exécutif (qui peut comprendre jusqu'à six membres). Ce Conseil a pour tâche d'exécuter les décisions du Conseil général, de lui proposer des textes et d'exécuter le budget. Il dirige et contrôle l'administration. Dans les cas graves, le Conseil général convoque une *assemblea magna* qui outre le Conseil comprend les *consols* des paroisses.

Système judiciaire et législation

Au civil, les *batlles* jugent en première instance, le juge des appellations en deuxième instance et le tribunal supérieur de la mitre (à la Seu d'Urgell) ainsi que le tribunal supérieur du président (à Perpignan) en troisième instance. Au pénal, les batlles sont compétents en matière de contravention et le tribunal des corts pour les crimes et délits. Ce tribunal est composé d'un président, le juge des appellations, et d'assesseurs, les viguiers et batlles. Les condamnés purgent leur peine de prison à leur choix, en France ou en Espagne. Le ministère public est confié à un procureur général.

Le droit coutumier tel qu'il s'applique est consigné dans deux recueils, le *Manual Digest* (1748) et le *Politar* (1753). Il est complété éventuellement par le droit romain, la coutume de Catalogne et par les lois et décrets émanant des délégués permanents, des viguiers et du Conseil général.

Statut international

On ne peut plus prétendre aujourd'hui qu'Andorre n'est pas un État souverain, ni même un État. Les théories faisant de l'Andorre un co-protectorat ou un fief sans existence internationale ne résistent pas à la réalité des faits, car Andorre possède tous les éléments propres à un État : territoire, population, organisation politique et administrative, système judiciaire et législation propres du pays. En outre, Andorre est reconnue de façon bilatérale ou multilatérale, notamment par les États qui ont étendu à ce pays la compétence territoriale de leurs consulats établis en France ou en Espagne, puisque les relations consulaires sont des relations interétatiques. Le président de Gaulle, en 1960, a établi la pratique de deux lettres de provision et de deux exequatur, l'un pour la France, l'autre pour l'Andorre. Depuis 1973, le co-prince épiscopal accorde également l'exequatur.

En outre, depuis la conférence universelle sur les droits d'auteur (Genève, 1952), l'U.N.E.S.C.O. a invité régulièrement l'Andorre à participer à ses réunions. Depuis la XXXIV^e^ conférence internationale d'éducation (Genève, 1973) et les réunions du comité intergouvernemental des droits d'auteur (Paris, 1973 et 1975), l'Andorre est représentée par un observateur andorran nommé par les deux co-princes.

L'Andorre a également été invitée à la conférence sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 1954), à la conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d'auteur (Paris, 1971) et à la conférence sur la protection des producteurs de phonogrammes (Genève, 1971).

Par ailleurs, à la fin de décembre 1982, les co-princes, d'un commun accord, ont décidé

de poser officiellement la candidature de l'Andorre comme membre de l'Union internationale des télécommunications (U.I.T.). Le vote eut lieu par correspondance, cent trois États, dont les États-Unis, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni et l'U.R.S.S., répondirent favorablement. Toutefois, plusieurs réponses étant parvenues après la date limite fixée, la majorité des trois quarts requise ne fut pas atteinte en temps voulu. Il n'en reste pas moins que ce vote constitue une reconnaissance de l'Andorre par la majorité des États.

L'Andorre est partie à la Convention universelle sur le droit d'auteur (Genève, 1953), et de nombreux accords techniques dans le domaine de la sécurité sociale et des télécommunications ont été passés avec les organismes correspondants d'Espagne et de France.

Problèmes politiques

Bien que l'Andorre ne possède pas de véritables partis, les problèmes politiques n'y sont pas inconnus et les luttes d'influence y sont parfois fort vives entre ceux qui ont vocation à diriger le pays. Andorre a connu dans le passé des émeutes nécessitant l'intervention des gendarmes français ou espagnols, notamment en 1881 et en 1933. Les conflits avec les co-princes ne sont pas rares et vont quelquefois jusqu'à la rupture des relations et au blocus économique (1953). L'ambiguïté du *Pareatge* (pariage) de 1278 a également pesé sur les relations entre les co-princes et des dissensions parfois graves ont éclaté, surtout lorsque l'évêque a voulu affirmer sa volonté d'agir en chef d'État (vers la fin du XIX[e] siècle).

L'avènement en 1971 de M[gr] Joan Martí i Alanís et une plus large ouverture d'esprit des présidents de la V[e] République ont permis la rencontre historique du 25 août 1973, à Cahors, entre l'évêque et le président Pompidou, politique poursuivie par le président Giscard d'Estaing (rencontre d'Andorra la Vella, oct. 1978). Le président de Gaulle avait bien visité l'Andorre en 1967, mais sans rencontrer l'évêque. Les contacts personnels entre co-princes ont permis de décrisper la situation et conduit au décret du 15 janvier 1981 concernant le processus de réforme des institutions andorranes.

PIERRE RATON

Bibliographie

J. BARTUMEU, M. MAS & A. MORELL, *L'Estat andorrà*, Andorre-la-Vieille, 1977 / B. BELINGUER, *Les Conditions juridiques des Vallées d'Andorre*, Paris, 1970 / P. BERTIN, *Les Relations économiques et financières de la France et de l'Andorre*, Paris, 1950 / J. A. BRUTAILS, *La Coutume d'Andorre*, Monumenta Andorrana 1, Andorre-la-Vieille, 1965 / J. COUGUL, *Étude historique, juridique et économique de l'Andorre*, Toulouse, 1943 / N. MARQUES, *Lleis i resolucions dels co-princeps i dels seus delegats (1900-1979)*, Monumenta Andorrana 7, Andorre-la-Vieille, 1980 / INSTITUT D'ÉTUDES POLITIQUES DE TOULOUSE, *Les Problèmes actuels des Vallées d'Andorre*, Paris, 1970 / P. RATON, *Le Statut juridique de l'Andorre*, Andorre-la-Vieille, 1984 / J. C. SACOTTE, « L'Andorre », in *Notes et études documentaires*, n° 4087, Document. franç., Paris, mai 1974 / J. M. VIDAL I GUITART, *Instituciones políticas y sociales de Andorra*, Madrid, 1949 / K. ZEMANEK, *L'Estatut internacional d'Andorra*, Casa de la Vall, 1981.

Corrélats

ESPAGNE, FRANCE, PYRÉNÉES.

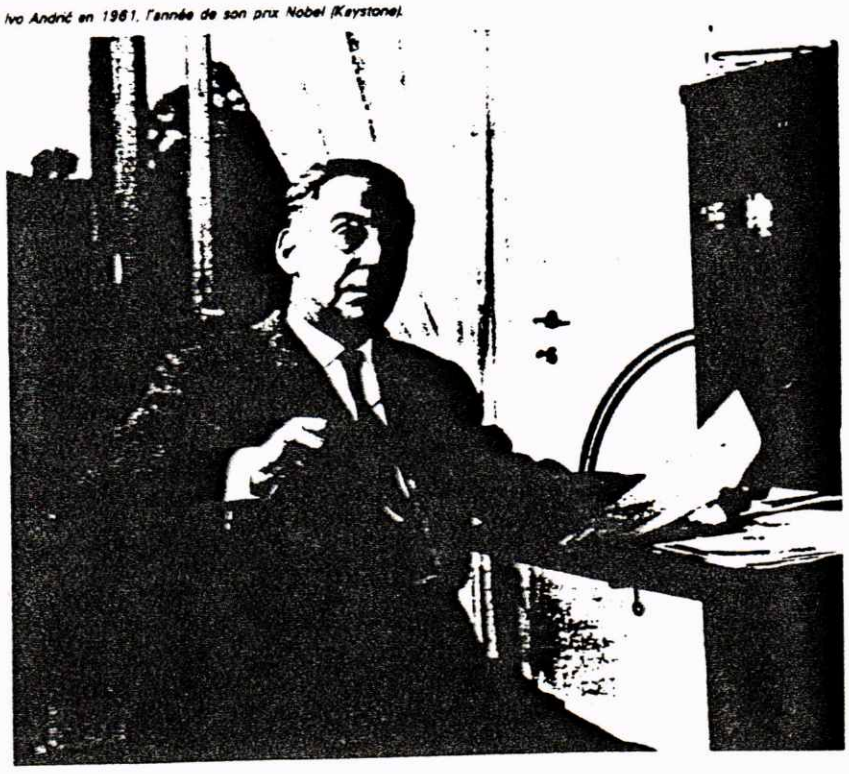
ANDRIĆ (Ivo)
1892-1975

L'œuvre de l'écrivain yougoslave Ivo Andrić, à la fois poète, nouvelliste, romancier, essayiste, se situe en dehors de tout courant littéraire. Le réalisme même qui semble s'en dégager n'est qu'une illusion. En effet, si la plupart des récits sont élaborés à partir de données historiques rigoureusement exactes, ils n'en sont pas moins situés hors du temps, affranchis de toute limite par l'imagination de l'auteur, auquel ils n'offrent qu'un prétexte à peindre des destinées humaines : « Ne sommes-nous pas confrontés, dans le passé comme dans le présent, avec les mêmes notions et les mêmes problèmes ? » Andrić a souvent situé en Bosnie le cadre de ses récits : il y trouvait l'occasion de descriptions hautes en couleur mais surtout, grâce à son érudition et à son expérience des voyages, il puisait dans un fonds historique d'une exceptionnelle richesse qui lui permettait de créer des destinées d'une portée universelle.

Un maître de la nouvelle

C'est en écrivant des poèmes qu'Andrić fit ses débuts dans la littérature : ses premiers vers parurent en 1911 dans la revue *Bosanska vila* (*La Fée bosniaque*) et, en 1914, son nom figura dans l'anthologie *Hrvatska mlada lirika* (*La Jeune Poésie croate*). Puis en 1918 parut *Ex ponto*, conçu durant ses années de prison et fruit de ses méditations. Ce journal intérieur, présenté comme une suite de poèmes en prose, est empreint d'une grande mélancolie, mais toute aigreur à l'égard de ceux qui ont emprisonné l'auteur en est absente. Bien au contraire, dans ces pages, Andrić exprime sa pitié envers « ceux qui font le mal » comme envers « ceux qui le subissent » et plaint l'inquiétude que doit connaître sa mère. *Inquiétudes* (*Nemiri*), paru l'année suivante, appartient à la même veine, où le sens du pathétique est censuré par une extrême pudeur. L'une des principales idées de l'ouvrage est celle de l'absurdité de la guerre et de la relativité de toute victoire. Après la Première Guerre mondiale, Andrić se consacre aux nouvelles inspirées par les grands drames humains ; elles se déroulent pour la plupart dans une Bosnie à la fois historique et légendaire. Le monde introverti du jeune Andrić se transforme alors en un vaste panorama de types étranges et variés, appartenant à un passé plus ou moins lointain. C'est qu'« il est peu de pays, écrit-il dans une de ses nouvelles, où il y ait une foi si profonde, une si noble fermeté de caractère, tant de délicatesse et d'amour ardent, tant de profondeur de sentiment, tant de soif de justice... ». Mais la Bosnie est avant tout le pays de la haine. Dans ce monde oriental où tant de nationalités se trouvent mêlées, réunies sous la domination d'une même puissance, où églises et mosquées égrènent au même moment des heures différentes, où chacun peut réaliser ses ambitions quelles que soient ses origines, sa foi ou ses coutumes, les rancœurs s'accumulent, offrant au narrateur une inépuisable source d'inspiration. L'un des premiers personnages d'Andrić, et l'un des plus réussis, est celui d'Alija Djerzelez (1920), voyageur malheureux et touchant, courageux mais ridicule, sorte de don Quichotte que son habileté au sabre fait respecter mais dont on se moque : descendu de cheval, cet intrépide conquérant n'est plus

Ivo Andrić en 1961, l'année de son prix Nobel (Keystone).



Congreso de los Diputados

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DIRECCION DE COMISIONES
26 OCT. 1994
N.º 7235
ENTRADA

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
REGISTRO GENERAL
26.10.94 029832
SALIDA

Excmo. Sr.:

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(279) Otros asuntos relativos a relaciones internacionales.

279/000017/0000 19/10/94 026122-

AUTOR: Comisión de Asuntos Exteriores

Solicitud de autorización para que los miembros de la Mesa y los Portavoces de dicha Comisión realicen una visita al Principado de Andorra los días 07 y 08/11/94, a invitación del Presidente de la Comisión Legislativa de Política Exterior del Consejo General del citado Principado.

Acuerdo:

Autorizar el desplazamiento de la Mesa y de los representantes de los Grupos Parlamentarios en dicha Comisión, así como los gastos que se originen, comunicándolo a la Comisión de Asuntos Exteriores y a las Dirección de Comisiones y de Relaciones Parlamentarias de la Secretaría General.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 25 de octubre de 1994.

Félix Pons Irazazábal
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES

Congreso de los Diputados

NOTA DE LA LETRADA, Dª LIDIA GARCIA FERNANDEZ, SOBRE LA REUNION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE ELABORAR UN ESTUDIO SOBRE LOS NUEVOS RETOS Y LA REFORMA INSTITUCIONAL DE LA ONU, CELEBRADA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 1994.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, siendo las 13'30 horas del día 18 de octubre de 1994, se reúne la Ponencia encargada de elaborar un estudio sobre los nuevos retos y la reforma institucional de la ONU. Asisten los Ponentes Sres. D. Jordi Solé Tura (GS), D. Alejandro Muñoz-Alonso y Ledo (GP), d. Luis Yáñez-Barnuevo García (GS), D. José María Chiquillo Barber (GMx), D. Rafael Estrella Pedrola (GS), D. Joaquim Molins i Amat (GC-CiU) y D. Narcís Vázquez Romero (GIU-IC).

Durante la reunión se han adoptado los siguientes acuerdos:

- Todos los asistentes se muestran conformes con el esquema de trabajo propuesto por el Sr. Presidente (Anexo).

- Dividir el trabajo de la elaboración del informe de la Ponencia de la siguiente forma:

Introducción: Letrada adscrita a la Ponencia.
I: Presidente.
II: Sr. Estrella Pedrola.
III: Sr. Muñoz-Alonso y Ledo.

- Reunir nuevamente la Ponencia en el mes de diciembre para corregir un borrador de Informe.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión siendo las 14:05 horas.

Vº Bº
EL PRESIDENTE DE LA PONENCIA,

PROPUESTA DE GUION PARA LA ELABORACION DEL INFORME SOBRE LOS NUEVOS RETOS Y LA POSIBLE REFORMA DE LA ONU

INTRODUCCION: Descripción de la tarea realizada por la Ponencia.

I.- Análisis de los cambios ocurridos en el mundo. Balance global de los 50 años de la ONU - Nuevos retos.

II.- Las nuevas tareas:

1. Mantenimiento y/o imposición de la paz.

1.1. Los instrumentos:

a) fuerzas nacionales de los Estados miembros, fuerzas multinacionales de organismos regionales (OTAN, UEO, etc...).

b) fuerzas stand-by.

c) fuerzas propias ONU.

1.2. Financiación de las operaciones.

1.3. La ONU y las organizaciones regionales (OTAN, UE, CSCE, UEO, etc).

2. La cooperación para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

3. La protección y la expansión de los derechos humanos.

III.- Las reformas estructurales.

1. La estructura orgánica:

1.1. La Asamblea: composición y papel.

1.2. El Consejo de Seguridad:

A. Papel del Consejo.

B. Los miembros permanentes:

a) ¿Ampliación?

b) El derecho de veto: ¿abolición, mantenimiento status quo, extensión a otros miembros?

c) ¿Miembros semipermanentes?

d) La representación regional. ¿Representación unitaria U. Europea?

1.3. La Secretaría General.

2. El fideicomiso: ¿abolición o aplicación a otros supuestos?

3. La Corte Internacional de Justicia.

4. La estructura administrativa: ¿reforma o reordenación parcial?

5. La financiación.

6. ¿Reforma de la Carta o adaptación a las nuevas realidades mediante una nueva interpretación, sin modificar el texto de la Carta?

Congreso de los Diputados

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DIRECCION DE COMISIONES
18 NOV. 1993
N.º 1369
ENTRADA

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
REGISTRO GENERAL
18.11.93 005503
SALIDA

Excmo. Sr.:

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(110) Autorización de Convenios Internacionales.

110/000044/0000 29/10/93 004932-

AUTOR: Gobierno

Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en Madrid el 23/07/93.

Acuerdo:

Encomendar Dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores y publicar en el Boletín, estableciendo plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a la totalidad o de enmiendas al articulado conforme al artículo 156 del Reglamento, por un período de quince días hábiles.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 1993.

Félix Pons Irazazábal
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

T.50

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REGISTRO GENERAL
29. OCT. 1993
SALIDA 10387

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
REGISTRO GENERAL
29 OCT. 1993
Entrada 004932

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 25 de junio de 1993, se manifestó conforme con la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de autorizar la firma del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en Madrid el 23 de julio de 1993.

Según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado sobre si era necesaria la autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la definitiva prestación del consentimiento del Estado en obligarse por este Acuerdo. Por dictamen número 877 de 8 de julio de 1993 el Consejo de Estado manifiesta:

"Que el Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal requiere la previa autorización de las Cortes Generales".

Por estar disueltas las Cámaras el Consejo de Ministros no autorizó la remisión a las mismas del citado Acuerdo. Dicha autorización se adoptó en su reunión de 8 de octubre de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Constitución, adjunto remito a V.E. Certificación del Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de octubre de 1993 disponiendo la remisión a las Cortes Generales del mencionado Acuerdo, fotocopia autenticada del texto del mismo, fotocopia del Dictamen del Consejo de Estado y de un Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Madrid, 29 de octubre de 1993.

EL MINISTRO

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

004932

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

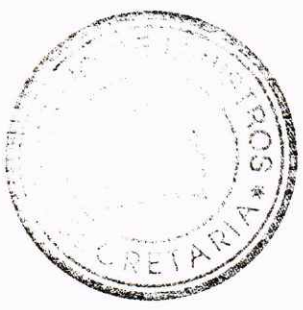
DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS,

C E R T I F I C O:

Que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 8 de octubre de mil novecientos noventa y tres, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, se adoptó un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, cuyo texto literal es como sigue:

"El tres de junio se firmó el Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra. Por medio de dicho Tratado se reconoce la personalidad jurídica internacional de Andorra.

La Constitución de Andorra, que entró en vigor el pasado cuatro de mayo, establece en Andorra un régimen de Coprincipado parlamentario. Uno de los dos Jefes de Estado, el Copríncipe Episcopal, reside permanentemente en España, en la Seo de Urgel.



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Se hace necesario reconocer al Copríncipe el estatuto de personal internacionalmente protegida en cuanto que es Jefe de Estado. También se hace necesario reconocer un estatuto particular a los Servicios del Copríncipe en la Seo de Urgel.

Para ello se concluye un Acuerdo internacional entre España y Andorra que reconoce una serie de privilegios e inmunidades ajustados al Derecho Internacional.

La firma fue autorizada por el Consejo de Ministros del pasado 25 de junio de 1993, quien no autorizó la remisión a las Cortes Generales por estar éstas disueltas.

El Consejo de Estado por dictamen nº 877/93, de 8 de julio de 1993, opina "Que el Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal requiere la previa autorización de las Cortes Generales".

Se propone la adopción del siguiente:

A C U E R D O

Que el Consejo de Ministros disponga la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

referencia, a efectos de lo previsto en el artículo 94.1 de la Constitución".

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente certificación en Madrid, a veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres.

CONSEJO DE MINISTROS * SECRETARIA *

004932

Ministerio
de
Asuntos Exteriores

JUAN MANUEL DIAZ-PACHE PUMAREDA, DIRECTOR DEL GABINETE DE TRATADOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES,

CERTIFICA: Que el texto adjunto a la presente certificación es copia fiel e íntegra del original del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, firmado en Madrid el 23 de julio de 1993.

Madrid, diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres.



ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA RELATIVO AL ESTATUTO DEL COPRINCIPE EPISCOPAL

* * * *

ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA RELATIVO AL ESTATUTO DEL COPRINCIPE EPISCOPAL

El Reino de España y el Principado de Andorra,

Considerando que el Copríncipe episcopal tiene su sede en territorio español, y habiendo sido reconocida la personalidad internacional de Andorra mediante el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, se hace preciso regular el estatuto del Copríncipe episcopal como persona internacionalmente protegida y el de sus Servicios en cuanto Jefe del Estado andorrano, en territorio español; por ello,

han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

El Estado español reconoce al Obispo de Urgel, en su calidad de Copríncipe del Principado de Andorra, la condición de persona internacionalmente protegida, y tomará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.

ARTICULO 2

La persona del Copríncipe de Andorra es inviolable. No puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto. Gozará de inmunidad de jurisdicción penal. Igualmente gozará de inmunidad de jurisdicción civil y administrativa en el ejercicio de sus funciones públicas como Jefe del Estado andorrano.

En ningún caso incurrirán en responsabilidad por el ejercicio de sus funciones como delegados del Copríncipe de Andorra las autoridades a las que les haya sido otorgada dicha delegación de acuerdo con el artículo 46.2 de la Constitución del Principado. El Estado español reconoce los títulos de acreditación de tales personas o autoridades expedidos por la Autoridad del Copríncipe.

004932

ARTICULO 3

Gozarán de inviolabilidad la residencia privada del Copríncipe de Andorra, los documentos, correspondencia y archivos y los locales destinados en forma exclusiva a constituir la sede de los Servicios a disposición del Obispo de Urgel para el ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado andorrano.

La inviolabilidad consistirá en que los agentes del Reino de España no podrán penetrar en la residencia o locales citados en el párrafo anterior sin consentimiento expreso del Copríncipe o autoridad en quien éste delegue. La correspondencia y archivos serán siempre inviolables donde quiera que se hallen.

En el momento de la entrada en vigor del presente Tratado, el Gobierno andorrano facilitará información a la otra parte contratante para la identificación de los edificios, locales y archivos a los que se refiere este artículo.

ARTICULO 4

El Estado español autoriza y protege la libre comunicación del Copríncipe de Andorra con el Principado y la inviolabilidad de los agentes y de los medios de transporte de la correspondencia oficial.

ARTICULO 5

El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que ambas partes se hayan comunicado, por vía diplomática, el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y asimismo haya entrado en vigor el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra.

004932

ARTICULO 6

El presente Acuerdo, redactado en un ejemplar único en castellano y catalán, siendo ambos textos igualmente fehacientes, será depositado en los archivos del Gobierno del Principado de Andorra que entregará una copia certificada conforme al Gobierno de la otra parte contratante.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos estampan sus firmas al pie del presente Acuerdo.

Hecho en Madrid 23 Julio 1993

POR EL
REINO DE ESPAÑA

POR EL
PRINCIPADO DE ANDORRA



CONSEJO DE ESTADO

004932

Nº: 877/93/RG

Excmo. Señor:

S E Ñ O R E S :

Ledesma Bartret, Presidente
Gutiérrez Mellado
Lavilla Alsina
Arozamena Sierra
De Mateo Lage
Sánchez del Corral y del Río
Peces-Barba del Brío
Vizcaíno Márquez
Delgado-Iribarren Negrado
Secretario General

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 8 de julio de 1993, con asistencia de los señores que al margen se expresa, emitió el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V.E. de 18 de junio de 1993, con registro de entrada el día 23 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal, hecho en Andorra el 3 de junio de 1993.

Resulta de antecedentes:

Primero.- El Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Copríncipe Episcopal consta de un preámbulo y seis artículos.

El preámbulo alude a la necesidad de regular el estatuto del Copríncipe Episcopal como persona internacionalmente

protegida, teniendo en cuenta su condición de Jefe del Estado andorrano y que tiene su residencia en España.

En virtud del artículo 1 "el Estado español reconoce al Obispo de Urgel, en su calidad de Copríncipe del Principado de Andorra, la condición de persona internacionalmente protegida", y, en consecuencia, se compromete a adoptar todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad.

El artículo 2 dispone que el Copríncipe de Andorra es inviolable, sin que pueda ser objeto de detención ni arresto; goza de inmunidad penal y, asimismo, de inmunidad civil y administrativa en el ejercicio de sus funciones como Jefe del Estado andorrano. En ningún caso incurrirán en responsabilidad por el ejercicio de sus funciones como delegadas del Copríncipe de Andorra las autoridades a las que les haya sido otorgada dicha delegación en virtud del artículo 46.2 de la Constitución del Principado.

Se declara la inviolabilidad de la residencia privada del Copríncipe de Andorra, los documentos, correspondencia y archivos, y los locales destinados de forma exclusiva a constituir la sede de los Servicios a disposición del Obispo de Urgel para el ejercicio de sus funciones como Jefe de Estado andorrano (artículo 3).

El artículo 4 señala: "El Estado español autoriza y protege la libre comunicación del Copríncipe de Andorra con el Principado y la inviolabilidad de los agentes y de los medios de transporte de la correspondencia oficial".

El Acuerdo entrará en vigor una vez que ambas partes se hayan comunicado por vía diplomática el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y, asimismo, haya entrado en vigor el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra.

Segundo.- El Gabinete de Tratados de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores estima que es necesaria la autorización de las Cortes Generales.

Y, en tal estado de tramitación el expediente, fue remitido al Consejo de Estado para que dictaminase por el procedimiento de urgencia.

Dictamina el Consejo de Estado en virtud del artículo 22.1 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado sobre si es o no necesaria la autorización de las Cortes Generales, y a ello limitará su consulta.

El Consejo de Estado, en su dictamen número 770/93, a propósito del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperació

entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, señaló el carácter político del mismo. Entiende este Alto Cuerpo Consultivo que el Acuerdo sobre el que se despacha consulta participa de tal naturaleza, dada la relevancia del reconocimiento del Obispo de Urgel como Jefe de Estado del Principado de Andorra, con los privilegios e inmunidades a los que se alude en el Acuerdo.

Por otra parte, como ha señalado el Gabinete de Tratados, al Acuerdo le es de aplicación el art. 94.1 e) de la Constitución. En efecto, en el Acuerdo se recogen diversas cuestiones reguladas por Ley en el Ordenamiento español. Así, por ejemplo, el reconocimiento de inmunidad al Obispo de Urgel afecta a lo dispuesto en el Título I del Libro I de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre extensión y límites de la jurisdicción de Jueces y Tribunales.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

Que el Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra relativo al Estatuto del Copríncipe Episcopal requiere la previa autorización de las Cortes Generales."

CONSEJO DE ESTADO

004932

V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 8 de julio de 1993

EL SECRETARIO GENERAL,

Manuel Delgado-Iribarren

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

DIRECCION GENERAL DE POLITICA EXTERIOR PARA EUROPA

004932

Madrid, 17 de septiembre de 1.993

MEMORIA EXPLICATIVA

El tres de junio del presente año se firmó el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra. Por medio de dicho Tratado se reconoce la personalidad internacional de Andorra.

La Constitución de Andorra, que entró en vigor el cuatro de mayo del actual, establece en Andorra un régimen de Coprincipado parlamentario. Uno de los dos Jefes de Estado, el Copríncipe Episcopal, reside permanentemente en España, en la Seo de Urgel.

Se hace necesario reconocer al Copríncipe el estatuto de persona internacionalmente protegida en cuanto que es Jefe de Estado. También se hace necesario reconocer un estatuto particular a los Servicios del Copríncipe en la Seo de Urgel.

Para ello se concluye un Acuerdo Internacional entre España y Andorra que reconoce una serie de privilegios e inmunidades ajustados al Derecho Internacional.

La vinculación de este Acuerdo bilateral con el Tratado trilateral, que está pendiente de ratificación por las Cortes Generales, haría conveniente que ambos fueran conocidos por las Cortes Generales al mismo tiempo, pues la entrada en vigor del Acuerdo bilateral se condiciona a la entrada en vigor del Tratado trilateral.

El Acuerdo bilateral fué rubricado en Andorra la Vieja el pasado día tres de junio.

La firma fue autorizada por el Consejo de Ministros del pasado 25 de junio de 1993, quien no autorizó la remisión a las Cortes Generales por estar éstas disueltas.

Congreso de los Diputados

SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DIRECCION DE CO...
18 NOV. 1993
N.º 1364
ENTRADA

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
REGISTRO GENERAL
18.11.93 005498
SALIDA

Excmo. Sr.:

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(110) Autorización de Convenios Internacionales.

110/000039/0000 29/10/93 004926-

AUTOR: Gobierno

Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, hecho en Madrid y París el 01/06/93 y en Andorra la Vieja el 03/06/93.

Acuerdo:

Encomendar Dictamen a la Comisión de Asuntos Exteriores y publicar en el Boletín, estableciendo plazo para presentar propuestas, que tendrán la consideración de enmiendas a la totalidad o de enmiendas al articulado conforme al artículo 156 del Reglamento, por un período de quince días hábiles.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 15 de noviembre de 1993.

Félix Pons Irazazábal
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

T.1

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL
REGISTRO GENERAL
29 OCT. 1993
Entrada 4926

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
REGISTRO GENERAL
29 OCT. 1993
SALIDA 10370

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 28 de mayo de 1993, se manifestó conforme con la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de autorizar la firma del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, hecho en Madrid y París el 1 de junio de 1993 y en Andorra la Vieja el 3 de junio de 1993.

Según lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de Estado sobre si era necesaria la autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la definitiva prestación del consentimiento del Estado en obligarse por este Tratado. Por dictamen número 770 de 10 de junio de 1993 el Consejo de Estado manifiesta:

"Que la prestación del consentimiento para obligarse por el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra requiere la previa autorización de las Cortes Generales".

Dado que el artículo 10 del Tratado establece la aplicación provisional desde la fecha de su firma, según se comunicó a esa Cámara con fecha 29 de Junio de 1993, su texto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado n° 155, de 30 de junio de 1993. Al estar disueltas las Cortes Generales el Consejo de Ministros no autorizó la remisión a las mismas del citado Tratado. Esta autorización se adoptó en su reunión de 8 de octubre de 1993.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.1 de la Constitución, adjunto remito a V.E. Certificación del Acuerdo del Consejo de Ministros del día 8 de octubre de 1993 disponiendo la remisión a las Cortes Generales del mencionado Tratado, fotocopia autenticada del texto del mismo, fotocopia del Dictamen del Consejo de Estado y de un Informe del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Madrid, 29 de octubre de 1993.

EL MINISTRO

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

004926

DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE MINISTROS,

C E R T I F I C O:

Que en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 8 de octubre de mil novecientos noventa y tres, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, se adoptó un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, cuyo texto literal es como sigue:

"El cuatro de mayo de 1993 entró en vigor la Constitución andorrana. Su disposición adicional primera establece la obligación de concluir un Tratado Trilateral para establecer el marco de las relaciones de Andorra con los dos Estados vecinos sobre la base del respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Andorra.

Finalizadas las negociaciones trilaterales, con sesiones formales en Madrid, París y Andorra, se ha concluído el Tratado Trilateral por el cual se reconoce a Andorra como Estado, se establecen

CONSEJO DE MINISTROS SECRETARÍA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

relaciones diplomáticas y se fijan los compromisos para el nuevo marco de relaciones con el Principado.

Los ámbitos prioritarios de esas relaciones, en los que resulten necesarios acuerdos se determinarán mediante canjes de notas, después de la entrada en vigor del Tratado.

El Consejo de Estado por dictamen n° 7740/93, de 10 de junio de 1993, opina "que la prestación del consentimiento para obligarse por el Tratado de buena vecindad, amistad y cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra requiere la previa autorización de las Cortes Generales".

La firma fue autorizada por el Consejo de Ministros del pasado 28 de mayo de 1993, quien no autorizó la remisión a las Cortes Generales por estar éstas disueltas.

Dado que el artículo 10 del Tratado establece su aplicación provisional desde la fecha de su firma, su texto fue publicado en el Boletín Oficial del Estado n° 155, de 20 de junio de 1993.

Se propone la adopción del siguiente:

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

A C U E R D O

Que el Consejo de Ministros disponga la remisión a las Cortes Generales del Tratado de referencia, a efectos de lo previsto en el artículo 94.1 de la Constitución".

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente certificación en Madrid, a veintidós de octubre de mil novecientos noventa y tres.

CONSEJO DE MINISTROS * SECRETARIA *

004926

Ministerio
de
Asuntos Exteriores

JUAN MANUEL DIAZ-PACHE PUMAREDA, DIRECTOR DEL GABINETE DE TRATADOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES,

CERTIFICA: Que el texto adjunto a la presente certificación es copia fiel e íntegra del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra, firmado en Madrid y París el 1 de junio de 1993 y en Andorra la Vieja el 3 de junio de 1993.

Madrid, diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

004926

TRATADO DE BUENA VECINDAD, AMISTAD Y COOPERACION ENTRE EL REINO DE ESPAÑA, LA REPUBLICA FRANCESA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA

El Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra,

Teniendo en cuenta la situación geográfica particular del Principado de Andorra y preocupados por respetar sus tradiciones históricas;

Deseosos de continuar las relaciones de buena vecindad y amistad que siempre han existido entre ellos y de tener en cuenta el espíritu de igualdad que el Principado de Andorra ha mantenido en sus relaciones tradicionales de equilibrio con los Estados vecinos;

Animados por el deseo de desarrollar relaciones de cooperación basadas en la confianza y el equilibrio;

Recordando su compromiso con los valores de paz, libertad, democracia y justicia que les son comunes;

Deseosos de aportar su contribución a la construcción de una Europa pacífica, democrática y solidaria;

han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

El Reino de España y la República Francesa reconocen al Principado de Andorra como Estado soberano.

ARTICULO 2

El Reino de España y la República Francesa establecen respectivamente con el Principado de Andorra relaciones diplomáticas.

El Reino de España y la República Francesa facilitan la participación del Principado en las conferencias y organizaciones internacionales así como su adhesión a los convenios internacionales.

ARTICULO 3

El Reino de España y la República Francesa respetan la soberanía y la independencia del Principado de Andorra, así como la integridad de su territorio.

Se comprometen en caso de violación, o de amenaza de violación de la soberanía, de la independencia o de la integridad territorial del Principado, a proceder entre ellos y con el Gobierno andorrano, a consultas con vistas a examinar las medidas que pudieran resultar necesarias con el fin de garantizar su respeto.

ARTICULO 4

El Reino de España y la República Francesa por una parte, el Principado de Andorra por otra, se comprometen a velar por el respeto mutuo de sus intereses fundamentales respectivos y a cooperar para la solución de las dificultades que pudieran surgir en dichas materias, incluso respecto a los compromisos asumidos por el Reino de España y la República Francesa en el marco de la Comunidad Europea.

Para completar la eventual adhesión del Principado de Andorra a convenios internacionales, en particular europeos, en los que el Reino de España o la República Francesa son partes, así como los acuerdos entre el Principado de Andorra y la Comunidad Europea, esta cooperación será objeto, en caso necesario, de acuerdos específicos, bilaterales o trilaterales entre las partes.

Los ámbitos prioritarios en los que resultan necesarios acuerdos se determinarán por medio de canjes de notas, después de la entrada en vigor del presente Tratado.

ARTICULO 5

El Principado de Andorra se compromete a no emprender nada desde su territorio o en éste, que pueda atentar contra la seguridad interior y exterior del Reino de España o de la República Francesa, o contra sus compromisos internacionales en dicho ámbito.

ARTICULO 6

En el caso de que el Principado de Andorra no se encargue por sí mismo de la protección de sus intereses y de su representación diplomática ante terceros Estados con los que desee mantener relaciones, o en conferencias u organizaciones internacionales en las que desee participar, solicitará bien al Reino de España bien a la República Francesa que se haga cargo de ello, de conformidad con las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Las modalidades de dicha representación y de dicha protección, que se garantizarán en virtud de un principio de equilibrio entre el Reino de España y la República Francesa, se determinarán en acuerdos específicos.

ARTICULO 7

En los Estados en que el Principado de Andorra no dispone de representación consular, y sin perjuicio de las disposiciones del derecho internacional que regulen las relaciones diplomáticas y consulares, así como del acuerdo de los citados Estados, los nacionales andorranos podrán acudir en caso de necesidad bien a una oficina consular del Reino de España, bien a una oficina consular de la República Francesa, en la medida en que ambas coexistan.

GOVERN · SECRETARIA GENERAL

ARTICULO 8

Los arreglos, acuerdos y tratados bilaterales que concierte el Principado de Andorra tanto con el Reino de España como con la República Francesa son objeto, desde el momento del inicio de las negociaciones, y hasta su conclu - sión, de una información regular y completa, por vía diplomática, a aquel de los dos Estados que no participe en ellas, por parte de los otros dos.

ARTICULO 9

Si resultase que el objeto de un arreglo, acuerdo o tratado bilateral que el Principado de Andorra tuviese intención de concertar con el Reino de España o con la República Francesa fuese de interés común para los tres Estados, éstos podrán decidir concluirlo de manera tripartita.

ARTICULO 10

El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes de conformidad con sus normas constitucionales respectivas. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno del Principado de Andorra.

El presente Tratado entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha del depósito del último instrumento de ratificación.

Las Partes acuerdan aplicar sus disposiciones provisionalmente desde la fecha de su firma.

ARTICULO 11

El presente Tratado, redactado en un ejemplar único en castellano, francés y catalán, siendo los tres textos igualmente fehacientes, será depositado en los archivos del Gobierno del Principado de Andorra que entregará una copia certificada conforme a cada uno de los Gobiernos de los demás signatarios.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios infrascritos estampan sus firmas al pie del presente Tratado.

Hecho en Madrid el	Hecho en Andorra la Vieja el	Hecho en Paris el
1. Junio 1993	3 de juny 1993	1er. Juin 1993
POR EL REINO DE ESPAÑA	POR EL PRINCIPADO DE ANDORRA	POR LA REPUBLICA FRANCESA
El Ministro de Asuntos Exteriores,	El Jefe del Gobierno,	El Ministro de Asuntos Exteriores,
Javier Solana Madariaga	Oscar Ribas Reig	Alain Juppe

DILIGENCIA DE COMPULSACION

Jordi CINCA MATEOS, Secretario General del Gobierno del Principado de Andorra,

CERTIFICO que la presente fotocopia, rubricada y sellada por mi, ha sido debidamente compulsada del documento original que se halla depositado en los archivos del Gobierno de Andorra. Se compone de cinco folios, escritos por una sola cara. De todo lo cual doy fe en Andorra la Vella, 7 de junio de 1993.

CONSEJO DE ESTADO

004926

Nº: 770/93/MM

S E Ñ O R E S :

Excmo. Señor:

Ledesma Bartret, Presidente
Gutiérrez Mellado
Lavilla Alsina
Arozamena Sierra
De Mateo Lage
Sánchez del Corral y del Río
Peces-Barba del Brío
Vizcaíno Márquez
Pérez-Tenessa Hernández
Delgado-Iribarren Negrao
Secretario General

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 10 de junio de 1993, con asistencia de los señores que al margen se expresa, emitió el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de la Orden de V.E. de 27 de mayo de 1993, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra.

Resulta de antecedentes:

Primero.- El proyecto de Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra consta de un preámbulo y once artículos.

En el preámbulo se alude, como propósito del Tratado, al deseo de continuar las relaciones de buena vecindad y amistad

y el espíritu de igualdad que el Principado de Andorra ha mantenido en sus relaciones tradicionales de equilibrio con los Estados vecinos.

Según el artículo 1: "El Reino de España y la República Francesa reconocen al Principado de Andorra como Estado soberano".

España y Francia establecen relaciones diplomáticas con el Principado de Andorra, y facilitan la participación de éste en las conferencias y organizaciones internacionales y la adhesión a convenios internacionales (artículo 2).

El artículo 3 recoge el principio de respeto a la soberanía, independencia e integridad del territorio del Principado por parte de las otras dos Partes. Para ello, en caso de violación o de amenaza de violación de la soberanía, de la independencia o integridad territorial del Principado, se procederá a consultas entre las tres Partes, con el fin de adoptar las medidas que fueran necesarias. España y Francia, por una parte, y Andorra, por otra, "se comprometen a velar por el respeto mutuo de sus intereses fundamentales respectivos y a cooperar para la solución de las dificultades que pudieran surgir en dichas materias", incluso en el marco de la Comunidad Europea (artículo 4).

Dispone el artículo 5 que el Principado de Andorra se compromete a no emprender nada desde su territorio o en éste que pueda atentar contra la seguridad interior o exterior del Reino de España y la República Francesa.

El artículo 6 se refiere a la posibilidad de que, en caso de que el Principado no se encargue por sí mismo de la protección de intereses y su representación diplomática ante terceros Estados o en conferencias u organizaciones internacionales, solicite del Reino de España o de la República Francesa que se haga cargo de ello. Las modalidades de esta representación y protección, que se garantizarán de acuerdo con el principio de equilibrio entre España y Francia, se determinarán en acuerdos específicos.

En virtud del artículo 7 del Convenio, en los Estados en los que el Principado no tenga representación consular, los nacionales andorranos podrán acudir a las oficinas consulares del Reino de España y de la República Francesa.

Los arreglos, acuerdos y tratados que concierte el Principado de Andorra con el Reino de España o la República Francesa serán objeto, desde su negociación hasta la conclusión, de una información regular y completa a aquel de los Estados que no participe en ella, por parte de los otros dos. En caso de que el objeto de un arreglo, acuerdo o tratado de este tipo fuera de

interés común para los tres Estados, éstos podrán decidir concluirlo de forma tripartita (artículos 8 y 9).

El artículo 10 dispone que el presente Tratado será ratificado por las tres Partes Contratantes, depositándose los documentos de ratificación ante el Gobierno del Principado de Andorra. El Tratado entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha del depósito del último instrumento de ratificación; no obstante, será aplicado provisionalmente desde la fecha de su firma. No consta que ésta se haya producido.

El Tratado está redactado en castellano, catalán y francés, siendo los tres idiomas igualmente fehacientes.

Segundo.- El Gabinete de Tratados de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores estima que es necesaria la autorización de las Cortes Generales ya que "incide en el artículo 94.1 a) de la Constitución, pues tiene carácter político al establecer el marco general de las relaciones entre los tres Estados y servir de instrumento de reconocimiento internacional del Estado andorrano, así como para el establecimiento de relaciones diplomáticas".

En el escrito de dicho órgano se señala que en la Constitución andorrana, que entró en vigor el 4 de mayo de 1993, la disposición adicional primera "establece la obligación de concluir un Tratado Trilateral para establecer el marco de las

relaciones de Andorra con los dos Estados vecinos sobre la base del respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Andorra".

Y, en tal estado de tramitación, el expediente fue remitido al Consejo de Estado para que dictamine por procedimiento de urgencia.

Es objeto del presente expediente el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra. La finalidad del Tratado es establecer el marco de relaciones del Principado con las otras dos Partes, previéndose su desarrollo por los acuerdos que resulten necesarios.

Es reiterada la doctrina del Consejo de Estado de que los tratados de amistad tienen carácter político, por lo que se encuentran comprendidos en el ámbito del artículo 94.1 a) de la Constitución. Puede citarse, en este sentido, el dictamen número 45.737, de 29 de septiembre de 1983, en el que se señalaba que los tratados de amistad son una subespecie de los tratados políticos, que adquieren especial relevancia en los casos de vecindad, como ocurre también en este caso.

Si bien la categoría de tratado político es de difícil determinación, dificultad que se acrecienta cuando se trata de aprehender desde un punto de vista jurídico, como ya señaló el

Consejo de Estado (dictamen número 50.417, de 12 de marzo de 1987), tal carácter político puede deducirse de su contemplación, bien desde una perspectiva interna, la del Derecho constitucional, bien desde una perspectiva externa, la de la Comunidad Internacional. De este modo, tendrán carácter político todos aquellos acuerdos que supongan un compromiso grave o estable para la política exterior española; y, también, aquellos que tienen una especial relevancia para la Comunidad Internacional, ya sea por la importancia fundamental para ésta de los temas regulados en el Tratado, ya sea porque, como ocurre en el caso presente, el Tratado tiene una significación política básica para definir la posición de un Estado o grupo de Estados desde el punto de vista jurídico-internacional. Desde ambos enfoques puede afirmarse la naturaleza política del Tratado sobre el que se consulta.

Partiendo del último de los puntos de vista aludido, cabe referirse a la importancia que el reconocimiento del Principado de Andorra como Estado soberano tiene para la definición de su estatuto internacional; este reconocimieno cobra especial significación si se tiene en cuenta, por un lado, que el reconocimiento se lleva a cabo por los dos Estados vecinos, España y Francia, en un mismo instrumento jurídico; y, por otro lado, las peculiaridades de la organización política del Principado hasta la entrada en vigor de la Constitución, ordenación política no exenta de elementos tradicionales y con importantes repercusiones en el derecho internacional.

En esta misma línea, debe subrayarse la trascendencia de la posibilidad, contemplada en el Tratado, de que el Principado de Andorra solicite del Reino de España o de la República Francesa que se haga cargo de la protección de los intereses y de la representación diplomática del Principado frente a terceros Estados o en conferencias u organizaciones internacionales

A igual conclusión, carácter político del Tratado, se llega si se tiene en cuenta que el propósito del mismo es el de trazar el marco de las relaciones entre la República Francesa y el Reino de España, de una parte, y el Principado de Andorra, de otra, "teniendo en cuenta la situación geográfica particular del Principado de Andorra y preocupados por respetar sus tradiciones históricas", con el deseo, expuesto en el preámbulo, de "tener en cuenta el espíritu de igualdad que el Principado de Andorra ha mantenido en sus relaciones tradicionales de equilibrio con los Estados vecinos". De todo ello se desprenden compromisos de singular relevancia para las relaciones exteriores de España, como puede deducirse, a título de ejemplo, de las obligaciones asumidas por las Partes en virtud de los artículos 3 y 5 (antecedente primero).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado es de dictamen:

CONSEJO DE ESTADO

004926

Que la prestación del consentimiento para obligarse por el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre el Reino de España, la República Francesa y el Principado de Andorra requiere la previa autorización de las Cortes Generales."

V.E., no obstante, resolverá lo que estime más acertado.

Madrid, 10 de junio de 1993

EL SECRETARIO GENERAL,

Manuel Delgado-Iribarren

EL PRESIDENTE,

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE ASUNTOS EXTERIORES.

Ministerio
de
Asuntos Exteriores

Reunión Subsecretarios 6 octubre 1993
Consejo Ministros 8 " "

Madrid, 17 de septiembre de 1.993

004926

MEMORIA EXPLICATIVA

El 4 de mayo de 1993 entró en vigor la Constitución andorrana. Su Disposición Adicional primera establece la obligación de concluir un Tratado Trilateral para establecer el marco de las relaciones de Andorra con los dos Estados vecinos sobre la base del respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Andorra.

Finalizadas las negociaciones trilaterales, con sesiones formales en Madrid, París y Andorra, se ha concluído el Tratado Trilateral por el cual se reconoce a Andorra como Estado, se establecen relaciones diplomáticas y se fijan los compromisos para el nuevo marco de relaciones con el Principado.

Los ámbitos prioritarios de esas relaciones, en los que resulten necesarios acuerdos, se determinarán mediante Canje de Notas, después de la entrada en vigor del Tratado.

El carácter solemne de este Tratado Trilateral ha hecho conveniente que se someta a ratificación por las Cortes Generales. La firma del mismo se realizó en las tres capitales de los tres Estados parte.

El compromiso del establecimiento de relaciones diplomáticas se ha cumplido. El Real Decreto 852/1993, de 4 de junio, creó la Embajada de España en Andorra, se ha nombrado un Embajador y éste ya ha presentado sus cartas credenciales.

También se ha asistido a Andorra en su deseo de ingresar en la ONU, de la que ya es miembro, y de ingresar en la UIT y el CICR.

La firma fue autorizada por el Consejo de Ministros del pasado 28 de mayo de 1993, quien no autorizó la remisión a las Cortes Generales por estar éstas disueltas.

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

26 septembre 1994
F7152A2

Doc. 7152
Amendement n° 2

AMENDEMENT N° 2

au rapport sur la demande d'adhésion de la Principauté d'Andorre au Conseil de l'Europe

présenté par M. HAGÅRD et Lord KIRKHILL au nom de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme

---

Dans le projet d'avis, à la fin du paragraphe 7 insérer une nouvelle phrase rédigée comme suit:

"Une législation adéquate sur la nationalité, conforme aux normes établies du Conseil de l'Europe, devrait être considérée comme une condition d'adhésion."

signé:

Hagård
Kirkhill

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

29 septembre 1994
F7152A2.S1

Doc. 7152
Amendement n° 2
Sous-amendement n° 1

SOUS-AMENDEMENT N° 1

à l'AMENDEMENT N° 2

au rapport sur la demande d'adhésion de la Principauté d'Andorre au Conseil de l'Europe

présenté par MM. de PUIG et VALLEIX

Dans l'amendement, supprimer les mots "devrait être considéré comme une condition d'adhésion" et après le mot "nationalité" insérer les mots:

"devrait être".

signé:

de Puig
Valleix

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

26 septembre 1994
F7152A1

Doc. 7152
Amendement n° 1

AMENDEMENT N° 1

au rapport sur la demande d'adhésion de la Principauté d'Andorre au Conseil de l'Europe

présenté par M. HAGÅRD et Lord KIRKHILL au nom de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme

---

Dans le projet d'avis, paragraphe 4, après les mots "et à reconnaître" insérer les mots:

"- en attendant l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 -"

signé:

Hagård
Kirkhill

COUNCIL OF EUROPE

CONSEIL DE L'EUROPE

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

30 septembre 1994
F7152A3

Doc. 7152
Amendement n° 3

AMENDEMENT N° 3

au rapport sur la demande d'adhésion de la Principauté d'Andorre au Conseil de l'Europe

présenté par MM. HAGÅRD et COLUMBERG

Dans le projet d'avis, à la fin du paragraphe 4 insérer une nouvelle phrase rédigée comme suit:

"Lors de la ratification de la Convention des droits de l'homme il est essentiel qu'Andorre ratifie également le Protocole n° 11."

signé:

Hagård
Columberg

Av. Santa Coloma 9
Andorra la Vella
Tel. 61 400

Butlletí Oficial del Principat d'Andorra

Doc rec. de: 67979
01/10 '94 20:10
01/10/94 19:01 Pg: 3
T 67979 BARTUMEU CASSANY
03

Sumari

Lleis i tractats internacionals

Sentència del Tribunal Constitucional [illegible]
15-3-94 en relació al recurs [illegible]
Any 6 / núm. 21 / pàg. [illegible]

01/10 '94 20:10 ☎ 67979 BARTUMEU CASSANY 04

Lleis i tractats internacionals

Sentències del Tribunal Constitucional

En nom del Poble Andorrà,

El Tribunal Constitucional,

Atès el recurs d'in[illegible] (93-1-L) interposat pel Cap [illegible] data de 31 de desembre [illegible] tant que siguin declar[illegible] Constitució els articles [illegible] 17, 20, 22.4 i 22.5 de la [illegible] la nacionalitat aprov[illegible] neral el dia 3 de se[illegible] publicada al Butlletí Oficial del P[illegible] d'Andorra el dia 28 de [illegible]

Vista la Constitució

Vista la Llei Qualificada [illegible] Constitucional,

Vist l'acte del Tribunal Constitucional de 17 de gener [illegible] recurs 93-1-L

Vistes les contestacions del Síndic General registrades al Tribunal Constitucional el dia 1 de febrer de 1994

Vistes les observacions del Ministeri Fiscal registrades al Tribunal Constitucional el dia 1 de febrer de 1994

Vistes les conclusions presentades signades pel Síndic General registrades al Tribunal Constitucional el dia [illegible] de febrer de 1994

Vistes les conclusions del Cap de Govern registrades al Tribunal Constitucional el 15 de febrer de 1994

Escoltat el magistrat ponent [illegible] çois Luchaire

Quant a les normes aplicables

Considerant que

- Per justificar la seva demanda [illegible] mandant invoca

. el principi d'igualtat,

. les regles de dret internacional públic

[illegible] diverses dispositions [illegible] de drets fonamentals.

[illegible] principis [illegible] les normes [illegible] que fan referència a la [illegible]

[illegible]

Pel que fa referència al principi d'igualtat,

Considerant que

[illegible]

[illegible] principi implica [illegible] d'ésser apli[illegible]

[illegible] el principi d'igualtat [illegible] el legislador dicti [illegible] diferents per regular situacions [illegible] justificades [illegible] diferències de situació [illegible]

Pel que fa referència a les regles de dret internacional públic,

Considerant que

- Segons l'article 3.3 de la Constitució "Andorra incorpora al seu ordenament els principis de dret internacional públic universalment reconeguts"; aquesta disposició figura en el títol I que la Constitució consagra a la sobirania d'Andorra; en conseqüència, [illegible] d'aquesta sobirania i vinculada pel legislador.

- Segons l'article 5 de la Constitució, la Declaració Universal dels Drets Humans és vigent a Andorra; aquesta disposició figura en el títol II, que la Constitució consagra als drets i les llibertats que [illegible] ha de respectar i vincula, en conseqüència, el legislador.

Per aquestes dues raons, el mateix [illegible] per què fa a l'article 15 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que disposa en primer lloc que tota persona té dret a una nacionalitat, en segon lloc que ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva nacionalitat, i, en [illegible] individu té dret a [illegible] de nacionalitat.

En canvi, les convencions internacionals [illegible] la nacionalitat no han estat [illegible] per un gran nombre d'estats, [illegible] considerar que [illegible] universalment reconeguts [illegible] preceptes siguin [illegible] que [illegible]

Pel que fa referència als principis relatius a la família,

Considerant que

- L'article 13.2 de la Constitució disposa que la família és l'element bàsic de la societat i que pertoca als poders públics promoure una política de protecció de la família.

- L'article 13.3 de la Constitució afirma que "els cònjuges tenen els mateixos drets i obligacions", i que "els fills són iguals davant la llei amb independència de la seva filiació".

Aquestes disposicions combinades no permeten al legislador dictar normes diferents per als fills que es troben en situacions similars, o que col·locarien un dels cònjuges en una situació inferior en relació a la de l'altre.

Pel que fa referència al respecte als drets individuals,

Considerant que

- La nacionalitat andorrana figura en el títol II que la Constitució consagra als drets i les llibertats, confereix al seu titular el gaudi dels drets polítics, com ho

Doc Rec. de: 67979
01/10 '94 20:11
01/10/94 19:01 Pg: 5
67979 BARTUMEU CASSANY
05

confirma el capítol III del títol II de la Constitució, relatiu a la nacionalitat andorrana, en conseqüència, ha d'ésser considerada com un dret individual per a tots aquells que compleixen les condicions establertes per la llei per ésser-ne titulars.

La Constitució garantitza:

- en el seu article 1 que Andorra és un Estat de dret,

- en el seu article 3.2 el principi de la seguretat jurídica,

- en el seu article 10.1 el dret a un procés degut, substanciat per un jutge imparcial.

En conseqüència, la pèrdua d'un dret individual només pot derivar-se d'una decisió jurisdiccional o d'una decisió administrativa susceptible de recurs davant un jutge.

Pel que fa referència al principi de no retroactivitat

Considerant que:

- En els termes del seu article 10.3, la Constitució garanteix el principi de la no retroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals o que estableixin un efecte o estableixin una sanció desfavorables", com també el principi de la seguretat jurídica.

- La llei no pot sense vulnerar aquests principis, col·locar el titular d'un dret individual en una situació menys favorable pel període anterior a la seva publicació.

Per contra, la llei, per al període posterior a la seva publicació, pot subordinar el manteniment d'una situació objectiva anterior, atribuïda originàriament sense exigència, a una nova obligació, si concedeix tanmateix, de manera als titulars d'aquesta situació un termini raonable per complir aquesta obligació, en defecte del qual aquesta nova exigència serà inoperant.

Pel que fa referència als principis constitucionals relatius a la nacionalitat,

Considerant que:

- L'article 7.1 de la Constitució remet a una llei qualificada la determinació de les normes d'adquisició, de conservació o de pèrdua de la nacionalitat, com també de

Sobre l'article 2.1

Considerant que:

- L'article 2.1 obligaria la nacionalitat andorrana a l'infant legitimat o adoptat per dos progenitors estrangers residents a Andorra i considera que aquests, com els fills tindrien el seu domicili a la seva residència permanent al Principat.

- Aquesta disposició, que neix en el període transitori de la Constitució, no és aplicable respecte el supòsit que planteja el Síndic, per la raó que l'article 2.1 no és aplicable als fills nascuts abans de l'entrada en vigor de la Constitució, que adquireixen la nacionalitat andorrana per naixement.

- L'article 2.1 no és objectiu fonamentar que la nacionalitat andorrana per raó de filiació, la situació dels fills nascuts a Andorra si un dels pares hi és també nascut.

Aquesta situació ha d'ésser comparada amb aquella, considerada en l'article 11, dels fills que no han nascut a Andorra però que poden adquirir la nacionalitat andorrana igualment en funció de llur

Sobre l'article 2.2

Considerant que:

- L'article 2.2 disposa que els infants nascuts a Andorra de pares estrangers tindran la nacionalitat a la qual puguin aspirar, des que sigui majors d'edat, però que la possessió d'estat durant 18 anys els donarà el dret de conservar la nacionalitat andorrana a condició que renunciïn a la nacionalitat d'origen tan aviat com sigui possible.

- Aquesta disposició no regula la situació dels infants nascuts a Andorra de pares apàtrides o de pares estrangers, i als quals les lleis estrangeres no atribueixen cap nacionalitat de cap dels dos pares.

Aquesta situació no està contemplada per l'article 8.1 de la Llei, referida que, en no atribuir l'adquisició de la nacionalitat andorrana a la pèrdua d'una nacionalitat estrangera, només afecta els infants que en el moment del seu naixement tenien una nacionalitat estrangera, i no afecta aquells als quals no es pot atribuir cap nacionalitat en el moment de llur naixement.

- Tant si es tracta de la voluntat del legislador com d'una llacuna de la Llei, ens resulta per a aquests infants una diferència de normes aplicables en la mesura que no tenen la possibilitat de conservar

Doc Rec. de: 67979 01/10/94 19:01 Pg: 6
01/10 '94 20:12 67979 BARTUMEU CASSANY 06

la nacionalitat andorrana per raó d'una possessió d'estat de 18 anys.

- Els infants nascuts a Andorra, a les quals no pot ésser atribuïda una nacionalitat per manca de filiació determinada, es troben en una situació semblant a la dels infants als quals no pot ésser atribuïda cap nacionalitat, a causa de la doble filiació d'apatrídia dels seus pares, o bé pel fet que cap llei estrangera no els hi reconegui la nacionalitat d'un dels seus pares.

- A aquestes dues categories d'infants se'ls han d'aplicar les mateixes normes relatives als efectes de la possessió d'estat.

- En conseqüència, l'article 7.2 és contrari a la Constitució.

Sobre l'article 7.1

Considerant que:

- L'article 7.2 disposa que el fill de persona estrangera esdevingut andorrana per matrimoni i que no hagi nascut d'aquest matrimoni no podrà adquirir la nacionalitat andorrana.

- Aquest article és susceptible de dues interpretacions.

- La primera interpretació, estrictament gramatical d'aquesta disposició, col·loca una incapacitat definitiva per a adquirir la nacionalitat andorrana a certes persones, les persones concernides es troben, doncs, en una situació de desigualtat respecte a una altra persona susceptible d'adquirir aquesta nacionalitat per naixement o per qualsevol altre mode.

- Segons una segona interpretació d'aquest article, de caràcter lògic, aquesta norma no resol el problema de l'adquisició col·lectiva de la nacionalitat andorrana per part dels fills per raó del matrimoni d'un dels pares.

- Tractant-se en aquest cas de fills d'una mateixa parella, fent una distinció entre els fills segons si són nascuts abans o després de la celebració del matrimoni l'article 7.1 atempta contra l'article 6.1 de la Constitució, que disposa que "Ningú no pot ésser discriminat per raó de naixement", com també contra el seu article 13.3, que disposa que "Els fills són iguals

[illegible] nacionalitat [illegible] d'origen [illegible]

El matrimoni, la simple declaració del fet [illegible] d'una persona estrangera, andorrana per matrimoni no presenta, en relació a la nacionalitat, cap diferència amb el fet que una persona [illegible] adquireix aquesta nacionalitat per [illegible] altre procediment, si més no [illegible] naturalització (article 9.1 de la Llei defensada) una diferència [illegible] que justifiqui una norma diferent relativa a l'adquisició de la nacionalitat andorrana.

En conseqüència, l'article 7.2 és contrari a la Constitució.

Sobre l'article 7.2

Considerant que:

L'article 7.2 [illegible] nacionalitat [illegible] d'estatus al cònjuge que ha adquirit aquesta nacionalitat per matrimoni, aquesta atribució [illegible] diferent a la natural, llevat que aquest cònjuge hagi provat la nacionalitat andorrana durant més de set anys.

- Segons l'article 6 de la Llei defensada el matrimoni [illegible] per [illegible] la nacionalitat andorrana [illegible] interessat per [illegible] que no [illegible] nacionalitat, [illegible] que pugui [illegible] cònjuge [illegible] per [illegible] aquesta.

- Si l'interessat [illegible] no ha [illegible] una altra nacionalitat, la pèrdua de la seva nacionalitat andorrana el priva de tota nacionalitat, contrariament a l'article 15 de la Declaració Universal dels Drets Humans, que disposa que tota persona té dret a una nacionalitat.

- A més, l'article 18.3 de la Constitució disposa que "Els cònjuges tenen els mateixos drets i obligacions".

L'eventual [illegible] per la pèrdua de la nacionalitat andorrana adquirida per matrimoni, que fa de l'interessat un apàtrida, col·loca aquest darrer en una situació inferior a la de l'altre cònjuge, contravenint a la disposició abans citada de l'article 18.3 de la Constitució.

Per acabar, segons l'article 9.4 de la Constitució, ningú no pot ésser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no [illegible] infracció administrativa.

La pèrdua de la nacionalitat andorrana per raó de nul·litat o dissolució d'un matrimoni constitueix una sanció per un fet que, llevat del cas d'un matrimoni purament fictici o contret amb frau de llei, no pot implicar aquesta conseqüència.

Per tant, l'article 7.2 és contrari a la Constitució.

Sobre l'article 17

Considerant que:

- L'article 17 retira la nacionalitat andorrana al menor que passa sota la pàtria potestat exclusiva d'un estranger per causa d'adopció o de legitimació.

- L'article 15 de la Declaració Universal dels Drets Humans disposa que ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva nacionalitat.

- Aquesta disposició, que pretén reduir els casos d'apatrídia, s'oposa al fet que una persona sigui privada de tota nacionalitat per una raó que no depèn d'ella.

- Aquesta norma s'ha de conciliar amb l'article 7.2 de la Constitució, que disposa expressament que l'adquisició d'una nacionalitat diferent de la nacionalitat andorrana implica la pèrdua d'aquesta nacionalitat en els terminis i termes fixats per la llei.

- Això permès al legislador de preveure la pèrdua de nacionalitat andorrana del menor que adquireix una nacionalitat estrangera en passar, o després d'haver passat, sota la pàtria potestat exclusiva d'un estranger, però no li era permès retirar la nacionalitat andorrana quan l'adopció o la legitimació abans citada no s'acompanya, o no va seguida, de l'adquisició d'una altra nacionalitat.

- En conseqüència, l'article 17 és contrari a la Constitució.

Sobre l'article 20

Considerant que:

- L'article 20 disposa que qualsevol que ha adquirit la nacionalitat andorrana en les condicions previstes pels articles 5 de

Doc Rec. de: 67979 01/10/94 19:01 Pg: 7
01/10 '94 20:13 ☎ 67979 BARTUMEU CASSANY 07

les redaccions del Codi de la nacionalitat de 1977 i de 1985, i pels articles 9, 8 i 11 de la Llei defensa perd aquesta nacionalitat, si no conserva o no ha conservat el domicili i la residència efectiva, exclusiva i sense interrupció al Principat, almenys d'ençà de deu anys a comptar des del moment de l'adquisició.

- El principi d'igualtat no s'oposa a tractar situacions diferents segons objectes de normes diferents, a condició que aquestes darreres siguin justificades per la diferència de situacions i tinguin congruència amb aquesta i amb l'objecte de la llei que les conté.

- Les persones a les quals la nacionalitat andorrana és atribuïda des del seu naixement es troben en una situació diferent d'aquelles que han adquirit aquesta nacionalitat després del seu naixement.

- Per tant, és permès al legislador d'exigir d'aquell que ha adquirit la nacionalitat andorrana una prova particular i raonable d'integració al Principat, sense exigir-la d'aquell al qual aquesta nacionalitat ha estat atribuïda originàriament pel fet del seu naixement.

- Aquest principi, tanmateix, s'ha de conciliar amb altres principis de valor constitucional i específicament amb aquell que resulta de l'article 15 de la Declaració Universal dels Drets Humans, el de la seguretat jurídica que resulta de l'article 3.2 de la Constitució, com també el de la protecció de la família que resulta de l'article 13.2 de la Constitució.

- En aquest sentit, l'article 20, en fer córrer el termini de conservació a Andorra del domicili i la residència efectiva a comptar des de l'adquisició de la nacionalitat andorrana, fins i tot si aquesta adquisició és anterior a la publicació de la llei deferida, obliga a examinar successivament la situació de les persones concernides, segons hagin adquirit la nacionalitat andorrana abans o després de la publicació de la llei deferida.

A: En allò que concerneix les persones que han adquirit la nacionalitat andorrana abans de la publicació de la llei deferida.

Considerant que:

- L'article 20 no priva de la nacionalitat andorrana per raó del no compliment de la condició abans citada els qui hauran adquirit aquesta nacionalitat per aplicació dels articles 4.1 i 6 de la llei deferida, tractant-se de l'adquisició d'aquesta nacionalitat per un infant (article 4) o per un cònjuge per raó del seu matrimoni.

- Aquest article no priva de la nacionalitat andorrana per raó del no compliment de la condició abans citada els qui hauran adquirit aquesta nacionalitat per aplicació dels articles 4.1 i 6 de la llei deferida, tractant-se de l'adquisició d'aquesta nacionalitat per un infant (article 4) o per un cònjuge per raó del seu matrimoni.

- L'article 20 no s'oposa a tractar de manera diferent, per raons de fet, persones que es troben en situacions diferents, aquest article no fa més que aplicar el principi d'igualtat andorrà així que l'han fet en aplicació dels articles 4 i 6 de les successives nacionalitats de 1977 i de 1985, és a dir abans de la publicació de la llei deferida.

- L'article no priva de la seva nacionalitat andorrana per no haver complert la condició de residència fixada per aquesta a aquelles persones amparades per aquestes disposicions legislatives, la seva situació resulta del fet que la llei constitueix una privació arbitrària de la nacionalitat, contrària així a l'article 15 de la Declaració abans citada i a l'article 3.2 de la Constitució.

- En conseqüència, els mots "dels articles 4.1 i 6 de les successives redaccions del Codi de la nacionalitat andorrana de 1977 i de 1985" són contraris a la Constitució.

B: En allò que concerneix les persones que han adquirit la nacionalitat andorrana després de la publicació de la llei deferida.

Considerant que:

- L'article 20 no imposa, per complir, la condició de residència efectiva a Andorra durant els dos anys següents a l'adquisició de la nacionalitat andorrana, sinó que fixa el termini de domicili i de residència efectiva així exigit només en començar a córrer a partir d'aquesta adquisició per tant, posteriorment a la publicació de dita llei.

- Atès que aquest article no s'oposa a tractar de manera diferent, per raons de fet, persones que es troben en situacions diferents, cal examinar si les normes que el contenen resulten justificades i si hi ha per tal diferència de situacions i que per l'aplicació d'un principi constitucional.

- L'article 20 no priva de la nacionalitat andorrana per raó del no compliment de la condició abans citada els qui hauran adquirit aquesta nacionalitat per aplicació dels articles 4.1 i 6 de la llei deferida, tractant-se de l'adquisició d'aquesta nacionalitat per un infant (article 4) o per un cònjuge per raó del seu matrimoni.

- L'article 20 no s'oposa a tractar de manera diferent, per raons de fet, persones que es troben en situacions diferents, aquest article no fa més que aplicar el principi d'igualtat andorrà així que l'han fet en aplicació dels articles 4 i 6 de les successives nacionalitats de 1977 i de 1985, és a dir abans de la publicació de la llei deferida.

- L'article no priva de la seva nacionalitat andorrana per no haver complert la condició de residència fixada per aquesta a aquelles persones amparades per aquestes disposicions legislatives, la seva situació resulta del fet que la llei constitueix una privació arbitrària de la nacionalitat, contrària així a l'article 15 de la Declaració abans citada i a l'article 3.2 de la Constitució.

- En conseqüència, els mots "dels articles 4.1 i 6 de les successives redaccions del Codi de la nacionalitat andorrana de 1977 i de 1985" són contraris a la Constitució.

B: En allò que concerneix les persones que han adquirit la nacionalitat andorrana després de la publicació de la llei deferida.

Considerant que:

- L'article 20 no imposa, per complir, la condició de residència efectiva a Andorra durant els dos anys següents a l'adquisició de la nacionalitat andorrana, sinó que fixa el termini de domicili i de residència efectiva així exigit només en començar a córrer a partir d'aquesta adquisició per tant, posteriorment a la publicació de dita llei.

- Atès que aquest article no s'oposa a tractar de manera diferent, per raons de fet, persones que es troben en situacions diferents, cal examinar si les normes que el contenen resulten justificades i si hi ha per tal diferència de situacions i que per l'aplicació d'un principi constitucional.

- L'article 20 no priva de la nacionalitat andorrana per raó del no compliment de la condició abans citada els qui hauran adquirit aquesta nacionalitat per aplicació dels articles 4.1 i 6 de la llei deferida, tractant-se de l'adquisició d'aquesta nacionalitat per un infant (article 4) o per un cònjuge per raó del seu matrimoni.

- L'article 20 no s'oposa a tractar de manera diferent, per raons de fet, persones que es troben en situacions diferents, aquest article no fa més que aplicar el principi d'igualtat andorrà així que l'han fet en aplicació dels articles 4 i 6 de les successives nacionalitats de 1977 i de 1985, és a dir abans de la publicació de la llei deferida.

- L'article no priva de la seva nacionalitat andorrana per no haver complert la condició de residència fixada per aquesta a aquelles persones amparades per aquestes disposicions legislatives, la seva situació resulta del fet que la llei constitueix una privació arbitrària de la nacionalitat, contrària així a l'article 15 de la Declaració abans citada i a l'article 3.2 de la Constitució.

- En conseqüència, els mots "dels articles 4.1 i 6 de les successives redaccions del Codi de la nacionalitat andorrana de 1977 i de 1985" són contraris a la Constitució.

B: En allò que concerneix les persones que han adquirit la nacionalitat andorrana després de la publicació de la llei deferida.

Considerant que:

- L'article 20 no imposa, per complir, la condició de residència efectiva a Andorra durant els dos anys següents a l'adquisició de la nacionalitat andorrana, sinó que fixa el termini de domicili i de residència efectiva així exigit només en començar a córrer a partir d'aquesta adquisició per tant, posteriorment a la publicació de dita llei.

- Atès que aquest article no s'oposa a tractar de manera diferent, per raons de fet, persones que es troben en situacions diferents, cal examinar si les normes que el contenen resulten justificades i si hi ha per tal diferència de situacions i que per l'aplicació d'un principi constitucional.

Sobre els articles 22.4 i 22.5

Considerant que:

- L'article 22.4 disposa que tota persona que en aplicació de les disposicions dels successius dels 11 de març de [illegible] ha adquirit o recuperat l'adquirit, i segons el text de la llei la nacionalitat andorrana o a que aquesta nacionalitat li sigui recuperada, conservarà una o les nacionalitats, haurà de provar haver-les perdut.

- El mateix article precisa que aquesta persona disposarà d'un termini de cinc anys a comptar des de l'entrada en vigor de la llei deferida, per prendre les disposicions necessàries i per esgotat aquest termini, és a dir, en el sisè any a comptar des de la publicació de la llei deferida, haurà d'haver provat la pèrdua efectiva.

- L'article 22.5 disposa que, esgotat aquest termini sense que l'interessat hagi provat aquesta pèrdua, hom considerarà que ha renunciat a la nacionalitat andorrana i que en serà despossessat automàticament sense que sigui necessari pronunciar una decisió administrativa o jurisdiccional.

- L'article 22.4 imposa una obligació, mentre que l'article 22.5 determina la sanció aplicable en el cas que aquesta obligació no sigui satisfeta.

- En aquest cas concret, l'obligació és inseparable de la sanció i inversament, els articles 22.4 i 22.5 formen així un conjunt indissociable, la conformitat del qual amb la Constitució hom ha d'examinar.

01/10 '94 20:14 ☎ 67979 BARTUMEU CASSANY 01/10/94 19:01 Pg: 8 08

- Per raó dels terme[illegible] 7.2 de la Constitució, [illegible] lador fixar d'una manera [illegible] les normes relatives a la pèrd[illegible] nacionalitat i, especialment, els [illegible] terminis en els quals s'esdevé [illegible] pèrdua.

- L'article 22.4 de la llei defensada [illegible] establir una obligació sobre aquell que en aplicació de les disposicions [illegible] des de l'11 de març de 1978 ha adquirit, ha recobrat o li ha estat reconeguda la nacionalitat andorrana, tot conservant una altra nacionalitat, no només cap decisió per a aquell que ha adquirit, recobrat o li ha estat reconeguda la nacionalitat andorrana abans d'aquesta data, ni tampoc per a aquell que ha pogut conservar una nacionalitat estrangera quan la nacionalitat andorrana li ha estat reconeguda, sinó que ha adquirit una nacionalitat estrangera després del seu reconeixement.

- L'article 22.5 no [illegible] dimeni de constatació de la pèrd[illegible] nacionalitat andorrana.

- La nacionalitat andorrana figura al títol II que la Constitució consagra als drets i les llibertats, i concretament al titular drets polítics, concretament al capítol IV del títol II, abans citat, de Constitució.

- La nacionalitat andorrana és [illegible] un dret individual per a tots aquells que compleixen les condicions requerides per la llei per ésser-ne titulars.

- La pèrdua de la nacionalitat andorrana, expressament prevista per l'article 7.2 de la Constitució, només pot afectar l'exercici futur d'un dret individual i de [illegible]

[illegible] 22.4 [illegible] conseqüència de la nacionalitat de l'article 22.5, no satisfà l'exigència de l'article 7.2 de la Constitució.

En darrer terme, l'article 22 paragraf 4 infringeix la llei defensada en contra a la Constitució.

Decideix

En la llei qualificada de la nacionalitat de 3 de setembre de 1993, publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra el dia 26 de setembre de 1993, són declarats contraris a la Constitució, per tant nuls i sense efecte:

- L'article 2.3
- L'article 2.2
- L'article 2.4
- L'article 7.2
- L'article 22

- L'apartat 2n dels articles 5, en totes les seves parts del Codi de la Nacionalitat Andorrana de 1977 i de 1985 [illegible]

- L'article 22.4
- L'article 22.5

Així per aquesta la nostra sentència, que serà notificada al Síndic General i al Cap del Govern, i serà comunicada al Consell General i serà publicada en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra [illegible] manera i segons a Andorra la Vella, el [illegible] de març de mil nou-cents noranta-quatre.

Joan Josep López Burniol
President

François Luchaire
Vice-President

Miquel Ángel Aparicio Pérez
Magistrat

Pere Vilanova Trias
Magistrat

Butlletí Oficial del **Principat d'Andorra**

Preu de l'exemplar: 70 PTA
Subscripció anual: 5.200 PTA

Dipòsit legal: And-15-1989

ISSN: 1015-7727
Any 6

Estadístiques de població

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ SEGONS AUTORS. PERÍODE 1835-1944

AUTOR	ANY	HABITANTS	OBSERVACIONS
Combarnous	1832	3.800	
Junoy	1836	3.500 a 3.600	
Madoz	1845	5.000 a 6.000	
Delmau de Baquer	1849	3.930 a 4.000	
Ulrich R.	1852	4.000	
Vidal V.	1866	6.400	
Calvet Josep	1869	xifres de 4.000	
(Aportació)	1874	5.000 a 6.000	[illegible]
Combarnous	1874	5.000	
Blade	1875	5.000 a 6.000	[illegible]
Duran J.	1880	5.000	[illegible]
Casas i Pont	1883	5.000	
Duasso	1884	5.000	
Osona	1889	6.000	
Carvajal	1895	uns 6.000	
Combarnous	1896	5.917	
Combarnous	1897	5.113	
Brutails	1897	5.000	[illegible] 1.362 [illegible]
Mitra d'Urgell	1900	5.000	
Coupul J.	1900	4.[illegible]	[illegible]
Enciol. Espasa	1901	5.000	[illegible]
Vilar A.	1904	6.000	
Mitra d'Urgell	1910	4.66[illegible]	
Coupul J.	1910	4.[illegible]	[illegible]
Pallerola	1912	6.000	
Sorre	1913	4.000 a 6.000	
Coupul J.	1920	4.246	[illegible]
Combarnous	1920	4.[illegible]	
Rios	1920	4.109	[illegible]
Mitra d'Urgell	1920	4.238	
Enciol. Espasa	1927	5.231	
Coupul J.	1930	3.807	[illegible]
Album Manzolla	1930	6.[illegible]	
Mitra d'Urgell	1930	4.042	
Moreno	1930	4.142	(pensi [illegible] de l'Hospitalet d'Andorra)
Combarnous	1932	4.[illegible]	(bé [illegible]
			[illegible]
Coupul J.	1936	4.221	[illegible]
Toureng	1939	5.[illegible]	
Mitra d'Urgell	1940	4.101	
Síndic	1942	5.[illegible]	
A.A.AA.	1943	7.[illegible]	
Cens oficial	1944	5.[illegible]	

Font: Lluelles, X.J. "La transformació [illegible]" [illegible]

PER NACIONALITATS

	ANY	HABITANTS AL 31/12	% CREIX	Nats	And	Andorrans	Espanyols	Francesos	Portuguesos	Britànics	Altres
1944	1944	5.291	-								
	1947	5.385	1.8%								
	1948	5.683	5.5%								
	1949	5.962	4.9%								
1950	1950	6.176	3.6%								
	1951	6.210	0.5%								
	1952	5.866	-5.5%								
	1953	5.691	-4.7%								
	1954	5.603	-1.6%								
1955	1955	5.749	2.6%								
	1956	6.021	4.7%								
	1957	6.424	6.6%								
	1958	7.103	10.6%								
	1959	7.225	1.7%								
1960	1960	8.342	15.4%								
	1961	8.959	7.3%								
	1962	10.217	14.0%								
	1963	11.259	10.1%								
	1964	12.199	7.4%								
1965	1965	13.627	11.7%								
	1966	14.280	4.7%								
	1967	15.563	8.2%								
	1968	17.226	10.6%								
	1969	18.233	5.8%								
1970	1970	19.345	6.1%								
	1971	20.650	6.7%								
	1972	21.425	3.7%								
	1973	23.072	7.7%								
	1974	24.807	7.5%								
1975	1975	26.558	7.1%								
	1976	26.880	1.2%								
	1977	28.082	4.5%								
	1978	30.066	7.1%								
	1979	31.274	4.0%								
1980	1980	35.460	13.4%	5.826	5.679	20.275	1.474	1.292	416	1.298	
	1981	37.825	6.7%	5.391	5.239	22.165	2.412	1.334	439	1.347	
	1982	39.340	4.0%	5.812	5.654	23.423	2.619	1.523	447	1.430	
	1983	41.627	5.8%	5.949	5.778	24.938	2.703	1.465	511	1.453	
	1984	42.712	2.6%	6.011	5.838	24.647	2.828	1.519	519	1.720	
1985	1985	44.596	4.4%	6.507	6.329	24.939	3.130	1.771	648	1.852	
	1986	46.976	5.3%	6.363	6.181	26.186	3.432	1.844	726	2.124	
	1987	48.930	4.2%	6.287	6.104	26.814	3.615	1.880	827	2.378	
	1988	50.528	3.3%	6.175	5.977	27.513	3.855	1.921	888	2.476	
	1989	50.826	0.6%	5.747	5.558	28.064	3.979	1.956	978	3.081	
1990	1990	54.507	7.2%	6.015	5.821	27.746	4.130	2.051	1.041	3.724	
	1991	58.048	6.5%	6.253	6.048	28.249	4.256	2.225	1.147	4.171	
1992	1992	61.599	6.1%	6.697	6.480	29.456	4.442	2.453	1.244	4.955	

Font: Bricall, J.M., Estructura [illegible] de Catalunya Andorrana 1976.
i Estadístiques de la Conselleria de Treball i Afers Socials.

Nota: L'any 1979 hi ha un canvi en la recollida de dades de població.
Els anys 1990 i 1991 es recollien les dades de treballadors al Pirineu Català
permès de residència.

EVOLUCIO GENERAL DE LA POBLACIO

ANY	HABITANTS	CREIXEMENT	NAIXEMENTS	DEFUNCIONS	CREIXEMENT NAT. DIF	COEFICIENT TAXA	SALDO MIGRATORI
1950	5.866						
1951	5.691	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1952	5.803	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1953	6.189	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1954	6.221	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1955	6.424	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1956	6.103	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1957	6.139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1958	6.218	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1959	6.229	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1960	6.282	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1961	6.359	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1962	10.217	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1963	11.366	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1964	12.139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1965	13.423	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1966	14.183	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1967	15.360	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1968	17.416	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1969	18.222	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1970	19.545	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1971	20.250	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1972	21.425	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1973	22.671	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1974	24.807	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1975	26.858	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1976	28.682	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1977	28.382	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1978	30.085	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1979	31.074	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1980	35.460	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1981	37.825	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1982	39.940	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1983	41.627	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1984	42.712	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1985	44.536	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1986	46.376	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1987	48.970	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1988	50.528	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1989	50.826	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1990	54.807	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1991	59.048	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1992	61.599	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Font: Bricall, J.M., Estructura i perspectives de l'economia catalana 1.9
i Estadistiques de la Conselleria de Treb.. i Seguretat Social

Nota: L'any 1976 hi ha un canvi en el procediment de dada de població.
L'any 1989 no es tenen estadístiques de residents als treballadors
immigrats. Els anys 1990 i 199. es recomana la situació pels treballadors
al Principat sense permis de residencia.

5

(31.12.92)

EVOLUCIO GENERAL DE LA POBLACIO

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	Creixement 1980-1992
Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70,71%
% creixement		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Andorrans	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	68,02%
% s/total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Espanyols	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	40,12%
% s/total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Francesos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	88,44%
% s/total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Portuguesos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	527,56%
% s/total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Nats a Andorra (*)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	87,92%
% s/total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Altres nacionalitats	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	139,95%
% s/ total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Andorrans :														
nats a Andorra	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	78,15%
% s/total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Nats estrangers	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	168,12%
% s/total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
% creixement		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

POBLACIO PER EDATS I SEXES
31.12.1992

	HOMES	DONES	TOTAL
0 - 4	1.668	1.578	3.246
5 - 9	1.637	1.495	3.132
10 - 14	1.884	1.775	3.659
15 - 19	2.123	1.970	4.093
20 - 24	3.039	2.780	5.819
25 - 29	3.824	3.325	7.149
30 - 34	3.681	3.060	6.741
35 - 39	2.990	2.430	5.420
40 - 44	2.548	2.051	4.599
45 - 49	2.121	1.713	3.834
50 - 54	1.437	1.331	2.768
55 - 59	1.432	1.248	2.680
60 - 64	1.297	1.159	2.456
65 - 69	1.070	989	2.059
70 - 74	809	791	1.600
75 - 79	528	517	1.045
80 - 84	339	336	675
+ 85	199	322	521
TOTAL	32.725	28.864	61.589

Estadístiques de població (1994)

Per temps de residència i edat

Temps Residència / edat	-10 anys	11 a 20	21 a 30	31 a 40	41 a 50	51 a 60	60 + de anys	Total
Menys de 5 anys	502	287	973	57[illegible]	338	[illegible]51	253	3 252
de 5 a 10 anys	279	223	486	380	238	149	209	2 186
de 11 a 15 anys	9	324	284	234	184	110	133	1 217
de 16 a 20 anys		461	179	107	153	68	76	1 045
de 21 a 25 anys		19	815	39	93	85	50	1 047
de 26 a 30 anys			525	29	83	47	50	714
Més de 30 anys			[illegible]7	192	374	363	984	2 190
Andorrana	488	374	3 2[illegible]5	[illegible]564	1 [illegible]33	949	[illegible]755	11 661

Estadístiques de població (1994)

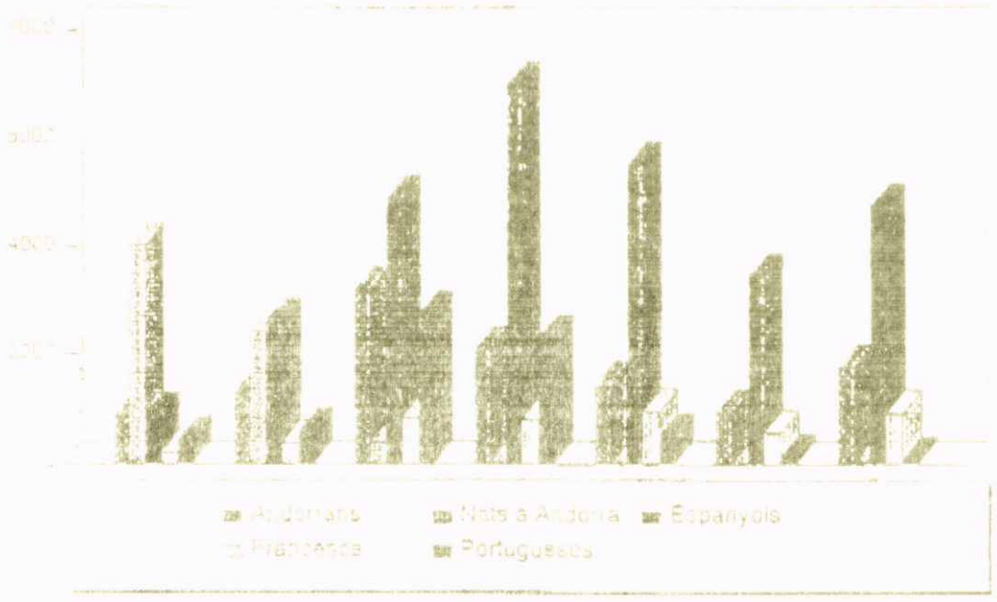
Per temps de residència i edat

Temps Residència / edat	-10 anys	11 a 20	21 a 30	31 a 40	41 a 50	51 a 60	+ de 60 anys	Total
Menys de 5 anys	2 784	510	116	8				3 417
de 6 a 10 anys	1 222	475	56	5			1	1 760
de 11 a 15 anys	22	697	26	2				847
de 16 a 20 anys		553	23	1				577
de 21 a 25 anys		12	164					164
de 26 a 30 anys			32					32
Més de 30 anys				7	1		4	13
Nats a Andorra	4 028	2 247	427	23	1	0	5	6 731
Menys de 5 anys	862	1 045	3 204	3 165	1 883	1 083	1 257	12 299
de 6 a 10 anys	226	748	818	2 148	1 230	842	844	6 823
de 11 a 15 anys	3	592	360	559	840	426	452	3 652
de 16 a 20 anys		278	236	317	515	295	399	2 133
de 21 a 25 anys		3	249	179	527	314	378	1 608
de 26 a 30 anys			69	123	284	340	415	1 239
Més de 30 anys			1	87	167	374	1 018	1 547
Espanyola	1 091	2 666	4 926	6 578	5 426	3 477	4 763	29 201
Menys de 5 anys	148	181	515	466	434	241	255	2 369
de 6 a 10 anys	56	43	152	222	234	147	239	1 193
de 11 a 15 anys	4	68	48	76	117	69	171	540
de 16 a 20 anys		24	82	41	60	41	92	290
de 21 a 25 anys		1	33	22	46	52	110	264
de 26 a 30 anys			4	9	19	19	35	86
Més de 30 anys				4	6	12	37	59
Francesa	187	317	869	840	976	581	941	4 801
Menys de 5 anys	402	407	2 614	1 862	337	77	25	5 524
de 6 a 10 anys	44	151	123	491	117	29	28	983
de 11 a 15 anys	2	58	12	147	53	12	15	297
de 16 a 20 anys		6	5	24	25	13	9	82
de 21 a 25 anys				2	1	4	4	11
de 26 a 30 anys					3		1	4
Més de 30 anys					1		2	3
Portuguesa	448	622	2 754	2 526	537	135	84	6 904

Estadístiques de població

Per edat

	-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60	+60	Total
Andorrans	553	1,214	1,519	2,095	2,416	943	1,755	11,651
Nats a Andorra	1,203	2,443	402	24	1	0	5	6,910
Espanyols	991	2,315	4,922	7,447	5,933	3,477	4,763	29,201
Francesos	187	1,207	808	1,814	970	581	941	4,801
Portuguesos	485	1,623	2,775	5,225	1,537	135	184	6,904
	6,419	8,392	12,171	12,236	8,475	5,136	7,548	59,467



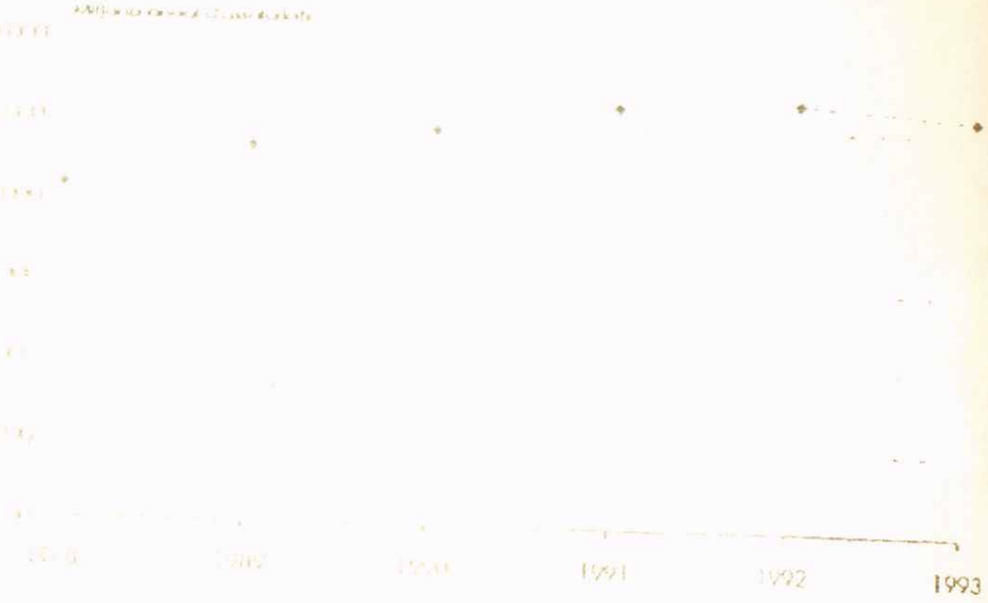
Dades a 31 de març de 1994

Doc Rec. de: 67979
01/10 '94 20:20
01/10/94 19:01 Pg: 19
67979 BARTUMEU CASSANY
19

Nombre d'assalariats - Caixa Andorrana de Seguretat Social

Assalariats			
Gener	26 758	26 469	-1,1%
Febrer	27 274	26 629	-2,4%
Març	27 082	26 845	-0,9%
Abril	27 621	26 351	-4,6%
Maig	27 422	26 366	-3,9%
Juny	26 053	25 498	-2,1%
Juliol	25 285	25 150	-0,5%
Agost	25 [illegible]	24 [illegible]	-0,9%
Setembre	27 [illegible]	28 865	3,1%
Octubre	26 [illegible]	27 [illegible]	3,1%
Novembre	26 [illegible]	27 265	1,1%
Desembre	26 [illegible]	26 [illegible]	-2,1%

Font: Caixa Andorrana de Seguretat Social



Els assalariats considerats corresponen als cotitzants de la caixa de treballadors assalariats i s'han obtingut sobre totes les dades mensuals disponibles, sense cap ajustament per estacionalitat.

© Col·legi Oficial d'Economistes d'Andorra 1994

Reproducció autoritzada per a fins no comercials, citant-ne l'autor i la font

Diari d'Andorra
4
DIMARTS, 18 DE GENER DE 1994
POLÍTICA

ELECCIONS AL CONSELL DE RESIDENTS ESPANYOLS 1994

PARROQUIA	CENS ANUAL																							
ANDORRA																								
ESCALDES																								
ENCAMP																								
LA MASSANA																								
SANT JULIA																								
TOTALS																								

Només un 20% dels censats va anar a votar

ANDORRA

GOVERN

PILAR ESCALER PENELLA

Gabinet Jurídic

C/. Prat de la Creu, 62-64
Tel. 29 3 45 - Fax 22 8 82
Ext. 209-210

Andorra la Vella
Principat d'Andorra

4393 3P
Lepart ?. Mg

402 4402
Kanetek.

GOVERN
ANDORRA
GABINET JURÍDIC

Sr. Jordi SOLE TURA

Andorra la Vella, 22 d'octubre de 1993

Distingit Senyor,

D'acord amb la nostra conversa telefònica mantinguda el proppassat 21 d'octubre, em plau trameter-li un exemplar de la Constitució del Principat d'Andorra i un altre de la Llei Qualificada de Nacionalitat, a fi de que pugui estudiar la possibilitat d'emetre un dictamen sobre la probable inconstitucionalitat d'aquesta Llei, i un altre sobre els problemes que puguin sorgir en seva aplicació.

Respecte al darrer d'aquests dictàmens, ens preocupen especialment les dificultats que pot comportar la renuncia de la nacionalitat d'origen:

- Abans d'adquirir la nacionalitat andorrana.

- Dels nascuts a Andorra que tot i tenint dret a una nacionalitat per filiació, no han exercitat mai aquest dret.

- Dels menors d'edat.

El saluda atentament,

Pilar ESCALER i PENELLA

Av. Santa Coloma 91
Andorra la Vella
Tel. 61 400

Butlletí Oficial del **Principat d'Andorra**

Andorra la Vella, 4 de maig de 1993
Número 24 any 5

Índex

447 **Sumari**

448 **Constitució del Principat d'Andorra**

Sumari

Constitució del Principat d'Andorra

Constitució del Principat d'Andorra, de 28 d'abril de 1993.
Any 5 / núm. 24 / pàg. 448

Constitució del Principat d'Andorra

Constitució del Principat d'Andorra

Preàmbul

El Poble Andorrà, amb plena llibertat i independència, i en exercici de la seva pròpia sobirania,

Conscient de la necessitat d'adequar l'estructura institucional d'Andorra a les noves circumstàncies que comporta l'evolució de l'entorn geogràfic, històric i sòcio-cultural en què es troba situada, així com de la necessitat de regular les relacions que, dins d'aquest nou marc jurídic, hauran de tenir unes institucions que troben els seus orígens en els Pareatges,

Convençut de la conveniència de dotar-se de tots els mecanismes que han de permetre tenir la seguretat jurídica en l'exercici d'uns drets fonamentals de la persona que, si bé sempre han estat presents i respectats en el tarannà de la societat andorrana, no es beneficiaven d'una regulació material concreta,

Decidit a perseverar en la promoció de valors com la llibertat, la justícia, la democràcia i el progrés social, i a mantenir i enfortir unes relacions harmòniques d'Andorra amb la resta del món, i especialment amb els països veïns, sobre la base del respecte mutu, de la convivència i de la pau,

Amb la voluntat d'aportar a totes les causes comunes de la humanitat la seva col.laboració i el seu esforç, i molt especialment quan es tracti de preservar la integritat de la Terra i de garantir per a les generacions futures un medi de vida adequat,

Amb el desig que el lema "virtus, unita, fortior", que ha presidit el camí pacífic d'Andorra a través de més de set-cents anys d'història, segueixi essent una divisa plenament vigent i orienti sempre les actuacions dels andorrans,

Aprova sobiranament la present Constitució.

Títol I
De la sobirania d'Andorra

Article 1

1. Andorra és un Estat independent, de Dret, Democràtic i Social. La seva denominació oficial és Principat d'Andorra.

2. La Constitució proclama com a principis inspiradors de l'acció de l'Estat andorrà el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona.

3. La sobirania resideix en el Poble Andorrà, que l'exerceix per mitjà de les diferents classes de participació i de les institucions que estableix aquesta Constitució.

4. El règim polític d'Andorra és el Coprincipat parlamentari.

5. Andorra està integrada per les Parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.

Article 2

1. La llengua oficial de l'Estat és el català.

2. L'himne nacional, la bandera i l'escut d'Andorra són els tradicionals.

3. Andorra la Vella és la capital de l'Estat.

Article 3

1. La present Constitució, que és la norma suprema de l'ordenament jurídic, vincula tots els poders públics i els ciutadans.

2. La Constitució garanteix els principis de legalitat, de jerarquia, de publicitat de les normes jurídiques, de no retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals o que comportin un efecte o estableixin una sanció desfavorables, de seguretat jurídica, de responsabilitat dels poders públics i d'interdicció de tota arbitrarietat.

3. Andorra incorpora al seu ordenament els principis de dret internacional públic universalment reconeguts.

4. Els tractats i acords internacionals s'integren en l'ordenament jurídic a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, i no poden ésser modificats o derogats per les lleis.

Títol II
Dels drets i llibertats

Capítol I. Principis generals

Article 4

La Constitució reconeix que la dignitat humana és intangible i, en conseqüència, garanteix els drets inviolables i imprescriptibles de la persona, els quals constitueixen el fonament de l'ordre polític, la pau social i la justícia.

Article 5

La Declaració Universal dels Drets Humans és vigent a Andorra.

Article 6

1. Totes les persones són iguals davant la llei. Ningú no pot ésser discriminat per raó de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió, o qualsevol altra condició personal o social.

2. Els poders públics han de crear les condicions per tal que la igualtat i la llibertat dels individus siguin reals i efectives.

Capítol II. De la nacionalitat andorrana

Article 7

1. La condició de nacional andorrà, així com les seves conseqüències jurídiques, s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que es reguli en Llei Qualificada.

2. L'adquisició o el manteniment d'una nacionalitat diferent de l'andorrana implicarà la pèrdua d'aquesta en els termes i terminis fixats per la llei.

Capítol III. Dels drets fonamentals de la persona i de les llibertats públiques

Article 8

1. La Constitució reconeix el dret a la vida i la protegeix plenament en les seves diferents fases.

2. Tota persona té dret a la integritat física i moral. Ningú no pot ésser sotmès

a tortures o a penes i tractes cruels, inhumans o degradants.

3. Es prohibeix la pena de mort.

Article 9

1. Totes les persones tenen dret a la llibertat i a la seguretat i només en poden ésser privades per les causes i d'acord amb els procediments establerts a la Constitució i les lleis.

2. La detenció governativa no pot durar més del temps necessari per dur a terme les indagacions tendents a l'esclariment del cas i mai no pot excedir de quaranta-vuit hores sense que el detingut sigui posat a disposició de l'autoritat judicial.

3. La llei establirà un procediment perquè tot detingut pugui acudir a un òrgan judicial, a fi que aquest es pronunciï sobre la legalitat de la seva detenció. Així mateix, crearà el procediment per restablir els drets fonamentals lesionats de tota persona privada de llibertat.

4. Ningú no pot ésser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa.

Article 10

1. Es reconeix el dret a la jurisdicció, a obtenir d'aquesta una decisió fonamentada en Dret, i a un procés degut, substanciat per un tribunal imparcial predeterminat per la llei.

2. Es garanteix a tothom el dret a la defensa i a l'assistència tècnica d'un lletrat, a un judici de durada raonable, a la presumpció d'innocència, a ésser informat de l'acusació, a no confessar-se culpable, a no declarar en contra d'ell mateix i, en els processos penals, al recurs.

3. La llei regularà els supòsits en què, per garantir el principi d'igualtat, la justícia ha d'ésser gratuïta.

Article 11

1. La Constitució garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte, i ningú no pot ésser obligat a declarar o a manifestar-se sobre la seva ideologia, religió o creences.

2. La llibertat de manifestar la pròpia religió o les pròpies creences és sotmesa únicament a les limitacions establertes per la llei que siguin necessàries per protegir la seguretat, l'ordre, la salut o la moral públiques o els drets i les llibertats fonamentals de les altres persones.

3. La Constitució garanteix a l'Església Catòlica l'exercici lliure i públic de les seves activitats i el manteniment de les relacions de col.laboració especial amb l'Estat d'acord amb la tradició andorrana.

La Constitució reconeix a les entitats de l'Església Catòlica que tenen personalitat jurídica d'acord amb les seves pròpies normes la plena capacitat jurídica dins de l'àmbit de l'ordenament general andorrà.

Article 12

Es reconeixen les llibertats d'expressió, de comunicació i d'informació. La llei regularà el dret de rèplica, el dret de rectificació i el secret professional. Queda prohibida la censura prèvia o qualsevol altre mitjà de control ideològic per part dels poders públics.

Article 13

1. La llei regularà la condició civil de les persones i les formes de matrimoni. Es reconeixen els efectes civils del matrimoni canònic.

2. Els poders públics promouran una política de protecció de la família, element bàsic de la societat.

3. Els cònjuges tenen els mateixos drets i obligacions. Els fills són iguals davant de la llei, amb independència de la seva filiació.

Article 14

Es garanteix el dret a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge. Tothom té dret a ésser protegit per les lleis contra les intromissions il.legítimes en la seva vida privada i familiar.

Article 15

Es garanteix la inviolabilitat del domicili, al qual no es pot entrar sense el consentiment del titular o sense manament judicial, excepte en el cas de delicte flagrant. Es garanteix igualment el secret de les comunicacions, llevat el cas de manament judicial motivat.

Article 16

Es reconeixen els drets de reunió i de manifestació pacífiques amb finalitats lícites. L'exercici del dret de manifestació requereix la comunicació prèvia a l'autoritat i no pot impedir la lliure circulació de persones i béns.

Article 17

Es reconeix el dret d'associació per a la consecució de fins lícits. La llei establirà, a efectes de publicitat, un Registre de les associacions que es constitueixin.

Article 18

Es reconeix el dret de creació i funcionament d'organitzacions empresarials, professionals i sindicals. Sense perjudici de la seva vinculació amb organismes internacionals, aquestes organitzacions han d'ésser d'àmbit andorrà, disposar d'autonomia pròpia sense dependències orgàniques estrangeres i funcionar democràticament.

Article 19

Els treballadors i els empresaris tenen dret a la defensa dels seus interessos econòmics i socials. La llei regularà les condicions d'exercici d'aquest dret per garantir el funcionament dels serveis essencials de la comunitat.

Article 20

1. Tota persona té dret a l'educació, la qual s'ha d'orientar vers el desenvolupament ple de la personalitat humana i de la dignitat, tot enfortint el respecte a la llibertat i als drets fonamentals.

2. Es reconeix la llibertat d'ensenyament i de creació de centres docents.

3. Els pares tenen dret a escollir el tipus d'educació que hagin de rebre els seus fills. Igualment, tenen dret a una educació moral o religiosa per a llurs fills d'acord amb les conviccions pròpies.

Article 21

1. Tothom té dret a circular lliurement pel territori nacional, i a entrar i sortir del país d'acord amb les lleis.

2. Els nacionals i els estrangers legalment residents tenen dret a fixar lliurement la seva residència dins Andorra.

Article 22

La no renovació de la condició de resident o l'expulsió de la persona legalment resident només es podrà acordar per les causes i segons els termes previstos en la llei, en virtut de resolució judicial ferma,

si la persona interessada exerceix el dret a la jurisdicció.

Article 23

Tothom amb interès directe té dret a dirigir peticions als poders públics en la forma i amb els efectes previstos per la llei.

Capítol IV. Dels drets polítics dels andorrans

Article 24

Tots els andorrans majors d'edat, en ple ús dels seus drets, gaudeixen del dret de sufragi.

Article 25

Tots els andorrans tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que determinin les lleis. L'exercici de càrrecs institucionals queda reservat als andorrans, excepte en el que prevegin aquesta Constitució o els tractats internacionals.

Article 26

Es reconeix als andorrans el dret de lliure creació de partits polítics. El seu funcionament i organització han d'ésser democràtics i les seves actuacions, conformes a la llei. La suspensió de les seves activitats i la seva dissolució hauran de ser efectuades pels òrgans judicials.

Capítol V. Dels drets i principis econòmics, socials i culturals

Article 27

1. Es reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència, sense altres limitacions que les derivades de la funció social de la propietat.

2. Ningú no pot ésser privat dels seus béns o drets, si no és per causa justificada d'interès públic, mitjançant la justa indemnització i d'acord amb el procediment establert per la llei.

Article 28

Es reconeix la llibertat d'empresa en el marc de l'economia de mercat i conforme a les lleis.

Article 29

Tota persona té dret al treball, a la promoció per mitjà del treball, a una remuneració que garanteixi al treballador i a la seva família una existència conforme a la dignitat humana, així com a la limitació raonable de la jornada laboral, al repòs setmanal i a les vacances pagades.

Article 30

Es reconeix el dret a la protecció de la salut i a rebre prestacions per atendre altres necessitats personals. Amb aquestes finalitats, l'Estat garantirà un sistema de Seguretat Social.

Article 31

És funció de l'Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en l'atmosfera, l'aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones.

Article 32

L'Estat pot intervenir en l'ordenació del sistema econòmic, mercantil, laboral i financer per fer possible, en el marc de l'economia de mercat, el desenvolupament equilibrat de la societat i el benestar general.

Article 33

Els poders públics han de promoure les condicions necessàries per fer efectiu el dret de tothom a gaudir d'un habitatge digne.

Article 34

L'Estat garantirà la conservació, promoció i difusió del patrimoni històric, cultural i artístic d'Andorra.

Article 35

La llei garantirà i els poders públics defensaran els drets dels consumidors i dels usuaris.

Article 36

L'Estat pot crear mitjans de comunicació social. D'acord amb els principis de participació i pluralisme, una llei en regularà l'organització i el control per part del Consell General.

Capítol VI. Dels deures dels andorrans i dels estrangers

Article 37

Totes les persones físiques i jurídiques contribuiran a les despeses públiques segons la seva capacitat econòmica, mitjançant un sistema fiscal just, establert per la llei i fonamentat en els principis de generalitat i de distribució equitativa de les càrregues fiscals.

Article 38

L'Estat podrà crear per llei formes de servei cívic per al compliment de finalitats d'interès general.

Capítol VII. De les garanties dels drets i llibertats

Article 39

1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV del present Títol vinculen immediatament els poders públics a títol de dret directament aplicable. El seu contingut no pot ésser limitat per la llei i és protegit pels Tribunals.

2. Els estrangers legalment residents a Andorra poden exercir lliurement els drets i les llibertats del capítol III d'aquest Títol.

3. Els drets del capítol V conformen la legislació i l'acció dels poders públics, però només poden ésser invocats en els termes fixats per l'ordenament jurídic.

Article 40

La regulació de l'exercici dels drets reconeguts en aquest Títol només es pot dur a terme per llei. Els drets dels capítols III i IV s'han de regular mitjançant lleis qualificades.

Article 41

1. Els drets i llibertats reconeguts en els capítols III i IV són tutelats pels tribunals ordinaris per mitjà d'un procediment urgent i preferent regulat per la llei, que, en qualsevol cas, se substanciarà en dues instàncies.

2. La llei crearà un procediment excepcional d'empara davant el Tribunal Constitucional contra els actes dels poders públics que violin el contingut essencial dels drets esmentats en l'apartat anterior, llevat el supòsit previst a l'article 22.

Article 42

1. Una Llei Qualificada regularà els estats d'alarma i d'emergència. El primer podrà ser declarat pel Govern en casos de catàstrofes naturals, per un termini de quinze dies i amb notificació al Consell General. El segon també serà declarat pel Govern per un termini de trenta dies en els supòsits d'interrupció del funciona-

ment normal de la convivència democràtica i requerirà l'autorització prèvia del Consell General. Tota pròrroga d'aquests estats requereix necessàriament l'aprovació del Consell General.

2. Durant l'estat d'alarma es pot limitar l'exercici dels drets reconeguts en els articles 21 i 27. Durant l'estat d'emergència poden ésser suspesos els drets recollits en els articles 9.2, 12, 15, 16, 19 i 21. L'aplicació d'aquesta suspensió als drets continguts en els articles 9.2 i 15 s'ha de dur a terme sempre sota control judicial i sense perjudici del procediment de protecció establert a l'article 9.3.

Títol III
Dels Coprínceps

Article 43

1. D'acord amb la tradició institucional d'Andorra els Coprínceps són, conjuntament i indivisa, el Cap de l'Estat, i n'assumeixen la representació més alta.

2. Els Coprínceps, institució sorgida dels Pareatges i de la seva evolució històrica són, a títol personal i exclusiu, el Bisbe d'Urgell i el President de la República Francesa. Llurs poders són iguals i derivats de la present Constitució. Cadascun d'ells jura o promet exercir les seves funcions d'acord amb la present Constitució.

Article 44

1. Els Coprínceps són símbol i garantia de la permanència i continuïtat d'Andorra, així com de la seva independència i del manteniment de l'esperit paritari en les tradicionals relacions d'equilibri amb els Estats veïns. Manifesten el consentiment de l'Estat andorrà a obligar-se internacionalment, d'acord amb la Constitució.

2. Els Coprínceps arbitren i moderen el funcionament dels poders públics i de les institucions, i a iniciativa ja sigui de cadascú d'ells, ja sigui del Síndic General o del Cap de Govern, són informats regularment dels afers de l'Estat.

3. Llevat dels casos previstos en la present Constitució, els Coprínceps no estan subjectes a responsabilitat. Dels actes dels Coprínceps se'n fan responsables qui els contrasignen.

Article 45

1. Els Coprínceps, amb la contrasignatura del Cap de Govern o, en el seu cas, del Síndic General, que n'assumeixen la responsabilitat política:

a) Convoquen les eleccions generals d'acord amb la Constitució.
b) Convoquen referèndum d'acord amb els articles 76 i 106 de la Constitució.
c) Nomenen el Cap de Govern segons el procediment previst en la Constitució.
d) Signen el decret de dissolució del Consell General segons el procediment de l'article 71 de la Constitució.
e) Acrediten els representants diplomàtics d'Andorra a l'estranger, i els representants estrangers a Andorra s'acrediten davant de cadascun d'ells.
f) Nomenen els titulars de les altres institucions de l'Estat d'acord amb la Constitució i les lleis.
g) Sancionen i promulguen les lleis segons l'article 63 de la present Constitució.
h) Manifesten el consentiment de l'Estat per a obligar-se per mitjà dels tractats internacionals, en els termes previstos en el capítol III del Títol IV de la Constitució.
i) Realitzen els altres actes que expressament els atribueix la Constitució.

2. Les disposicions previstes en els apartats g) i h) d'aquest article han d'ésser presentades simultàniament a un i altre Copríncep que han de sancionar-les i promulgar-les o manifestar el consentiment de l'Estat segons el cas, i n'han d'ordenar la publicació no abans de vuit dies i no més tard de quinze.

En aquest període els Coprínceps, conjuntament o separadament, poden adreçar-se al Tribunal Constitucional amb missatge raonat a fi que aquest es pronunciï sobre la seva constitucionalitat. Si la resolució fos positiva l'acte pot ésser sancionat amb la signatura d'almenys d'un dels Coprínceps.

3. Quan concorrin circumstàncies que impedeixin per part d'un dels Coprínceps la formalització dels actes enumerats en l'apartat 1 del present article dins dels terminis constitucionalment previstos, el seu representant ho ha de notificar al Síndic General o, en el seu cas, al Cap de Govern. En aquest supòsit, els actes, normes o decisions afectats entraran en vigor transcorreguts els dits terminis amb la signatura de l'altre Copríncep i la contrasignatura del Cap de Govern o, en el seu cas, del Síndic General.

Article 46

1. Són actes de lliure decisió dels Coprínceps:

a) L'exercici conjunt de la prerrogativa de gràcia.
b) La creació i l'estructuració dels serveis que considerin necessaris per a la realització de les seves funcions institucionals, el nomenament dels seus titulars i el seu acreditament a tots els efectes.
c) La designació dels membres del Consell Superior de la Justícia, d'acord amb l'article 89.2 de la Constitució.
d) El nomenament dels membres del Tribunal Constitucional, d'acord amb l'article 96.1 de la Constitució.
e) El requeriment de dictamen previ d'inconstitucionalitat de les lleis.
f) El requeriment del dictamen sobre la inconstitucionalitat dels tractats internacionals, previ a la seva ratificació.
g) La interposició de conflicte davant del Tribunal Constitucional per raó d'afectació de llurs funcions institucionals, en els termes dels articles 98 i 103 de la Constitució.
h) L'atorgament de l'acord per a l'adopció del text d'un tractat internacional, d'acord amb les previsions de l'article 66, abans de la seva aprovació en seu parlamentària.

2. Els actes derivats dels articles 45 i 46 són exercits personalment pels Coprínceps, llevat de les facultats previstes a les lletres e), f), g) i h) del present article, que poden ésser realitzats per delegació expressa.

Article 47

El Pressupost General del Principat ha d'assignar una quantitat igual a cada Copríncep, destinada al funcionament de llurs serveis, de la qual poden disposar lliurement.

Article 48

Cada Copríncep nomena un representant personal a Andorra.

Article 49

En cas de vacança d'un dels Coprínceps la present Constitució reconeix la validesa dels mecanismes de substitució previstos en els seus ordenaments respectius, a fi que no s'interrompi el funcionament normal de les institucions andorranes.

Títol IV
Del Consell General

Article 50

El Consell General, que expressa la representació mixta i paritària de la població nacional i de les set Parròquies, representa el poble andorrà, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de l'Estat i impulsa i controla l'acció política del Govern.

Capítol I. De l'organització del Consell General

Article 51

1. Els Consellers són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, per un termini de quatre anys. El mandat dels Consellers acaba quatre anys després de la seva elecció o el dia de la dissolució del Consell General.

2. Les eleccions s'han de celebrar entre els trenta i quaranta dies següents a la finalització del mandat dels Consellers.

3. Són electors i elegibles tots els andorrans que estiguin en el ple ús dels seus drets polítics.

4. Una Llei Qualificada regularà el règim electoral i preveurà les causes d'inelegibilitat i d'incompatibilitat dels Consellers.

Article 52

El Consell General es compon d'un mínim de vint-i-vuit i d'un màxim de quaranta-dos Consellers Generals, la meitat dels quals s'elegeixen a raó d'un nombre igual per cadascuna de les set Parròquies i l'altra meitat s'elegeix per circumscripció nacional.

Article 53

1. Els membres del Consell General tenen la mateixa naturalesa representativa, són iguals en drets i en deures i no estan sotmesos a mandat imperatiu de cap classe. Llur vot és personal i indelegable.

2. Els Consellers són irresponsables pels vots i opinions manifestats en l'exercici de les seves funcions.

3. Al llarg del seu mandat els Consellers no podran ésser detinguts ni retinguts, excepte en el cas de delicte flagrant. Llevat d'aquest cas, correspon decidir sobre la seva detenció, inculpació i processament al Tribunal de Corts en Ple i el seu judici, al Tribunal Superior.

Article 54

El Consell General aprova i modifica el seu Reglament per majoria absoluta de la Cambra, fixa el seu pressupost i regula l'estatut del personal al seu servei.

Article 55

1. La Sindicatura és l'òrgan rector del Consell General.

2. El Consell General es reuneix en sessió constitutiva quinze dies després de la proclamació dels resultats electorals i elegeix, en la mateixa sessió, el Síndic General, el Subsíndic General i, si és el cas, els altres membres que reglamentàriament puguin compondre la Sindicatura.

3. El Síndic i Subsíndic Generals no poden exercir el seu càrrec més de dos mandats consecutius complets.

Article 56

1. El Consell General es reuneix en sessions tradicionals, ordinàries i extraordinàries, convocades segons el que es prevegi en el Reglament. Hi haurà dos períodes ordinaris de sessions al llarg de l'any, determinats pel Reglament. Les sessions del Consell General són públiques, llevat que el mateix Consell General acordi el contrari per majoria absoluta dels seus membres.

2. El Consell General funciona en Ple i en comissions. El Reglament preveurà la formació de les comissions legislatives de manera que siguin representatives de la composició de la Cambra.

3. El Consell General nomena una Comissió Permanent per vetllar pels poders de la Cambra quan aquesta estigui dissolta o en el període entre sessions. La Comissió Permanent, sota la presidència del Síndic General, estarà formada de manera que respecti la composició paritària de la Cambra.

4. Els Consellers poden agrupar-se en grups parlamentaris. El Reglament preveurà els drets i deures dels Consellers i dels grups parlamentaris, així com l'estatut dels Consellers no adscrits.

Article 57

1. Per prendre vàlidament acords, el Consell General ha de trobar-se reunit, amb l'assistència mínima de la meitat dels Consellers.

2. Els acords són vàlids quan han estat aprovats per la majoria simple dels Consellers presents, sense perjudici de les majories especials determinades per la Constitució.

3. Les lleis qualificades previstes per la Constitució requereixen per a la seva aprovació el vot final favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell General, llevat de les Lleis Qualificades electoral i de referèndum, de competències comunals, i de transferències als Comuns, que requereixen per a la seva aprovació el vot final favorable de la majoria absoluta dels Consellers elegits en circumscripció parroquial i de la majoria absoluta dels Consellers elegits en circumscripció nacional.

Capítol II. Del procediment legislatiu

Article 58

1. La iniciativa legislativa correspon al Consell General i al Govern.

2. Tres Comuns conjuntament o una desena part del cens electoral nacional poden presentar proposicions de llei al Consell General.

3. Els projectes i les proposicions de llei han d'ésser examinats pel Ple i per les comissions en la forma que determini el Reglament.

Article 59

Mitjançant llei, el Consell General pot delegar l'exercici de la funció legislativa al Govern, la qual en cap cas podrà ésser subdelegada. La llei de delegació determina la matèria delegada, els principis i les directrius sota els quals haurà de regir-se el corresponent decret legislatiu del Govern, així com el termini dintre del qual haurà d'ésser exercida. L'autoritza-

ció preveurà les formes parlamentàries de control de la legislació delegada.

Article 60

1. En casos d'extrema urgència i necessitat, el Govern podrà presentar al Consell General un text articulat perquè sigui aprovat com a llei, en una votació de totalitat, en el termini de quaranta-vuit hores.

2. Les matèries reservades a Llei Qualificada no poden ésser objecte de delegació legislativa ni del procediment previst a l'apartat 1 d'aquest article.

Article 61

1. La iniciativa del projecte de Llei del Pressupost General correspon exclusivament al Govern, que ha de presentar-lo per a l'aprovació parlamentària, com a mínim, dos mesos abans de l'expiració dels pressupostos anteriors.

2. El projecte de Llei del Pressupost General té preferència en la seva tramitació respecte a d'altres qüestions i es tramitarà d'acord amb un procediment propi, regulat en el Reglament.

3. Si la Llei del Pressupost General no és aprovada abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, es considera automàticament prorrogat el pressupost de l'exercici anterior fins a l'aprovació del nou.

4. La Llei del Pressupost General no pot crear tributs.

5. La Comissió de Finances del Consell General revisarà anualment el compliment de l'execució pressupostària.

Article 62

1. Els Consellers i els grups parlamentaris tenen dret d'esmena als projectes i a les proposicions de llei.

2. El Govern podrà sol.licitar que no es debatin aquelles esmenes que comportin increment de despeses o disminució d'ingressos en relació amb els previstos a la Llei del Pressupost General. El Consell General, per majoria absoluta de la Cambra, podrà oposar-se a aquella sol.licitud amb una moció motivada.

Article 63

Aprovada una llei pel Consell General, el Síndic General en donarà compte als Coprínceps perquè, entre els vuit i quinze dies següents, la sancionin, promulguin i n'ordenin la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Capítol III. Dels tractats internacionals

Article 64

1. Els tractats internacionals han d'ésser aprovats pel Consell General per majoria absoluta de la Cambra en els casos següents:

a) Tractats que vinculin l'Estat a una organització internacional.
b) Tractats relatius a la seguretat interior i a la defensa.
c) Tractats relatius al territori d'Andorra.
d) Tractats que afectin els drets fonamentals de la persona regulats al Títol II.
e) Tractats que impliquin la creació de noves obligacions per a la Hisenda Pública.
f) Tractats que creïn o modifiquin disposicions de naturalesa legislativa o que requereixin mesures legislatives per a llur execució.
g) Tractats que versin sobre representació diplomàtica o funcions consulars, sobre cooperació judicial o penitenciària.

2. El Govern informarà el Consell General i els Coprínceps de la conclusió dels altres acords internacionals.

3. Per a la denúncia dels tractats internacionals que afectin les matèries enumerades a l'epígraf 1 també caldrà l'aprovació prèvia de la majoria absoluta de la Cambra.

Article 65

Per als interessos del poble andorrà, del progrés i de la pau internacionals, es podran cedir competències legislatives, executives o judicials sempre que sigui a organitzacions internacionals i per mitjà d'un tractat que ha d'ésser aprovat per una majoria de dues terceres parts dels membres del Consell General.

Article 66

1. Els Coprínceps participen en la negociació dels tractats que afectin les relacions amb els Estats veïns quan versin sobre les matèries enumerades en els apartats b), c) i g) de l'article 64.1.

2. La representació andorrana que tingui per missió negociar els tractats assenyalats en el paràgraf anterior, comprendrà, a més dels membres nomenats pel Govern, un membre nomenat per cada Copríncep.

3. Per a l'adopció del text del tractat caldrà l'acord dels membres nomenats pel Govern i de cadascun dels membres nomenats pels Coprínceps.

Article 67

Els Coprínceps són informats dels altres projectes de tractats i d'acords internacionals i, a petició del Govern, poden ésser associats a la negociació si així ho exigeix l'interès nacional d'Andorra, abans de la seva aprovació en seu parlamentària.

Capítol IV. De les relacions del Consell General amb el Govern

Article 68

1. Després de cada renovació del Consell General, en la primera sessió, que se celebrarà en el termini de vuit dies després de la sessió constitutiva, es procedirà a l'elecció del Cap de Govern.

2. Els candidats han d'ésser presentats per una cinquena part dels membres del Consell General. Cada Conseller només pot avalar una candidatura.

3. Els candidats han de presentar el seu programa i resultarà elegit aquell que, després d'un debat, en una primera votació pública i oral obtingui la majoria absoluta del Consell General.

4. En el cas que fos necessària una segona votació tan sols poden presentar-se els dos candidats que hagin obtingut els millors resultats en la primera votació. Serà proclamat com a Cap de Govern el candidat que obtingui més vots.

5. El Síndic General comunicarà als Coprínceps el resultat de la votació perquè el candidat elegit sigui nomenat Cap de Govern i en contrasignarà el nomenament.

6. S'ha de seguir el mateix procediment en els altres supòsits en què quedi vacant el càrrec de Cap de Govern.

Article 69

1. El Govern respon políticament davant del Consell General de manera solidària.

2. Una cinquena part dels Consellers poden presentar una moció de censura,

per mitjà d'un escrit motivat, contra el Cap de Govern.

3. Un cop fet el debat entre els tres i cinc dies posteriors a la presentació de la moció i en la forma que determini el Reglament, es procedirà a una votació pública i oral. Perquè la moció de censura prosperi, caldrà el vot favorable de la majoria absoluta del Consell General.

4. Si la moció de censura és aprovada, el Cap de Govern cessa. Tot seguit es procedirà segons el que preveu l'article anterior.

5. No es pot presentar cap moció de censura abans que hagin transcorregut sis mesos des de la darrera elecció del Cap de Govern.

6. Els Consellers que hagin presentat una moció de censura no en poden signar cap altra abans que hagi transcorregut un any.

Article 70

1. El Cap de Govern pot plantejar davant del Consell General la qüestió de confiança sobre el seu programa, sobre una declaració de política general o sobre una decisió de transcendència especial.

2. La confiança es considera atorgada quan, en una votació pública i oral, obtingui la majoria simple. En cas de no obtenir aquesta majoria el Cap de Govern ha de presentar la seva dimissió.

Article 71

1. El Cap de Govern, després d'una deliberació amb el Govern, i sota la seva responsabilitat, pot demanar als Coprínceps la dissolució anticipada del Consell General. El decret de dissolució ha de fixar la convocatòria de les eleccions d'acord amb l'article 51.2 de la Constitució.

2. La dissolució no pot efectuar-se si s'està tramitant una moció de censura o s'ha declarat l'estat d'emergència.

3. Cap dissolució no pot efectuar-se abans que hagi transcorregut un any des de les eleccions anteriors.

Títol V
Del Govern

Article 72

1. El Govern es compon del Cap de Govern i dels Ministres, en el nombre que determini la llei.

2. Sota l'autoritat del seu Cap, dirigeix la política nacional i internacional d'Andorra. Dirigeix també l'administració de l'Estat i exerceix la potestat reglamentària.

3. L'Administració pública serveix amb objectivitat l'interès general, i actua d'acord amb els principis de jerarquia, eficàcia, transparència i plena submissió a la Constitució, les lleis i els principis generals de l'ordenament jurídic definits en el Títol I. Tots els seus actes i normes estan sotmesos al control jurisdiccional.

Article 73

El Cap de Govern és nomenat pels Coprínceps, una vegada hagi estat elegit en els termes previstos en la Constitució.

Article 74

El Cap de Govern i els Ministres estan sotmesos al mateix règim jurisdiccional que els Consellers Generals.

Article 75

El Cap de Govern o, si és el cas, el Ministre responsable, contrasigna els actes dels Coprínceps previstos en l'article 45.

Article 76

El Cap de Govern, amb l'acord de la majoria del Consell General, pot demanar als Coprínceps la convocatòria d'un referèndum sobre una qüestió d'ordre polític.

Article 77

El Govern finalitza el seu mandat quan acaba la legislatura, per dimissió, defunció o incapacitació definitiva del Cap de Govern, en prosperar una moció de censura o perdre una qüestió de confiança. En tots els casos, el Govern segueix en funcions fins a la formació del nou Govern.

Article 78

1. El Cap de Govern no pot exercir el seu càrrec més de dos mandats consecutius complets.

2. Els membres del Govern no poden compatibilitzar el seu càrrec amb el de Conseller General i només poden exercir les funcions públiques derivades de la seva pertinença al Govern.

Títol VI
De l'estructura territorial

Article 79

1. Els Comuns, com a òrgans de representació i administració de les Parròquies, són corporacions públiques amb personalitat jurídica i potestat normativa local, sotmesa a la llei, en forma d'ordinacions, reglaments i decrets. Dins l'àmbit de les seves competències, exercides d'acord amb la Constitució, les lleis i la tradició, funcionen sota el principi d'autogovern, reconegut i garantit per la Constitució.

2. Els Comuns expressen els interessos de les Parròquies, aproven i executen el pressupost comunal, fixen i duen a terme les seves polítiques públiques en el seu àmbit territorial i gestionen i administren tots els béns de propietat parroquial, siguin de domini públic comunal o de domini privat o patrimonial.

3. Els seus òrgans de govern són elegits democràticament.

Article 80

1. Dins el marc de l'autonomia administrativa i financera dels Comuns, les seves competències són delimitades mitjançant Llei Qualificada, almenys en les matèries següents:

a) Cens de població.
b) Cens electoral. Participació en la gestió del procés i administració electorals que els correspongui segons la llei.
c) Consultes populars.
d) Comerç, indústria i activitats professionals.
e) Delimitació del territori comunal.
f) Béns propis i de domini públic comunal.
g) Recursos naturals.
h) Cadastre.
i) Urbanisme.
j) Vies públiques.
k) Cultura, esports i activitats socials.
l) Serveis públics comunals.

2. Dins el marc de la potestat tributària de l'Estat, l'esmentada Llei Qualificada determina les facultats econòmiques i fiscals dels Comuns per a l'exercici de les seves competències. Aquestes facultats es referiran, almenys, a l'aprofitament i explotació dels recursos naturals, als tributs tradicionals i a les taxes per serveis comunals, autoritzacions administratives, radicació d'activitats comercials, industrials i professionals i propietat immobiliària.

3. Mitjançant llei es podrà delegar a les Parròquies competències de titularitat estatal.

Article 81

Amb la finalitat d'assegurar la capacitat econòmica dels Comuns, una Llei Qualificada determina les transferències de capital del Pressupost General als Comuns, garantint una partida igual per a totes les Parròquies i una partida variable, proporcional segons la seva població, l'extensió del seu territori i altres indicadors.

Article 82

1. Els litigis sobre interpretació o exercici competencial entre els òrgans generals de l'Estat i els Comuns seran resolts pel Tribunal Constitucional.

2. Els actes dels Comuns tenen caràcter executiu directe pels mitjans establerts per llei. Contra aquests es poden interposar recursos administratius i jurisdiccionals per controlar-ne l'adequació a l'ordenament jurídic.

Article 83

Els Comuns tenen iniciativa legislativa i estan legitimats per interposar recursos d'inconstitucionalitat en els termes previstos en la Constitució.

Article 84

Les lleis tindran en compte els usos i costums per determinar la competència dels Quarts i dels Veïnats, així com les seves relacions amb els Comuns.

Títol VII
De la Justícia

Article 85

1. En nom del poble andorrà la Justícia és administrada exclusivament per jutges independents, inamovibles i, en l'àmbit de les seves funcions jurisdiccionals, sotmesos només a la Constitució i a la llei.

2. L'organització judicial és única. La seva estructura, composició, funcionament i l'estatut jurídic dels seus membres hauran d'ésser regulats per Llei Qualificada. Es prohibeixen les jurisdiccions especials.

Article 86

1. Les normes de competència i procediment aplicables a l'Administració de Justícia estan reservades a la llei.

2. En tot cas, les sentències seran motivades, fonamentades en l'ordenament jurídic i notificades fefaentment.

3. El judici penal és públic, salvades les limitacions previstes per la llei. El seu procediment és preferentment oral. La sentència que posi fi a la primera instància és dictada per un òrgan judicial diferent del que va dirigir la fase d'instrucció, i sempre és susceptible de recurs.

4. La defensa jurisdiccional dels interessos generals pot efectuar-se mitjançant l'acció popular en els supòsits regulats per les lleis processals.

Article 87

La potestat jurisdiccional és exercida pels Batlles, el Tribunal de Batlles, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, així com pels presidents respectius d'aquests tribunals, d'acord amb les lleis.

Article 88

Les sentències, un cop fermes, tenen el valor de cosa jutjada i no poden ésser modificades o anul.lades llevat els casos previstos per la llei o quan excepcionalment el Tribunal Constitucional, mitjançant el procés d'empara corresponent, estimi que han estat dictades amb violació d'algun dret fonamental.

Article 89

1. El Consell Superior de la Justícia com a òrgan de representació, govern i administració de l'organització judicial, vetlla per la independència i el bon funcionament de la Justícia. Tots els seus membres seran de nacionalitat andorrana.

2. El Consell Superior de la Justícia es compon de cinc membres designats entre andorrans majors de vint-i-cinc anys i coneixedors de l'Administració de Justícia, un per cada Copríncep, un pel Síndic General, un pel Cap de Govern i un pels Magistrats i Batlles. El seu mandat és de sis anys i no poden ser reelegits més d'una vegada consecutiva. El Consell Superior de la Justícia és presidit per la persona designada pel Síndic General.

3. El Consell Superior de la Justícia nomena els Batlles i Magistrats, exerceix sobre ells la funció disciplinària i promou les condicions perquè l'Administració de Justícia disposi dels mitjans adients per al seu bon funcionament. Amb aquesta darrera finalitat podrà emetre informes amb motiu de la tramitació de les lleis que afectin la Justícia o per donar compte de la situació d'aquesta.

4. La Llei Qualificada sobre la Justícia regularà les funcions i competències d'aquest Consell Superior.

Article 90

1. Tots els Jutges, independentment de la seva categoria, seran nomenats per a un mandat renovable de sis anys, entre persones titulades en Dret que comptin amb aptitud tècnica per a l'exercici de la funció jurisdiccional.

2. Els Presidents del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior de la Justícia són designats pel Consell Superior de la Justícia. La durada del seu mandat i les condicions d'elegibilitat seran determinades per la Llei Qualificada esmentada a l'article 89.4 de la Constitució.

Article 91

1. El càrrec de Jutge és incompatible amb qualsevol altre càrrec públic i amb l'exercici d'activitats mercantils, industrials o professionals. Els Jutges són remunerats únicament a càrrec dels pressupostos de l'Estat.

2. Durant el seu mandat, cap Jutge no pot ésser amonestat, traslladat, suspès en les seves funcions o separat del seu càr-

rec si no és com a conseqüència de sanció imposada per haver incorregut en responsabilitat penal o disciplinària, mitjançant un procediment regulat per la Llei Qualificada i amb totes les garanties d'audiència i defensa. La mateixa llei regularà també els supòsits de responsabilitat civil del Jutge.

Article 92

D'acord amb les lleis i sense perjudici de les responsabilitats personals dels qui els causin, l'Estat repararà els danys originats per error judicial o pel funcionament anormal de l'Administració de Justícia.

Article 93

1. El Ministeri Fiscal té la missió de vetllar per la defensa i aplicació de l'ordre jurídic i per la independència dels tribunals i de promoure davant d'aquests l'aplicació de la llei per a la salvaguarda dels drets dels ciutadans i la defensa de l'interès general.

2. El Ministeri Fiscal es compon de membres nomenats pel Consell Superior de la Justícia a proposta del Govern, amb mandats renovables de sis anys, entre persones que reuneixin les condicions per a ésser nomenades Jutge. El seu estatut jurídic serà regulat per llei.

3. El Ministeri Fiscal, dirigit pel Fiscal General de l'Estat, actua d'acord amb els principis de legalitat, unitat i jerarquia interna.

Article 94

Els Jutges i el Ministeri Fiscal dirigeixen l'acció de la policia en matèria judicial segons el que estableixin les lleis.

Títol VIII
Del Tribunal Constitucional

Article 95

1. El Tribunal Constitucional és l'intèrpret suprem de la Constitució, actua jurisdiccionalment i les seves sentències vinculen els poders públics i els particulars.

2. El Tribunal Constitucional aprova el seu propi reglament i exerceix la seva funció sotmès únicament a la Constitució i la Llei Qualificada que el reguli.

Article 96

1. El Tribunal Constitucional es compon de quatre Magistrats constitucionals, designats entre persones de reconeguda experiència jurídica o institucional, un per cadascun dels Coprínceps i dos pel Consell General. El seu mandat té una durada de vuit anys i no és renovable per períodes consecutius. La renovació del Tribunal Constitucional es farà per parts. El règim d'incompatibilitats serà regulat per la Llei Qualificada a què fa referència l'article anterior.

2. És presidit cada dos anys pel Magistrat al qual correspongui l'esmentada presidència segons torn rotatori.

Article 97

1. El Tribunal Constitucional adopta les seves decisions per majoria de vots. Les deliberacions i els vots són secrets. El ponent, sempre designat per sorteig, té vot de qualitat en cas d'empat.

2. Les sentències que estimin parcialment o totalment la demanda han d'especificar, d'acord amb la Llei Qualificada, l'àmbit i extensió dels seus efectes.

Article 98

El Tribunal Constitucional coneix:

a) Dels processos d'inconstitucionalitat contra les lleis, els decrets legislatius i el Reglament del Consell General.

b) Dels requeriments de dictamen previ d'inconstitucionalitat sobre lleis i tractats internacionals.

c) Dels processos d'empara constitucional.

d) Dels conflictes de competències entre els òrgans constitucionals. A aquests efectes, es consideren òrgans constitucionals els Coprínceps, el Consell General, el Govern, el Consell Superior de la Justícia i els Comuns.

Article 99

1. Poden interposar recurs d'inconstitucionalitat contra les lleis i els decrets legislatius una cinquena part dels membres del Consell General, el Cap de Govern i tres Comuns. Una cinquena part dels membres del Consell General pot interposar recurs d'inconstitucionalitat contra el Reglament de la Cambra. El termini d'interposició de la demanda és de trenta dies des de la data de publicació de la norma.

2. La interposició del recurs no suspèn la vigència de la norma impugnada. El Tribunal haurà de dictar sentència en el termini màxim de dos mesos.

Article 100

1. Si en la tramitació d'un procés un tribunal té dubtes raonables i fonamentats sobre la constitucionalitat d'una llei o d'un decret legislatiu que sigui d'aplicació imprescindible per a la solució de la causa, formularà escrit davant del Tribunal Constitucional demanant el seu pronunciament sobre la validesa de la norma afectada.

2. El Tribunal Constitucional podrà no admetre la tramitació de l'escrit sense recurs posterior. En cas d'admissió dictarà sentència en el termini màxim de dos mesos.

Article 101

1. Els Coprínceps, en els termes de l'article 46.1.f), el Cap de Govern o una cinquena part dels membres del Consell General, poden requerir dictamen previ d'inconstitucionalitat sobre els tractats internacionals abans de la seva ratificació. Aquest procediment tindrà caràcter preferent.

2. La resolució estimatòria d'inconstitucionalitat impedirà la ratificació del tractat. En tot cas, la celebració d'un tractat internacional que contingui estipulacions que contradiguin la Constitució exigirà la reforma prèvia d'aquesta.

Article 102

Contra els actes dels poders públics que lesionin drets fonamentals, estan legitimats per demanar empara davant el Tribunal Constitucional:

a) Els qui hagin estat part o siguin coadjuvants en el procés judicial previ al que es refereix l'article 41.2 d'aquesta Constitució.

b) Els qui tinguin un interès legítim en relació a disposicions o actes sense força de llei del Consell General.

c) El Ministeri Fiscal en cas de violació del dret fonamental a la jurisdicció.

Article 103

1. El conflicte entre els òrgans constitucionals es plantejarà quan un d'ells al.legui l'exercici il.legítim per l'altre de competències que li són constitucionalment atribuïdes.

2. El Tribunal Constitucional podrà suspendre amb caràcter cautelar els efectes de les normes o actes impugnats i, en el seu cas, ordenar el cessament de les actuacions que han donat lloc al conflicte.

3. La sentència determinarà i atribuirà a una de les parts la competència en litigi.

4. L'inici d'un conflicte de competències impedeix el plantejament de la qüestió davant l'Administració de Justícia.

5. La llei regularà els supòsits en els quals el conflicte es plantegi per raó del no exercici de les competències que els òrgans mencionats tenen atribuïdes.

Article 104

Una Llei Qualificada regularà l'estatut jurídic dels membres del Tribunal Constitucional, els processos constitucionals i el funcionament de la institució.

Títol IX
De la Reforma Constitucional

Article 105

La iniciativa de reforma de la Constitució correspondrà als Coprínceps conjuntament o a una tercera part dels membres del Consell General.

Article 106

La reforma de la Constitució requerirà l'aprovació del Consell General per una majoria de dues terceres parts dels membres de la Cambra. Immediatament després la proposta serà sotmesa a referèndum de ratificació.

Article 107

Superats els tràmits de l'article 106, els Coprínceps sancionaran el nou text constitucional per a la seva promulgació i entrada en vigor.

Disposició addicional primera

La Constitució dóna mandat al Consell General i al Govern perquè, amb l'associació dels Coprínceps, proposin negociacions als Governs d'Espanya i de França amb l'objectiu de signar un Tractat Internacional trilateral per establir el marc de les relacions amb els dos Estats veïns sobre la base del respecte a la sobirania, independència i integritat territorial d'Andorra.

Disposició addicional segona

L'exercici de la funció de representació diplomàtica d'un Estat a Andorra és incompatible amb l'exercici de qualsevol altre càrrec públic.

Disposició transitòria primera

1. El mateix Consell General que ha aprovat la present Constitució obrirà un període extraordinari de sessions, per tal d'aprovar, almenys, el Reglament del Consell General i les lleis qualificades referents al règim electoral, les competències i el sistema de finançament dels Comuns, la Justícia i el Tribunal Constitucional. Aquest període de sessions finalitzarà el dia 31 de desembre de 1993.

2. En aquest període, que comença el dia hàbil següent al de la publicació de la Constitució, el Consell General no podrà ser dissolt i exercirà totes les facultats que constitucionalment li corresponen.

3. El dia vuit de setembre de 1993, festa de la Mare de Deu de Meritxell, el Síndic General convocarà eleccions generals, que se celebraran dins la primera quinzena del mes de desembre d'aquest mateix any.

4. La finalització d'aquest període de sessions implicarà la dissolució del Consell General i el cessament del Govern, que seguirà en funcions fins a la formació del nou, d'acord amb la Constitució.

Disposició transitòria segona

1. La Llei Qualificada relativa a la Justícia preveurà, amb esperit d'equilibri, la designació de Jutges i Fiscals procedents dels Estats veïns mentre no sigui possible fer altrament. Aquesta llei, així com la del Tribunal Constitucional, regularan el règim de nacionalitat per als Jutges i Magistrats que no siguin andorrans.

2. La Llei Qualificada de la Justícia habilitarà així mateix el règim transitori de continuïtat en el càrrec d'aquells jutges que, en el moment de la seva promulgació, no tinguin la titulació acadèmica prevista en aquesta Constitució.

3. L'esmentada Llei Qualificada de la Justícia preveurà els sistemes d'adaptació dels processos i causes pendents al sistema judicial i processal previst en aquesta Constitució, per tal de garantir el dret a la jurisdicció.

4. Les lleis i normes amb força de llei vigents en el moment de la creació del Tribunal Constitucional, podran ésser objecte de recurs directe d'inconstitucionalitat dins d'un termini de tres mesos, a partir de la presa de possessió dels Magistrats constitucionals. Els subjectes legitimats per interposar-lo són els previstos en l'article 99 de la Constitució.

5. Durant el primer mandat subsegüent a l'entrada en vigor de la Constitució, els representants dels Coprínceps en el Consell Superior de la Justícia podran no ésser andorrans.

Disposició transitòria tercera

1. Els serveis institucionals dels Coprínceps, les competències i funcions dels quals han estat encomanades per aquesta Constitució a altres òrgans de l'Estat, seran objecte de traspàs als òrgans mencionats. Amb aquesta finalitat, es constituirà una comissió tècnica formada per un representant de cada Copríncep, dos del Consell General i dos del Govern que prepararà i adreçarà un informe al Consell General perquè, en el període esmentat en la Disposició Transitòria Primera, s'adoptin les disposicions necessàries per fer efectius els traspassos.

2. La mateixa comissió prendrà les disposicions necessàries per posar els serveis de policia sota l'autoritat exclusiva del Govern en el termini de 2 mesos a partir de l'entrada en vigor de la Constitució.

Disposició derogatòria

Amb l'entrada en vigor d'aquesta Constitució queden derogades totes les normes anteriors en allò que la contradiguin.

Disposició final

La Constitució entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

I nosaltres els Coprínceps, després que el Consell l'ha adoptat en sessió solemne celebrada el dia 2 de febrer de 1993, i que el Poble Andorrà l'ha aprovat en referèndum celebrat el dia 14 de març de 1993, la fem nostra, la ratifiquem, la sancionem i promulguem i, per a general coneixement, n'ordenem la publicació.

Casa de la Vall, 28 d'abril de 1993

François Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

Butlletí
Oficial del
Principat
d'Andorra

Preu de l'exemplar 65 PTA
Subscripció anual 2.900 PTA

Dipòsit legal
And-15-1989

ISSN 1013-7777
Any 5

PAPER 100% ECOLÒGIC Impressió Impremta Solber

a:\jur\andorra.
7.9.94

APPLICATION OF ANDORRA FOR MEMBERSHIP OF THE COUNCIL OF EUROPE

Amendments proposed to the preliminary draft Opinion

Paragraph 4

After the words "to recognise" insert " - pending the entry into force of the 11th Protocol -".

Paragraph 7

Add the following sentence at the end of the paragraph:

"Adequate legislation on nationality, in line with the established standards of the Council of Europe, should be considered a condition for membership."

DEMANDE D'ADHESION D'ANDORRE AU CONSEIL DE L'EUROPE

Amendements proposés à l'avant-projet d'Avis

Paragraphe 4

Après les mots "à reconnaître" insérer " - en attendant l'entrée en vigueur du Protocole no. 11 -".

Paragraphe 7

Ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe:

"Une législation adéquate sur la nationalité, conforme aux normes établies du Conseil de l'Europe, devrait être considérée comme une condition d'adhésion."

Demande d'adhésion de la Principauté d'Andorre au Conseil de l'Europe

Sous-amendement proposé par M. Reddemann à l'amendement n° 2, présenté par la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Dans l'amendement supprimer la phrase "devrait être considéré comme une condition d'adhésion" et insérer après le mot "nationalité" les mots "devrait être", afin que le texte se lise ainsi :

"Une législation adéquate sur la nationalité devrait être conforme aux normes établies du Conseil de l'Europe".

Application of the Principality of Andorra for membership of the Council of Europe

Sub-amendment proposed by Mr Reddemann to the Amendment n° 2, submitted by the Committee on Legal Affairs and Human Rights

In the amendment, delete the sentence "should be considered a condition for membership" and, after the word "nationality", insert the words "should be", so that the text would read as follows :

"Adequate legislation nationality should be in line with the established standards of the Council of Europe".

Doc Rec. de: 67979
01/10 '94 20:19

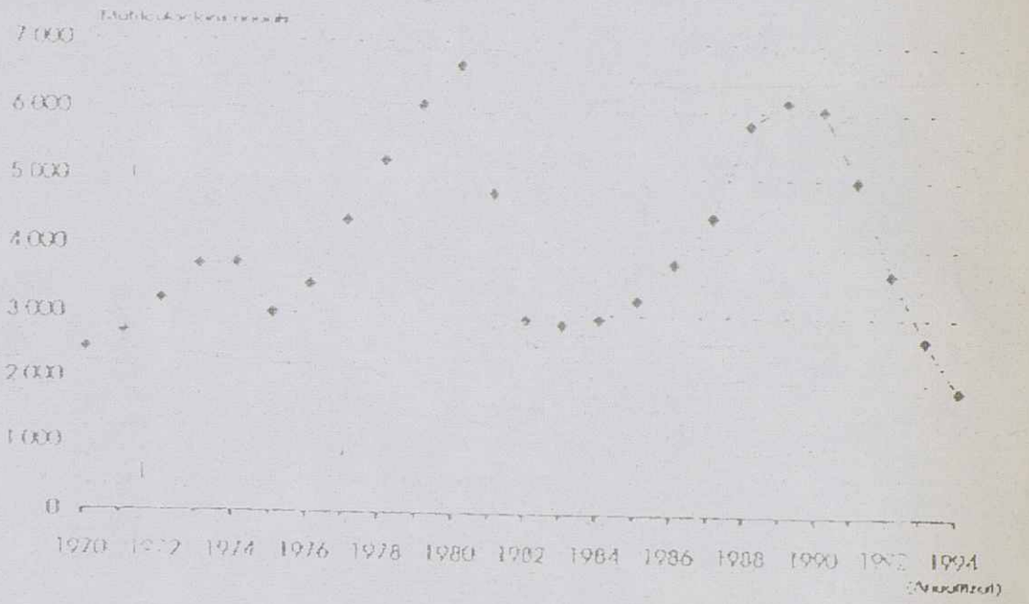
Full de conjuntura núm. 1/1994

Febrer de 1994

Noves matrículacions - Caixa Andorrana de Seguretat Social

Matriculacions			
Gener	294	157	-46,6%
Febrer	484		
Març	623		
Abril	734		
Maig	848		
Juny	959		
Juliol	1 300		
Agost	1 474		
Setembre	1 677		
Octubre	1 856		
Novembre	2 175		
Desembre	2 676		
			-29,6%

Matriculacions mensuals acumulades



2 67979 BARTUNEU CASSANY 01/10/94 19:01 Pg: 18
18

Av. Santa Coloma 91
Andorra la Vella
Tel. 61 400

Butlletí Oficial del **Principat d'Andorra**

Andorra la Vella, 28 de setembre de 1993
Número 51 any 5

Índex

849	**Sumari**	
850	**Lleis i tractats internacionals**	Lleis qualificades Lleis ordinàries Reglament del Consell General
936	**Actes dels Coprínceps i del Consell General**	Coprínceps

Sumari

Lleis i Tractats Internacionals

Llei qualificada del Tribunal Constitucional, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 850

Llei qualificada de la Justícia, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 864

Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 876

Llei qualificada d'educació, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 883

Llei qualificada de la nacionalitat, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 887

Llei de modificació de la llei de creació de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 892

Llei reguladora de les ordinacions dins el marc de la Constitució, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 893

Llei de modificació de les tarifes elèctriques de l'ens Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) per a l'any 1993, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 893

Llei de creació de la cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 894

Llei d'expropiació, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 899

Llei d'arrendaments de finques urbanes, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 915

Reglament del Consell General, de 3-9-93.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 922

Actes dels Copríncep i del Consell General

Decret de 22-9-93 pel qual es publica la delegació dels poders del Copríncep Francès al seu delegat a Andorra.
Any 5 / núm. 51 / pàg. 936

Lleis i Tractats Internacionals

Lleis Qualificades

Llei qualificada del Tribunal Constitucional

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei
qualificada del Tribunal Constitucional

Títol I
De la naturalesa del Tribunal Constitucional i de l'àmbit de les seves competències
Capítol I
De la naturalesa del Tribunal Constitucional
Capítol II
De les competències i funcions del Tribunal Constitucional
Secció 1ª
De les competències jurisdiccionals del Tribunal
Secció 2ª
De les funcions internes de govern i administració

Títol II
Composició del Tribunal i estatut jurídic dels seus membres

Títol III
Del funcionament del Tribunal Constitucional
Capítol I
Dels òrgans del Tribunal i de llurs competències i funcions
Capítol II
Del personal al servei del Tribunal
Capítol III
Del règim de sessions i distribució de les causes

Títol IV
Dels procediments i processos constitucionals
Capítol I
Disposicions comunes a tots els procediments i processos
Capítol II
Dels processos d'inconstitucionalitat
Secció 1ª
Del recurs o procés directe d'inconstitucionalitat
Secció 2ª
Del procés incidental d'inconstitucionalitat iniciat pels Tribunals ordinaris
Capítol III
Del procediment previ de control de constitucionalitat dels Tractats internacionals
Capítol IV
Del procediment de dictamen previ sobre l'adequació a la Constitució de les lleis instat pels Coprínceps
Capítol V
Dels conflictes de competències entre els òrgans constitucionals de l'Estat
Secció 1ª
Dels conflictes de competències constitucionals entre el Consell General i el Govern i els Comuns o d'aquests entre si
Secció 2ª
Dels conflictes de competències entre els Coprínceps, el Consell General, el Consell Superior de la Justícia i el Govern
Capítol VI
Del recurs d'empara

Disposició addicional

Disposició transitòria primera

Disposició transitòria segona

Disposició transitòria tercera

Exposició de motius

El poble d'Andorra ha aprovat la seva constitució com a norma suprema de l'ordenament jurídic, organitzadora del funcionament del seu Estat democràtic i obligatòria per als poders públics i per als ciutadans. I, per garantir aquesta supremacia i aquesta aplicabilitat, ha encarregat al Tribunal Constitucional les funcions d'ésser el garant dels mandats que conté.

Per això, el Tribunal Constitucional ocupa un lloc d'excepció en el marc de les institucions de l'Estat: li correspon decidir, en via jurisdiccional, de l'adequació a la Constitució de les lleis, dels tractats internacionals, de les competències que exerceixen tant l'Estat com els Comuns quan entrin en conflicte i de l'eficàcia dels drets fonamentals que estableix la pròpia Constitució. És, per tant, l'òrgan jurisdiccional que se situa en el cim del control de l'ordenament jurídic si tenim present que aquest està encapçalat per la suprema llei constitucional.

Però, si aquestes funcions genèriques són pròpies de quasi tots els models de justícia constitucional, el cert és que cada sistema adopta regulacions diferents segons les necessitats exigides per la seva pròpia realitat sòcio-política. Aquest és el context en què s'ha d'emmarcar la present proposició de llei: adequar el màxim possible la institució del Tribunal Constitucional a la realitat andorrana, en la via, encara no conclosa, de la modernització de les seves institucions històriques dins un Estat democràtic contemporani. Amb aquesta finalitat, s'han determinat amb claredat les competències i els procediments que li corresponen i es refonen i se simplifiquen els diferents procediments i àmbits funcionals que li atorga la Constitució.

Així, en el primer objectiu sobre determinació de competències i tràmits processals, s'han distingit les competències de caràcter jurisdiccional d'aquelles altres que tenen caràcter governatiu intern. I, dins les primeres, s'han desglossat uns procediments (bàsicament els referits als conflictes) i refós uns altres (els que es refereixen al dictamen previ sol.licitat pels Coprínceps sobre lleis del Consell). Dins les segones, es crea un servei tècnic permanent que, malgrat que es troba subordinat funcionalment al Tribunal, des del punt de vista orgànic depèn de l'Administració General de l'Estat.

Quant a la limitació dels efectes polítics del paper del Tribunal, és el camp on s'han introduït majors novetats de caràcter precautori. En síntesi, aquestes novetats (gens usuals en els països europeus, però necessàries en el cas d'Andorra) es basen en la previsió d'una sèrie de mecanismes com els següents:

- Autovinculació del Tribunal als precedents que fixi ell mateix i necessitat de motivar totes les decisions.

- Aplicació dels mandats expressos de la Constitució i prohibició de les anomenades sentències interpretatives.

- Creació d'un règim disciplinari intern.

- Determinació dels efectes de les sentències i resolucions.

- Prohibició de realitzar judicis d'oportunitat política i de dirigir censures, felicitacions o recomanacions a la resta de poders públics.

A l'últim, quant a la simplificació dels distints procediments, s'ha pretès eliminar tràmits innecessaris i dilatoris dels processos, unificant els terminis en allò que sigui possible i no oferint més que un recurs de súplica de caràcter urgent i no apel.lable.

Convé, però, efectuar alguns comentaris sobre el contingut dels diversos procediments i processos regulats en el text i destacar les seves línies essencials.

El recurs directe i el procés incidental.

Les notes més destacables d'aquests dos processos (clàssics a totes les jurisprudències constitucionals), a més del que s'ha indicat, és la possibilitat d'inadmissió per part del Tribunal: excepcional en el primer cas (supòsits de manca de legitimació, transcurs del termini, absència d'advocat, etc...) i amb caràcter discrecional en el segon, atès que el Tribunal, malgrat acomplir-se tots els requisits processals, pot decidir la inadmissibilitat. Per altra banda, el recurs incidental es planteja en termes restrictius, imposant al Tribunal ordinari una sèrie d'exigències que demostrin no tant la "possibilitat" que la llei impugnada sigui inconstitucional, sinó, més aviat, la "seguretat" i el ple convenciment de l'esmentat tribunal ordinari sobre la inconstitucionalitat al.legada i l'aplicabilitat de la llei al fons del procés de què coneix.

El control previ de constitucionalitat dels tractats internacionals. Tampoc aquest procediment ofereix especials dificultats d'interpretació. Sorgeix, però, un problema que la Llei del Tribunal Constitucional no pot regular i que haurà de ser establerta en una llei distinta: es tracta del control previ dels acords internacionals conclosos pel Govern. Atès que la Constitució no estableix el moment de la ratificació definitiva d'aquests acords, pot succeir que el Govern els ratifiqui prèviament i després informi de la celebració d'aquests, que és l'única cosa que exigeix l'apartat 2 de l'article 64 de la Constitució. D'aquesta manera el control previ esdevindria impossible. Per això fóra bo que una llei fixés un termini previ a la ratificació definitiva dels acords internacionals del Govern perquè, durant aquest, es pogués efectuar el control de constitucionalitat.

El control previ de constitucionalitat de les lleis instat pels Coprínceps.

Com se sap, la Constitució recull aquest procediment en els articles 45.2, paràgraf segon, 46.1.e) i 98.b). Doncs bé, la Constitució de manera expressa únicament reserva a aquest tipus de control previ les lleis aprovades pel Consell General, però no els decrets legislatius. En efecte, l'article 45, com a actes obligats dels Coprínceps, es refereix a la sanció i promulgació de les lleis, segons l'article 63 de la mateixa Constitució. I l'article 63 de la Constitució diu textualment que "aprovada una llei pel Consell General, el Síndic General en donarà compte als Coprínceps perquè, entre els vuit i quinze dies següents, la sancionin, promulguin i n'ordenin la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra".

La conseqüència és clara: la sanció dels Coprínceps només és exigible per a les lleis del Consell, però no pas per a les normes que provenen del Govern. Ara bé, atès que tot el procediment de dictamen previ es troba regulat a la Constitució sobre la base del termini de sanció de les lleis, ocorre que resten exclosos d'aquest les normes que procedeixen del Govern i, entre aquestes, els decrets legislatius.

Per altra banda, el procediment de dictamen previ sobre la constitucionalitat de les lleis del Consell General s'ha d'iniciar, en tots els supòsits, dins del termini que transcorre entre el vuitè i quinzè dia després que siguin presentades, perquè aquest és l'únic termini que la Constitució estableix amb caràcter general per a tots els supòsits de sanció. I aquí sorgeixen dues modalitats de dictamen previ, segons la pretensió del Copríncep o dels Coprínceps que ho hagin requerit: en un primer cas, el Copríncep pot sol.licitar el dictamen, no perquè el Tribunal declari la inconstitucionalitat de la llei sinó per cobrir el tràmit que li permet no sancionar-la (art. 45.2, paràgraf segon de la Constitució); en un segon supòsit, amb l'exclusiva pretensió que el Tribunal declari la inconstitucionalitat de la llei. Però, en ambdós casos, el dictamen és el mateix i, per tant, el procediment davant del Tribunal Constitucional també ho ha de ser.

Aquesta és la raó per la qual el projecte de llei unifica en un de sol els dos procediments amb idèntics tràmits qualsevulla que sigui la pretensió de qui demana el dictamen.

Els conflictes de competència.

Amb els conflictes de competència s'han realitzat simultàniament dues operacions: per una banda, la de separació entre els conflictes entre els òrgans generals de l'Estat i els Comuns i, per l'altra, la d'unificació dels diversos conflictes entre òrgans generals de l'Estat que es troben recollits en preceptes dispersos de la Constitució. I, de fet, com que en aquesta darrera també es feia referència als conflictes negatius, l'avantprojecte ha distingit en els dos procediments tant els conflictes positius com els negatius.

Quant als conflictes positius de competència entre els Comuns i els òrgans generals de l'Estat, l'avantprojecte recull la menció a les lleis qualificades que regulen les competències i atribucions financeres de les parròquies, com a normes que s'han de tenir en compte, juntament amb la Constitució, per determinar a qui correspon la competència en litigi. Aquesta previsió permet, encara que sigui només a aquests efectes, atorgar naturalesa "quasi-constitucional" a aquestes lleis qualificades, protegint així especialment els àmbits competencials de les parròquies que, en no trobar-se concretats i especificats en la Constitució, podrien ser limitats per actuacions concretes dels altres òrgans constitucionals. En el mateix ordre de coses i per raons de coherència sistemàtica amb la Constitució, l'avantprojecte diferencia entre el conflicte de competències que sorgeix com a conseqüència d'actes, resolucions o disposicions sense rang de llei i aquell altre que sorgeix com a conseqüència d'una llei o decret legislatiu: en aquest darrer supòsit, no ens trobem pròpiament davant un conflicte sinó davant una norma amb rang de llei que pot vulnerar la distribució de competències que la

Lleis i Tractats Internacionals

Lleis Qualificades

Llei qualificada del Tribunal Constitucional

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei qualificada del Tribunal Constitucional

Títol I
De la naturalesa del Tribunal Constitucional i de l'àmbit de les seves competències
Capítol I
De la naturalesa del Tribunal Constitucional
Capítol II
De les competències i funcions del Tribunal Constitucional
Secció 1ª
De les competències jurisdiccionals del Tribunal
Secció 2ª
De les funcions internes de govern i administració

Títol II
Composició del Tribunal i estatut jurídic dels seus membres

Títol III
Del funcionament del Tribunal Constitucional
Capítol I
Dels òrgans del Tribunal i de llurs competències i funcions
Capítol II
Del personal al servei del Tribunal
Capítol III
Del règim de sessions i distribució de les causes

Títol IV
Dels procediments i processos constitucionals
Capítol I
Disposicions comunes a tots els procediments i processos
Capítol II
Dels processos d'inconstitucionalitat
Secció 1ª
Del recurs o procés directe d'inconstitucionalitat
Secció 2ª
Del procés incidental d'inconstitucionalitat iniciat pels Tribunals ordinaris
Capítol III
Del procediment previ de control de constitucionalitat dels Tractats internacionals
Capítol IV
Del procediment de dictamen previ sobre l'adequació a la Constitució de les lleis instat pels Coprínceps
Capítol V
Dels conflictes de competències entre els òrgans constitucionals de l'Estat
Secció 1ª
Dels conflictes de competències constitucionals entre el Consell General i el Govern i els Comuns o d'aquests entre si
Secció 2ª
Dels conflictes de competències entre els Coprínceps, el Consell General, el Consell Superior de la Justícia i el Govern
Capítol VI
Del recurs d'empara

Disposició addicional

Disposició transitòria primera

Disposició transitòria segona

Disposició transitòria tercera

Exposició de motius

El poble d'Andorra ha aprovat la seva constitució com a norma suprema de l'ordenament jurídic, organitzadora del funcionament del seu Estat democràtic i obligatòria per als poders públics i per als ciutadans. I, per garantir aquesta supremacia i aquesta aplicabilitat, ha encarregat al Tribunal Constitucional les funcions d'ésser el garant dels mandats que conté.

Per això, el Tribunal Constitucional ocupa un lloc d'excepció en el marc de les institucions de l'Estat: li correspon decidir, en via jurisdiccional, de l'adequació a la Constitució de les lleis, dels tractats internacionals, de les competències que exerceixen tant l'Estat com els Comuns quan entrin en conflicte i de l'eficàcia dels drets fonamentals que estableix la pròpia Constitució. És, per tant, l'òrgan jurisdiccional que se situa en el cim del control de l'ordenament jurídic si tenim present que aquest està encapçalat per la suprema llei constitucional.

Però, si aquestes funcions genèriques són pròpies de quasi tots els models de justícia constitucional, el cert és que cada sistema adopta regulacions diferents segons les necessitats exigides per la seva pròpia realitat sòcio-política. Aquest és el context en què s'ha d'emmarcar la present proposició de llei: adequar el màxim possible la institució del Tribunal Constitucional a la realitat andorrana, en la via, encara no conclosa, de la modernització de les seves institucions històriques dins un Estat democràtic contemporani. Amb aquesta finalitat, s'han determinat amb claredat les competències i els procediments que li corresponen i es refonen i se simplifiquen els diferents procediments i àmbits funcionals que li atorga la Constitució.

Així, en el primer objectiu sobre determinació de competències i tràmits processals, s'han distingit les competències de caràcter jurisdiccional d'aquelles altres que tenen caràcter governatiu intern. I, dins les primeres, s'han desglossat uns procediments (bàsicament els referits als conflictes) i refós uns altres (els que es refereixen al dictamen previ sol.licitat pels Coprínceps sobre lleis del Consell). Dins les segones, es crea un servei tècnic permanent que, malgrat que es troba subordinat funcionalment al Tribunal, des del punt de vista orgànic depèn de l'Administració General de l'Estat.

Quant a la limitació dels efectes polítics del paper del Tribunal, és el camp on s'han introduït majors novetats de caràcter precautori. En síntesi, aquestes novetats (gens usuals en els països europeus, però necessàries en el cas d'Andorra) es basen en la previsió d'una sèrie de mecanismes com els següents:

- Autovinculació del Tribunal als precedents que fixi ell mateix i necessitat de motivar totes les decisions.

- Aplicació dels mandats expressos de la Constitució i prohibició de les anomenades sentències interpretatives.

- Creació d'un règim disciplinari intern.

- Determinació dels efectes de les sentències i resolucions.

- Prohibició de realitzar judicis d'oportunitat política i de dirigir censures, felicitacions o recomanacions a la resta de poders públics.

A l'últim, quant a la simplificació dels distints procediments, s'ha pretès eliminar tràmits innecessaris i dilatoris dels processos, unificant els terminis en allò que sigui possible i no oferint més que un recurs de súplica de caràcter urgent i no apel.lable.

Convé, però, efectuar alguns comentaris sobre el contingut dels diversos procediments i processos regulats en el text i destacar les seves línies essencials.

El recurs directe i el procés incidental.

Les notes més destacables d'aquests dos processos (clàssics a totes les jurisprudències constitucionals), a més del que s'ha indicat, és la possibilitat d'inadmissió per part del Tribunal: excepcional en el primer cas (supòsits de manca de legitimació, transcurs del termini, absència d'advocat, etc...) i amb caràcter discrecional en el segon, atès que el Tribunal, malgrat acomplir-se tots els requisits processals, pot decidir la inadmissibilitat. Per altra banda, el recurs incidental es planteja en termes restrictius, imposant al Tribunal ordinari una sèrie d'exigències que demostrin no tant la "possibilitat" que la llei impugnada sigui inconstitucional, sinó, més aviat, la "seguretat" i el ple convenciment de l'esmentat tribunal ordinari sobre la inconstitucionalitat al.legada i l'aplicabilitat de la llei al fons del procés de què coneix.

El control previ de constitucionalitat dels tractats internacionals. Tampoc aquest procediment ofereix especials dificultats d'interpretació. Sorgeix, però, un problema que la Llei del Tribunal Constitucional no pot regular i que haurà de ser establerta en una llei distinta: es tracta del control previ dels acords internacionals conclosos pel Govern. Atès que la Constitució no estableix el moment de la ratificació definitiva d'aquests acords, pot succeir que el Govern els ratifiqui prèviament i després informi de la celebració d'aquests, que és l'única cosa que exigeix l'apartat 2 de l'article 64 de la Constitució. D'aquesta manera el control previ esdevindria impossible. Per això fóra bo que una llei fixés un termini previ a la ratificació definitiva dels acords internacionals del Govern perquè, durant aquest, es pogués efectuar el control de constitucionalitat.

El control previ de constitucionalitat de les lleis instat pels Coprínceps.

Com se sap, la Constitució recull aquest procediment en els articles 45.2, paràgraf segon, 46.1.e) i 98.b). Doncs bé, la Constitució de manera expressa únicament reserva a aquest tipus de control previ les lleis aprovades pel Consell General, però no els decrets legislatius. En efecte, l'article 45, com a actes obligats dels Coprínceps, es refereix a la sanció i promulgació de les lleis, segons l'article 63 de la mateixa Constitució. I l'article 63 de la Constitució diu textualment que "aprovada una llei pel Consell General, el Síndic General en donarà compte als Coprínceps perquè, entre els vuit i quinze dies següents, la sancionin, promulguin i n'ordenin la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra".

La conseqüència és clara: la sanció dels Coprínceps només és exigible per a les lleis del Consell, però no pas per a les normes que provenen del Govern. Ara bé, atès que tot el procediment de dictamen previ es troba regulat a la Constitució sobre la base del termini de sanció de les lleis, ocorre que resten exclosos d'aquest les normes que procedeixen del Govern i, entre aquestes, els decrets legislatius.

Per altra banda, el procediment de dictamen previ sobre la constitucionalitat de les lleis del Consell General s'ha d'iniciar, en tots els supòsits, dins del termini que transcorre entre el vuitè i quinzè dia després que siguin presentades, perquè aquest és l'únic termini que la Constitució estableix amb caràcter general per a tots els supòsits de sanció. I aquí sorgeixen dues modalitats de dictamen previ, segons la pretensió del Copríncep o dels Coprínceps que ho hagin requerit: en un primer cas, el Copríncep pot sol.licitar el dictamen, no perquè el Tribunal declari la inconstitucionalitat de la llei sinó per cobrir el tràmit que li permet no sancionar-la (art. 45.2, paràgraf segon de la Constitució); en un segon supòsit, amb l'exclusiva pretensió que el Tribunal declari la inconstitucionalitat de la llei. Però, en ambdós casos, el dictamen és el mateix i, per tant, el procediment davant del Tribunal Constitucional també ho ha de ser.

Aquesta és la raó per la qual el projecte de llei unifica en un de sol els dos procediments amb idèntics tràmits qualsevulla que sigui la pretensió de qui demana el dictamen.

Els conflictes de competència.

Amb els conflictes de competència s'han realitzat simultàniament dues operacions: per una banda, la de separació entre els conflictes entre els òrgans generals de l'Estat i els Comuns i, per l'altra, la d'unificació dels diversos conflictes entre òrgans generals de l'Estat que es troben recollits en preceptes dispersos de la Constitució. I, de fet, com que en aquesta darrera també es feia referència als conflictes negatius, l'avantprojecte ha distingit en els dos procediments tant els conflictes positius com els negatius.

Quant als conflictes positius de competència entre els Comuns i els òrgans generals de l'Estat, l'avantprojecte recull la menció a les lleis qualificades que regulen les competències i atribucions financeres de les parròquies, com a normes que s'han de tenir en compte, juntament amb la Constitució, per determinar a qui correspon la competència en litigi. Aquesta previsió permet, encara que sigui només a aquests efectes, atorgar naturalesa "quasi-constitucional" a aquestes lleis qualificades, protegint així especialment els àmbits competencials de les parròquies que, en no trobar-se concretats i especificats en la Constitució, podrien ser limitats per actuacions concretes dels altres òrgans constitucionals. En el mateix ordre de coses i per raons de coherència sistemàtica amb la Constitució, l'avantprojecte diferencia entre el conflicte de competències que sorgeix com a conseqüència d'actes, resolucions o disposicions sense rang de llei i aquell altre que sorgeix com a conseqüència d'una llei o decret legislatiu: en aquest darrer supòsit, no ens trobem pròpiament davant un conflicte sinó davant una norma amb rang de llei que pot vulnerar la distribució de competències que la

Constitució conté i, per tant, davant una possible llei inconstitucional: per això, el procés que correspon no és el propi del conflicte sinó el del recurs directe d'inconstitucionalitat, amb tots els seus requisits i conseqüències.

Pel que fa als conflictes entre els òrgans generals de l'Estat, s'ha incorporat a un únic procediment el previst a l'article 46.1.g) de la Constitució, per entendre que, a part que aquest precepte es remet als articles 98 i 103, el conflicte és de naturalesa competencial, malgrat que el redactat constitucional contingui termes diferents.

A l'últim, quant a les modalitats de conflictes negatius s'ha efectuat una regulació força homogènia en els dos supòsits que s'han vingut contemplant, tant quan el conflicte afecti òrgans constitucionals com quan afecti drets subjectius dels particulars. En el cas d'òrgans constitucionals, no obstant, es diferencien les causes del conflicte en el cas de competències territorials respecte del de competències entre òrgans generals de l'Estat. Si entren en joc les competències de les parròquies, el conflicte únicament es pot plantejar quan el no exercici de la competència d'un òrgan impedeixi a un altre l'exercici d'una competència que li és pròpia: per exemple, si el Comú no realitza el corresponent cens és obvi que s'està impedint la realització d'eleccions, o el sistema de control de nacionalitat, etc... Si, en canvi, es tracta de relacions entre òrgans generals de l'Estat, la raó del conflicte ha de ser més àmplia: lesió de l'interès general i funcionament normal de les institucions, malgrat que sempre ha d'existir un mandat exprés de la Constitució o d'una llei qualificada que imposi una concreta obligació de fer.

També es protegeixen els drets individuals dels particulars enfront la inactivitat dels poders públics, tant en el cas de competències territorials com en el cas dels òrgans constitucionals generals de l'Estat. Com és obvi, aquí la legitimació és més restringida atès que s'exigeix la titularitat d'un dret subjectiu.

El recurs d'empara.

També aquí existeixen novetats molt importants respecte a la regulació d'aquest tipus de recurs. Es fan jugar bàsicament dos preceptes de la Constitució: l'article 41 que preveu tant el recurs urgent i preferent davant de la jurisdicció ordinària com el d'empara, i l'article 102 que estableix els criteris de legitimació activa. Interpretats sistemàticament se'n deriven les següents característiques: la forma de protecció jurisdiccional dels drets correspon als tribunals ordinaris a través d'un procediment especial (art. 41.1 de la Constitució); només de forma excepcional seran protegits pel Tribunal Constitucional; llevat en el cas d'actes, resolucions o disposicions del Consell General sense força de llei, totes les reclamacions per lesió dels drets fonamentals han de realitzar-se prèviament davant de la jurisdicció ordinària; i, finalment, el Ministeri Fiscal es troba legitimat per interposar recurs d'empara per lesions al dret fonamental a la jurisdicció, és a dir, els drets contemplats a l'art. 10 de la Constitució.

Doncs bé, tenint en compte aquestes característiques i amb el fi de delimitar al màxim el possible abús d'aquest tipus de recurs, ha estat dissenyat d'acord amb el següent perfil:

1r. Es planteja literalment, no com un recurs contra l'òrgan públic que potencialment va lesionar en origen el dret fonamental, sinó com a recurs especial contra la segona sentència dictada en el procediment urgent i preferent per la jurisdicció ordinària. D'aquesta forma, s'eliminen de rel els dubtes que pugui haver sobre l'objecte del recurs, sobre les complexes qüestions de legitimació i sobre l'àmbit dels drets protegits. Només en cas de segona sentència desestimatòria (amb la qual cosa, tot sigui dit, el subjecte del dret ja ha gaudit d'una doble garantia davant de la jurisdicció ordinària) es podrà interposar recurs d'empara. D'aquesta manera, no només seran supòsits excepcionals sinó també residuals.

2n. Per als supòsits en què produeixi una lesió de caràcter jurisdiccional, fora del procediment urgent i preferent, el principi general és que no es pot interposar directament el recurs d'empara. Altrament, s'exigeixen dos requisits: esgotar els recursos ordinaris en defensa del dret lesionat i sol.licitar del Ministeri Fiscal que l'interposi. Només si el Ministeri Fiscal decideix interposar-lo, serà possible aquesta modalitat de recurs. Així resta tallada la possibilitat d'utilitzar el Tribunal Constitucional com a instància última contra qualsevol tipus de decisió en qualsevol tipus de procés ordinari al.legant lesió del dret a la jurisdicció i envaint el Tribunal Constitucional amb infinitat de qüestions que no li corresponen: càrrecs de direcció pública i altres supòsits.

Finalment, pel que fa a les disposicions transitòries, s'ha intentat simplificar en el primer acte de constitució del Tribunal tant el torn de substitució en els càrrecs de president i vice-president com la durada parcial dels primers mandats de magistrat.

Títol I. De la naturalesa del Tribunal Constitucional i de l'àmbit de les seves competències

Capítol primer. De la naturalesa del Tribunal Constitucional

Article 1

El Tribunal Constitucional, òrgan jurisdiccional col.legiat, és l'intèrpret suprem de la Constitució i en garanteix la jerarquia normativa superior sobre la resta de l'ordenament jurídic mitjançant resolucions i sentències dictades en els procediments i processos regulats per la present Llei Qualificada.

Article 2

1. La jurisdicció del Tribunal Constitucional s'estén a tot el territori de l'Estat andorrà, és superior en el seu ordre i, en l'exercici de les seves competències determinades per la Constitució i aquesta Llei, les seves decisions vinculen als poders públics i als particulars i les seves sentències tenen el valor de cosa jutjada.

2. La doctrina interpretativa de la Constitució elaborada pel Tribunal i que serveixi de fonament a les seves sentències vincula també als diferents òrgans de la jurisdicció ordinària.

Article 3

1. El Tribunal Constitucional està sotmès únicament a la Constitució i a la present Llei. Els precedents que el Tribunal estableixi constitueixen criteris interpretatius autovinculants, llevat que decideixi per majoria absoluta dels seus

membres que han de ser modificats i ho expressi en forma motivada.

2. Als efectes de l'apartat anterior, es presumeix l'existència d'un precedent quan almenys dos supòsits idèntics hagin estat resolts amb la mateixa decisió i amb fonament en la mateixa doctrina.

Article 4

1. Sens perjudici del que disposin les convencions i tractats internacionals vàlidament ratificats per Andorra, les resolucions i sentències del Tribunal Constitucional no són recurribles davant d'un altre òrgan jurisdiccional.

2. La jurisdicció del Tribunal Constitucional és preferent. Cap causa de què conegui pot ser substanciada simultàniament davant d'un altre òrgan jurisdiccional; en el supòsit que s'hagués iniciat un litigi davant d'un altre òrgan jurisdiccional ordinari i es plantegés la mateixa causa davant del Tribunal Constitucional, si aquest l'admet a tràmit, aquell cessa de conèixer-la.

Article 5

Les resolucions i sentències del Tribunal Constitucional es dicten en nom del poble andorrà i són publicades en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Capítol segon. De les competències i funcions del Tribunal Constitucional

Secció primera. De les competències jurisdiccionals del Tribunal

Article 6

1. El Tribunal Constitucional d'Andorra té competència per a conèixer de:

1r. El procés directe de constitucionalitat contra lleis, decrets legislatius i Reglament del Consell General.

2n. El procés incidental d'inconstitucionalitat instat per la jurisdicció ordinària contra les normes esmentades en el paràgraf anterior.

3r. El procediment de control previ de constitucionalitat dels tractats internacionals.

4rt. El procediment de dictamen previ d'adequació a la Constitució de les lleis instat pels Coprínceps.

5è. El conflicte de competències constitucionals entre el Consell General i el Govern, com a òrgans generals de l'Estat, i els Comuns, com a òrgans de les Parròquies, o d'aquests darrers entre si.

6è. El conflicte positiu i negatiu de competències constitucionals entre els Coprínceps, el Consell General, el Consell Superior de la Justícia i el Govern.

7è. El recurs d'empara.

Article 7

1. Les resolucions i sentències del Tribunal Constitucional adoptades en el decurs d'un procediment o procés dels assenyalats a l'article anterior són sempre motivades.

2. La motivació de les resolucions i sentències que posin fi a un procediment o procés ha d'expressar amb claredat i precisió el contingut interpretatiu dels preceptes constitucionals aplicables i les raons del pronunciament sobre l'adequació a la Constitució de l'acte o norma objecte del litigi.

3. La resolució o sentència que posi fi a una causa admesa a tràmit no pot contenir pronunciaments diferents als plantejats per alguna de les parts en les seves respectives pretensions.

Article 8

1. El Tribunal Constitucional, en pronunciar-se sobre la constitucionalitat de l'acte o norma impugnats, aplica la Constitució d'acord amb els mandats i valors que expressament s'hi contenen i decideix sobre llur validesa o nul.litat, sense efectuar judicis d'oportunitat sobre l'actuació dels restants poders públics.

2. Si, impugnada una norma jurídica general o alguns dels seus preceptes, hi hagués només una interpretació d'acord amb la Constitució i una altra o més contràries, en declara la inaplicabilitat provisional fins que l'òrgan que l'ha dictada en repari els sentits inconstitucionals. La nova norma emesa subsana l'anterior, sens perjudici de seguir sotmesa al règim general de control de constitucionalitat.

Secció segona. De les funcions internes de govern i administració

Article 9

Són funcions internes de govern i administració:

a) Declarar les incompatibilitats originàries o sobrevingudes dels membres del Tribunal.

b) Exercir la funció disciplinària sobre aquests.

c) Constatar els supòsits de cessament dels magistrats i declarar l'existència d'incapacitació física d'acord amb el que disposa l'article 15.2 de la present Llei.

d) Efectuar les comunicacions i, si és el cas, requeriments als òrgans amb competència per a això a fi que es procedeixi al nomenament de nous magistrats.

e) Disposar l'organització i distribució de funcions de les persones al servei del Tribunal Constitucional.

f) Instruir, si és el cas, els expedients disciplinaris per les faltes comeses per les persones esmentades en l'exercici de llurs càrrecs.

g) Administrar el pressupost destinat al Tribunal.

h) Dirigir informes al Consell General i al Govern sobre el funcionament i necessitats del Tribunal.

i) Aprovar el reglament de funcionament intern.

Títol II. Composició del Tribunal i estatut jurídic dels seus membres

Article 10

1. El Tribunal Constitucional es composa de quatre magistrats, designats un per cada Copríncep i dos pel Consell General d'entre persones majors de vint-i-cinc anys i amb experiència reconeguda i coneixements acreditats en el camp jurídic o institucional.

2. Els magistrats designats pel Consell General són elegits per majoria de tres cinquenes parts del nombre dels Consellers Generals de dret, en la forma que determini el Reglament de la Cambra.

3. En tots els casos, la designació d'un magistrat ha de contenir motivació suficient que avali la idoneïtat de la persona per al càrrec.

4. El nomenament dels magistrats constitucionals s'efectua pels Copríncips i es publica en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Article 11

Si, per raons de necessitat, fos nomenat com a magistrat una persona mancada de la nacionalitat andorrana posseirà durant el seu mandat l'estatut de nacionalitat de funció, en els termes previstos en la Llei Qualificada de la Nacionalitat.

Article 12

El càrrec de magistrat constitucional és incompatible:

a) Amb l'exercici de qualsevol altre càrrec públic adscrit a alguna de les institucions de l'Estat o de les Parròquies, sigui de naturalesa electiva, funcionarial o contractual.

b) Amb l'exercici d'activitats de representació, gestió, assessorament o defensa d'interessos privats de tercers dins del territori d'Andorra.

c) Amb qualsevol càrrec directiu en partits polítics, sindicats i associacions, siguin nacionals o estrangers.

d) Amb qualsevol altra activitat que pugui posar en perill la independència i la imparcialitat en el compliment de les seves obligacions.

Article 13

Durant l'exercici de llurs càrrecs, els magistrats constitucionals són independents i inamovibles i no poden ser sancionats si no és per alguna de les causes i en la forma determinades a la present Llei. Si se sentissin menyscabats en llur independència o pertorbats en llurs funcions per l'acció de qualsevol òrgan públic o pels particulars, han de fer avinent el fet al president del Tribunal perquè aquest sol.liciti l'auxili de la jurisdicció ordinària en la reparació del menyscabament o pertorbació.

Article 14

1. El mandat dels magistrats constitucionals és de vuit anys comptats a partir de la data de publicació del nomenament.

2. Segons el torn rotatori regulat per aquesta Llei, cada dos anys cessa un dels magistrats constitucionals i és substituït per un altre designat pel mateix òrgan que va elegir el cessant.

3. El magistrat constitucional que substitueixi un altre el cessament del qual s'hagi produït abans de la finalització del seu mandat, serà nomenat pel temps que resta de l'esmentat mandat.

4. Vacant un lloc de magistrat, l'òrgan designant ha de procedir a l'elecció del substitut en el termini màxim d'un mes.

5. Llevat allò que disposa l'apartat 3 del present article, cap magistrat constitucional pot ser reelegit per a un mandat consecutiu.

Article 15

1. Els magistrats constitucionals cessen en el càrrec per finalització del temps de mandat, per renúncia voluntària, per defunció, per incórrer en alguna causa d'incapacitació personal o legal, per condemna penal per delicte dolós i per imposició pel mateix Tribunal d'una sanció disciplinària com a conseqüència d'una falta qualificada de molt greu.

2. Qualsevulla de les causes d'incapacitació a què es refereix l'apartat anterior és apreciada pel Ple del Tribunal i comunicada a l'òrgan designant del magistrat incurs en aquestes a fi que procedeixi a un nou nomenament. En tot cas, s'entén com a causa d'incapacitació física el no exercici de les funcions pròpies durant un termini superior a sis mesos consecutius.

Article 16

Els magistrats constitucionals són responsables, civilment, penalment i disciplinàriament.

Article 17

La responsabilitat civil i penal per accions o omissions comeses en l'exercici del seu càrrec se substancia davant el Tribunal Superior de Justícia d'acord amb les lleis substantives i processals que siguin d'aplicació als membres de la jurisdicció ordinària.

Article 18

1. La responsabilitat disciplinària és exigida pel Tribunal Constitucional en Ple i per unanimitat del vot dels altres membres en els supòsits de faltes greus i molt greus. En el supòsit de faltes lleus, aquesta responsabilitat és exigida pel president del Tribunal o, si és el cas, pel vice-president.

2. Són faltes lleus:

- La manca de consideració i respecte als altres membres del Tribunal, al personal al seu servei i a les persones que compareguin en el procés, qualsevol que sigui el títol amb què ho facin.

- L'endarreriment imprudent en el compliment de les obligacions pròpies del càrrec.

3. Són faltes greus:

- L'incompliment del deure del secret de les deliberacions.

- La no motivació dels dictàmens presentats pels ponents.

- La negligència manifesta i reiterada en el despatx dels assumptes que li competeixen.

- Les manifestacions públiques de crítica o disconformitat amb les resolucions i sentències del Tribunal.

- Dirigir advertències, felicitacions o censures a la resta d'òrgans i poders de l'Estat.

- La inassistència no justificada a dues o més sessions del Ple del Tribunal o a dues o més sessions formalment convocades pel president.

- El menyscabament dels drets processals de qui siguin part en el procediment o procés.

- La comissió reiterada de faltes lleus la sanció de les quals no hagi prescrit.

4. Són faltes molt greus:

- L'incompliment de les incompatibilitats contingudes en la present Llei.

- L'abandonament, sense justificació, de la funció jurisdiccional que els correspon per més de dos mesos.

- La reiteració o reincidència en la comissió de faltes greus.

Article 19

1. L'exercici de la funció disciplinària requereix sempre l'audiència i defensa de l'interessat a l'expedient instruït a l'efecte.

2. Les faltes lleus se sancionen amb reprensió verbal o escrita; les faltes greus

amb suspensió de funcions i remuneració per un període no inferior a quinze dies ni superior a tres mesos; les faltes molt greus, amb el cessament definitiu en les funcions i càrrec.

3. Les sancions figuren en el corresponent llibre d'actes del Tribunal i són cancel.lades i es consideren prescrites si, en el cas de faltes lleus, transcorregués el termini de sis mesos sense que l'afectat incorregués en cap altra; en el cas de faltes greus, la cancel.lació és procedent en les mateixes condicions transcorregut el termini de dos anys.

4. Contra la sanció imposada sempre es pot interposar recurs contenciós-administratiu en una sola instància davant el Tribunal Superior de Justícia.

Article 20

El càrrec de magistrat constitucional és remunerat amb càrrec al pressupost de l'Estat. La dita remuneració es composa d'una quantitat fixa anual igual per a tots els membres del Tribunal i d'una quantitat variable en funció del càrrec que s'ostenti, del nombre i durada de les sessions i del nombre de procediments i processos tramitats per cadascun d'ells. La Llei del Pressupost ha de preveure les partides destinades al funcionament del Tribunal i, mitjançant decret, el Govern ha d'especificar el règim de remuneracions dels magistrats.

Títol III. Del funcionament del Tribunal Constitucional

Capítol primer. Dels òrgans del Tribunal i de llurs competències i funcions

Article 21

El Tribunal Constitucional exerceix les seves competències jurisdiccionals i les seves funcions internes de govern i administració mitjançant el president, el vice-president, els magistrats ponents i el Ple del Tribunal.

Article 22

1. El Ple del Tribunal, com a òrgan col.legiat, és l'òrgan superior del Tribunal Constitucional i està constituït pels quatre magistrats constitucionals.

2. No obstant allò que disposa l'apartat anterior, queda constituït amb tres magistrats quan exerceix la funció disciplinària o per absència d'un d'ells.

Article 23

Correspon al Ple del Tribunal decidir jurisdiccionalment sobre:

a) L'admissió a tràmit de totes les causes presentades, siguin o no d'obligat coneixement pel Tribunal, incloses aquelles que han estat presentades extemporàniament o els manquen els requisits de legitimació, postulació o formulació de l'acció i pretensió indispensables processalment.

b) Tots els supòsits de decaïment de l'acció per incompareixença, renúncia, aplanament, caducitat o qualsevulla altra causa que posi fi al procediment o procés abans que finalitzi.

c) Les recusacions interposades contra els magistrats constitucionals.

d) Les inhibicions per al coneixement del cas plantejades per algun magistrat.

e) Els recursos de súplica que s'interposin dins qualsevol procediment o procés.

f) Les sentències, resolucions i dictàmens que resolguin el fons del procediment o procés.

Article 24

Correspon al Ple del Tribunal decidir administrativament i governativament sobre:

a) Els supòsits contemplats en els paràgrafs a) i c) de l'article 9 i apartat 2 de l'article 15 de la present Llei.

b) Exercir la funció disciplinària en matèria de faltes greus i molt greus.

c) Determinar els fons disponibles pels magistrats constitucionals indispensables per a l'exercici de llurs funcions.

d) Resoldre els recursos administratius interns que s'interposin contra les decisions del president o, si és el cas, del vice-president.

e) El contingut de la memòria anual dirigida al Consell General sobre la situació de la justícia constitucional a Andorra.

f) L'aprovació del seu reglament de funcionament intern.

g) La designació dels magistrats ponents d'acord amb allò que disposa aquesta Llei.

Article 25

Correspon als magistrats ponents:

a) La decisió i direcció de qualsevol procediment o procés la tramitació del qual li hagi correspost en tots els assumptes jurisdiccionals que no siguin competència del Ple.

b) La proposta de dictamen motivat sobre la resolució o sentència que ha de ser aprovada pel Ple o, si és el cas, la redacció de la resolució o sentència que reflecteixi el pronunciament majoritari d'aquest.

c) Decidir els empats que es produeixin en les votacions del Ple amb vot de qualitat en aquells assumptes la tramitació dels quals els hagi correspost.

Article 26

1. El president és l'òrgan individual de direcció, govern i representació del Tribunal Constitucional.

2. El càrrec és exercit durant dos anys pel magistrat constitucional a qui correspongui segons l'origen del seu nomenament i el torn rotatori establert en la present Llei. En el cas de cessament anticipat del president com a magistrat constitucional, la presidència serà exercida pel magistrat del mateix origen que el substitueixi pel temps que resti fins al compliment dels dos anys de mandat.

3. El cessament en el càrrec de president i la presa de possessió es realitzaran davant del Ple del Tribunal en sessió única.

Article 27

Correspon al president:

a) Representar al Tribunal Constitucional davant les institucions públiques i privades.

b) Fixar l'ordre del dia, convocar les sessions del Ple del Tribunal i dirigir-ne les deliberacions.

c) Expedir les resolucions i sentències del Ple i ordenar-ne la publicació.

d) Donar possessió del càrrec als magistrats constitucionals que siguin nomenats sota el seu mandat i fer constar el cessament quan aquest es produeixi.

e) Exercir la direcció del personal al servei del Tribunal.

f) Administrar el pressupost i autoritzar les despeses extraordinàries.

g) Elaborar la memòria anual del Tribunal per a la posterior aprovació pel Ple.

h) Realitzar totes aquelles activitats que siguin necessàries per al bon govern i administració del Tribunal.

Article 28

1. El vice-president del Tribunal Constitucional exerceix les funcions del president en casos d'impossibilitat física d'aquest o per delegació expressa.

2. Correspon el càrrec de vice-president al magistrat constitucional que, per l'origen del seu nomenament, ha d'ocupar la presidència en el següent mandat.

3. El cessament i la presa de possessió s'efectua en el mateix acte al qual es refereix l'article 26.3 d'aquesta Llei.

Capítol segon. Del personal al servei del Tribunal

Article 29

1. Els tràmits de gestió i execució materials de les competències pròpies del Tribunal són realitzats pels membres de l'oficina administrativa permanent que es troba al servei i sota la seva dependència.

2. Són càrrecs d'aquesta oficina:

- El secretari del Tribunal.

- L'oficial-lletrat.

Article 30

1. El nomenament i estatut funcionarial d'aquests càrrecs es regeix per les normes reglamentàries del Govern, el qual determina el nombre de llocs que s'han de cobrir d'acord amb les necessitats del Tribunal. En qualsevol cas, les persones que ocupin el càrrec de secretari del Tribunal i d'oficial-lletrat hauran de ser titulades en Dret.

2. Correspon al reglament intern del Tribunal la divisió i regulació de les funcions de cadascun d'aquests càrrecs així com els supòsits d'exigència de responsabilitat disciplinària a totes les persones que es trobin al seu servei.

3. Sens perjudici de les facultats d'instrucció dels expedients disciplinaris que competeixen al president del Tribunal, correspon al Govern decidir sobre aquests administrativament.

Capítol tercer. Del règim de sessions i distribució de les causes

Article 31

1. El Tribunal, com a òrgan col.legiat, actua en Ple constituït en Sala única.

2. Per adoptar vàlidament acords es requereix, almenys, la presència de tres magistrats constitucionals i, si es tractés d'assumptes jurisdiccionals, un d'ells haurà de ser el magistrat ponent.

3. Els acords s'adopten per majoria de vots i, si l'assumpte debatut és de naturalesa jurisdiccional, en cas d'empat, decideix el magistrat ponent amb vot de qualitat.

4. En els assumptes no jurisdiccionals, l'empat de vots impedeix l'adopció de l'acord.

Article 32

1. Les deliberacions i les votacions no són públiques.

2. De cada sessió s'aixeca acta dels acords adoptats, sense ressenyar el contingut de les deliberacions. Als efectes de l'elaboració de l'acta esmentada, actua de secretari el vice-president del Tribunal o, si és el cas, el magistrat d'edat més jove.

3. En aquelles sessions en què el president ho consideri oportú, assistirà i elaborarà l'acta el secretari de l'oficina del Tribunal.

4. Les votacions s'efectuen mitjançant papereta escrita i en secret si així ho decideix el president del Tribunal o ho sol.liciten dos dels magistrats presents.

Article 33

1. Les sessions ordinàries del Tribunal són convocades pel president, adjuntant l'ordre del dia, amb almenys set dies d'antelació i amb periodicitat mínima d'una cada dos mesos. En aquestes, es procedeix al repartiment dels assumptes ingressats en el Tribunal i a la deliberació i decisió sobre les causes pendents tant en llur fase de resolució com en la d'admissió.

2. Les sessions extraordinàries són convocades pel president, a iniciativa pròpia o a petició de dos magistrats, amb un mínim de tres dies d'antelació, quan raons de necessitat ho exigeixin. També es consideren sessions extraordinàries i poden adoptar-se vàlidament acords quan, sense haver-hi prèvia convocatòria, es trobin reunits la totalitat dels membres del Tribunal i així ho decideixin per unanimitat.

Article 34

1. En cada sessió ordinària, mitjançant sorteig, es fa el repartiment entre els magistrats dels assumptes jurisdiccionals que han tingut entrada en el Tribunal i en els quals han de figurar com a ponents. El sorteig s'efectua insaculant cada magistrat un número, de l'u al quatre, i, a continuació, es reparteixen successivament els assumptes segons l'ordre rigorós de registre.

2. Abans de procedir al seu repartiment, el Ple del Tribunal ha de qualificar la naturalesa de cada assumpte.

3. No obstant allò que s'indica a l'apartat primer d'aquest article, el Tribunal podrà decidir, en qualsevol moment de la tramitació, acumular varis assumptes en un de sol per raó d'identitat o semblança d'objecte. En aquests supòsits serà ponent el magistrat que es trobi coneixent de l'assumpte repartit en primer lloc.

4. Els assumptes no jurisdiccionals són tramitats pel president d'acord amb allò que disposa la present Llei i el Reglament del Tribunal Constitucional.

Títol IV. Dels procediments i processos constitucionals

Capítol primer. Disposicions comunes a tots els procediments i processos

Article 35

1. Els procediments i processos als quals es refereix l'art. 6 d'aquesta Llei s'inicien sempre a instància de part, la qual, llevat que es tracti del Ministeri Fiscal o d'un òrgan jurisdiccional, és representada i defensada per un advocat inscrit en el Col.legi d'Advocats d'Andorra.

La representació i defensa davant el Tribunal Constitucional dels interessos de l'Estat Andorrà correspon als advocats andorrans adscrits al Gabinet Jurídic del Govern, sense perjudici que el Govern pugui contractar els serveis d'advocats en casos determinats.

2. Sens perjudici dels drets processals de les parts, el Tribunal pot requerir d'ofici totes les actuacions que estimi necessàries per a la bona fi del procediment o procés.

Article 36

1. Els procediments i processos constitucionals se substancien a la seu del Tribunal Constitucional, dins dels terminis assenyalats en la present Llei i s'inicien mitjançant escrit de demanda en el qual s'expressa:

a) La identificació del demandant, legitimació activa i, si és el cas, la representació i postulació d'aquest.

b) El relat de fets que han donat lloc, en el seu cas, a la lesió constitucional que s'al.legui, l'acte o norma contra o sobre el qual es planteja la demanda i la persona o òrgan als quals s'imputa la seva producció.

c) Els fonaments jurídics en què es basa la pretensió.

d) La determinació precisa de la pretensió que s'hi conté.

2. Amb l'escrit de demanda o de requeriment s'han d'acompanyar, si els hagués, els documents que acreditin els elements de fet que s'han al.legat així com, si és el cas, l'oferiment dels mitjans de prova que es considerin pertinents.

3. Els escrits de contestació de la part o parts demandades o afectades resten sotmesos al mateix règim processal que l'assenyalat per als demandants.

4. Si el Tribunal declara el decaïment de l'acció per incompareixença, desistiment o aplanament d'una de les parts al llarg del procés o procediment, això no impedeix la continuïtat de la seva tramitació inclosa la resolució final.

Article 37

1. L'absència d'algun dels requisits determinats a l'article anterior donarà lloc a la inadmissibilitat de la demanda, sens perjudici que el Tribunal pugui requerir l'actor perquè, en un termini no superior a sis dies hàbils, subsani algun defecte de caràcter formal.

2. També s'escau la inadmissibilitat de la demanda per manifesta incompetència del Tribunal Constitucional i per tractar-se d'una causa que ha adquirit el caràcter de cosa jutjada.

Article 38

L'admissió o inadmissió de l'escrit de demanda o requeriment és acordada mitjançant aute del Ple del Tribunal, escoltat l'informe del magistrat ponent. Contra l'aute d'inadmissió es podrà interposar recurs de súplica en el termini màxim de sis dies hàbils, comptat des de la data de recepció de la notificació. La resolució d'aquest recurs és inapel.lable.

Article 39

1. El Tribunal en tota mena de procediment o procés dicta decisions en forma de providència, aute o sentència. La providència decideix sobre assumptes de tràmit que no incideixin sobre el fons de l'assumpte; l'aute implica una resolució que n'afecta directament o indirectament el fons; la sentència es dicta exclusivament en els processos constitucionals i té caràcter definitiu.

2. Les providències i sentències no són recurribles. Contra els autes, llevat el que contingui la resolució del procediment a què es refereix l'art. 67 d'aquesta Llei, es pot interposar el recurs de súplica davant del Ple en el termini de sis dies hàbils.

3. Si una de les parts entengués que una providència conté una decisió que incideix en el fons de l'assumpte, en el termini assenyalat en l'apartat anterior pot interposar recurs de súplica davant del Ple del Tribunal. Aquest ha de resoldre en forma d'aute i contra aquesta decisió no es pot interposar ulterior recurs.

Article 40

1. És procedent la recusació o inhibició del magistrat ponent quan tingui interès directe i personal en l'assumpte o hagi estat titular de l'òrgan que va realitzar l'acte o va crear la norma objecte de la impugnació en el moment en què es van produir.

2. No s'escau en cap cas la recusació d'altres membres del Tribunal.

Article 41

1. La Justícia constitucional és gratuïta. No obstant, les parts en el procés corren a càrrec dels costos materials que generin llurs pretensions, aitals com defensa i representació, documents que sol.licitin, auxili judicial, compareixença de testimonis a instància seva i, en general, totes aquelles despeses que es derivin de la gestió ordenada pel Tribunal atenent les seves peticions processals.

2. Es pot condemnar en costes a una de les parts de totes les despeses generades en el procés quan la pretensió sigui irraonable o temerària.

Article 42

Els terminis determinats a la present Llei per a l'exercici de les diverses actuacions processals són d'obligat compliment per a les parts i per al Tribunal Constitucional. No obstant això, en supòsits de necessitat i sempre que aquests terminis no es trobin determinats per la Constitució, a iniciativa del magistrat ponent adoptada d'ofici o a instància de part, el Tribunal pot acordar reduir o ampliar la seva durada mitjançant aute motivat.

Capítol segon. Dels processos d'inconstitucionalitat

Article 43

1. En els processos d'inconstitucionalitat el Tribunal Constitucional enjudicia l'adequació a la Constitució de les lleis, dels decrets legislatius i del Reglament del Consell General, o d'algun dels seus preceptes.

2. Aquests processos s'inicien per recurs directe, interposat per una cinquena part dels membres de dret del Consell General, el Cap de Govern o tres Comuns, o per escrit incidental plantejat per un tribunal de la jurisdicció ordinària.

Article 44

1. Admesa a tràmit qualsevulla d'aquestes dues menes de procés i llevat que, per qualsevulla causa, es produeixi un decaïment en l'acció, el Tribunal Constitucional declara mitjançant sentència la constitucionalitat o inconstitucionalitat de la norma o normes impugnades.

2. La declaració d'inconstitucionalitat genera la nul.litat de la norma o normes impugnades.

3. La declaració de conformitat d'aquestes normes amb la Constitució impedeix el replantejament en el futur de qualsevulla mena de procés impugnatori d'aquelles que al.legui la lesió dels mateixos preceptes constitucionals.

Secció primera. Del recurs o procés directe d'inconstitucionalitat

Article 45

1. El recurs o procés directe d'inconstitucionalitat contra lleis i decrets legislatius pot ser iniciat, en el termini de trenta dies naturals comptats des de la data de publicació de la norma, per una cinquena part dels membres de dret del Consell General, pel Cap de Govern i per tres Comuns.

2. El recurs dirigit contra els reglaments del Consell General únicament pot ser iniciat per una cinquena part dels seus membres de dret.

Article 46

1. El procés comença amb la interposició de la demanda que ha de contenir els requisits enumerats a l'art. 36 d'aquesta Llei.

2. Si els demandants fossin tres o més Comuns han d'acompanyar, a més a més, certificació dels acords adoptats pels respectius òrgans col.legiats en els quals es contingui la decisió d'iniciar el procés impugnatori contra la norma de què es tracti.

3. En el supòsit contemplat a l'apartat anterior i en el de la impugnació per la cinquena part, almenys, dels membres del Consell la demanda ha de ser conjunta i compartida en tots els seus termes. Qualsevulla actuació dins del procés és imputable a tots els codemandants. El desistiment d'algun d'ells suposa decaïment en l'acció si es perdés el nombre de Comuns o Consellers exigit per interposar la demanda.

Article 47

1. L'admissió de la demanda no suspèn la vigència de la norma impugnada.

2. Admesa a tràmit la demanda pel Tribunal Constitucional, el magistrat ponent, mitjançant providència, ha de donar trasllat d'una còpia d'aquella al president de l'òrgan que va dictar la norma impugnada i al Ministeri Fiscal perquè compareguin i la contestin en el termini màxim de quinze dies naturals.

3. Els escrits de contestació a la demanda han de formular les al.legacions tant en fets com en fonaments jurídics que estimin pertinents; han de proposar, si és el cas, els mitjans provatoris i pràctica de la prova que per al seu interès convingui; i han d'acompanyar la documentació que acrediti les condicions de representació i postulació.

4. En cas d'aplanament conjunt per part del Ministeri Fiscal i de l'òrgan que va dictar la norma impugnada a totes les pretensions de la part demandant, el Tribunal, mitjançant sentència, declara la inconstitucionalitat de la dita norma sense més tràmits. En cas d'aplanament parcial, continua la causa si bé la sentència ha d'acollir, en els termes indicats, els efectes d'aquell.

Article 48

1. Rebudes les contestacions a la demanda, el magistrat ponent obre a totes les parts, mitjançant providència, un termini comú de set dies naturals per a la formalització i la pràctica de la prova. El ponent admet les que consideri adequades a les pretensions de les parts i rebutja aquelles altres que estimi inadequades sense ulterior recurs, fixant les dates i formes de llur realització dins dels set dies naturals següents.

2. Practicada la prova, amb trasllat immediat de la causa a les parts, aquestes poden formular les seves conclusions definitives mitjançant escrit en un termini d'uns altres set dies hàbils.

Article 49

Finalitzades les actuacions, el Tribunal dicta sentència dins dels quinze dies següents al del lliurament de conclusions per les parts i, en qualsevol cas, dins del termini màxim de dos mesos comptats des de la data de l'admissió del recurs.

Article 50

La sentència del Tribunal es comunica a les parts i s'envia perquè sigui immediatament publicada en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, moment a partir del qual tindrà els efectes corresponents.

Article 51

1. Les sentències estimatòries de la inconstitucionalitat de la totalitat o d'una part de les normes impugnades a través del procés regulat a aquesta secció, han de declarar llur nul.litat radical i l'eliminació dels efectes que poguessin haver produït durant el seu període de vigència. Amb aquest fi, s'ha de publicar com a annex a la corresponent sentència la taula de vigència de les normes que havien estat derogades pels preceptes declarats inconstitucionals i s'ha d'obrir un termini no superior a quinze dies perquè els interessats puguin sol.licitar davant els poders públics ser reposats en la situació jurídica afectada per aitals preceptes.

2. No obstant allò que s'indica en el paràgraf anterior, no es poden modificar les situacions jurídiques creades per sentències fermes amb valor de cosa jutjada, llevat en els casos de retroactivitat positiva, ni aquelles altres que hagin suposat l'adquisició d'un dret subjectiu.

Secció segona. Del procés incidental d'inconstitucionalitat iniciat pels Tribunals ordinaris

Article 52

En l'exercici de la seva funció jurisdiccional, els batlles, el Tribunal de Batlles, el Tribunal de Corts i el Tribunal Superior de Justícia d'Andorra es troben legitimats per sol.licitar l'obertura d'un procés incidental d'inconstitucionalitat contra lleis, decrets legislatius i normes amb força de llei, qualsevulla que sigui la data a partir de la qual són vigents.

Article 53

1. És procedent la interposició de l'acció d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional si, en qualsevulla fase d'un procés jurisdiccional ordinari, l'òrgan judicial que es troba coneixent d'aquest estima, d'ofici o a instància de part, que una de les normes mencionades a l'article anterior i d'imprescindible aplicació per a la solució de la causa principal o d'algun incident substanciat en aquesta és contrària a la Constitució.

2. La dita estimació d'inconstitucionalitat s'ha de fonamentar en la impossibilitat d'una interpretació de la norma o normes conforme a la Constitució, en el raonament i explicació del seu caràcter de norma imprescindible per a la solució de la causa principal o de l'incident de què es tracti i en la inexistència d'una resolució o sentència del Tribunal Constitucional que n'hagi declarat la constitucionalitat en els termes als quals es refereix l'art. 44.3 d'aquesta Llei.

3. Abans d'interposar l'escrit davant del Tribunal Constitucional que planteja l'acció esmentada a l'apartat 1 d'aquest article, l'òrgan judicial ha de consultar a les parts i al Ministeri Fiscal si fos present a la causa. Oïdes aquestes i sota la seva exclusiva responsabilitat, decideix sobre la interposició mitjançant aute. La decisió adoptada en aquest aute no és recurrible, sens perjudici que si és negativa, pugui ser replantejada la petició en instàncies successives si processalment n'hi hagués.

Article 54

En el supòsit que la norma o normes aplicables estimades contràries a la Constitució fossin de vigència anterior a aquesta, l'òrgan judicial podrà optar entre la interposició de l'acció referida o declarar-les derogades en el moment processal oportú. En qualsevol cas, la declaració de derogació no suposa l'anul.lació de la norma pre-constitucional sinó la simple constatació motivada de la no-vigència.

Article 55

1. Acordada la interposició de l'acció a la qual es refereixen els preceptes anteriors, l'òrgan judicial ha de formar peça separada amb les actuacions celebrades amb aquest objecte i elevar escrit al Tribunal Constitucional acompanyant aquesta peça i exposant els fonaments en què basa els seus dubtes sobre la constitucionalitat de la norma o normes, així com els preceptes constitucionals que entén vulnerats, juntament amb els requisits exigits a l'article 36 d'aquesta Llei.

2. La causa principal o, si és el cas, l'incident continuaran la seva tramitació fins arribar a la fase de dictar sentència o resolució en què es detura la tramitació fins que el Tribunal Constitucional pronunciï el seu aute de resolució o la seva sentència. Si l'incident que ha donat lloc al procés d'inconstitucionalitat versés sobre nul.litat d'actuacions, no es pot dictar sentència a la causa principal fins que es produeixi el pronunciament constitucional.

Article 56

1. Rebut l'escrit i la peça separada a la qual al.ludeix l'article anterior, el Tribunal Constitucional admet o inadmet l'acció d'inconstitucionalitat mitjançant aute motivat. Contra l'aute d'inadmissió es pot interposar el recurs de súplica al qual es refereix l'article 39.2 d'aquesta Llei.

2. Admesa l'acció i iniciat el procés incidental, hi són parts l'òrgan judicial que el promou, l'òrgan que va dictar la norma impugnada i el Ministeri Fiscal. Poden personar-se com a coadjuvants les parts presents en el procés judicial a quo.

3. Si la impugnació va dirigida contra normes pre-constitucionals, serà part el Consell General qualsevol que fos l'òrgan que en el seu moment les va dictar.

Article 57

1. La substanciació del procés incidental fins arribar a la sentència segueix els mateixos tràmits que els assenyalats per al recurs directe d'inconstitucionalitat.

2. El pronunciament contingut en la sentència del Tribunal Constitucional vincula en els seus termes l'òrgan judicial que ha interposat l'acció. Queda exceptuat, però, per al present cas, el principi d'inaplicabilitat provisional de les sentències desestimatòries interpretatives que conté l'article 8.2 de la present Llei, les quals vinculen l'òrgan judicial accionant en el sentit interpretatiu que s'hi conté i a fi que pugui dictar sentència a la causa principal.

Article 58

1. Les sentències desestimatòries de la inconstitucionalitat al.legada tenen els mateixos efectes que les dictades en el procés o recurs directe.

2. Les sentències que estimin la inconstitucionalitat parcial o total de les normes impugnades tenen efecte des de la data en què es publiquin en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Llevat en els supòsits d'aplicació retroactiva favorable, subsisteixen els efectes pendents originats per les dites normes abans de la seva anul.lació fins que no se'n dictin de noves que regulin les situacions jurídiques preexistents.

Capítol tercer. Del procediment previ de control de constitucionalitat dels tractats internacionals

Article 59

Els tractats internacionals aprovats pel Consell General o conclosos pel Govern en els termes contemplats a l'article 64 de la Constitució, poden ser objecte de control de constitucionalitat pel Tribunal Constitucional a petició d'un o dels dos Coprínceps, d'una cinquena part dels membres de dret del Consell General o del Cap de Govern.

Article 60

1. El procediment s'inicia mitjançant escrit de sol.licitud de dictamen de constitucionalitat i ha de ser presentat davant del Tribunal Constitucional, amb els requisits exigits en l'article 36 d'aquesta Llei, dins el termini comú comprès entre el vuitè i el quinzè dia que la Constitució atorga als Coprínceps per manifestar el consentiment de l'Estat.

2. La interposició de l'escrit davant del Tribunal Constitucional impedeix la ratificació del tractat fins al moment en què el Tribunal emeti el seu dictamen amb els efectes previstos a l'article 62 d'aquesta llei.

Article 61

1. Admès l'escrit, el Tribunal Constitucional n'ha d'ordenar la tramitació preferent i donar trasllat immediat al Consell General o al Govern, segons si el tractat que s'ha de dictaminar és dels compresos en l'apartat 1 de l'article 64 de la Constitució o en l'apartat 2 de l'article 64

d'aquesta, perquè compareguin i contestin en el termini màxim de deu dies hàbils.

2. El magistrat ponent ha de recaptar tots els informes i documents que estimi necessaris per formular la seva proposta de dictamen que, en tot cas, ha de presentar al Ple del Tribunal en un termini màxim de quinze dies hàbils comptats des de la data d'entrada de l'escrit de contestació. El Tribunal emetrà el dictamen de constitucionalitat dins dels tres dies posteriors al de la formulació de l'esmentada proposta.

Article 62

1. El dictamen ha de pronunciar-se sobre l'adequació a la Constitució de les estipulacions del tractat que hagin estat qüestionades.

2. Si tingués algun pronunciament d'inconstitucionalitat el tractat no pot ratificar-se. En aquest cas, el Tribunal ha d'indicar els preceptes constitucionals que resultin afectats i el contingut de la possible reforma per si fos procedent la previsió del paràgraf segon, apartat 2 de l'article 101 de la Constitució.

Capítol quart. Del procediment de dictamen previ sobre l'adequació a la Constitució de les lleis instat pels Coprínceps

Article 63

Les previsions i atribucions competencials realitzades per la Constitució als articles 45.2, paràgraf segon, 46.1 e) i 98 b), en allò referit al dictamen previ d'inconstitucionalitat sobre les lleis, es desenvolupen mitjançant el procediment únic regulat en aquest capítol.

Article 64

Les lleis aprovades pel Consell General a les quals es refereixen els articles 45.1 g) i 63 de la Constitució poden ser sotmeses per un o tots dos Coprínceps a control previ de constitucionalitat, mitjançant escrit conjunt o individualitzat de requeriment de dictamen al Tribunal Constitucional.

Article 65

1. La interposició de l'escrit ha de fer-se entre el vuitè i el quinzè dia del termini destinat a la sanció de les lleis tal com assenyala l'article 45.2 de la Constitució i amb els requisits establerts per l'article 36 d'aquesta Llei.

2. La interposició de l'escrit de requeriment de dictamen interromp el transcurs del termini de sanció.

Article 66

Admès l'escrit pel Tribunal Constitucional, la tramitació posterior d'aquest procediment s'ha d'ajustar a allò que disposen els articles 47, apartats 2 i 3 i 48 d'aquesta Llei.

Article 67

1. El dictamen emès pel Tribunal Constitucional, en forma d'aute, declara l'adequació o inadequació parcial o total de la llei a la Constitució d'acord amb les peticions fetes als escrits d'interposició.

2. Si cadascun dels Coprínceps hagués requerit dictamen individualitzadament, el pronunciament del Tribunal ha de recaure sobre totes i cadascuna de les pretensions dels requeridors en document únic.

3. Després de l'aprovació del dictamen, el Tribunal ho notifica a tots els òrgans que han intervingut en el procediment i ordena que es publiqui immediatament en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Article 68

1. Si el procediment només hagués estat instat per un dels dos Coprínceps, la declaració del Tribunal favorable a la constitucionalitat total de la llei objecte del dictamen no impedeix que el requeridor pugui abstenir-se de sancionar la llei, en els termes del paràgraf segon de l'apartat 2 de l'article 45 de la Constitució.

2. Si el procediment hagués estat instat pels dos Coprínceps i la declaració del Tribunal fos igualment favorable a la constitucionalitat de la llei, aquesta ha de ser promulgada amb la sanció, almenys, d'un d'ells.

3. Si el Tribunal declarés la inconstitucionalitat parcial o total de la llei objecte del dictamen no és procedent la sanció de cap dels dos Coprínceps, sens perjudici d'allò que disposa el següent apartat.

4. En el supòsit d'inconstitucionalitat parcial de la llei, es presumeixen vàlids la resta dels seus preceptes. El Consell General pot demanar la sanció dels Coprínceps per als preceptes vàlids perquè siguin publicats com a llei.

Capítol cinquè. Dels conflictes de competències entre els òrgans constitucionals de l'Estat

Secció primera. Dels conflictes de competències constitucionals entre el Consell General i el Govern i els Comuns o d'aquests entre si

Article 69

1. Si els actes, resolucions o disposicions normatives del Consell General o del Govern envaïssin l'àmbit competencial reservat per la Constitució als Comuns, o si els Comuns exercissin competències, pròpies del Consell General, del Govern o d'un altre Comu, els òrgans afectats poden formalitzar conflicte de competències davant del Tribunal Constitucional.

2. És igualment procedent la formalització del conflicte, quan la inactivitat competencial d'algun dels òrgans generals de l'Estat o dels Comuns impedeix, obstaculitza o lesiona a l'altra en l'exercici d'una competència que li és pròpia o vulnera algun dret subjectiu dels particulars.

3. En el cas que l'envaïment competencial s'atribuís a una llei del Consell General o a un decret legislatiu del Govern, el conflicte se substancia a través del procés d'inconstitucionalitat regulat al capítol II del títol II d'aquesta Llei en tots els seus extrems, inclòs el de la legitimació activa.

Article 70

A l'efecte de determinar la naturalesa constitucional de les competències en litigi i de llur resolució, el Tribunal, a més de les previsions constitucionals, aplica allò que disposi la llei o lleis qualificades que delimiten les competències dels Comuns, determinen les seves facultats econòmiques i fiscals i asseguren les aportacions de l'Estat al pressupost comunal.

Article 71

1. Llevat del supòsit previst en l'article 69.3 d'aquesta Llei, abans de procedir a la formalització del conflicte davant del Tribunal Constitucional, l'òrgan afectat per l'acte, resolució o disposició ha de requerir al seu titular perquè cessi en

l'activitat que reputa invasora o anul.li aital resolució o disposició.

2. L'esmentat requeriment s'ha d'efectuar en el termini de quinze dies hàbils des que va tenir notificació o coneixement de l'acte, resolució o disposició. Si transcorreguts quinze dies hàbils més l'òrgan requerit no es pronunciés, s'entén que la pretensió és desestimada.

Article 72

1. El conflicte de competències s'inicia mitjançant la interposició d'un escrit de demanda davant del Tribunal Constitucional, dins del termini de vint dies hàbils comptats des del moment de la notificació de la desestimació expressa del requeriment o del transcurs del termini de la desestimació tàcita.

2. L'escrit, a més dels requisits generals establerts a l'article 36 d'aquesta Llei, ha d'acompanyar la documentació que acrediti haver-se realitzat el requeriment en els termes establerts en l'article anterior i contenir la petició expressa, si és el cas, que el Tribunal suspengui l'exercici de la competència impugnada.

Article 73

El Tribunal Constitucional, a més de per les causes generals, pot inadmetre l'escrit de demanda:

a) Per entendre que la competència en litigi no és de naturalesa constitucional.

b) Perquè el conflicte ha de ser substanciat per altres vies processals diferents.

c) Per haver-se pronunciat anteriorment sobre aquesta mateixa competència.

Article 74

1. Admès l'escrit de demanda i rebuda la contestació, d'acord amb les normes generals de tramitació, el Tribunal, mitjançant aute, decideix sobre la suspensió dels efectes de l'acte, resolució o disposició impugnats.

2. És procedent en tot cas acordar la suspensió d'aquests efectes, quan, si es mantinguessin, es pogués causar perjudicis a l'altra part de difícil o impossible reparació o quan l'exercici de la competència pogués consumar-se al llarg del procés sense posterior continuïtat buidant de contingut l'objecte del litigi.

Article 75

La sentència atribueix la competència litigiosa a alguna de les dues parts, amb determinació de la matèria i de la funció que comprèn i decideix sobre la validesa dels actes jurídics realitzats com a conseqüència de l'exercici de la dita competència. Les responsabilitats per danys, si n'hi hagués, són exigibles davant de la jurisdicció ordinària.

Article 76

1. Els conflictes per inactivitat competencial es tramiten de conformitat amb allò que s'estableix a la secció present, quan el demandant sigui algun dels òrgans públics que hi són mencionats.

2. L'escrit de requeriment ha de sol.licitar de l'altre òrgan l'exercici de la competència. Quant a la resta, es regeixen per les mateixes normes.

3. A l'escrit d'interposició, s'ha de fer constar la connexió causal entre la inactivitat competencial al.legada i la impossibilitat d'exercici de la competència pròpia. Quant a la resta, es regeix per les mateixes normes.

4. Quan l'òrgan requerit per inactivitat competencial sigui un Comú, el Tribunal ha de tenir en compte, a més de la Constitució i les lleis qualificades a què es refereix l'article 70 d'aquesta Llei, les lleis que hagin transferit competències de titularitat estatal a les Parròquies.

5. La sentència atribueix la competència i n'ordena l'exercici, adoptant les mesures necessàries per al compliment de la seva decisió.

Article 77

Quan el demandant sigui un particular, el conflicte es tramita d'acord amb les disposicions relatives als conflictes negatius de competències contemplades a la secció següent d'aquest capítol.

Secció segona. Dels conflictes de competències entre els Coprínceps, el Consell General, el Consell Superior de la Justícia i el Govern

Article 78

1. El conflicte positiu de competències o atribucions entre els òrgans generals de l'Estat es planteja davant del Tribunal Constitucional quan un d'aquests entén que l'altre envaeix l'àmbit de competències que li és reconegut constitucionalment. Estan legitimats per interposar aquest conflicte positiu de competències els Coprínceps, el Consell General, el Consell Superior de la Justícia i el Govern.

2. Es pot interposar un conflicte negatiu de competències o atribucions pel no exercici d'aquestes per qualsevol dels òrgans que s'acaben d'assenyalar. La legitimació activa correspon, a més dels òrgans esmentats, a les persones físiques i jurídiques que actuïn en defensa d'un dret subjectiu propi.

Article 79

El conflicte positiu de competències se substancia en tots els tràmits d'acord amb allò que estableixen els articles 69, i 71 a 75 d'aquesta Llei.

Article 80

1. Qualsevol dels òrgans constitucionals referits en aquesta secció pot requerir a un altre perquè exerceixi una atribució o competència que la Constitució li assigna.

2. És susceptible de requeriment el no exercici d'atribucions constitucionals que, per mandat exprés de la Constitució o per disposar-ho d'aquesta manera alguna llei qualificada, imposin als òrgans corresponents una obligació de fer i l'incompliment de la qual suposi una lesió a l'interès general o al funcionament normal de les institucions de l'Estat.

3. Sense perjudici de la responsabilitat política que origini, en cap cas pot ser objecte d'aquesta mena de requeriment el no exercici de facultats discrecionals ni el d'aquelles que exigeixin ser regulades per llei o decret legislatiu.

Article 81

En allò que s'escaigui és d'aplicació al conflicte negatiu de competències formulat pels òrgans constitucionals de referència el que disposa la secció 1ª d'aquest capítol i, en particular, els articles 71, 72, 73 i 76, aquest darrer en els apartats 1, 2 i 5.

Article 82

1. Quan una persona física o jurídica formulés una pretensió basada en l'existència d'un dret subjectiu propi davant

un dels òrgans anteriorment mencionats i aquest declinés la seva competència per entendre que correspon a un altre d'entre aquests, ha de dirigir-se a aquest darrer reiterant la mateixa pretensió en un termini màxim de quinze dies hàbils comptats des del moment de la notificació de l'acord. Si el segon òrgan requerit es manifestés també incompetent, el sol.licitant pot interposar davant el Tribunal Constitucional el conflicte negatiu de competències.

2. No es pot declinar la competència per silenci. Si transcorregut un mes des de la presentació de la sol.licitud a què es refereix l'apartat anterior l'òrgan requerit no contestés, es presumeix que entén ser titular de la competència amb l'exercici del qual pot reconèixer o denegar el dret subjectiu que s'al.lega. Produït el silenci, resta expedita la via jurisdiccional ordinària contra l'òrgan que tàcitament ha admès la competència.

Article 83

La formalització del conflicte davant el Tribunal ha de fer-se en el termini de quinze dies hàbils comptats des del moment de la notificació de l'acord negatiu del segon dels òrgans als quals fa referència l'apartat 1 de l'article anterior, mitjançant escrit en què es continguin els requisits generals exigits per l'article 36 d'aquesta Llei i la documentació que acrediti haver efectuat els requeriments a què es refereix l'article anterior.

Article 84

La substanciació d'aquest procés s'efectua de conformitat amb les disposicions dels articles 69, i 71 a 75 d'aquesta Llei. La sentència del Tribunal Constitucional atribueix la competència a un dels òrgans requerits i obre la via perquè davant d'aquest es tornin a exposar les pretensions que en dret s'escaiguin, sens perjudici de les responsabilitats per danys que han de ser exigides davant la jurisdicció ordinària.

Capítol sisè. Del recurs d'empara

Article 85

Per mitjà del recurs o procés d'empara, el Tribunal Constitucional garanteix, com a instància jurisdiccional superior, els drets reconeguts en els capítols III i IV del títol II de la Constitució, llevat del dret a què es refereix l'article 22 d'aquesta.

Article 86

El recurs d'empara, llevat dels supòsits contemplats en els articles 95 i 96 d'aquesta Llei, s'interposa enfront sentències desestimatòries de la demanda dictades en última instància per la jurisdicció ordinària en el decurs del procediment urgent i preferent previst a l'article 41.1 de la Constitució.

Article 87

1. Estan legitimats per interposar recurs d'empara constitucional qui hagin estat part demandant o coadjuvant d'aquesta en el procediment referit a l'article anterior.

2. Són part demandada i coadjuvant en el recurs d'empara qui hagin ostentat aquesta condició a la instància precedent.

Article 88

1. La interposició del recurs d'empara s'efectua mitjançant escrit, dins el termini de quinze dies hàbils comptats des de la data de notificació de la sentència que s'impugna, d'acord amb les condicions generals exigides a l'article 36 d'aquesta Llei, demanant l'anul.lació de la dita sentència i, si és el cas, la suspensió dels seus efectes, i reiterant la pretensió de protecció jurisdiccional del dret la lesió del qual s'addueix en els mateixos termes formulats a la instància a quo.

2. No s'admet cap recurs d'empara que modifiqui el contingut de la pretensió de protecció del dret o drets plantejada en el procediment urgent i preferent anterior.

Article 89

1. Presentat l'escrit esmentat a l'article anterior, el Tribunal Constitucional requereix a l'òrgan jurisdiccional la sentència del qual es recorre perquè li traslladi la causa en un termini de tres dies hàbils i nomena magistrat ponent.

2. A la vista de les actuacions, decideix mitjançant aute l'admissibilitat del recurs. Contra l'aute d'inadmissió es pot interposar el recurs de súplica esmentat a l'article 38 d'aquesta Llei.

Article 90

1. Admès el recurs a tràmit, i després de pronunciar-se sobre la suspensió dels efectes de la sentència recorreguda si s'escaigués, el Tribunal trasllada aquest a la part demandada, als seus coadjuvants i al Ministeri Fiscal a fi que al.leguin allò que en dret s'escaigui en un termini no superior a quinze dies hàbils.

2. Rebudes les al.legacions, s'obre un nou termini de sis dies hàbils perquè les parts i el Ministeri Fiscal formulin llurs conclusions.

Article 91

1. Sens perjudici d'allò que disposa l'article 35.2 d'aquesta Llei, el Tribunal considera fets provats els que figurin amb aital caràcter a la causa recorreguda.

2. El Tribunal dicta sentència dins el termini de dos mesos comptats des de la data d'admissió del recurs.

Article 92

1. L'estimació del recurs pot ser total o parcial.

2. L'estimació total suposa l'anul.lació de la sentència recorreguda i de tots els efectes d'aquesta, la declaració d'haver-se lesionat un dret constitucional i la reposició del recurrent en la plenitud del seu dret mitjançant l'adopció de les mesures necessàries que portin a aquest fi. Si la lesió del dret fos materialment irreparable, el Tribunal determina el tipus de responsabilitat en què ha incorregut el subjecte que va violar el dret, a fi que pugui ser exigida davant la jurisdicció ordinària.

3. L'estimació parcial es produeix quan el Tribunal considera vàlids algun o alguns dels pronunciaments continguts en la sentència recorreguda. En relació amb el dret que es considera lesionat són d'aplicació a l'estimació parcial els requisits continguts en l'apartat anterior.

4. La desestimació del recurs d'empara comporta la condemna en costes del recurrent.

Article 93

Llevat allò que disposa l'article següent, les sentències dictades per la jurisdicció ordinària en la resta de procediments no són revisables pel Tribunal Constitucional i tenen naturalesa

de cosa jutjada d'acord amb les lleis processals.

Article 94

1. Si es produís vulneració d'algun dels drets recollits en l'article 10 de la Constitució en el decurs o amb motiu d'un procediment judicial o prejudicial, el subjecte afectat ha d'al.legar aquesta lesió en defensa del seu dret davant l'òrgan judicial ordinari pels mitjans i recursos que la legislació estableixi.

2. Esgotada sense èxit la via judicial ordinària en defensa del dret constitucional lesionat, en el termini de sis dies hàbils comptats dels del moment de la notificació de l'última resolució denegatòria, pot dirigir-se mitjançant escrit al Ministeri Fiscal perquè aquest interposi recurs d'empara constitucional. S'ha d'adjuntar a aquest escrit còpia de les actuacions realitzades en defensa del dret i de les resolucions hagudes als procediments corresponents.

3. El Ministeri Fiscal ha de resoldre en els sis dies hàbils següents si, d'acord amb l'establert a l'article 102 c) de la Constitució, és procedent la interposició del recurs d'empara. Contra aquesta resolució no es pot interposar recurs.

4. Si la resolució fos positiva o estimatòria, el recurs d'empara ha de ser interposat dins del termini de vint dies hàbils comptats a partir de la darrera resolució denegatòria. A la formalització i tràmit de l'esmentat recurs actuen com a parts codemandants el Ministeri Fiscal i el subjecte del dret constitucional objecte d'aquest. La resta del procediment es regeix per allò que disposen els articles 91 a 93 d'aquesta Llei.

Article 95

1. Les disposicions, resolucions i actes del Consell General que no tinguin caràcter de Llei i lesionin algun dels drets a què es refereix l'article 85 d'aquesta Llei, poden ser impugnats directament a través del procés d'empara pels subjectes afectats.

2. La interposició de l'escrit d'impugnació i sol.licitud d'empara constitucional ha d'efectuar-se en el termini de quinze dies hàbils comptats des de la data de notificació o, si és el cas, publicació de la disposició, resolució o acte i d'acord amb les condicions generals de l'article 36 d'aquesta Llei.

Article 96

1. L'admissió o inadmissió a tràmit per part del Tribunal es regeix per les normes generals del procediment d'empara especificades en aquest capítol.

2. A la impugnació dels actes, resolucions i disposicions del Consell General s'inclou, si és el cas, el tràmit de recepció a prova.

3. La sentència que posi fi al procediment ha d'estimar o desestimar la pretensió, amb els pronunciaments generals, en aquest darrer cas, previstos en l'article 94.2 d'aquesta Llei.

Disposició addicional

Són d'aplicació supletòria als procediments i processos regulats en la present Llei les normes processals reguladores dels processos jurisdiccionals ordinaris.

Disposició transitòria primera

1. La sessió constitutiva del Tribunal Constitucional, després del nomenament dels quatre primers magistrats constitucionals en aplicació d'allò que disposa la Constitució i la present Llei, ha de ser convocada pel Síndic General i presidida pel magistrat elecle de més edat dins dels quinze dies següents al que s'haguessin publicat els nomenaments de tots ells.

2. En aquesta sessió es farà un sorteig per determinar el nomenament del president del Tribunal i l'ordre de successió a la presidència, segons allò que estableix la Constitució. A aquests efectes, cada magistrat, mitjançant insaculació, extraurà una de les boles numerades de l'u al quatre. El número obtingut per cadascun d'ells determina l'ordre successiu d'ocupació de la presidència segons l'origen del nomenament.

3. Seran proclamats president i vicepresident els magistrats que hagin obtingut els números u i dos.

Disposició transitòria segona

1. Els magistrats elegits per al primer mandat del Tribunal Constitucional que hagin obtingut els números dos, tres i quatre a la insaculació a què es refereix la disposició anterior, a fi de complir les previsions constitucionals sobre el torn rotatori en els càrrecs, cessaran en llur mandat quan l'hagin exercit durant sis, quatre i dos anys, respectivament.

2. Els magistrats que hagin complert dos i quatre anys podran ser nomenats per a un mandat consecutiu posterior.

3. El Consell General, a efectes de la rotació indicada i de l'elecció del successor, tindrà en compte el número obtingut pels magistrats designats per aquest, de forma que en cada nova elecció el magistrat ocupi el lloc corresponent en el funcionament intern del Tribunal.

Disposició transitòria tercera

Sense perjudici de la seva adscripció definitiva al règim general de funcionaris de l'Administració, la primera designació i nomenament dels titulars dels càrrecs de secretari i oficial-lletrat del Tribunal Constitucional, als que es refereix l'article 29 d'aquesta Llei, es farà mitjançant acord del Consell General.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Coprínce d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Coprínce d'Andorra

Llei qualificada de la Justícia

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei qualificada de la Justícia

Títol I
Exercici de la potestat jurisdiccional
Capítol I
Jurisdicció i competència
Capítol II
Del Batlle i Magistrat Ponent
Capítol III
De les resolucions judicials

Títol II
El Consell Superior de la Justícia
Capítol I
Govern de l'organització judicial
Capítol II
Organització i funcionament del Consell Superior de la Justícia
Capítol III
Competència del Consell Superior de la Justícia

Títol III
Extensió i límits de la jurisdicció i organització i funcionament dels Tribunals
Capítol I
Règim de la Batllia i Tribunals
Capítol II
La Batllia d'Andorra (El Batlle i el Tribunal de Batlles)
Capítol III
El Tribunal de Corts
Capítol IV
El Tribunal Superior d'Andorra
Capítol V
Els Secretaris judicials

Títol IV
Conflictes de competència

Títol V
Estatut dels Batlles i Magistrats
Capítol I
Jurament, presa de funcions i promoció
Capítol II
Inamovibilitat
Capítol III
Règim d'incompatibilitats i prohibicions
Capítol IV
Recusació i abstenció
Capítol V
Responsabilitats civils i penals
Capítol VI
Règim disciplinari

Títol VI
El Ministeri Fiscal

Títol VII
Cooperadors de l'Administració de Justícia
Capítol I
La Policia Judicial
Capítol II
Els advocats
Capítol III
Els Procuradors dels Tribunals

Títol VIII
Disposició addicional

Títol IX
Disposicions transitòries i finals
Capítol I
Disposicions transitòries
Capítol II
Disposicions finals

Exposició de motius

L'article 1 de la Constitució, en el seu segon paràgraf, proclama com a principi inspirador de l'acció de l'Estat andorrà el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona.

Per traduir en la pràctica judicial diària aquests principis inspiradors de l'Estat de Dret cal assegurar l'existència d'uns òrgans que, des de la seva independència constitucionalment garantida, puguin executar i aplicar imparcialment les normes que neixen de la voluntat popular, d'acord amb el que disposa l'article 85 de la Constitució.

La Constitució, que és la norma suprema de l'ordenament jurídic, vincula a tots els Batlles, Magistrats i Tribunals, els quals interpretaran i aplicaran les lleis de conformitat amb els preceptes i principis constitucionals.

És doncs missió cabdal dels òrgans judicials sotmetre tots els poders públics al compliment de la llei, controlar la legalitat de l'actuació administrativa i oferir a tots els ciutadans una protecció efectiva en l'exercici dels seus drets i en la defensa dels seus interessos legítims.

L'article 85 de la Constitució andorrana disposa que l'estructura, composició i funcionament de l'organització judicial, que ha de ser única, serà regulada per Llei Qualificada, a l'igual que l'estatut jurídic dels seus membres.

Les exigències del desenvolupament constitucional han imposat al Consell General l'elaboració d'aquesta Llei Qualificada sense poder esperar a l'adopció coetània de les necessàries adaptacions i modificacions de les vigents lleis processals. Aquesta mancança podria introduir una sensació de provisionalitat que les disposicions transitòries vénen a matisar i circumscriure.

Els eixos principals de la Llei estan dibuixats en el Títol I, que recull bona part dels principis consagrats per la Constitució.

De manera especial cal remarcar que la plena independència judicial, dels Batlles, Magistrats i Tribunals, ha de ser valorada posant-la en relació amb el caràcter de totalitat amb què la Llei dota a la potestat jurisdiccional.

A partir de l'entrada en vigència d'aquesta Llei els Tribunals controlaran, sense excepcions ni zones reservades, la potestat reglamentària i l'activitat administrativa, amb la qual cosa cap actuació del poder executiu quedarà sostreta a la fiscalització d'un poder judicial independent i sotmès exclusivament a l'imperi de la llei.

Precisament per garantir la independència del poder judicial, la Constitució andorrana ha creat el Consell Superior de la Justícia, al qual encomana, en l'article 89, la representació, govern i administració de l'organització judicial, devent vetllar per la seva independència i bon funcionament. El Títol II de la present Llei desenvolupa així les competències i facultats d'aquest important òrgan constitucional.

D'altra banda, la posta en pràctica del dret a la jurisdicció i a una tutela judicial efectiva consagrat a l'article 10 de la Constitució andorrana requeria com a condició indispensable, que tots els òrgans jurisdiccionals comptessin amb els titulars suficients. Aquesta voluntat, con-

juminada amb el fet que, en l'àmbit civil, es redueix una instància, en considerar el legislador excessiva l'actual possibilitat d'esgotar tres instàncies, ha portat a la conclusió que calia augmentar el nombre de Batlles. La tradicional figura andorrana del Batlle experimenta així, amb aquesta Llei, una transformació important.

La Batllia d'Andorra esdevé una primera instància unificada en els tres àmbits tradicionals de la jurisdicció: civil, penal i administrativa. El Jutjat de Delictes Menors desapareix del nou organigrama i les seves competències són absorbides pel Tribunal de Batlles. L'apel.lació de les decisions que adoptin els Batlles, en tant que Tribunal unipersonal o el Tribunal de Batlles, en tant que jurisdicció col.legiada, serà substanciada davant el Tribunal de Corts, en matèria penal, o bé davant el Tribunal Superior de Justícia.

El nou sistema processal andorrà limita així els recursos a un segon grau de jurisdicció en tots els àmbits, salvat en matèria constitucional. Aquest nou plantejament obliga el legislador a donar al Tribunal Superior, ara també unificat i estructurat en tres sales (civil, penal i administrativa), que compta amb plena jurisdicció, els mitjans per assegurar de manera adient la funció reguladora del Dret que pertany, en altres països, al Tribunal de Cassació.

De manera especial en matèria de dret privat, el paper de la Sala Civil, que ve a substituir els dos Tribunals Superiors de la Mitra i de Perpinyà, serà força important en la recerca del Costum i el dret supletori, així com en la seva evolució. La Jurisprudència, font del dret ara unificada, comptarà també amb una autoritat més gran i farà possible una estabilitat jurídica atès que es fa difícil pensar que el legislador andorrà vulgui, en el futur immediat, orientar-se vers una codificació del Dret privat.

D'altra banda, l'establiment d'un veritable Estat de Dret, amb la seguretat jurídica i el recurs més sovintejat a la justícia que comporta, conjuminat amb la multiplicació dels textos legislatius i reglamentaris que amb tota seguretat es promulgaran en el marc de l'endegament de les noves institucions i amb la facilitat d'accedir a una justícia civil esdevinguda lliure de taxes per assegurar la seva gratuïtat, suposarà obligatòriament un augment del nombre de litigis. Aquest més que previsible augment del contenciós judicial fa indispensable el nomenament d'un nombre de Batlles i Magistrats suficient per assegurar, a tots els nivells, a la vegada la qualitat i el rendiment del treball de l'oficina judicial.

La Llei consolida també la institució del Ministeri Fiscal, que té per missió de vetllar per la defensa i aplicació de l'ordre jurídic i per la independència dels tribunals i de promoure davant d'aquests l'aplicació de la llei per a la salvaguarda dels drets dels ciutadans i la defensa de l'interès general.

Tot i que cal fer remarcar, també aquí, que el calendari constitucional obliga a deixar per a una ulterior disposició legal la configuració del que ha de ser un veritable estatut del Ministeri Fiscal, convé remarcar que, ja des d'ara, es reforça el paper de la Fiscalia donant-li determinades facultats de direcció de l'acció de la policia en matèria judicial i consagrant el principi d'obligada informació al Ministeri Fiscal per part de la policia.

La funció dels Advocats queda també consagrada com a representants i defensors de les parts atès que a ells els hi correspon garantir l'assistència jurídica al ciutadà en els judicis i, en tot cas, en els afers penals.

Finalment, les Disposicions Transitòries i Finals fan possible l'adequació ordenada de l'organització judicial vigent a la que aquesta Llei estableix i fan referència a la necessària adopció posterior de lleis de desenvolupament que han de permetre adaptar les actuals normes de procediment a la nova organització judicial.

Títol I. Exercici de la potestat jurisdiccional

Capítol primer. Jurisdicció i competència

Article 1

La jurisdicció és única i s'exerceix amb plena independència per la Batllia i Tribunals establerts en aquesta Llei, sense perjudici de les potestats jurisdiccionals reconegudes per la Constitució a altres òrgans. Queden prohibits els Tribunals especials i d'excepció i els de caràcter consuetudinari o d'àmbit corporatiu o professional.

Article 2

1. En l'exercici de la potestat jurisdiccional els Batlles i Magistrats són independents respecte a tots els òrgans judicials i el Consell Superior de la Justícia.

2. Els Tribunals no poden corregir la interpretació o aplicació de l'ordenament jurídic feta pels seus inferiors en l'ordre jeràrquic judicial si no és en virtut dels recursos i apel.lacions establerts per la Llei.

3. Ni els Tribunals ni el Consell Superior de la Justícia no poden dictar instruccions, de caràcter general o particular, adreçades als seus inferiors, sobre l'aplicació o interpretació de l'ordenament jurídic que portin a terme en l'exercici de la seva funció jurisdiccional.

Article 3

La competència dels Batlles i Tribunals s'estén a tot el territori de l'Estat, de conformitat amb la Constitució, les lleis i els tractats internacionals aprovats pel Consell General.

Article 4

1. Els Batlles i els Tribunals andorrans coneixeran dels judicis que es plantegin en territori andorrà entre andorrans, entre estrangers i entre andorrans i estrangers d'acord amb el que s'estableix en la present Llei i en els tractats i convenis internacionals en els quals Andorra hi sigui part.

2. Queden exclosos del coneixement de la jurisdicció andorrana els supòsits d'immunitat de jurisdicció i d'execució establerts per les normes de Dret Internacional Públic.

Article 5

Si en la tramitació d'un procés un tribunal té dubtes raonables i fonamentats sobre la constitucionalitat d'una llei o d'un decret legislatiu que sigui d'aplicació imprescindible per a la solució de la causa, formularà escrit davant el Tribunal Constitucional demanant el seu pronunciament sobre la validesa de la norma afectada. Presentada la qüestió de cons-

titucionalitat, se suspendrà la tramitació del procés. El Tribunal Constitucional dictarà sentència dins el termini fixat en l'article 100.2 de la Constitució.

Article 6

Els drets i llibertats reconeguts en els Capítols III i IV del Títol II de la Constitució vinculen immediatament tots els jutges i tribunals a títol de dret directament aplicable. El seu contingut, que no pot ésser limitat per la llei, és tutelat pels tribunals per mitjà d'un procediment urgent i preferent que se substanciarà en dues instàncies, d'acord amb el que disposi la llei escaient.

Article 7

Qualsevol ciutadà andorrà pot promoure l'acció de la justícia mitjançant l'acció popular, reconeguda a l'article 86.4 de la Constitució, en tots els delictes i contravencions penals contra interessos generals. A l'efecte d'admetre l'acció popular el bé jurídic protegit són aquells interessos la titularitat dels quals pertany, per la seva naturalesa o per ser patrimoni comú, a tota la ciutadania.

Els ciutadans andorrans també podran exercir l'acció popular en els delictes contra particulars, sempre que la llei no hagi reservat l'acció a la denúncia del perjudicat o quan tot i no existir aquesta reserva, el perjudicat no hagi formulat denúncia.

Article 8

L'existència d'una qüestió prejudicial penal, sempre que la seva prèvia resolució sigui imprescindible per a la resolució d'un judici civil o administratiu, comportarà la suspensió del procediment fins que aquella no hagi estat resolta per l'òrgan penal competent.

Article 9

1. Els Batlles i Tribunals, de conformitat amb els principis recollits a l'article 10 de la Constitució, hauran de resoldre sempre sobre les pretensions que els siguin formulades i només podran desestimar-les per motius formals si el defecte és insubsanable. D'igual manera hauran d'executar i fer complir les decisions judicials.

2. No obstant, refusaran motivadament i d'acord amb el que estableixi la llei de procediment, aquelles peticions, incidents i excepcions, que es formulin amb manifest abús de dret o frau de llei.

3. No seran admeses i quedaran sense efectes aquelles proves que haguessin estat obtingudes, directament o indirecta, amb violació dels drets i llibertats fonamentals de les persones.

4. Salvades raons excepcionals, que el Batlle o Tribunal haurà de notificar i motivar, els terminis establerts a les lleis de procediment vinculen per igual a tots els intervinents en qualsevol mena de litigi.

Article 10

1. Sense perjudici de les responsabilitats personals dels qui els causin, l'Estat repararà els danys originats per error judicial o pel funcionament anormal de l'Administració de Justícia, salvat en els casos de força major.

2. El dany al.legat haurà d'ésser sempre cert i efectiu, avaluable econòmicament i individualitzat en relació a una persona o grup de persones. La simple revocació o anul.lació de resolucions judicials no pressuposa per ella mateixa dret a indemnització.

3. L'acció per al reconeixement de l'error judicial o de l'anormal funcionament de l'Administració de Justícia i per a l'eventual avaluació del dany, s'haurà d'instar davant del Ple del Tribunal Superior de Justícia, dins del termini improrrogable de tres mesos, comptadors des del dia en què es pugui exercitar.

4. En el cas que l'error sigui imputat a una de les Sales del Tribunal Superior, els seus membres quedaran exclosos del coneixement de l'acció.

5. Si l'Administració pública, que sempre haurà d'ésser emplaçada, considera que el fet danyós està deslligat en tot o en part del servei i que és personalment imputable a l'autoritat, funcionari o agent que n'és l'autor, per raó de dol o negligència greu i inexcusable, demanarà al Tribunal Superior de Justícia que l'emplaci com a part en el judici, per tal que se sotmeti a la sentència.

Si l'emplaçament no es produeix en temps i forma, l'Administració pública podrà plantejar una acció de rescabalament, tal i com preveu el Codi de l'Administració.

6. Una vegada reconegut i avaluat el dany pel Tribunal Superior de Justícia i en el termini improrrogable de tres mesos a comptar de la notificació de la decisió, el beneficiari haurà d'adreçar-se al Govern el qual ordenarà el pagament mitjançant els crèdits establerts per l'article 105 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal del 15 de novembre de 1989.

Article 11

La remuneració de tots els Batlles i Magistrats, així com totes les despeses de l'Administració de Justícia en general, són a càrrec dels pressupostos de l'Estat.

Els Batlles i Magistrats reben un sou a càrrec del pressupost i no poden percebre directament o a través del pressupost cap honorari ni taxa judicial en benefici propi.

Article 12

L'obertura d'una instrucció penal en un afer pel qual estigués en curs una enquesta o investigació parlamentària o governativa no suposarà cap menyscapte per les facultats del Parlament andorrà. Tanmateix el Consell i el Govern hauran de comunicar a la Jurisdicció Penal els resultats de les seves enquestes i actuacions.

Article 13

Tant les sentències penals com les resolucions o sentències civils i administratives han de ser públiques i conegudes per les parts i pel poble en nom del qual s'administra justícia.

La Batllia i els Tribunals obriran i tindran al dia els corresponents llibres de resolucions i sentències que seran de lliure accés salvats els casos que, per raons de privacitat derivades de l'obligat respecte al dret a la intimitat reconegut per l'article 14 de la Constitució, el Tribunal acordi limitar l'accés a les parts comparegudes.

Especialment seran d'accés restringit les actuacions en els delictes que són perseguibles a instància de part, sense perjudici de la publicitat del contingut absolutori o condemnatori, i en els procediments de dret de família.

Capítol segon. Del Batlle i Magistrat Ponent

Article 14

1. En cada plet o causa que es trameti davant un Tribunal es procedirà a la designació d'un Batlle o Magistrat ponent, segons el torn establert per la Secció o Sala en iniciar-se l'any judicial.

2. La designació de ponent es farà en la primera resolució que es dicti en iniciar-se el procediment i es notificarà a les parts.

Article 15

El torn de designació de ponent abastarà tots els Batlles o Magistrats de la Secció o Sala, inclosos els Presidents.

Article 16

Correspon al ponent:

1. La tramitació ordinària del plet o causa.

2. Examinar els interrogatoris, plecs de posicions i proposicions de proves presentades per les parts, informant sobre la seva pertinença.

3. Presidir la pràctica de les proves declarades pertinents, sempre que no hagin de practicar-se davant el Tribunal.

4. Informar els recursos interposats contra les decisions de la Secció, Sala o Tribunal.

5. Proposar els autes resolutoris d'incidents, les sentències i altres resolucions que hagin de sotmetre's a discussió de la Secció, Sala o Tribunal, així com redactar-los definitivament.

Capítol tercer. De les resolucions judicials

Article 17

Les resolucions dels Tribunals quan no estiguin reunits en Secció o Sala i les dels Presidents quan tinguin caràcter governatiu, s'anomenen Acords.

Article 18

1. Les resolucions dels Batlles i Tribunals que tinguin caràcter jurisdiccional es denominen:

a) Providències, quan tinguin per objecte l'ordenació material del plet o causa.

b) Autes, quan decideixin recursos contra providències, qüestions incidentals, pressupòsits processals, nul.litat del procediment o quan, d'acord amb les lleis, hagin de tenir aquesta forma.

c) Sentències, quan decideixin definitivament el plet o causa en qualsevol instància o recurs.

2. Les Sentències podran dictar-se de viva veu quan la llei ho autoritzi però hauran de ser posteriorment documentades amb la fonamentació que procedeixi.

3. Són sentències fermes aquelles contra les que no hi cap recurs, salvat el de revisió o altres extraordinaris previstos per la llei.

Article 19

1. L'execució de sentències estrangeres que hagin de causar efectes civils a Andorra es sotmetrà a la prèvia aprovació del Tribunal Superior de Justícia, el qual podrà, en el seu cas, ordenar l'exequatur, atenent en especial als criteris de reciprocitat. Tot sense perjudici de la col.laboració amb els Tribunals dels altres països en els termes del dret internacional.

2. Les resolucions judicials estrangeres distintes de les sentències podran ésser ateses ja sigui en compliment d'un tractat bilateral o multilateral, ja sigui quan es formuli promesa de reciprocitat.

Títol II. El Consell Superior de la Justícia

Capítol primer. Govern de l'organització judicial

Article 20

El Consell Superior de la Justícia es compon de cinc membres designats entre andorrans majors de vint-i-cinc anys i coneixedors de l'Administració de Justícia, un per cada Copríncep, un pel Síndic General, un pel Cap de Govern i un pels Magistrats i Batlles.

Article 21

El mandat dels membres del Consell Superior de la Justícia és de sis anys, sense possibilitat d'exercir-lo més d'una vegada consecutiva.

Article 22

1. El Consell Superior de la Justícia nomena els Batlles, Magistrats i Secretaris judicials. Exerceix la funció disciplinària i promou les condicions perquè l'Administració de Justícia disposi dels mitjans adients per al seu bon funcionament.

2. També designa, d'entre els Batlles i Magistrats que hagin estat nomenats, els Presidents del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior de Justícia. La durada del mandat dels Presidents és igual a la durada del seu càrrec de Batlle o Magistrat i poden ésser renovats en aquesta funció.

Capítol segon. Organització i funcionament del Consell Superior de la Justícia

Article 23

El càrrec de membre del Consell Superior de la Justícia és incompatible amb qualsevol altre càrrec o funció de caràcter públic i amb l'exercici de la funció jurisdiccional o de l'advocacia. En el moment de la presa de funcions del Consell Superior de la Justícia, que s'esdevé sota la presidència del Síndic General, els seus membres presten jurament o promesa d'igual manera que ho fan els Batlles i Magistrats.

Article 24

El Consell Superior de la Justícia es reuneix en sessió ordinària tres vegades l'any, a convocatòria del President. Pot també reunir-se, fora d'aquestes sessions ordinàries, a petició d'un o varis membres, a fi d'examinar qualsevulla qüestió urgent que sigui de la seva competència.

Article 25

1. El membre nomenat pel Síndic General és el President nat del Consell Superior de la Justícia.

2. El President ostentarà la representació del Consell Superior de la Justícia, convocarà i presidirà les sessions, fixarà l'ordre del dia, dirigirà els debats i tindrà vot diriment en cas d'empat. Les votacions seran sempre secretes.

3. Els cinc membres que componen el Consell elegiran, d'entre ells, un Vice-President i un Secretari.

4. El Vice-President substituirà al President en tots els supòsits d'absència,

malaltia o vacant. El Secretari, amb el vist-i-plau del President, aixecarà acta de totes les reunions, nomenaments i decisions del Consell. Les decisions del Consell Superior de la Justícia prenen el nom d'Acords.

5. El Consell quedarà constituït i podrà adoptar acords amb l'assistència de quatre dels cinc membres que el componen. Els acords els adoptarà per majoria.

Article 26

Salvada una causa degudament justificada els membres del Consell Superior de la Justícia tenen el deure de participar a totes les reunions regularment convocades i romanen obligats a respectar el secret de les deliberacions del Consell.

Article 27

Els membres del Consell no poden ésser revocats per l'autoritat o poder que els hagi designat, salvat el cas que, constatada una falta greu, els altres membres del Consell Superior de la Justícia ratifiquin la revocació per Acord unànime.

Article 28

1. A convocatòria del President del Tribunal Superior el conjunt de Batlles i Magistrats procedeixen a elegir per votació secreta el membre del Consell Superior de la Justícia que els pertoca designar.

2. Són electors tots els Batlles i Magistrats en actiu. Són elegibles únicament aquelles persones que siguin de nacionalitat andorrana.

Article 29

En cas de cessació d'un dels membres del Consell Superior de la Justícia es procedirà al nomenament del seu substitut, de conformitat amb el que disposa l'article 89.2 de la Constitució.

Article 30

Els membres del Consell Superior de la Justícia reben una gratificació de funció establerta sobre la base d'unes gratificacions i dietes fixades reglamentàriament d'acord amb la disponibilitat requerida.

Capítol tercer. Competència del Consell Superior de la Justícia

Article 31

Els Batlles i Magistrats són nomenats per un mandat renovable de sis anys, els Batlles entre persones de nacionalitat andorrana i els Magistrats entre persones de nacionalitat preferentment andorrana, tal com estableix la Disposició Transitòria Segona, paràgraf primer, de la Constitució del Principat d'Andorra, titulades en dret i que comptin amb aptitud tècnica i mèrits propis suficients per a l'exercici de la funció jurisdiccional, pel procediment de presentació de candidatures en concurs-oposició públic.

L'acord de nomenament comporta l'entrada o el manteniment en la carrera judicial.

Article 32

El Fiscal General de l'Estat i els Fiscals Adjunts són nomenats pel Consell Superior de la Justícia, per un mandat renovable de sis anys, entre persones, proposades pel Govern, que reuneixin les condicions per ésser nomenades Batlle o Magistrat.

Article 33

1. S'estableix per a la carrera judicial el següent ordre: Batlle, President del Tribunal de Batlles, Magistrat, President del Tribunal de Corts i President del Tribunal Superior de Justícia.

2. Sense perjudici de la possibilitat de seguir l'ordre establert en el paràgraf anterior, el Consell Superior de la Justícia podrà acordar, en convocar candidatures per a la cobertura de diferents càrrecs judicials, l'obertura del concurs a persones que sense formar part de la carrera judicial reuneixin els requisits generals fixats en l'article 31.

Article 34

Els Secretaris Judicials són nomenats per a una durada indefinida, amb l'estatut de funcionaris de l'Administració General, d'entre persones de nacionalitat andorrana i titulades en dret, pel procediment de presentació de candidatures en concurs públic.

Article 35

1. El poder disciplinari sobre els Batlles i Magistrats que estableix l'article 22 de la present Llei serà exercit pel Consell Superior de la Justícia en les condicions que es regulen en el Capítol VI del Títol V.

2. El poder disciplinari sobre els Secretaris Judicials, Secretaris Adjunts, Auxiliars i Agents de l'Administració de Justícia pertany als Presidents de cadascun dels Tribunals, d'acord amb les normes administratives generals d'aplicació al conjunt de funcionaris i agents al servei de l'Administració General.

Article 36

A partir de les propostes pressupostàries anuals que li seran sotmeses pels respectius Presidents de la Batllia, del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior de Justícia, el Consell Superior de la Justícia elaborarà un projecte de pressupost global de funcionament de l'Administració de Justícia i, dins dels terminis previstos per la Llei General de les Finances Públiques, el trametrà al Govern, o al Ministeri que correspongui, d'acord amb la Constitució.

Article 37

A petició del Govern o del Consell General, el Consell Superior de la Justícia podrà emetre informes amb motiu de la tramitació de les lleis que afectin la Justícia. També podrà emetre informes, per pròpia iniciativa, ja sigui per tal de donar compte de la situació i funcionament de l'Administració de Justícia, ja sigui per promoure millores en les lleis d'àmbit judicial.

Article 38

El Consell Superior de la Justícia, per acord adoptat per unanimitat, podrà atorgar el nomenament de Batlle Honorari o de Magistrat i Fiscal Honorari a aquells que, havent servit tal càrrec, cessin en les seves funcions jurisdiccionals.

Títol III. Extensió i límits de la jurisdicció i organització i funcionament dels Tribunals

Capítol primer. Règim de la Batllia i Tribunals

Article 39

1. La potestat jurisdiccional atribuïda per l'article 2 de la present Llei als Batlles, al Tribunal de Batlles, al Tribunal de Corts i al Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, s'estructura en la jurisdicció civil, la penal i l'administrativa.

2. La jurisdicció penal abasta els delictes i les contravencions penals.

3. La jurisdicció administrativa controla:

a) La subjecció al Dret de l'exercici per part del Govern de la potestat reglamentària.

b) La subjecció al Dret en l'activitat normativa i d'execució de l'Administració Pública enumerada en l'article 13 del Codi de l'Administració avui vigent, així com la subjecció als fins que legitimen dita activitat.

Pertanyen en tot cas a la jurisdicció administrativa:

a) Els contenciosos establerts en la normativa de Seguretat Social.

b) Els recursos en matèria de funcionaris al servei de qualsevulla institució pública del Principat.

c) Els litigis en matèria electoral relatius a llistes i candidatures.

d) Els litigis sobre responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública i dels seus funcionaris.

e) Els litigis derivats de contractes d'obres de subministraments i serveis públics convinguts per l'Administració Pública regulats pel Capítol IV del Codi de l'Administració.

f) Els recursos contra les decisions de l'òrgan competent per a fixar les indemnitzacions per expropiació a causa d'utilitat pública, segons la llei vigent en aquesta matèria.

4. Pertanyen a la jurisdicció civil tots els negocis jurídics privats. Són amb caràcter general pròpies d'aquesta jurisdicció totes les qüestions que no hagin estat expressament atribuïdes a altres jurisdiccions.

Article 40

El període ordinari d'activitat jurisdiccional començarà el dia primer de setembre o el subsegüent dia hàbil i acabarà el trenta-u de juliol de cada any natural.

Article 41

En iniciar l'any judicial se celebrarà l'acte d'obertura, en el qual el President del Consell Superior de la Justícia presentarà la memòria sobre l'estat i el funcionament de l'Administració de Justícia. El Fiscal General presentarà també la memòria anyal de la seva activitat exposant el seu criteri sobre l'evolució de la criminalitat i la prevenció.

Article 42

1. Són feriats judicials, i per tant inhàbils per a totes les actuacions judicials, tots els dies del mes d'agost i els compresos entre el vint-i-quatre de desembre i el sis de gener de cada any judicial.

2. Són dies inhàbils tots els diumenges, dissabtes i els de festa nacional i tots els festius a efectes laborals, segons el calendari establert cada any pel Govern.

3. Són hores hàbils des de les nou del matí fins a les set del vespre, salvat que la Llei disposi altrament.

4. Els dies i hores inhàbils podran ésser habilitats pels Batlles quan hi hagi causa motivada.

5. Sense necessitat d'habilitació especial, tots els dies i hores de l'any són hàbils per a la instrucció de les causes penals.

6. Els terminis es comptaran sempre a partir de l'endemà de la notificació o publicació de l'acte de què es tracti.

Sempre que no s'estableixi expressament altra cosa, els terminis determinats ho seran en dies hàbils, i s'exclouran del còmput els dies inhàbils, d'acord amb l'establert a l'apartat 2n. d'aquest article.

Els terminis determinats en mesos o en anys es comptaran data a data. Si en el mes del venciment no hi havia un dia equivalent al de l'inici del còmput, el termini finalitzarà el dia primer del mes següent.

Si el darrer dia del termini era festiu, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.

7. L'horari de treball de la Batllia i Tribunals, i de les seves oficines judicials i Secretaries serà fixat pel Consell Superior de la Justícia, sense que mai pugui ser inferior a l'establert per a l'Administració General.

Article 43

Els dies hàbils, en audiència pública, els Batlles i Tribunals celebraran les vistes orals dels judicis penals. Pel que fa a les notificacions de les sentències dictades i tots els demés actes processals es procedirà a la seva pràctica d'acord amb el que estableixin les lleis de procediment.

Article 44

Correspon al President del Tribunal o al Batlle mantenir l'ordre en l'audiència pública i emparar en el seus drets als presents a la sala.

Article 45

A l'efecte del que disposa l'article anterior els que pertorbin la vista d'un judici, causa o altre acte judicial, donant senyals ostensibles d'aprovació o desaprovació, faltant al respecte i consideració deguts als Batlles, Tribunals, Fiscals, Advocats i Secretaris Judicials, seran amonestats a l'acte pel Batlle o President i expulsats de la Sala si no obeeixen al primer advertiment, sense perjudici de la responsabilitat penal en què puguin incórrer per la comissió d'una contravenció penal.

Article 46

Quan els fets dels quals tracten els articles anteriors arribessin a constituir delicte, els seus autors seran detinguts a l'acte i posats a disposició del Batlle competent.

Capítol segon. La Batllia d'Andorra (El Batlle i el Tribunal de Batlles)

Article 47

Composició.

La Batllia d'Andorra és la jurisdicció de primera instància i instrucció en tots els àmbits jurisdiccionals. La Batllia d'Andorra està composada pel conjunt dels Batlles en un nombre no inferior a vuit (8), així com pel seu President. El President del Tribunal de Batlles serà alhora el President de la Batllia.

Article 48

Competència.

La Batllia d'Andorra i els Batlles, ja sigui com a Tribunal unipersonal o en composició col.legiada d'acord amb el que estableixin la present Llei Qualificada i les Lleis de procediment, són competents per a jutjar en primera instància tots els afers contenciosos, salvat el cas, en matèria penal, dels delictes majors.

Els Batlles instrueixen individualment els afers penals.

Exerceixen també com a Tribunal unipersonal la jurisdicció voluntària.

El Batlle de guàrdia és competent per a substanciar en primera instància els procediments previstos en els articles 9.3 i 41.1 de la Constitució.

Salvat en els casos expressament previstos per la Llei els Batlles no poden delegar les funcions atribuïdes. En cap cas la delegació no podrà abastar funcions jurisdiccionals.

Els Batlles i els Tribunals exerceixen també la funció d'inspecció del Registre Civil i aquelles altres que expressament li siguin atribuïdes per llei, en garantia de qualsevol dret.

Article 49
Exercici de les competències jurisdiccionals

1. El Tribunal de Batlles, com a tribunal col.legiat disposa de tres seccions: civil, penal i administrativa. Cada secció, en reunir-se, està formada per tres Batlles.

Els debats són secrets i les decisions s'adopten per majoria.

La redacció de la sentència pertany al Batlle que hagi estat ponent.

2. En matèria penal les contravencions penals són jutjades per un sol Batlle que actua com a Tribunal unipersonal.

Els delictes menors són jutjats pel Tribunal de Batlles.

3. En matèria civil, els procediments de quantia mínima o menor que d'acord amb les lleis processals se substanciaran per un procediment abreujat, són jutjats per un sol Batlle. Totes les mesures de caràcter provisional i cautelar són també adoptades per un sol Batlle.

Tots aquells altres procediments de quantia indeterminada o la quantia dels quals superi el quàntum màxim fixat per les lleis de procediment per subjectar-los al procediment abreujat, són jutjats pel Tribunal de Batlles.

4. En matèria administrativa els afers relatius al contenciós de Seguretat Social són jutjats per un sol Batlle. Totes les altres qüestions d'aquest àmbit jurisdiccional són jutjades de manera col.legiada pel Tribunal de Batlles.

Article 50
Organització de la Batllia d'Andorra i atribucions del seu President

1. El President del Tribunal de Batlles, és nomenat pel Consell Superior de la Justícia d'acord amb l'article 90.2 de la Constitució. El seu nomenament li confereix la responsabilitat de l'organització i bon funcionament de la Batllia d'Andorra. Assegura la representació de la Batllia davant les institucions.

2. La Batllia queda estructurada en seccions civil, penal i administrativa i una secció especial d'instrucció. En iniciar-se l'any judicial el President de la Batllia estableix, d'acord amb els respectius nomenaments acordats pel Consell Superior de la Justícia, l'adscripció dels Batlles a cadascuna de les seccions civil, penal i administrativa, així com en les funcions de Jutges d'Instrucció.

El President adopta les seves decisions en aquest àmbit, havent escoltat una ponència formada pel Batlle més antic i el més nou en el càrrec, amb la finalitat d'assegurar una durada suficient a les funcions confiades als Batlles, bo i afavorint una justa distribució de les tasques.

3. El President del Tribunal de Batlles adopta les mesures escaients per assegurar el funcionament de la Batllia d'Andorra i la continuïtat de les seves tasques.

Article 51

Escoltat el parer del Batlle més antic i del més nou en el càrrec, el President de la Batllia, previ acord del Consell Superior de la Justícia, nomena els Batlles que, per un termini determinat, són habilitats per assegurar de manera rotatòria, a més de les seves funcions jurisdiccionals a la Batllia, les de Magistrats al Tribunal de Corts.

Capítol tercer. El Tribunal de Corts

Article 52

1. El Tribunal de Corts és competent per a jutjar, en primera instància, els delictes majors així com per dur a terme l'execució de les seves Sentències i altres resolucions.

2. Exerceix, mitjançant el seu President, les funcions de jurisdicció de vigilància penitenciària i d'aplicació de les penes.

3. Resol les apel.lacions contra les resolucions dels Batlles que afectin la llibertat dels processats o acordin mesures cautelars en període d'instrucció.

4. Jutja, en apel.lació, els recursos contra les sentències penals dictades pel Tribunal de Batlles en causes seguides per delictes menors i pels Batlles en matèria de contravencions penals.

Article 53
Composició

1. El Tribunal de Corts es composa d'un President, un Vice-president i un Magistrat. Els seus membres poden ésser substituïts d'acord amb el que s'assenyala a l'article 51 de la present Llei.

2. Els Batlles nomenats per exercir les funcions de Magistrats suplents no poden, en cap cas, participar en els procediments d'enjudiciament de sumaris que hagin pogut conèixer anteriorment en qualitat de jutges d'Instrucció o jutges de Primera Instància.

Article 54
Organització i funcionament del Tribunal de Corts

1. La responsabilitat del bon funcionament del Tribunal de Corts recau en el seu President.

2. D'acord amb l'article 52.2 de la present Llei el President del Tribunal de Corts disposa d'atribucions específiques atribuïdes pel Codi de Procediment Penal avui vigent, en matèria de vigilància penitenciària, aplicació de les penes que hagi dictat i incidents en matèria d'instrucció sumarial.

3. Les deliberacions del Tribunal de Corts són secretes. Les sentències s'adopten de manera col.legiada per majoria de vots.

4. A proposta del President del Tribunal de Corts, el Consell Superior de la Justícia podrà nomenar Magistrats adjunts per reforçar la jurisdicció o permetre la formació del Tribunal en cas d'existència d'incompatibilitats, recusacions o excuses d'algun dels seus membres.

Article 55
Competència especial en matèria de responsabilitat penal dels membres del Consell General i del Govern

En aplicació del que disposen l'article 53.3 i l'article 74 de la Constitució i, salvat el cas de flagrant delicte, el Tribunal de Corts és competent per acordar la detenció i el processament dels membres del Consell General, de la Sindicatura, i del Govern si són considerats responsables penalment durant la durada del seu mandat.

El procediment serà el que estableix l'article 78 de la present Llei.

Capítol quart. El Tribunal Superior d'Andorra

Article 56
El Tribunal Superior d'Andorra constitueix la més alta instància de l'organització judicial del Principat.

És competent per a jutjar tots els recursos interposats contra les resolucions judicials adoptades en primera instància per la Batllia d'Andorra, en matèria civil i administrativa en els límits fixats per la Llei, així com, en matèria penal, pel Tribunal de Corts.

Té també competència per examinar d'acord amb les lleis de procediment els recursos de revisió interposats contra les seves pròpies resolucions.

Article 57
Composició

El Tribunal Superior d'Andorra es composa d'un President i vuit Magistrats, nomenats pel Consell Superior de la Justícia, de conformitat amb les disposicions de la present Llei Qualificada.

Article 58
Organització i funcionament del Tribunal

1. El Tribunal s'estructura, sota l'autoritat del seu President, en tres sales:

- una sala competent per als afers civils.
- una sala competent per als afers penals.
- una sala competent per als contenciós administratiu i de Seguretat Social.

2. Cadascuna de les sales en reunir-se està formada per tres Magistrats, sense perjudici de la possibilitat que els Magistrats estiguin adscrits a dues sales. El President del Tribunal Superior és alhora President d'una de les tres sales. Els Magistrats de les altres sales n'asseguraran la Presidència amb un sistema de rotació anyal.

3. Les deliberacions del Tribunal Superior són secretes. Les sentències que són pronunciades en darrera instància són adoptades per majoria de vots.

Capítol cinquè. Els Secretaris judicials

Article 59
1. Els Secretaris judicials, de conformitat amb la present Llei i les lleis de procediment, exerceixen la fe pública judicial i assisteixen als Batlles i Tribunals en l'exercici de les seves funcions.

2. En el curs dels procediments judicials, les seves actuacions les faran per mitjà d'actes i diligències. Lliuraran còpies certificades de les actuacions judicials, no secretes ni reservades, a les parts interessades i practicaran totes les notificacions i actes de comunicació.

Article 60
1. Els Secretaris judicials són el cap de tot el personal adscrit a la Secretaria de la qual en siguin titulars, sense perjudici de la superior direcció dels respectius Batlles, Magistrats i Presidents.

2. Tenen la responsabilitat de la guarda i dipòsit de tota la documentació, del seu arxiu i de la conservació dels béns i objectes inclosos o afectats en els expedients judicials. Vetllaran perquè els dipòsits de quantitats dineràries, valors, consignacions i fiances, siguin immediatament ingressats a l'Institut Nacional Andorrà de Finances.

3. Els Secretaris judicials queden subjectes a les mateixes incompatibilitats, incapacitats i prohibicions, que les que aquesta llei i les lleis de procediment estableixen per als Batlles i Magistrats.

Article 61
La representació en judici podrà conferir-se, en tots els procediments, mitjançant compareixença davant el Secretari de la Batllia o Tribunal que hagi de conèixer de l'afer.

Títol IV. Conflictes de competència

Article 62
L'ordre jurisdiccional penal té caràcter preferent. No es podran plantejar conflictes de competència als òrgans de dit ordre jurisdiccional però sí entre els Batlles i Tribunals del mateix ordre penal: Batlle d'instrucció penal, Tribunal de Batlles i Tribunal de Corts. Aquests conflictes seran resolts definitivament pel Tribunal de Corts.

Article 63
Els conflictes de competència entre Batlles en actuació unipersonal, entre aquests i el Tribunal de Batlles i dels Tribunals de Batlles entre si, en qualsevulla altra matèria, seran dirimits definitivament pel Tribunal Superior.

Només es podran plantejar qüestions de competència positiva davant el Tribunal Superior d'Andorra. En tal supòsit, serà el Tribunal qui determinarà definitivament la seva pròpia competència.

Article 64
1. Els conflictes de competència poden ésser promoguts d'ofici, a instància de part i del Ministeri Fiscal.

2. Quan es plantegi un conflicte de competència els òrgans que es trobin en conflicte s'abstindran de continuar coneixent de l'afer fins a la resolució definitiva del Tribunal Superior d'Andorra.

Títol V. Estatut dels Batlles i Magistrats

Capítol primer. Jurament, presa de funcions i promoció

Article 65
Els Batlles i Magistrats, una vegada nomenats pel Consell Superior de la Justícia i abans de prendre possessió del càrrec, prestaran jurament o promesa davant del Consell Superior, amb la següent fórmula:

"Juro (o prometo) administrar justícia de forma recta i imparcial i complir fidelment tots els meus deures judicials, d'acord amb la Constitució, complint i fent complir les lleis."

Article 66

1. El reclutament i la promoció dels Batlles i Magistrats la farà el Consell Superior de la Justícia, a tenor de les necessitats de cobertura dels càrrecs, tenint en compte l'ordre fixat en l'article 33 i per concurs públic de mèrits entre els candidats.

2. Salvades especials circumstàncies, valorades pel Consell Superior de la Justícia, hom només podrà ésser promocionat a un càrrec superior dins de l'escala, quan hagi prestat, almenys, un mandat sencer en el càrrec inferior.

Capítol segon. Inamovibilitat

Article 67

Durant el seu mandat, els Batlles i Magistrats no podran ésser amonestats, suspesos en les seves funcions, ni separats del seu càrrec, si no és com a conseqüència de sanció imposada per haver incorregut en responsabilitat penal o disciplinària, d'acord amb el procediment establert i amb les garanties d'audiència i defensa.

Article 68

Els Batlles i Magistrats cessaran en el càrrec: per arribar al final del període pel qual hagin estat nomenats, per la seva renúncia, per sanció disciplinària de separació del càrrec, per imposició de pena, principal o accessòria, de separació del càrrec o d'inhabilitació per a càrrec públic, per incórrer en alguna causa d'incompatibilitat o d'incapacitat, i per jubilació.

La jubilació per edat operarà d'ofici en assolir els Batlles i Magistrats l'edat de setanta anys.

Capítol tercer. Règim d'incompatibilitats i prohibicions

Article 69

El càrrec de Batlle i de Magistrat és incompatible amb qualsevol altre càrrec públic, sigui electiu o de designació, amb qualsevulla activitat mercantil, industrial o professional, amb l'exercici de l'advocacia i tota altra forma d'assessorament jurídic i, en general, amb càrrecs o funcions de tot ordre en societats o empreses de negoci, siguin públiques o privades.

Article 70

No podran fer sala conjuntament aquells Batlles o Magistrats que estiguin units per vincle matrimonial o situació de fet equivalent, ni aquells que tinguin entre ells parentiu fins a segon grau de consanguinitat o d'afinitat.

Article 71

Els Batlles i Magistrats han de mantenir una actitud d'obligada reserva en la manifestació de les seves opinions i opcions polítiques. No participaran en les eleccions polítiques més enllà del fet d'exercir el seu dret de sufragi.

Article 72

1. Els Batlles i Magistrats han de mantenir el secret professional respecte a tots els fets i notícies de tot ordre dels quals hagin tingut coneixement en l'exercici de les seves funcions.

2. L'obligació de secret no és invocable davant les jurisdiccions andorranes.

Capítol quart. Recusació i abstenció

Article 73

Els Batlles i Magistrats hauran d'abstenir-se i, en cas de no fer-ho, podran ser recusats, en els supòsits següents:

- matrimoni o situació de fet equivalent, o parentiu fins el quart grau amb qualsevulla de les parts, el seu advocat o el representant del Ministeri Fiscal;

- ser o haver estat tutor, advocat o procurador de qualsevulla de les parts;

- estar o haver estat denunciat, acusat o demandat per qualsevulla de les parts;

- tenir o haver tingut qualsevulla relació jurídica mercantil o econòmica amb qualsevulla de les parts o els seus advocats;

- tenir plet pendent amb qualsevulla de les parts o el seu advocat;

- amistat o enemistat manifesta amb qualsevulla de les parts o els seus advocats;

- tenir interès directe en l'objecte del plet;

- ser el superior jeràrquic d'una de les parts en litigi.

Article 74

Poden recusar:

- en els afers civils i administratius les parts, els seus advocats i el Ministeri Fiscal.

- en els afers penals el Ministeri Fiscal, el processat, l'actor civil o l'acusador particular, el responsable civil subsidiari i els seus advocats.

Article 75

El Tribunal Superior serà informat pel Batlle o Magistrat que hagi decidit abstenir-se de les seves motivacions i decidirà sobre la procedència de la seva admissió. D'igual forma resoldrà sobre les recusacions quan aquestes no haguessin estat acceptades per la Batllia o el Tribunal de Corts. Si la recusació s'adrecés a un Magistrat del Tribunal Superior, serà resolta per una secció de tres membres de la qual no podrà formar part el recusat.

Capítol cinquè. Responsabilitats civils i penals

Article 76

Els Batlles i Magistrats seran responsables civilment pels danys i perjudicis ocasionats dolosament en l'exercici de les seves funcions.

Article 77

La responsabilitat penal dels Batlles i Magistrats per delictes o contravencions comesos en l'exercici de les seves funcions, es depurarà de conformitat amb les disposicions del present capítol.

En mèrits de la seva immunitat judicial, els Batlles i Magistrats només podran ésser detinguts en cas de flagrant delicte.

Article 78

1. El judici de responsabilitat penal contra un Batlle o Magistrat s'incoarà per providència dictada pel Tribunal de Corts, en mèrits de querella presentada pel Ministeri Fiscal, o pel perjudicat o ofès.

2. Les diligències prèvies, processament i instrucció sumarial, quedaran a càrrec d'un Magistrat del Tribunal de Corts.

3. La competència per a jutjar penalment a un Batlle o Magistrat la tindrà, en primera instància, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia i en grau d'apel.lació, en segona instància, el ple del Tribunal Superior de Justícia, exclosos els Magistrats de la Sala Penal.

4. Acordat el processament d'un Batlle o Magistrat es procedirà automàticament a la suspensió provisional de l'exercici de les funcions jurisdiccionals que exerceixi, per Acord del Consell Superior de la Justícia.

Capítol sisè. Règim disciplinari

Article 79

Els Batlles i Magistrats resten subjectes a responsabilitat disciplinària en els termes i condicions previstos en aquesta llei.

Article 80

La responsabilitat disciplinària dels Batlles i Magistrats l'exigirà el Consell Superior de la Justícia, mitjançant instrucció d'un expedient disciplinari incoat per iniciativa del propi Consell Superior de la Justícia, a instàncies de la persona perjudicada, d'un ciutadà que tingui coneixement dels fets, del Ministeri Fiscal o del President del Tribunal corresponent.

Article 81

1. En el mateix acte en què el Consell Superior de la Justícia acordi la incoació d'un procediment disciplinari designarà, d'entre els seus membres, a un Instructor.

2. En un procediment que, fins a resolució, no s'allargarà a més de tres mesos, l'Instructor practicarà totes les proves tendint a esclarir els fets i a determinar responsabilitats, formularà —si escau— el plec de càrrecs i en donarà trasllat al Ministeri Fiscal i a l'interessat.

3. El Ministeri Fiscal emetrà el seu informe dins d'un termini de vuit dies, en el qual podrà proposar la pràctica de proves.

4. L'interessat disposarà també d'un termini de vuit dies per contestar el plec de càrrecs i proposar totes quantes proves estimi convenients per a la defensa dels seus drets.

5. L'Instructor decidirà sobre la pertinència de les proves proposades per l'interessat i pel Ministeri Fiscal i disposarà la seva pràctica.

6. Practicades les proves admeses, l'Instructor elevarà les actuacions al Consell Superior de la Justícia. Aquest, prèvia audiència de l'interessat en un tràmit d'al.legacions orals, dictarà resolució definitiva.

Article 82

1. Les faltes comeses pels Batlles i Magistrats en l'exercici de llurs càrrecs es qualifiquen en greus i molt greus.

2. Les faltes greus prescriuran als sis mesos i les molt greus a l'any, totes a comptar de la data de comissió. La prescripció quedarà interrompuda en iniciarse el procediment.

Article 83

Són faltes molt greus:

1. La infracció a les incompatibilitats establertes en la present Llei.

2. Les accions o omissions que comportin responsabilitat civil, a tenor d'allò disposat en l'article 76.

3. La ignorància inexcusable de les lleis i procediments.

4. La comissió d'una falta greu, quan hagi estat anteriorment sancionada per altres dos de greus, sense que hagin estat cancel.lades les anotacions corresponents.

Article 84

Són faltes greus:

1. La infracció a les prohibicions i obligacions establertes en la present Llei.

2. La inassistència injustificada i reiterada a vistes, judicis o pràctiques de proves que haguessin estat fixats.

Article 85

1. Les sancions que es podran imposar als Batlles i Magistrats per les faltes comeses en l'exercici de llurs funcions són: advertiment escrit, multa de fins a cent mil PTA, suspensió d'un a sis mesos i separació del càrrec.

2. Les faltes greus es sancionaran amb advertiment escrit o amb multa i les molt greus amb suspensió o separació del càrrec.

3. Les sancions prescriuran i es cancel.laran d'ofici les anotacions, transcorreguts que siguin, des de la data de la imposició, quatre anys per les greus i set anys per les molt greus.

4. La cancel.lació suposarà l'eliminació de tots els antecedents, llevat del cas de sanció de separació del càrrec.

Article 86

En els expedients que, d'acord amb l'article 80 la incoació hagi estat instada per un denunciant particular, el Consell Superior de la Justícia procedirà a notificar-li la resolució adoptada amb la finalitat que aquell valori si el dret o principi constitucional, l'afectació del qual hagués denunciat, ha rebut el tractament degut en la resolució de l'expedient.

Article 87

La resolució definitiva adoptada pel Consell Superior de la Justícia no és susceptible de revisió jurisdiccional.

Únicament es podrà formular recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional, en els casos que ho permeti la seva Llei Qualificada.

Títol VI. El Ministeri Fiscal

Article 88

El Ministeri Fiscal, dirigit pel Fiscal General de l'Estat, actua d'acord amb els principis de legalitat, unitat i jerarquia interna.

Article 89

1. Ultra exercitar l'acció pública, el Ministeri Fiscal intervé directament en els processos penals i sol.licita la pràctica de totes les diligències que estimi necessàries per a l'esbrinament dels fets delictuosos i dels seus responsables. Vetlla per a l'estricte compliment de les sentències recaigudes.

2. Sense perjudici de les facultats dels Batlles per actuar d'ofici, quan el Ministeri Fiscal tingui coneixement d'un fet que pugui ésser constitutiu de delicte o contravenció, exercitarà l'acció penal per pròpia iniciativa o a petició del Govern.

3. L'audiència del Ministeri Fiscal és preceptiva en tots els procediments civils en què estiguin interessats absents, me-

nors, incapacitats o persones necessitades de protecció.

4. Cal també audiència del Ministeri Fiscal en els processos relatius al Registre Civil i en tots els altres casos que estableixin les lleis.

Article 90

Els membres del Ministeri Fiscal queden sotmesos al mateix règim de responsabilitats, incompatibilitats, recusacions i abstencions que aquesta llei estableix per als Batlles i Magistrats.

Article 91

Sense perjudici de la seva independència de la jerarquia de les jurisdiccions, els membres del Ministeri Fiscal queden inclosos, a efectes de promocions, retribucions i nomenaments, en la carrera judicial.

Article 92

El Fiscal General i els Fiscals Adjunts, en prendre possessió del seu càrrec, presten jurament o promesa davant del Consell Superior de la Justícia en la mateixa forma que ho fan els Batlles i Magistrats.

Títol VII. Cooperadors de l'Administració de Justícia

Capítol primer. La Policia Judicial

Article 93

Els Batlles i el Ministeri Fiscal dirigeixen l'acció de la policia en matèria judicial d'acord amb el que s'estableix en la present Llei.

Article 94

La Policia Judicial actua sota les ordres dels Batlles i Tribunals, els presta auxili en totes les seves tasques i en l'execució de les decisions de qualsevol ordre jurisdiccional. Especialment, la Policia Judicial dóna compliment a les missions que els Batlles disposin en relació a la instrucció de diligències prèvies i sumaris.

D'igual manera i amb la mateixa relació de dependència, durà a terme les investigacions que ordeni el Ministeri Fiscal per a l'esbrinament dels delictes i l'obtenció de proves.

Tot sense perjudici de les tasques generals de prevenció de l'ordre públic i la seguretat que corresponen a la Policia.

Article 95

La funció de Policia Judicial recau en tots els membres del Servei de Policia d'Andorra, sempre que siguin requerits per a prestar-la. Dins de la seva estructura el Servei de Policia d'Andorra podrà establir i organitzar unitats destinades a Policia Judicial.

Article 96

La Direcció de la Policia trametrà diàriament un informe d'actuacions i incidències a la Batllia i al Fiscal General.

Capítol segon. Els Advocats

Article 97

Davant de totes les jurisdiccions i en tots els procediments, és preceptiva l'assistència i la intervenció lletrada, prestada per un advocat inscrit en el Col.legi d'Advocats d'Andorra.

La seva intervenció serà facultativa en els procediments civils seguits per mínima quantia, en els contenciosos seguits en matèria de Seguretat Social i en els procediments penals seguits per contravencions.

Article 98

1. En la seva actuació davant dels jutges i tribunals, els advocats són lliures i independents i gaudeixen dels drets inherents a la dignitat de la seva funció i de la llibertat d'expressió i de defensa.

2. Els advocats han de respectar el secret professional, entès com aquell principi moral i jurídic que els situa en l'obligació i en el dret ineludibles de no revelar cap fet ni document dels que tinguin coneixement, no podent ser obligats a declarar sobre els mateixos.

Article 99

Per tal de garantir a tothom el dret a la defensa i a l'assistència lletrada que atorga la Constitució, es designarà un advocat per a la defensa i assistència d'ofici a qui així ho sol.liciti o, en el procés penal, es negui a designar-lo. La defensa d'ofici, que tindrà caràcter gratuït per aquells que acreditin la seva situació de pobresa o insolvència declarada per un Batlle, anirà a càrrec de l'Estat.

Article 100

Per actuar davant els Batlles i Tribunals en els termes previstos per la present Llei Qualificada i per la legislació general els Advocats hauran d'estar obligatòriament inscrits al Col.legi d'Advocats d'Andorra, salvat que actuïn en defensa de l'Administració General, d'acord amb el que estableix l'article següent.

Article 101

La defensa en judici, davant qualsevulla jurisdicció, dels interessos de l'Estat andorrà correspon als advocats andorrans adscrits al Gabinet Jurídic del Govern, això sense perjudici que el Govern pugui contractar els serveis d'advocats en casos determinats.

Capítol tercer. Els Procuradors dels Tribunals

Article 102

1. Quan en un judici les parts no vulguin comparèixer personalment hauran de fer-ho representades per procurador o advocat andorrà, salvat quan la llei de procediment autoritzi altra cosa.

2. Els procuradors hauran de guardar secret de tots els fets o notícies que coneguin per qualsevulla de les modalitats de la seva activitat professional.

3. Mentre que la Llei no estableixi les condicions especials que s'hagin d'exigir als procuradors andorrans, el Consell Superior de la Justícia procedirà a establir cada any, previ informe del Ministeri Fiscal, la relació de persones admeses a exercir la representació processal de les parts davant les jurisdiccions andorranes.

Títol VIII. Disposició addicional

Per mentre la Llei no estableixi les condicions especials que s'hagi d'exigir als Notaris andorrans, queden confirmats els Notaris nomenats pels Coprínceps.

L'activitat notarial roman totalment deslligada de la funció jurisdiccional.

Títol IX. Disposicions transitòries i finals

Capítol primer. Disposicions transitòries

Primera

Durant tot el període transitori des de l'aprovació i publicació de la present Llei i fins al moment del seu total desenvolupament i efectiva aplicació, seguiran administrant justícia, en nom del poble andorrà, les actuals institucions judicials.

A comptar de la data de publicació d'aquesta Llei les Batllies i Tribunals deixaran de percebre taxes judicials en la tramitació i la substanciació de les actuacions.

El Consell General podrà fixar les eventuals noves taxes judicials, per determinats serveis, que en tot cas seran ingressades a l'INAF a l'ordre del Govern.

Segona

1. Els membres que han de composar el Consell Superior de la Justícia seran designats, de conformitat amb el que disposa l'article 20 d'aquesta Llei, per tot el dia 14 d'octubre de 1993.

2. El membre que han de designar els Magistrats i Batlles, en aquesta primera ocasió, ho serà per votació feta per tots els Batlles, Jutges i Magistrats del Tribunal de Corts i Tribunals Superiors, que estiguin en funcions a la data del 14 d'octubre de 1993, per convocatòria del President del Tribunal de Corts.

3. Una vegada designats tots els seus membres, el Consell Superior de la Justícia quedarà constituït per convocatòria del seu President.

Tercera

El Govern, d'acord amb el que disposa l'article 32 d'aquesta Llei, presentarà al Consell Superior de la Justícia la seva proposta de nomenament del Fiscal General de l'Estat i Fiscals Adjunts, per tot el dia 28 d'octubre de 1993.

Quarta

El Consell Superior de la Justícia, per tot el dia 15 de novembre de 1993, nomenarà als membres del Ministeri Fiscal, els Magistrats del Tribunal de Corts, els Magistrats del Tribunal Superior de Justícia, els Batlles i els respectius Presidents de la Batllia i dels Tribunals.

Cinquena

1. D'acord amb el que disposa la Disposició Transitòria Segona, paràgraf 1, de la Constitució, per mentre que la carrera judicial andorrana no disposi de personal suficient per a cobrir els càrrecs de Magistrats i de Fiscal General, podran ésser nomenats, guardant l'esperit d'equilibri, juristes espanyols i francesos.

2. En aplicació de la Disposició Transitòria Segona de la Constitució podran seguir en la carrera judicial per a un nou mandat aquells Batlles o Jutges andorrans que han exercit tals funcions fins a l'entrada en vigor de la present Llei i que no disposen de la titulació en dret.

3. Poden també seguir al servei de l'Administració de Justícia aquells Secretaris de Batllia o de Tribunal que, trobant-se actualment a càrrec d'una secretaria o d'una secretaria adjunta, no disposen de la titulació en dret.

Sisena

Tots els nomenats, prestaran jurament davant del Consell Superior de la Justícia, per tot el dia 25 de novembre de 1993.

Setena

1. Tots els procediments judicials, civils, penals i administratius, que hagin estat començats després de l'entrada en vigor de la Constitució, quedaran sotmesos al contingut d'aquesta llei, sigui quina sigui la seva situació processal.

2. Els que es trobin davant del Batlle o de l'actual Jutjat Administratiu i Fiscal, seguiran el seu curs, pel torn de repartiment que procedeixi, davant del Batlle o del Tribunal de Batlles, segons correspongui.

3. Els que es trobin davant de l'actual Jutjat per a Delictes Menors, seguiran el seu curs davant del Tribunal de Batlles.

4. Els que es trobin davant de l'actual Tribunal de Corts, seguiran el seu curs davant del nou Tribunal de Corts.

5. Els que es trobin davant dels actuals Jutjat d'Apel.lacions, Tribunal Administratiu i Fiscal i Tribunals Superiors de Corts de la Mitra i de Perpinyà, seguiran el seu curs davant del Tribunal Superior de Justícia en la Sala que correspongui.

Vuitena

Excepcionalment, pel que fa als procediments civils en curs i que haguessin estat endegats abans de l'entrada en vigència de la Constitució, es procedirà com segueix:

1. Si es troben davant del Batlle, la sentència que recaigui podrà ésser apel.lada davant del Tribunal de Batlles i la que aquest dicti davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia.

2. Si es troben davant de l'actual Jutjat d'Apel.lacions, passaran a ésser resolts també pel Tribunal de Batlles i la sentència que aquest dicti podrà ésser apel.lada davant la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia.

3. Si es troben davant dels actuals Tribunals Superior de la Mitra o Superior de Perpinyà, passaran a ésser resolts per la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia.

Novena

1. Tots els afers dits de visura o "causes de veí a veí" pendents de resolució, seran remesos al Tribunal de Batlles si es troben en les actuals primera i segona instància i a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justícia si es troben en darrera instància.

2. Les resolucions administratives de veeduria que haguessin estat objecte de recurs en queixa i romanguin pendents de resolució podran ésser objecte d'un recurs extraordinari, davant la Sala administrativa del Tribunal Superior de Justícia, dins els quinze dies següents a la data de l'entrada en funcions d'aquesta Sala.

3. Durant el mateix termini improrrogable de quinze dies, a comptar de la data de la seva entrada en funcions, podran també reproduir la seva acció davant la Sala administrativa del Tribunal Superior d'Andorra, aquells que, en aplicació de l'article 5 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal haguessin interposat en el seu dia un recurs en queixa davant les Delegacions Permanents dels Coprínceps per un litigi en matèria d'escrutini electoral.

Desena

Durant el període vacacional de Nadal, els diferents òrgans judicials actuals, traslladaran d'ofici els respectius afers en

curs a aquells òrgans que tinguin assignada la competència per a resoldre, de conformitat amb les presents disposicions transitòries.

Capítol segon. Disposicions finals

Primera

Queden derogades totes quantes disposicions anteriors s'oposin o contradiguin el contingut d'aquesta Llei.

Segona

1. La Llei Qualificada de la Justícia entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

2. Totes les institucions judicials i procediments regulats en la present Llei es posaran en funcionament el dia 2 de gener de 1994.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Coprínceps d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Coprínceps d'Andorra

Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Títol I
Disposicions generals
Capítol I
El dret de sufragi
Capítol II
Les llistes electorals
Capítol III
Les candidatures
Capítol IV
La campanya electoral
Capítol V
De les condicions del vot
Capítol VI
Infraccions penals
Capítol VII
El recurs contenciós

Títol II
De les eleccions generals
Capítol I
Convocatòria d'eleccions
Capítol II
Sistema electoral

Títol III
De les eleccions comunals

Títol IV
Dels referèndums
Capítol I
El referèndum de reforma constitucional
Capítol II
El referèndum consultiu

Disposició transitòria primera

Disposició transitòria segona

Disposició transitòria tercera

Disposició transitòria quarta

Disposició transitòria cinquena

Disposició transitòria sisena

Disposició final

Exposicio de motius

La modificació del sistema electoral era una necessitat sentida pel poble andorrà. La Constitució recentment aprovada, li ha donat una resposta satisfactòria, tot combinant els aspectes tradicionals, tan arrelats, de representació parroquial amb les innovacions que aprofundeixen el sentit democràtic de les institucions i les adeqüen als temps actuals.

D'aquesta forma la Constitució obliga a un canvi legislatiu i anuncia una llei qualificada per al règim electoral i per als referèndums. Aquesta llei qualificada, és a dir, aprovada per una majoria superior a l'ordinària, és la que ara es presenta. Es compleix, així la disposició transitòria primera de la Constitució i se substitueix i es deroga la Llei Electoral, adoptada pel Consell General de les Valls l'any 1987.

La creació de dos tipus de circumscripcions electorals, unes de parroquials i una altra nacional, ha comportat modificacions sensibles en el sistema electoral, combinant criteris de representació majoritaris i criteris proporcionals. Ha estat voluntat del legislador que aquesta combinació possibilités alhora l'adequada fidelitat a la voluntat de l'elector i l'estabilitat de les institucions, impedint la proliferació de fraccionaments partidistes excessius que fessin difícil l'existència d'unes majories de govern sòlides.

Aquesta voluntat política s'ha acompanyat de les millores tècniques que, com la revisió semestral del cens electoral o la regulació del procediment contenciós, garanteixen millor el dret a votar dels ciutadans. La regulació d'unes incompatibilitats ben definides contribueix també a l'equilibri entre les institucions i la societat.

Pel que respecta al referèndum, s'ha distingit entre el de reforma constitucional i el consultiu, diferenciant la proclamació dels resultats dels seus efectes. Les eleccions comunals han estat també objecte d'una nova regulació.

El Consell General, que ha portat a terme la tasca de redacció de la Constitució, entén que amb l'aprovació de la Llei Qualificada del Règim Electoral i del Referèndum no ha fet res més que avançar un altre pas en el mandat constitucional que li donaren els ciutadans.

Títol I. Disposicions generals

Capítol primer. El dret de sufragi

Article 1

1. El sufragi és universal, lliure, igual, directe i secret.

2. El dret de sufragi correspon a tots els andorrans, majors d'edat, amb ple ús dels seus drets civils i polítics i no sotmesos a cap causa d'incapacitat prevista per la llei.

Capítol segon. Les llistes electorals

Article 2

Podran exercitar el dret a votar en les eleccions els andorrans que, gaudint del dret de sufragi segons la legislació vigent, figurin nominalment inscrits en la llista

electoral de la Parròquia del seu domicili o del seu origen, en la data en què la referida llista quedarà completada.

Article 3

1. Les llistes electorals són permanents. La seva elaboració correspon als Comuns, que les actualitzaran i publicaran semestralment.

2. Les eleccions i referèndums s'efectuen segons l'última llista publicada, amb les modificacions previstes per la llei.

Article 4

Els registres electorals contindran, junt amb el nom i cognoms de l'elector, la seva edat, lloc de naixement i domicili, així com el col.legi electoral i la mesa on li correspondria votar, si n'hi hagués més d'una a la Parròquia.

Article 5

1. Les dades electorals formen un registre que es conservarà als arxius del Comú.

2. Els Comuns organitzaran per mitjans informàtics una còpia del registre electoral que, als efectes previstos en aquesta llei, estarà a disposició del Consell General i del Govern, si la sol.liciten.

3. Les candidatures a les eleccions del Consell General o a les comunals tenen dret a obtenir gratuïtament una còpia de les llistes electorals de la circumscripció corresponent, en la qual només figurarà el nom, cognoms i l'adreça dels electors.

Article 6

1. Els Comuns inscriuran en la llista electoral de cada Parròquia els andorrans que estiguin donats d'alta en el seu cens de població i que compleixin els requisits a què es refereix l'article primer.

2. Els andorrans que figurin inscrits en el cens de població i en la llista electoral d'una Parròquia, i que hi causin baixa com a residents per haver fixat llur residència a l'estranger, continuaran inscrits en la llista electoral d'aquella Parròquia, a menys que l'interessat exerciti l'opció prevista en l'article 7.

3. Els andorrans residents a l'estranger que no estiguin inscrits en la llista electoral de cap Parròquia, podran sol.licitar la seva inscripció a la Parròquia d'origen, d'acord amb les disposicions de l'article 7.

Article 7

1. Tot elector inscrit en les llistes electorals de la seva Parròquia de residència pot optar per canviar-se a les de la seva Parròquia d'origen. S'entendrà per Parròquia d'origen la de residència dels pares en el moment de néixer o ésser adoptat l'elector o, quan faci el cas, la de residència de la darrera generació d'ascendents andorrans de l'elector.

2. Els andorrans que hagin adquirit aquesta nacionalitat per matrimoni podran exercir el mateix dret d'opció per la Parròquia d'origen del seu cònjuge en el mateix moment que aquest o bé, posteriorment.

Article 8

1. Tots els Comuns publicaran al seu tauler d'edictes la llista provisional d'electors els dies 30 de març i 30 de setembre de cada any. Cada Comú confeccionarà la llista segons els antecedents i les dades que tingui al seu abast i corregirà els errors i omissions que hi observi, bo i procurant que sigui el més completa possible.

2. Els Comuns hi inscriuran d'ofici totes les persones que hagin obtingut el dret a votar a la Parròquia des de l'anterior publicació de les llistes electorals i n'eliminaran el nom de les que l'hagin perdut.

3. Els Comuns incorporaran a la llista, d'ofici, i en un annex diferenciat, totes les persones que, sense necessitat de fer cap expedient, podrien exercir el dret a votar si fossin majors d'edat i arribessin a aquesta majoria d'edat al llarg dels propers sis mesos, indicant-ne la data a partir de la qual es podria fer efectiu el dret a votar.

Article 9

1. L'opció prevista en l'article 7 podrà exercitar-se sol.licitant el canvi en les llistes durant els primers tres mesos després de cada publicació de les llistes electorals. L'interessat demanarà al Comú de la seva Parròquia d'origen que l'inscrigui en les seves llistes i aportarà a aquest efecte la documentació que acrediti el seu dret.

2. Un cop inscrit a la Parròquia d'origen, no podrà demanar una altra vegada el canvi per tornar a la de residència, encara que en fos una altra, fins passades dues consultes electorals com a mínim i, així, successivament.

3. Cada any, i no més tard dels dies 15 de març i 15 de setembre, els Comuns s'adreçaran mútuament la llista dels electors que hagin demanat i obtingut l'exercici de l'opció contemplada en aquest article, a fi que siguin donats de baixa, només a efectes electorals, en llur Parròquia de residència.

Article 10

1. La persona que es consideri amb dret a votar i no sigui inscrita en la llista provisional d'electors, podrà demanar la seva inscripció al Comú dins el termini de 15 dies naturals, havent de formular aquesta petició per escrit i aportarà la documentació que cregui oportuna.

2. Tot elector podrà impugnar, sol o juntament amb d'altres, el dret a figurar en la llista electoral de la persona o persones que, al seu entendre, no tinguin dret al vot, o no en tinguin a la Parròquia on figurin inscrits. A aquest efecte, haurà de formular la corresponent impugnació al Comú, en el mateix termini del paràgraf anterior.

Article 11

Els Comuns examinaran les peticions rebudes i s'hi pronunciaran dins el termini de 8 dies naturals, i inclouran o excluran de la llista electoral els noms corresponents; tot seguit, en publicaran una relació complementària al tauler d'edictes i decretaran les demandes acceptades i també les desestimades, amb la motivació que correspongui segons el seu criteri. Aquestes llistes tindran el caràcter de definitives, sota reserva d'allò que s'estipula en els articles següents.

Article 12

1. Contra les decisions dels Comuns, incloent o excloent alguna persona de la llista electoral, els interessats podran interposar recurs davant els Tribunals dins els 8 dies naturals següents a la publicació de les llistes definitives.

2. Si el recurs es fonamenta en la lesió d'un dret fonamental es regularà pel procediment urgent i preferent previst en la Constitució.

Article 13

Els Comuns, immediatament a la recepció d'una sentència ferma reconeixent o denegant el dret a votar a alguna persona, modificarà en conse-

qüència les llistes electorals definitives, produint-se els efectes oportuns en ordre a la realització de la votació.

Article 14

La resolució de qualsevol expedient sobre adquisició de la nacionalitat andorrana, no donarà dret als interessats a fer-se inscriure en la llista electoral fins a la següent revisió d'ofici semestral.

Capítol tercer. Les candidatures

Article 15

Són elegibles tots els andorrans, majors d'edat, en el ple ús dels seus drets civils i polítics, inscrits en les llistes electorals i que no estiguin sotmesos a cap causa d'inelegibilitat.

Article 16

1. Són inelegibles amb caràcter general:

a) els Magistrats del Tribunal Constitucional.

b) els membres del Consell Superior de la Justícia.

c) els Batlles i Magistrats i els membres del Ministeri Fiscal en actiu.

2. Les causes d'inelegibilitat de l'apartat anterior ho són també d'incompatibilitat.

3. Així mateix, els Consellers Generals i els membres del Govern són inelegibles en les eleccions comunals i els membres del Comú són inelegibles en les eleccions al Consell General si prèviament no han dimitit del seu càrrec.

4. Són també inelegibles els condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat, durant el temps de la seva durada.

Article 17

1. L'exercici de la funció pública per part de funcionaris en actiu o de persones contractades és incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec electiu de l'Administració a la qual es trobin adscrits.

2. Reglamentàriament es preveurà un sistema d'excedències al qual hauran d'acollir-se forçosament aquells funcionaris que accedeixin a un càrrec d'elecció pública que tingui remuneració en concepte de salari.

Article 18

Ningú podrà ésser a la vegada candidat en dues o més candidatures en la mateixa elecció. Tampoc es podrà ésser candidat simultàniament al Consell General i al Comú en el cas que l'elecció es realitzés en el mateix dia.

Article 19

1. Els candidats hauran de signar la seva acceptació per formar part d'una candidatura. Sense el compliment d'aquest requisit la candidatura no serà vàlida.

2. Serà nul.la qualsevol candidatura en la qual figurin més candidats que càrrecs a proveir, i les incompletes.

Article 20

1. Cap candidatura serà vàlida si no és presentada pel 0,5% del cens electoral parroquial o nacional, segons la circumscripció i, en qualsevol cas, per no menys de deu presentadors.

2. Cada presentador només podrà firmar una sola candidatura. Per a la verificació i recompte de les signatures, s'eliminaran aquelles que poguessin estar repetides.

Article 21

A l'efecte del càlcul previst en l'article 20.1, convocades eleccions al Consell General o convocat referèndum, els Comuns notificaran immediatament al Govern el nombre d'electors inscrits en les respectives llistes electorals.

Article 22

1. La presentació de les candidatures es farà per escrit, bo i completant un imprès que facilitarà el Govern, i personalment per dos, com a mínim, dels signants de la candidatura, els quals certificaran, per declaració jurada o per promesa, que totes les firmes dels presentadors són verídiques, sota la seva responsabilitat. Les firmes il.legibles hauran de reproduir-se, a sota de cada una, amb caràcters de lletra llegibles.

2. La presentació s'efectua davant del Comú per a les candidatures en circumscripció parroquial i davant del Govern per aquelles de circumscripció nacional, dins el termini de set dies naturals a comptar de la convocatòria de les eleccions. Els respectius secretaris n'acusaran la recepció amb el vist-i-plau del Cap de Govern o del Cònsol, segons el cas.

Article 23

Els dos primers signants de la candidatura assumiran la representació legal d'aquesta a tots els efectes.

Article 24

1. La verificació, proclamació i publicació de les candidatures s'efectua pel Comú per a aquelles d'àmbit parroquial i pel Govern per a les d'àmbit nacional, per tot el dia següent a l'acabament del termini de presentació.

2. Si en l'acte de verificació s'observés l'existència d'errors subsanables en la composició o presentació d'alguna o d'algunes de les candidatures, es comunicaria als seus representants legals per a la seva rectificació en el termini de dos dies.

Article 25

Els grups d'electors que donin suport a alguna opció en el referèndum tenen la mateixa consideració legal que les candidatures i estan sotmesos als mateixos requisits de presentació de signatures que aquelles.

Article 26

1. Els candidats i els representants legals de les candidatures poden presentar recurs, en el termini de 24 hores, per a la denegació o proclamació d'alguna d'elles.

2. La resolució judicial, que haurà de dictar-se en els dos dies següents a la interposició del recurs, té caràcter ferm.

3. Excepcionalment, els recursos fonamentats en la lesió d'un dret fonamental es substancien en dues instàncies, en el termini de 48 hores, entenent-se complerts a tots el efectes els requisits de la Constitució.

Article 27

Donat cas que algun candidat perdés el dret a presentar-se per sentència ferma, comunicada al Cap de Govern o als Comuns, segons correspongui, per tot el dia anterior al fixat per a les eleccions, serà reemplaçat en les votacions pel següent candidat en les llistes o pel substitut legal, en cas d'haver-n'hi, sense necessitat de modificació de les paperetes.

Capítol quart. La campanya electoral

Article 28

Una vegada convocades les eleccions o el referèndum, el Govern fixarà la durada del període de campanya electoral que no podrà ésser inferior a deu dies ni superior a quinze.

Article 29

1. Els cartells de propaganda electoral només podran ésser col.locats en espais que amb aquest ús exclusiu siguin reservats pels Comuns. Amb aquesta finalitat, els Comuns destinaran un espai igual a cada candidatura, vàlidament proclamada.

2. Fora d'aquests espais no podrà utilitzar-se la via pública per fixar-hi cartells, banderoles, adhesius o objectes similars.

Article 30

El Govern, amb l'antelació suficient, farà arribar a tots els electors al seu domicili censal, un sobre que contindrà les "professions de fe" de les diferents candidatures. Totes elles tindran un tractament idèntic en la documentació inclosa i en la seva presentació.

Article 31

1. En els mitjans de comunicació públics, les diferents candidatures disposaran d'un espai d'igual duració per exposar els seus programes.

2. El Govern, mitjançant Decret, fixarà la duració dels espais de ràdio i televisió pública que corresponen a les candidatures nacionals i parroquials. En qualsevol cas, el temps atorgat a les candidatures parroquials no serà superior a un terç del temps atorgat a les candidatures nacionals.

Article 32

Els Comuns posaran a disposició de les candidatures, amb criteris d'igualtat, els centres públics per poder realitzar reunions electorals.

Article 33

El Govern habilitarà els medis personals, materials i econòmics necessaris per al correcte desenvolupament de la campanya electoral i de les eleccions i vetllarà pel bon funcionament del procés en general, sense perjudici de les competències específiques assignades per la Constitució i per la present llei als Comuns.

Capítol cinquè. De les condicions del vot

Article 34

El vot s'efectua personalment o per dipòsit judicial.

Article 35

1. La votació per dipòsit judicial serà vàlida si s'ha lliurat amb el sobre i les paperetes oficials davant del Batlle entre el segon dia posterior a la proclamació de les candidatures i el dia anterior a la celebració de les votacions.

2. El dipòsit davant del Batlle s'haurà de fer pel propi elector que faci ús d'aquest dret, sense poder-ho delegar en cap altra persona.

3. L'elector recollirà les paperetes a la corresponent Casa Comuna. Els sobres, de les característiques expressades en l'art. 39.2, seran custodiats pels Batlles a qui el Govern els n'haurà fet arribar en nombre suficient. Finalitzada l'elecció, els sobres restants seran retornats al Govern.

4. Els Batlles faran arribar els vots que els hagin estat lliurats als Presidents de les corresponents meses electorals. Aquests vots seran introduïts a l'urna a l'iniciar-se la jornada electoral, anotant-se el nom de l'elector als efectes de l'art. 42.2.

Article 36

1. Les eleccions s'efectuen a cada Parròquia a la Casa Comuna. Això no obstant, si la dispersió geogràfica o el nombre d'habitants ho aconsellen, els Comuns podran organitzar més d'un col.legi electoral.

2. En cada col.legi electoral els Comuns poden organitzar una o més meses electorals, en les quals es distribuiran els electors per ordre alfabètic per facilitar la votació.

3. Donat cas que en una Parròquia hi hagués més d'un col.legi electoral o més d'una mesa, el Comú, al publicar les llistes electorals o per altres procediments, farà públic on li correspon votar a cada elector.

Article 37

1. Totes les votacions es faran en diumenge.

2. El col.legi electoral s'obrirà per a la votació a les nou del matí i es tancarà a les set de la tarda, podent votar totes les persones que en aquesta hora estiguessin dins la sala.

3. Totes les persones amb dret a votar podran absentar-se del seu lloc de treball durant dues hores per tal de poder fer efectiu el seu vot. Aquesta absència serà remunerada i obligatòria per a qui ho sol.liciti, i no podrà comportar cap conseqüència laboral.

Article 38

1. A cada col.legi electoral es constituiran les meses corresponents, formades com a mínim per dos membres del Comú i pels interventors. Les meses seran presidides pels membres del Comú per ordre protocol.lari.

2. Cadascun dels grups d'electors que hagi presentat una candidatura podrà designar, d'entre ells, dos interventors i dos suplents. La designació serà comunicada al President de la mesa pels representants legals de la candidatura abans de l'obertura del col.legi.

Article 39

1. Totes les paperetes electorals hauran d'ésser de la mateixa forma, mida, color i gramatge de paper en tots els col.legis electorals. Aquestes característiques seran fixades pel Govern.

2. El Govern també prepararà uns sobres, iguals per a tot el Principat, opacs, marcats amb segells o altres senyals que facin impossible o molt difícil la seva substitució, dels quals en repartirà a cada Comú la quantitat suficient en relació amb el nombre d'electors inscrits en les llistes electorals. Els sobres restants seran retornats al Govern, el qual en farà un inventari a la seva recepció.

3. A l'efecte del paràgraf anterior, els Comuns comunicaran al Govern el nombre d'inscrits en les llistes electorals definitives.

Article 40

A partir del segon dia posterior a la proclamació definitiva de les candidatures, les paperetes electorals estaran a disposició dels electors, a cada Casa

Comuna, en les hores habituals de despatx al públic, fins el dia de les eleccions.

Article 41

Al local on tindran lloc les votacions hi haurà una o més cabines aïlladores, degudament il.luminades, amb una taula o escriptori damunt de la qual hi haurà un nombre suficient de paperetes de cada candidatura proclamada, i d'altres en blanc.

Article 42

1. Quan entri a votar, l'elector, prèviament identificat, rebrà del President de la mesa un o més sobres, segons l'elecció; es retirarà obligatòriament a una de les cabines aïlladores i, allí, completament sol i sense ésser vist per ningú, hi ficarà la papereta o les paperetes del seu grat. Després, amb l'autorització del President de la mesa, els introduirà a l'urna o a les urnes que correspongui.

2. Un membre de la mesa portarà un recompte del nombre d'electors que exercitin el seu dret a votar i n'anotarà el nom i els cognoms.

Article 43

1. Quan hagin votat tots els electors que ho desitgin, d'acord amb l'article 37.2, la mesa procedirà a practicar l'escrutini corresponent.

2. Acabada la votació i obertes les urnes, es comptarà el nombre de sobres. Si no hi hagués coincidència amb el nombre de votants, el President de la mesa ho farà constar en la documentació oficial.

Article 44

1. Els vots vàlids seran els resultants dels vots emesos, deduint-ne els vots blancs i nuls.

2. Seran considerats vots nuls i sense cap efecte els sobres electorals que continguin paperetes esmenades, incomplets o amb més o menys noms que els dels càrrecs a proveir i, en general, tots els que contravinguin el sentit de la votació.

3. Si un sobre contingués més d'una papereta idèntica, seria considerada com un sol vot vàlid. Si les paperetes no fossin idèntiques, el vot seria nul.

4. No podran declarar-se nuls els vots per altres motius que no siguin els prescrits per la llei electoral. Els vots blancs hauran de fer-se constar en les actes de forma diferenciada a la dels vots nuls.

5. Els vots vàlids i els vots nuls que siguin impugnats per algun membre de la mesa o algun interventor s'adjuntaran a la documentació, fent-ne constar el seu nombre.

Article 45

Serà obligatori conservar les paperetes electorals no impugnades a la Casa Comuna fins que hagin transcorregut quinze dies des que l'elecció hagi quedat ferma.

Article 46

1. Els resultats de l'escrutini es faran constar en una acta que signaran tots els membres de la mesa electoral i immediatament es remetrà una còpia certificada de l'acta al Govern.

2. En la certificació es farà constar el nombre d'electors amb dret a votar, el nombre de votants, el nombre de vots nuls, blancs i els obtinguts per cada candidatura o per cada resposta en cas de referèndum.

3. Si hi haguessin vots impugnats o no coincidís el nombre de vots emesos amb el de votants, es faria constar en documentació adjunta, així com qualsevol altra incidència digna de menció a judici de la majoria dels membres de la mesa.

Article 47

En les eleccions al Consell General o en els referèndums el Govern, a la vista de les actes dels col.legis electorals, farà el recompte general i establirà l'acta nacional, i el Cap de Govern en proclamarà els resultats.

Article 48

Contra la proclamació dels resultats electorals, cap un recurs davant els Tribunals, que es substanciarà pel procediment urgent i preferent a què es refereix la Constitució si es fonamentés en la lesió d'un dret fonamental.

Capítol sisè. Infraccions penals

Article 49

1. Són delictes electorals els tipificats en el Codi Penal i els que s'expressen en aquesta llei. Els delictes electorals poden comportar la pèrdua del dret a votar, com a pena accessòria i pel mateix període de la principal.

2. Els delictes electorals comesos per càrrecs públics o per funcionaris poden comportar també la inhabilitació per a l'exercici de la funció pública en les mateixes condicions del paràgraf precedent.

Article 50

Els qui de manera fraudulenta s'inscriguin o es facin inscriure en les llistes electorals i els administradors públics que, també de manera fraudulenta, les alterin seran castigats amb penes de presó de fins a tres anys.

Article 51

Els qui per regals o promesa en diner o en espècies o per l'anunci de favors o amenaces per a l'obtenció o pèrdua de treballs públics o privats busquin influir en el vot d'algun elector, seran castigats amb penes de presó de fins a tres anys.

Article 52

Els qui atemptin contra el secret del vot seran castigats amb pena de presó de fins a un any.

Article 53

La infracció culposa de les normes de la present llei que no estigui configurada com a delicte pot ésser castigada amb multa de fins a 500.000 PTA.

Capítol setè. El recurs contenciós

Article 54

Excepte en allò previst en els articles 12.2, 26.3 i 53 de la present llei, seran d'aplicació els recursos i procediments ordinaris previstos en el Codi de l'Administració i en la Llei Qualificada de la Justícia per a tota reclamació contra actes i disposicions dels poders públics relacionats amb les eleccions.

Article 55

En el cas que alguna o algunes de les dates previstes en aquesta llei, excepte les jornades electorals, per a la presentació de candidatures, recursos i en general qualsevol altra que afecti al desenvolupament del procés electoral, coincidís amb un diumenge o amb un altre dia festiu, s'entendrà el termini tàcitament prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

Títol II. De les eleccions generals

Capítol primer. Convocatòria d'eleccions

Article 56

1. El mandat dels Consellers acaba quatre anys després de la seva elecció o el dia de la dissolució del Consell General, prevista per la Constitució.

2. El decret de dissolució fixarà la data de les eleccions, a realitzar entre els trenta i els quaranta dies següents.

3. El decret de dissolució fixa la durada de la campanya electoral, en els termes de l'article 28 de la present llei.

Article 57

El Consell General es compon de vint-i-vuit Consellers Generals, la meitat dels quals són elegits a raó d'un nombre igual per cadascuna de les set Parròquies i l'altra meitat s'elegeix en circumscripció nacional.

Article 58

En les candidatures de les circumscripcions parroquials hauran de figurar necessàriament dos candidats, acompanyats de dos suplents.

Article 59

Les candidatures de la circumscripció nacional estaran compostes per una llista ordenada de 14 candidats i 3 suplents que determina els Consellers Generals elegits en funció dels resultats electorals i l'ordre correlatiu de substitució en cas de vacant.

Article 60

Una mateixa persona, sigui candidat o suplent, no pot figurar simultàniament en una llista de la circumscripció parroquial i en una de la circumscripció nacional.

Article 61

1. Les eleccions de Consellers Generals en les circumscripcions parroquials i en la circumscripció nacional, hauran de realitzar-se en el mateix dia i en la mateixa seu electoral.

2. A aquest efecte, s'habilitaran dues urnes en cada mesa electoral. La primera urna, de color blanc, estarà reservada a l'elecció de les candidatures parroquials i els sobres i paperetes seran de color blanc. La segona urna, de color blau, es destinarà a l'elecció de les candidatures nacionals i els sobres i paperetes seran de color blau.

Article 62

1. El mateix dia de la votació, les meses electorals faran una certificació dels resultats de les candidatures en llur respectiu col.legi electoral. Aquestes certificacions seran trameses immediatament al Govern, que efectuarà el recompte final de la circumscripció nacional i determinarà tots els candidats elegits.

2. El Govern aixecarà una acta nacional i el Cap de Govern proclamarà el nom de tots els candidats elegits, sigui quin sigui l'origen de la seva elecció.

Article 63

1. A més de les causes d'incompatibilitat previstes en els articles 16 i 17, el càrrec de Conseller General és incompatible:

a) amb el de Cap de Govern o Ministre.

b) amb el de membre del Comú.

c) amb el de Secretari del Comú.

d) amb qualsevol activitat que suposi estar en nòmina del Consell General, del Govern o d'Ens públics o parapúblics, no havent-ne obtingut l'excedència.

e) amb l'exercici de qualsevol delegació per part del Govern que superi el període de sis mesos.

Capítol segon. Sistema electoral

Article 64

Els electors hauran de votar les candidatures de les circumscripcions parroquials completes sense alterar-les, altrament la seva papereta o vot serà nul.la.

Article 65

Les candidatures de la circumscripció nacional seran votades en la seva totalitat, essent vots nuls aquells que, d'alguna forma, indiquin alteracions o preferències en l'ordre de les llistes.

Article 66

1. Seran proclamats Consellers Generals, elegits en les circumscripcions parroquials, els candidats de la candidatura més votada.

2. Si en la votació es produís un empat entre dos o més candidatures, el diumenge següent se celebrarà una nova votació entre aquestes candidatures.

3. Si en la nova votació es produís un altre empat, tan bon punt hagi acabat l'escrutini s'efectuarà un sorteig que consistirà en posar una papereta amb el nom de cada candidatura dintre l'urna, i quedarà elegida la candidatura el nom de la qual surti primer de l'urna.

L'extracció de la papereta l'efectuarà el president de la mesa electoral amb total imparcialitat.

Article 67

1. Per a la determinació dels Consellers Generals en la circumscripció nacional, s'utilitzarà el sistema proporcional denominat de "resta més elevada".

2. A aquest efecte, a cada candidatura li correspondran tants escons com resulti de dividir el seu nombre de vots pel quocient electoral. Si efectuada aquesta operació no s'haguessin cobert els catorze càrrecs de Conseller, els escons restants s'adjudicarien a aquella o aquelles candidatures que ja tinguessin representació i que tinguessin la resta o restes més elevades, en funció del nombre de vacants existents. Si es produís empat en l'adjudicació de restes, es resoldria en favor de la candidatura amb més nombre de vots absoluts. Si també en nombre de vots absoluts es produís un empat, es resoldria per sorteig.

3. El quocient electoral es determina dividint el nombre total de vots vàlids per catorze.

4. La resta és aquella que resulta matemàticament de dividir el nombre total de vots de cadascuna de les candidatures pel quocient electoral. Són els vots sobrers de cada candidatura que no han arribat a la xifra expressada pel quocient electoral.

Exemple:

candidatura A = 3000 vots : 596 = 5 escons + 20 resta = 5 escons.

candidatura B = 2550 vots : 596 = 4 escons + 166 resta = 4 escons.

candidatura C = 1975 vots : 596 = 3 escons + 187 resta = 3 escons.

candidatura D = 825 vots : 596 = 1 escons + 229 resta = 2 escons.

8350 : 14 = 596 (quocient electoral)

Títol III. De les eleccions comunals

Article 68

1. El mandat dels membres del Comú té una durada de quatre anys.

2. El Cap de Govern fixarà, per mitjà de Decret, la data de les eleccions, a celebrar durant la primera quinzena del mes de desembre de l'any electoral.

3. El mateix Decret fixarà la durada de la campanya electoral, en els termes de l'article 28 de la present Llei.

Article 69

1. Els Consells del Comú estaran compostos per entre deu i setze Consellers, sempre en nombre parell.

2. Els Consells del Comú, elegits conforme a aquesta llei, podran modificar el nombre de Consellers dins els marges expressats en el paràgraf primer, sempre que aquesta modificació sigui aprovada per 2/3 parts dels seus membres. Perquè aquest acord tingui efecte per a les eleccions següents, s'haurà d'adoptar amb un any d'antelació a la celebració d'aquestes.

Article 70

Les candidatures, que seran presentades per un 0,5% del cens parroquial i, en qualsevol cas, per no menys de deu presentadors, estaran compostes per una llista ordenada de tants candidats com Consellers s'elegeixin en la Parròquia i dos suplents. Els electors votaran les llistes en la seva totalitat, sense poder-ne alterar l'ordre ni indicar les seves preferències per un o altre candidat.

Article 71

1. Efectuada l'elecció, correspondrà directament a la candidatura més votada en cada Parròquia la meitat dels Consellers, sigui quina sigui la diferència amb vots amb la resta de candidatures. L'altra meitat de Consellers es distribuirà proporcionalment entre totes les candidatures, inclosa la més votada, per aplicació del sistema descrit en l'art. 67, adequant-lo al nombre de Consellers a repartir proporcionalment.

2. En cas d'empat entre dues o més candidatures, correspondria a cadascuna d'elles una part igual de la meitat directa assignada a la llista més votada i, si no fos possible una distribució exacta, l'escó o escons sobrants serien acumulats al nombre de Consellers a repartir proporcionalment.

Article 72

El mateix dia de la votació, les meses electorals lliuraran una certificació dels resultats de les circumscripcions respectives al Govern.

Aquest, verificarà les certificacions, aixecarà l'acta de resultats i el Cap de Govern proclamarà el nom de tots els candidats que han resultat elegits.

Article 73

1. Els Cònsols Major i Menor seran elegits d'entre i pels Consellers del Comú.

No podran exercir més de dos mandats consecutius complets.

2. Els Cònsols Major o Menor cessaran en el seu càrrec si els és presentada una moció de censura, amb un Conseller del Comú com a candidat alternatiu i aquesta obtingués el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de dret del Consell del Comú.

3. Si la moció de censura no reeixís, el Conseller del Comú presentat com a candidat alternatiu no podria ésser presentat de nou en tot el que restés de mandat.

4. El Cònsol Major o el Cònsol Menor podran presentar de forma irrevocable la dimissió del seu càrrec, passant a ésser membres del Consell del Comú.

La seva substitució s'efectuarà per mitjà del mateix sistema amb què van ser elegits, i haurà de tenir lloc durant els quinze dies següents a la presentació de la seva dimissió.

5. Qualsevol Conseller del Comú podrà presentar davant el Cònsol Major o el Cònsol Menor la seva renúncia irrevocable al càrrec, la qual tindrà efecte a partir dels quinze dies d'haver-la presentada.

El substituirà en el càrrec el candidat següent al darrer escollit de la seva llista electoral.

Article 74

A més de les causes d'incompatibilitat previstes en els articles 16, 17 i 63, el càrrec de membre del Comú és incompatible amb el càrrec de Cap de Govern o Ministre.

Article 75

Endemés de les incompatibilitats previstes en l'article anterior, els càrrecs de Cònsol Major i Menor són incompatibles amb qualsevol activitat que suposi estar en nòmina del Consell General, del Govern, d'Ens públics o parapúblics o d'Organismes o Administracions dependents d'algun Estat estranger, no havent-ne obtingut l'excedència.

Títol IV. Dels referèndums

Capítol primer. El referèndum de reforma constitucional

Article 76

1. Aprovat un projecte de modificació de la Constitució pel Consell General, segons el que es preveu en ella, el Síndic General el lliurarà als Coprínceps perquè, de manera simultània i conjunta, convoquin referèndum.

2. La data de realització del referèndum serà fixada pel Consell General i, en cap cas, serà abans que hagin transcorregut trenta dies des de la comunicació als Coprínceps.

Article 77

El Govern prepararà i lliurarà als Comuns i als Batlles les paperetes de vot i els sobres oficials. En les paperetes hi figurarà impresa la pregunta, tal com hagi estat plantejada pel Consell General i també les dues alternatives de resposta, en unes paperetes "SÍ" i en altres "NO". Hi haurà també paperetes blanques.

Article 78

Fet el recompte pel Govern, segons el que es preveu en l'art. 47 de la present llei, establirà l'acta nacional del resultat del referèndum. La modificació de la

Constitució quedarà aprovada si el nombre de vots afirmatius emesos pel poble andorrà supera el nombre de vots negatius. El Cap de Govern proclamarà el resultat del referèndum immediatament.

Article 79

Una vegada aprovat el projecte de reforma de la Constitució pel poble andorrà en referèndum, el Síndic General el lliurarà als Coprínceps per a la seva ratificació. Acompanyarà el text de la reforma una còpia certificada de l'acta nacional acreditativa del resultat.

Capítol segon. El referèndum consultiu

Article 80

Aprovada la realització d'un referèndum sobre una qüestió d'ordre polític, segons el que es preveu en la Constitució, el Cap de Govern es dirigirà als Coprínceps perquè el convoquin.

Article 81

La data i la pregunta del referèndum seran fixades pel Govern amb l'acord del Consell General.

Article 82

La proclamació dels resultats es farà de manera que quedi simultàniament clara i manifesta la voluntat expressada pels votants de totes i cadascuna de les Parròquies i la del conjunt del poble andorrà.

Disposició transitòria primera

Mentre que no entrin en vigor la Llei Qualificada de la Justícia i la Llei Qualificada del Tribunal Constitucional previstes per la Constitució, el Tribunal Administratiu i Fiscal resoldrà sobre els recursos plantejats.

Disposició transitòria segona

El Govern prendrà les mesures oportunes, i el Consell General habilitarà els crèdits necessaris, per informar a l'electorat sobre el nou procediment d'elecció del Consell General a fi i efecte de reduir el més possible el nombre de vots nuls per desconeixement de la mecànica del vot.

Disposició transitòria tercera

Per a les primeres eleccions comunals, a cada Comú s'elegirà el mateix nombre de Consellers que abans de l'entrada en vigor de la present llei, sempre que no s'hagi modificat aquest conforme al que es preveu en l'art. 69.2.

Disposició transitòria quarta

Fins i tant no es puguin aplicar les previsions de substitució en els Comuns contemplades per aquesta llei, si es produeixen vacants en algun d'ells es procedirà a una elecció parcial per proveir novament el càrrec o càrrecs.

Disposició transitòria cinquena

Per a les eleccions al Consell General a celebrar durant la primera quinzena del mes de desembre de 1993, les candidatures s'hauran de presentar entre els dies 2 i 8 de novembre de 1993.

Disposició transitòria sisena

Per a les eleccions al Consell General a celebrar durant la primera quinzena del mes de desembre de 1993, no serà d'aplicació l'article 14 en allò que fa referència a les revisions semestrals de la llista electoral. En conseqüència, la resolució de qualsevol expedient sobre adquisició de la nacionalitat donarà dret als interessats a fer-se inscriure en la llista electoral per tot el dia 3 de desembre de 1993, data de tancament final de la mateixa.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

Llei qualificada d'educació

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei qualificada d'educació

Preàmbul

L'estructura educativa del nostre país, peculiar pel fet que hi coexisteixen diferents sistemes educatius forans que fins fa pocs anys han complert la funció d'ensenyament nacional, ha anat adquirint durant els darrers decennis una complexitat notable. La seva comprensió requereix necessàriament l'anàlisi del procés històric de decantament que s'ha anat produint al llarg dels darrers cent anys.

Històricament, la responsabilitat de l'educació requeia en els Comuns, que eren els organitzadors d'una gran part de la vida de la comunitat. No fou fins al final del segle passat, cap al 1880, que en algunes parròquies, amb un mestre pagat pel Comú, van instal.lar-se les primeres escoles congregacionals.

Després, des de 1900, van obrir-se les primeres escoles primàries franceses a diverses parròquies, tot i que la seva situació no va regularitzar-se fins a la promulgació del Decret sobre les escoles i el Liceu del Copríncep Francès a Andorra, l'any 1982. A partir de l'any 1930 van obrir-se també diverses escoles espanyoles en diferents parròquies. La seva situació jurídica no es regulà fins a la signatura del conveni entre el Copríncep Episcopal i el Govern espanyol, l'any 1981. Unes i altres han assegurat la formació de primera i segona ensenyança del conjunt d'estudiants del nostre país.

L'any 1966 comença a funcionar el col.legi Sant Ermengol, bastit per la Mitra en un terreny cedit pel Consell General, i l'any 1968 s'inaugura el nou centre de la Sagrada Família a Santa Coloma: l'Institut Janer. Tant l'un com l'altre seran després subvencionats íntegrament pel Consell General a fi que imparteixin l'ensenyament en règim de gratuïtat.

L'any 1972, el Consell General va posar en marxa el programa d'andorranització de l'ensenyament, destinat a preservar la identitat i les peculiaritats del nostre país. En aquells anys, i mercès a la iniciativa d'un grup de ciutadans, va crear-se l'escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell com a centre d'educació especial. L'any 1982, el Govern promou la creació d'un sistema educatiu propi amb la posada en marxa de l'Escola Andorrana.

Dins el sistema d'educació andorrà s'han creat més recentment uns altres dos centres de formació: l'Escola d'Informàtica i l'Escola Universitària d'Infermeria. Ambdues escoles, que inicien les seves activitats l'any 1988, responen a necessitats concretes del nostre món laboral i afavoreixen el sector de serveis que pren cada cop més importància dins la nostra societat.

Aquesta és l'estructura educativa andorrana en el moment en què el poble andorrà assumeix la plena sobirania amb la promulgació de la Constitució. Aquesta Llei estableix l'estructura educativa andorrana a partir de la realitat existent: la de diversos sistemes educatius que coexisteixen dins d'una sola estructura educativa, una especificitat certament enriquidora, a la qual no es vol renunciar.

La present Llei desenvolupa, en primer lloc, el dret de tota persona a l'educació, dret que la Constitució reconeix amb el caràcter de fonamental i estableix l'escolarització obligatòria i gratuïta fins als 16 anys; el dret dels adults a la formació bàsica, i el principi d'igualtat en l'accés als nivells superiors de l'ensenyament. Es refereix també a la llibertat de càtedra dels ensenyants, i als drets dels pares d'alumnes a escollir el tipus d'educació que desitgen per a llurs fills, així com als drets dels alumnes.

A partir de la proclamació constitucional del dret a l'educació com un dret fonamental, l'Estat andorrà ha de dotar-se dels mecanismes per fer-lo efectiu, i a aquesta finalitat obeeix el sistema educatiu andorrà. Amb aquest sistema, poden coexistir altres sistemes educatius, amb el sol requisit que es conclogui prèviament el corresponent conveni.

Pel que fa als centres docents, la llei distingeix entre els públics i els privats. La llei configura els centres públics d'una forma molt àmplia, entenent com a tals no sols aquells que depenen de l'Administració de l'Estat, sinó també tots els altres que, lligats per conveni, concert, contracte o altra fórmula d'acord de voluntats amb el Govern, serveixin finalitats públiques. Amb ells coexistiran centres privats com a expressió del principi constitucional de llibertat d'ensenyament i de llibertat de creació de centres docents, en funció de la lliure iniciativa. Quant a aquests centres, el paper de l'Estat es limita a controlar i garantir que imparteixin llur docència en condicions suficients per fer efectiu el dret constitucional de llurs alumnes a obtenir una educació ordenada al ple desenvolupament de la seva personalitat i dignitat, en el respecte de la llibertat i dels drets fonamentals.

La regulació de l'ensenyament especialitzat es deixa al Govern, per via de reglament, però es reserva a la llei ordinària la creació de centres d'ensenyament superior o universitari.

Per últim, la llei es refereix expressament a la situació dels diferents centres educatius que actualment estan oberts a Andorra i que imparteixen estudis d'acord amb els sistemes educatius espanyol o francès. La situació i l'estatut dels centres docents d'ensenyament francès i espanyol dependents de les Administracions públiques dels països veïns, així com el col.legi Sant Ermengol i les escoles de la Sagrada Família han de regular-se per conveni amb el Govern d'Andorra.

Títol I. Principis generals

Article 1

1. Tothom té dret a rebre una educació bàsica que li permeti desenvolupar la pròpia personalitat, formar-se com a ciutadà i participar en el desenvolupament del país.

2. Igualment, tothom té dret a accedir als nivells superiors de l'ensenyament, en funció de les seves aptituds, aprofitament i vocació.

Article 2

L'educació es basa en els drets, llibertats i principis que s'estableixen en la Constitució, en aquesta Llei, i en els tractats i acords internacionals que Andorra celebri.

Article 3

L'activitat educativa s'adreçarà a la consecució de les finalitats següents:

a) promoure i afavorir el desenvolupament de la personalitat de l'alumne.

b) impulsar l'adquisició d'hàbits intel.lectuals i tècniques de treball.

c) transmetre coneixements científics, tècnics, humanístics, artístics i ètics.

d) capacitar per a l'exercici d'activitats professionals.

e) impulsar el català com a llengua pròpia del país, vetllant perquè s'assoleixi un domini correcte i un ús matisat i ric del català oral i escrit.

f) fomentar l'esperit universal crític, així com els comportaments d'autonomia i adaptabilitat, i contribuir a l'enriquiment dels elements culturals propis i específics de la societat andorrana.

g) fomentar la integració i la participació social i cívica.

h) formar els infants i els joves en el respecte de la diversitat i dels drets i llibertats fonamentals, i en l'exercici de la tolerància i la llibertat, dins els principis democràtics de convivència i pluralisme.

Article 4

1. L'educació bàsica és obligatòria i gratuïta per a tots els ciutadans, els naturals i els estrangers legalment residents, en els nivells que estableix l'article 7 de la present Llei. L'Estat garanteix aquest dret a través dels centres públics.

2. Es garanteix l'educació bàsica als adults a través d'un sistema de formació d'adults.

Article 5

L'estructura educativa andorrana és plural. Està integrada pels centres que segueixen el sistema educatiu andorrà i pels centres que segueixen altres sistemes educatius reconeguts per conveni.

Article 6

1. El sistema educatiu andorrà es regeix per la present Llei, per la llei de desenvolupament del sistema educatiu andorrà, per la llei de l'Escola Andorrana

i per les disposicions que les complementin i desenvolupin.

2. Els sistemes educatius diferents de l'andorrà es regulen per les seves pròpies normes en allò que no hagi estat modificat pel conveni que els reconeix, i sense perjudici de l'aplicació directa d'aquesta Llei i de les disposicions que la desenvolupen en allò que es prevegi expressament.

Article 7

1. L'escolaritat obligatòria inclou els nivells de primera i segona ensenyança. Comprèn des dels 6 anys fins als 16 anys.

2. Tot infant tindrà el dret de ser escolaritzat a partir dels 3 anys, si els pares o el tutor així ho demanen.

3. Els alumnes podran ser escolaritzats fins als 18 anys per cursar el nivell de segona ensenyança.

Article 8

L'atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials es regirà pel principi d'integració.

Article 9

1. Els alumnes tenen dret a rebre una orientació escolar i professional i a percebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic, social i cultural, d'acord amb la llei.

2. Els alumnes tenen dret a que el seu rendiment escolar sigui valorat amb criteris objectius.

Article 10

Els pares o tutors tenen dret a optar lliurement per qualsevol dels sistemes educatius implantats a Andorra, i el dret que llurs fills o pupils rebin la formació religiosa i moral d'acord amb llurs pròpies conviccions. Es garanteix als pares o tutors la llibertat d'associació per col.laborar i participar, de conformitat amb les lleis i els reglaments que les desenvolupin, en les activitats educatives i de formació de llurs fills o pupils.

Article 11

Es reconeix als docents la llibertat de càtedra, sempre que respectin la Constitució i s'exerceixi amb finalitat educativa.

Article 12

Tots els membres de la comunitat educativa tenen el deure de respecte a les normes bàsiques de convivència dins del centre docent.

Article 13

Es facilitarà l'accés a les Universitats i centres d'ensenyament superior per mitjà de la dotació de beques i ajuts a l'estudi, que s'atorgaran d'acord amb la llei.

Article 14

1. Els títols acadèmics i professionals expedits per l'Estat, d'acord amb les diferents modalitats del sistema educatiu andorrà, tindran plena validesa acadèmica i professional dins del territori andorrà.

2. El reconeixement i homologació dels títols acadèmics i professionals lliurats pels sistemes educatius estrangers, i el reconeixement a l'estranger dels títols lliurats pel sistema educatiu andorrà, es regularan pels corresponents convenis.

Article 15

El Govern fixarà anualment el calendari escolar de tots els centres docents a Andorra.

Article 16

1. Correspon al Govern la planificació general de l'ensenyament, d'acord amb les necessitats educatives, per tal de garantir l'exercici efectiu del dret a l'educació i a la llibertat d'ensenyament.

2. En la seva funció de planificació, el Govern tindrà en compte l'existència d'opcions provinents dels sistemes educatius diferents de l'andorrà.

Títol II. Els sistemes educatius

Capítol primer. El sistema educatiu andorrà

Article 17

Els principis rectors del sistema educatiu andorrà i les seves modalitats, nivells, cicles, cursos i opcions establerts per la llei seran desenvolupats per un reglament que determinarà els seus programes. S'entén per programa el conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'orientació i avaluació.

Article 18

El català és la llengua pròpia del sistema educatiu andorrà. En les diferents modalitats i nivells del sistema educatiu andorrà es promourà l'aprenentatge de llengües estrangeres que podran ser vehiculars per afavorir l'obertura a la cultura universal i la relació fluida amb els altres països.

Article 19

El Govern, a través del servei corresponent, inspeccionarà i avaluarà tots els centres del sistema educatiu andorrà.

Capítol segon. Els sistemes educatius altres que l'andorrà

Article 20

S'admet la implantació a Andorra de centres dependents de sistemes educatius altres que l'andorrà, sempre que es conclogui prèviament el corresponent conveni.

Article 21

Els centres docents que depenguin de sistemes educatius diferents de l'andorrà impartiran obligatòriament les matèries específiques de formació andorrana que determini el Govern a través del corresponent conveni.

Article 22

Sobre els centres dependents dels sistemes educatius altres que l'andorrà, el Govern tindrà les facultats inspectores que es determinin en el conveni o acord que el reconegui.

Títol III. Els centres docents

Article 23

1. Els centres docents poden ser públics o privats.

2. Els centres públics són l'instrument per garantir el dret a l'educació reconegut per la present Llei. Poden ser estatals o no-estatals.

a) Són centres públics estatals els que crea el Govern i se sostenen amb càrrec al pressupost general.

b) Són centres públics no-estatals aquells que depenen d'una persona pública o privada lligada per conveni,

concert, contracte o altra fórmula d'acord de voluntats amb el Govern.

3. Els centres privats són expressió del principi constitucional de llibertat de creació de centres docents. El seu titular pot ser una persona pública diferent de l'Estat o una persona física o jurídica de caràcter privat.

Article 24

1. En funció dels nivells d'ensenyament que imparteixin, els centres docents es classifiquen en:

a) Centres d'educació maternal.

b) Centres de primera ensenyança.

c) Centres de segona ensenyança.

d) Centres de batxillerat.

e) Centres de formació professional.

f) Centres universitaris.

2. El Govern determinarà reglamentàriament les condicions necessàries per obrir centres docents que imparteixin ensenyaments no compresos a l'apartat anterior, així com la validesa i efectes dels títols que aquests centres lliurin.

Article 25

1. L'obertura i el funcionament dels centres privats estan subjectes al règim d'autorització administrativa, que es concedirà quan es compleixin els requisits mínims que s'estableixin amb caràcter general. L'autorització es revocarà, sense dret a indemnització, quan els centres deixin de complir aquells requisits.

2. La creació i el funcionament a Andorra de centres docents que imparteixin ensenyaments diferents dels del sistema educatiu andorrà es regularà per conveni.

Article 26

1. Una persona física o jurídica de nacionalitat andorrana pot obrir i dirigir centres docents privats que imparteixin l'ensenyament a què es refereix el capítol primer del títol II d'aquesta Llei. Les persones físiques de nacionalitat estrangera i residents a Andorra podran obrir i dirigir aquests centres si reuneixen els requisits que s'exigeixen amb caràcter general als residents per a l'exercici del comerç, la indústria i les professions liberals al Principat.

També podran obrir i dirigir els centres que s'especifiquen en l'apartat anterior, les societats d'interès públic constituïdes d'acord amb el que preveu la legislació mercantil vigent.

2. Per excepció al que estableix el paràgraf anterior, no podran ser titulars de centres docents:

a) Els funcionaris públics i el personal que estigui al servei de qualsevol Administració pública.

b) Les persones que prestin serveis o assessoraments a qualsevol Administració pública o centre docent estatal.

c) Els que tinguin antecedents penals per delicte dolós.

d) Les persones jurídiques en què una o més persones físiques incloses als apartats anteriors exerceixin càrrecs socials o posseeixin capital social.

Article 27

Tots els centres docents, públics i privats, hauran de reunir uns requisits mínims que garanteixin la qualitat de l'ensenyament que imparteixen. Els esmentats requisits es referiran, com a mínim, a la titulació acadèmica del professorat, a la relació numèrica alumnes/professor, a les instal.lacions docents i esportives i al nombre de places escolars, i seran determinades pel Govern.

Article 28

1. Tots els centres docents tindran una denominació pròpia. S'inscriuran en un registre que portarà el Govern a través del servei corresponent.

2. Als centres docents els queda prohibit l'ús de denominacions que puguin induir a confusió sobre el nivell dels ensenyaments que imparteixen, el sistema educatiu que segueixen, la validesa acadèmica dels estudis o qualsevol altra.

Article 29

1. Són centres universitaris o centres d'ensenyament superior els que siguin reconeguts com a tals per llei del Consell General a proposta de Govern.

2. El Govern determinarà amb caràcter general el número de centres i les exigències de material i de personal mínim que hauran de reunir aquests centres.

3. La llibertat de creació de centres docents reconeguda en l'article 20, apartat 2n. de la Constitució, comprèn la llibertat de creació de centres d'ensenyament superior de titularitat privada. Aquests centres s'hauran d'ajustar a les normes previstes en els apartats anteriors.

4. Correspon al Govern l'homologació dels títols expedits pels centres privats d'acord amb la reglamentació que s'estableixi.

Títol IV. El Consell Andorrà de l'Ensenyament

Article 30

1. El Consell Andorrà de l'Ensenyament (CADE) serà el màxim òrgan col.legiat de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa per a la planificació general de l'ensenyament i d'assessorament i consulta del Govern.

2. El president del CADE serà el ministre d'Educació o una altra persona nomenada pel Govern, a proposta del ministre d'Educació.

3. El CADE podrà formular propostes per millorar l'eficàcia, el rendiment i la qualitat de l'ensenyament i podrà elaborar estudis a fi d'experimentar i investigar sobre noves propostes educatives i mètodes d'estudi.

Article 31

1. La composició i el funcionament del CADE s'establiran reglamentàriament.

2. Es podran incorporar al CADE, amb caràcter permanent o per a temes específics, experts estrangers nomenats pel Govern a proposta del ministre d'Educació.

Disposicions addicionals

Primera

El Govern d'Andorra ha de concloure els convenis o els acords als quals es refereixen els articles 14.2 i 20 de la present Llei amb les autoritats educatives dels països dels quals depenen els sistemes educatius estrangers establerts al Principat.

Segona

1. El Govern ha de concloure amb el patronat rector del Col.legi Sant Ermengol un conveni que reguli l'ensenyament en aquest centre.

Aquest conveni tindrà en compte el contracte signat el 16 de juny de 1976 així com l'experiència de la seva aplicació.

2. El Govern ha de concloure amb la congregació titular dels dos centres educatius de la Sagrada Família un conveni per tal de definir el seu status.

Disposicions finals

Primera

Es faculta el Govern per al desplegament reglamentari del que disposa aquesta Llei.

Segona

Queden derogades totes les disposicions anteriors en allò que contradiguin aquesta Llei.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Coprínce d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Coprínce d'Andorra

Llei qualificada de la nacionalitat

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei qualificada de la nacionalitat

Exposició de motius

El Consell General, en la seva sessió del 31 de juliol de 1985, va adoptar la Proposta de Modificació del Codi de la Nacionalitat Andorrana de l'11 de març de 1977.

Recollint aquella proposta, les Delegacions Permanents dels Coprínceps van promulgar en data 7 de setembre de 1985 la corresponent Llei de Modificació del Codi de la Nacionalitat Andorrana.

L'aplicació pràctica dels nous preceptes introduïts en aquella modificació han posat de manifest diferents llacunes que amb la present proposició de llei s'intenten resoldre.

D'altra banda, els criteris d'interpretació formulats pels Delegats Permanents en el preàmbul de la Llei de 1985, assenyalaven ja en aquell moment que la posició del Consell General hauria d'evolucionar, fent-se ressò de situacions noves, atès l'interès comú, els sentiments profunds del país i la realitat dels fets.

La realització de diferents estudis demogràfics en el decurs dels darrers anys ha tornat a plantejar la necessitat acuitant d'establir un nou equilibri entre la comunitat andorrana i la no andorrana.

Es tracta d'una qüestió de cabdal importància per a la defensa de la identitat nacional andorrana.

La moderna legislació andorrana des del decret del 17 de juny de 1939, addicionat pel del 26 de desembre de 1941, ha tingut sempre com a nord la preservació de la identitat nacional andorrana, substracte humà necessari a l'existència jurídica del país.

El canvi de les estructures demogràfiques, passant d'una situació estàtica durant segles a una forta immigració en els darrers decennis, ha dut com a conseqüència una desproporció entre la població nacional i la forània percebuda com un element que calia corregir per no comprometre les bases mateixes de l'Estat.

L'afirmació d'Andorra com a Estat en Dret Internacional, una vegada el poble s'ha donat la Constitució, s'assolirà millor si l'element humà de l'Estat, la població, és cada vegada més homogènia seguint progressivament la tendència de fer coincidir la població de fet amb la població de dret.

En aquesta línia, la legislació ha anat ampliant-se progressivament i ara es proposa una obertura important donant el dret a la nacionalitat per naixement a Andorra, a la vegada que es pretén oferir-la a una part considerable de la població que es pot considerar integrada pel nombre d'anys de residència i l'època en què començaren a residir.

La tendència a fer coincidir la població de fet amb la de dret no juga solament en el sentit de l'adquisició de la ciutadania andorrana pels que neixen i viuen al país, sinó que, de manera simètrica, exigeix la pèrdua de la nacionalitat en cas contrari, i la prohibició de la doble nacionalitat. Normes, aquestes darreres, que han estat presents, amb força, en la legislació andorrana, des del decret mencionat de l'any 1939 fins a l'actualitat. Correlativament a l'obertura per a l'adquisició, la present modificació reforça la prohibició de la doble nacionalitat imposant una obligació d'optar lliurement entre l'andorrana i les demés nacionalitats. Opció fàcil d'exercitar i que serà facilitada encara més en el futur quan Andorra pugui signar les convencions adequades amb els països interessats.

La finalitat de la present modificació s'inscriu en l'evolució del dret de la nacionalitat des de l'any 1939: fer que cada vegada la població real d'Andorra sigui composada de més andorrans per dret de sang i per naixement al país, tot i no admetent més que una sola classe o categoria d'andorrans que no siguin a la vegada nacionals d'un altre país.

Article 1

Són andorrans els fills, legítims o no legítims, nascuts a Andorra, de pare o mare andorrans, o nascuts a l'estranger, si el pare o mare andorrans són nascuts a Andorra.

Article 2

1. Són andorrans els fills, legítims o no legítims, nascuts a Andorra, si almenys un dels progenitors és també nascut a Andorra, i a condició que tant els pares com els fills tinguin domicili i residència permanent al Principat.

2. Els infants trobats i els nascuts a Andorra de pares desconeguts fins que s'estableixi llur filiació, tindran des d'aquest moment la nacionalitat que els correspongui. La possessió d'estat durant divuit anys els donarà dret, en el cas en què la nacionalitat que els correspongui no sigui l'andorrana, a conservar aques-

ta, sempre que renunciïn a la que els correspongui.

Article 3

Ningú no pot adquirir la nacionalitat andorrana si, prèviament, no ha establert el seu domicili i residència efectius al Principat, demostri haver perdut la residència del país d'origen i continuï residint a Andorra després d'adquirida de forma efectiva almenys durant els anys que es fixen en l'article 20.

Article 4

1. Pot esdevenir andorrà el menor de 14 anys adoptat amb adopció plena sempre que la llei del país d'origen permeti la pèrdua de nacionalitat per adopció i que l'adopció hagi estat feta segons la llei andorrana o, si ho és d'acord amb una llei estrangera, que no sigui en frau de la llei andorrana ni atempti a l'ordre públic intern i sempre que es compleixin simultàniament les tres condicions següents:

- Que l'adoptat resti sotmès a la pàtria potestat de l'adoptant fins a la majoria d'edat.
- Que el procés d'adopció hagi estat acabat abans que el menor hagi arribat a l'edat de 14 anys.
- Que es provi la pèrdua de la nacionalitat anterior.

2. Per derogació de l'article 4.1., en el cas que l'adoptant hagi nascut a l'estranger de pare o mare andorrans, nascuts a Andorra, l'adoptat no pot adquirir la nacionalitat andorrana en el moment de l'adopció, sinó que resta sotmès a les disposicions de l'article 5.

Article 5

Pot esdevenir andorrà el fill nascut a l'estranger, de pare o mare andorrans, nascuts també a l'estranger, si estableix i conserva el seu domicili i la seva residència efectiva al Principat, prova haver perdut la o les nacionalitats que ostenta i declara la seva voluntat d'adquirir la nacionalitat andorrana per declaració escrita personal adreçada al Govern.

Article 6

Pot esdevenir andorrana la persona estrangera que contregui matrimoni amb una persona andorrana, si acredita tenir domicili i residència efectiva al Principat, ininterrompudament durant els tres anys anteriors o posteriors a la celebració del matrimoni, prova haver perdut la o les nacionalitats que ostenta, declara la seva voluntat d'adquisició de la nacionalitat andorrana i prova la seva integració a Andorra.

Article 7

1. Els fills d'una persona estrangera esdevinguda andorrana per raó de matrimoni, i que no siguin fruit d'aquest matrimoni, no podran adquirir la nacionalitat andorrana.

2. En cas de nul.litat del vincle matrimonial i de dissolució per causa diferent de la mort, el cònjuge que hagués adquirit la nacionalitat andorrana en virtut de l'article 6 perd la nacionalitat andorrana des de la data d'efectivitat de la resolució judicial. Això no obstant, per als casos de dissolució del vincle per causa diferent a la mort, sempre que s'hagués posseït la nacionalitat durant més de set anys, es conservarà, salvada voluntat expressada en contra.

Article 8

1. Les persones nascudes a Andorra, filles de pare i mare estrangers, podran adquirir la nacionalitat andorrana a condició que el pare o la mare tinguin residència i domicili efectius i exclusius a Andorra durant un període ininterromput de vint anys, com a mínim, i que ells mateixos hi tinguin residència i domicili efectius i exclusius, i provin la pèrdua de la o de les altres nacionalitats que ostentin.

Si en el moment de manifestar la seva voluntat d'adquirir la nacionalitat andorrana són menors de setze anys i han estat representats per exercir tal opció, hauran de fer, en el moment d'arribar als divuit anys, una declaració personal expressa i escrita adreçada al Govern confirmant la decisió d'adquirir la nacionalitat andorrana que en la seva representació els pares o tutors varen prendre en nom d'ells. L'absència de tal declaració comportarà la pèrdua de la nacionalitat andorrana.

2. Els consorts de les persones a les quals sigui aplicable el present article podran esdevenir andorrans al mateix temps que els nascuts a Andorra si en el moment en què es faci efectiva l'adquisició de la nacionalitat han transcorregut tres anys des de la celebració del matrimoni, i són residents a Andorra des de tres anys almenys. En aquest cas faran l'expedient previst en l'article 25 que serà presentat conjuntament amb el del consort nat a Andorra.

Si en el moment de l'adquisició de la nacionalitat per part del nat a Andorra, el seu consort no compleix les condicions de temps de residència i de matrimoni esmentades per adquirir la nacionalitat andorrana, es podrà acollir a allò previst en l'article 6.

Article 9

Pot esdevenir andorrana per naturalització donada discrecionalment pel Govern, la persona que acredita tenir domicili i residència efectius, ininterromputs i exclusius al Principat des d'abans de l'1 de gener de 1960, que ho demana, prova la seva integració a Andorra i perd la o les altres nacionalitats que ostenta.

El Govern elaborarà un reglament que fixarà les condicions que han de reunir els candidats a la naturalització que, tot i aplicant els criteris generals previstos en l'apartat anterior, precisarà les condicions que tindrà en compte en la presa de decisions, respectant, però, els principis d'igualtat i equitat, i evitant l'arbitrarietat.

Article 10

Les persones esdevingudes andorranes en virtut de les disposicions dels articles 4, 5, 6, 8, 9 i 11 adquiriran els drets polítics d'acord amb les disposicions comunes en la matèria.

Article 11

El menor d'edat, solter, fill d'una persona que hagi adquirit la nacionalitat andorrana, esdevé andorrà de ple dret, salvat el previst en l'article 7, sempre que estigui sotmès a la pàtria potestat del progenitor i que tingui residència des d'almenys el mateix temps que el progenitor en raó del qual obté la nacionalitat, i provi haver perdut la o les nacionalitats que ostenta.

El seu expedient haurà d'ésser tramitat conjuntament amb el del seu progenitor.

Article 12

Són andorrans, mentre conservin les funcions i els oficis respectius:

a) D'acord amb l'article 48 de la Constitució, els representants personals dels Copríncips a Andorra.

b) D'acord amb la Disposició Transitòria Segona de la Constitució, les persones designades Magistrats del Tribunal Constitucional que no siguin andorrans.

c) D'acord amb l'article 11.3 de la Constitució, els clergues amb ofici eclesiàstic a les parròquies del Principat.

La nacionalitat adquirida en virtut d'aquest article no és transmissible per matrimoni i filiació, i no dóna accés als drets polítics.

Article 13

El Consell General, per majoria de 2/3, podrà conferir el títol d'Andorrà d'Honor a les persones estrangeres que en consideri mereixedores, pels seus mèrits i actes envers el Principat.

Article 14

Tota persona que ostenti la nacionalitat andorrana pot renunciar a la mateixa voluntàriament, sempre que provi tenir una altra nacionalitat en el moment en què vol perdre-la i la renúncia no comporti frau a la llei andorrana. La renúncia s'haurà de presentar al Govern el qual verificarà el compliment de les dues condicions esmentades. Si el frau a la llei es descobrís i es posés de manifest després d'haver-se fet efectiva la pèrdua, aquesta no tindrà efectivitat.

Article 15

Qualsevol persona de nacionalitat andorrana perd aquesta nacionalitat, si adquireix una nacionalitat estrangera, des de la data d'aquesta adquisició.

Article 16

En cas de matrimoni amb una persona estrangera, el cònjuge andorrà no perdrà la nacionalitat andorrana, si el matrimoni no li fa adquirir la nacionalitat de l'altre cònjuge en virtut de la llei nacional d'aquest, o si no en té una altra en el sentit de l'article 14.

Article 17

Perd la nacionalitat andorrana el menor d'edat que esdevé sotmès a la pàtria potestat exclusiva d'un estranger, per causa d'adopció o de legitimació.

Article 18

Perd la nacionalitat andorrana la persona que s'enrola voluntàriament a un exèrcit d'un estat estranger o que essent enrolat de força no exerciti, encara que no prosperin, els recursos que la llei del dit estat estranger li ofereix per eximir-se de l'enrolament.

Article 19

Perd la nacionalitat andorrana la persona que exerceix un càrrec electiu o polític en un país estranger, sense haver obtingut prèviament l'autorització del Govern.

Article 20

Perd la nacionalitat andorrana el qui havent-la adquirit en virtut dels articles 5 en totes les redaccions del Codi de la Nacionalitat Andorrana dels anys 1977 i 1985 i els articles 5, 8, 9 i 11 de la present llei, no conservi ni hagi conservat el domicili i la residència efectives, ininterrompudes i exclusives al Principat durant almenys deu anys, des del moment de l'adquisició, conforme en l'article 3.

Article 21

El qui per adquirir, conservar, recuperar o veure's reconeguda la nacionalitat andorrana, hagués fet falses declaracions, inclosa l'omissió voluntària de fer conèixer les situacions jurídiques o fàctiques que li haguessin impedit d'adquirir, conservar, recuperar o veure's reconeguda la nacionalitat, perdrà la nacionalitat andorrana des del moment en què el Govern constati la falsa declaració o l'omissió, salvats els drets de tercers, sense perjudici d'incórrer en el delicte tipificat en l'article 148 del Codi Penal.

Article 22

1. La nacionalitat andorrana és excloent de qualsevol altra, no admetent-se la doble o múltiple nacionalitat.

2. Ningú no podrà esdevenir andorrà si no perd la o les nacionalitats que tingui en el moment de l'adquisició o del reconeixement de la nacionalitat andorrana en els termes de la present llei.

3. Tot andorrà ja sigui d'origen, ja sigui per adquisició, que obtingui una altra nacionalitat per haver-la demanat o per haver-la acceptat sense demanda prèvia, perd en el mateix moment de l'obtenció d'aquella la nacionalitat andorrana.

4. Tota persona que en mèrits de les successives disposicions legals en vigor en cada moment des de l'11 de març de 1977, hagin adquirit o readquirit la nacionalitat andorrana o els hagi estat reconeguda, i que segueixin ostentant altra o altres nacionalitats, hauran de provar haver perdut aquesta o aquestes. A tal efecte, disposaran d'un termini de cinc anys a comptar de l'entrada en vigor de la present llei per prendre les disposicions que calguin, i en l'any següent al cinquè, és a dir, dintre del sisè any a comptar de la data de publicació de la llei, hauran d'haver provat la pèrdua efectiva.

5. Passat el termini sense que els interessats hagin provat la pèrdua es considerarà que han efectuat una opció negativa de la nacionalitat andorrana i seran, automàticament i sense necessitat de cap acte administratiu ni jurisdiccional, desposseïts de la nacionalitat andorrana.

6. Els efectes de la pèrdua de la nacionalitat seran constatats pel Govern en l'expedient personal de cada interessat en el Registre de Nacionalitat, en el de Passaports i en el Cens Nacional. El Govern comunicarà aquesta constatació als Comuns els quals suprimiran els interessats de les llistes electorals a comptar del moment de la notificació, tot i prenent nota de la notificació en els registres comunals i en el cens comunal.

Els interessats hauran de retornar el passaport andorrà de manera immediata, devent ésser aquest requisat, per ésser tornat al Govern, per tot agent de l'autoritat que tingui constància de la pèrdua de nacionalitat.

S'encomana al Govern l'elaboració d'un reglament que precisi el procediment pràctic per donar compliment a allò previst en el present apartat.

Article 23

Poden recuperar la nacionalitat andorrana:

a) Les persones que l'hagin perdut per raó de matrimoni amb persona estrangera.

b) Els menors d'edat que hagin perdut la nacionalitat andorrana tal com està previst en l'article 17, dis l'any següent a la seva majoria d'edat.

Article 24

La recuperació de la nacionalitat andorrana no comporta efectes retroactius i la nacionalitat recuperada no podrà ésser invocada en perjudici de tercers per obligacions contretes durant la possessió de la nacionalitat estrangera.

Article 25

Per a l'adquisició de la nacionalitat andorrana en virtut dels articles 4, 5, 6, 8, 9 i 11 i, per obtenir el reconeixement de la nacionalitat en virtut dels articles 1 i 2 en els casos previstos en l'article 29, i recuperar-la en els casos de l'article 23, serà necessari formular un expedient sotmès al Govern comprensiu dels extrems que es diran en els articles següents.

Quan sigui favorable la resolució definitiva de l'expedient per part del Govern, contindrà la fórmula següent:

"Resolent favorablement l'expedient de l'adquisició / reconeixement / readquisició de la nacionalitat andorrana, es declara que l'interessat adquirirà la nacionalitat andorrana si en un termini d'un any a comptar de la data de la notificació, aporta, a satisfacció del Govern, la prova d'haver perdut la o les nacionalitats que ostenta fins ara i declara, baix jurament, per escrit adreçat al mateix Govern, no haver fet cap acte destinat a buidar de contingut la pèrdua".

Cas que la prova i declaració rebudes pel Govern siguin jutjades suficients, el Govern, per decret que tindrà la consideració d'acte administratiu als efectes de control jurisdiccional, atorgarà la nacionalitat amb efectes a comptar des del dia en què es va produir la pèrdua de la nacionalitat anterior, o la darrera pèrdua de les eventuals múltiples nacionalitats perdudes. En el cas contrari, passat el termini d'un any, quedarà caducada la resolució favorable.

Article 26

L'expedient a adreçar al Govern serà en dos exemplars i comprendrà:

1. En tots els casos:

a) Partida de naixement del sol.licitant.

b) Partida de naixement del pare i de la mare o ascendents del sol.licitant.

c) Certificats de residència consignant la data des de la qual el sol.licitant resideix al Principat, lliurat pels Comuns i pel Servei d'Immigració, en el seu cas.

d) Certificat de pèrdua del domicili i residència anteriors.

e) Certificat d'antecedents penals andorrà, del país la nacionalitat del qual s'ostenta i dels països de residència.

f) Certificat escolar dels centres docents andorrans especificant els anys que ha estat inscrit i ha cursat estudis a Andorra.

g) Declaració escrita i signada en un full apart, adreçada al Govern, en la qual el sol.licitant manifesti la seva voluntat d'adquirir la nacionalitat andorrana, declari la voluntat de defensar el bon ordre i benestar i independència d'Andorra, es comprometi a complir fidelment el seu sistema constitucional, les seves lleis, usos i costums, i els seus deures de ciutadà andorrà.

2. En el cas de l'article 4, la documentació acreditativa de l'adopció comprenent els actes administratius i jurisdiccionals que la continguin.

3. En els casos dels articles 6 i 8, documentació acreditativa de la nacionalitat del cònjuge i certificat d'estat civil recollint el matrimoni en virtut del qual es demana l'adquisició.

Article 27

Una vegada rebut pel Govern l'expedient serà instruït pels serveis adscrits al Cap de Govern els quals demanaran al Servei d'Immigració un report sobre la situació del peticionari en matèria de domicili i residència efectius a Andorra. Per a les necessitats de l'enquesta es tramitarà al Servei d'Immigració una còpia dels certificats aportats pel peticionari, previstos en els punts 1c), 1d) i 1f), de l'article 26, i d'altres eventuals relacionats amb el domicili i la residència, amb exclusió de tot altre document que figuri en l'expedient.

Article 28

Acabada la instrucció de l'expedient serà resolt pel Govern per decret, que haurà d'ésser motivat en cas de refús.

Contra la decisió del Govern hi cabran els recursos administratius previstos pel Codi de l'Administració.

Article 29

En els casos dels nascuts a Andorra, fills de pare o mare andorrà, previstos en l'article 1, i els nascuts a Andorra amb almenys un progenitor andorrà, previstos en l'article 2.1, no caldrà formular un expedient.

En els demés casos previstos en els articles 1 i 2.2 caldrà formular un expedient simplificat com es dirà en l'article següent.

Article 30

L'expedient a què es refereix l'article anterior contindrà la petició, la partida de naixement del sol.licitant i els documents que acreditin la conservació de la nacionalitat andorrana per part del progenitor que l'ostenti.

Serà donat a l'expedient el mateix tractament previst en l'article 27.

Article 31

En matèria de nacionalitat, l'opció del menor d'edat s'exercirà de la forma següent:

- Abans dels 16 anys, per mitjà del representant legal del menor d'edat.

- Entre els 16 i els 18 anys, el menor d'edat exercirà personalment la seva opció amb l'autorització del seu representant legal.

Article 32

Els fills nascuts accidentalment a l'estranger i que si haguessin nascut a Andorra serien andorrans, s'assimilen als fills nascuts a Andorra, sempre que la mare tingués en el moment del naixement residència i domicili efectius a Andorra.

Només podrà ésser invocat el present article per fer valer les previsions del mateix, durant els 180 dies naturals a partir del naixement, per les persones que neixin a partir de la publicació de la present llei i durant un any a partir de la data de publicació de la present llei pels nascuts d'ençà de l'1 de gener de 1975.

Passats aquests terminis no podran adquirir ni demanar el reconeixement de la nacionalitat andorrana en mèrits del que es preveu en el present article, però po-

dran demanar l'adquisició o el reconeixement en el cas de tenir-hi dret en virtut d'altres disposicions de la present llei.

Article 33

La suficiència de la integració a Andorra, exigida en els articles 6, 8 i 9, serà apreciada pels serveis de l'Administració Central que fixarà el Govern, d'acord amb el reglament que el mateix Govern elaborarà i publicarà.

Article 34

El reglament preveurà els mecanismes necessaris per a la constatació de l'existència o de l'absència de suficient integració, de manera que aquests siguin el més objectius i tecnificats possibles, impossibilitin el quebrantament del principi d'igualtat, tot i evitant prendre en compte cap element discriminatori basat en el sexe, la raça, la religió, les opinions, la nacionalitat i la situació econòmica del peticionari, però prenent en compte el coneixement de la llengua catalana i de les institucions andorranes com a element essencial.

Mentre que no s'hagi publicat el reglament que pel present article s'encomana al Govern, continuarà decidint, amb una resposta simplement positiva o negativa sense apreciació de grau, l'actual Comissió de la Nacionalitat, tot i aplicant els principis suara esmentats.

Article 35

Els documents amb què els peticionaris fonamentin el seu expedient, així com els informes i documents que el Govern obtingui del Servei d'Immigració, en aplicació dels articles 26 i 27, i de la Comissió de la Nacionalitat, en aplicació dels articles 33 i 34, tindran el caràcter de confidencials. Solament podran ésser comunicats al propi peticionari o a tercers que tinguin interès jurídic per impugnar la petició ella mateixa, la resolució recaiguda o en general l'estatut nacional del peticionari.

Article 36

Seran publicades en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra:

a) Les resolucions definitives del Govern que reconeguin la nacionalitat andorrana o que estableixin el dret a adquirir-la.

b) Els decrets del Govern reconeixent o atribuint la nacionalitat andorrana a les persones que havent obtingut una resolució definitiva de les contemplades en l'apartat anterior del present article, han provat haver complert el que es disposa sobre la pèrdua de la o de les nacionalitats anteriors en l'article 22.

c) Els decrets del Govern constatant o pronunciant la pèrdua de la nacionalitat andorrana.

Article 37

Ultra les accions civils que pertanyin a tercers a fer valer davant les jurisdiccions competents, tota persona que tingui interès jurídic podrà recórrer els actes publicats en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra en virtut de l'article anterior en el termini de tretze dies hàbils a comptar des de la seva publicació.

El recurs, que haurà d'ésser motivat en fet i dret, serà de reposició davant del Govern i contra la resolució recaiguda podrà recórrer davant de la jurisdicció administrativa i fiscal o davant de la jurisdicció que en tot moment sigui competent per apreciar la legalitat dels actes administratius del Govern. Les resolucions de Justícia recaiguda seran publicades en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Disposicions finals

Primera

Les persones a qui es refereix l'article 8.1 es podran beneficiar d'un passaport andorrà provisional fins el moment en què, complides les previsions que es fixen en dit article, adquireixin la nacionalitat andorrana, o fins que optin per una altra nacionalitat.

La primera pàgina, després del número, portarà la menció "passaport provisional". L'esment de la rúbrica "nacionalitat" no implica cap dret adquirit respecte a la futura sol.licitud de nacionalitat andorrana.

Per obtenir el passaport provisional s'haurà d'adreçar una súplica al Govern demostrant, amb els documents administratius pertinents la data en la qual, en principi, el seu pare o la seva mare tindran vint anys de domicili o residència efectius al Principat, i acompanyat dels documents previstos en els apartats a), b), c), f) i g) de l'article 26 de la present llei.

En tot cas, la data de validesa del passaport lliurat a aquestes persones no excedirà de tres mesos a comptar de la data en què el pare o la mare del sol.licitant portin vint anys de domicili i residència efectius al Principat. Des d'aquest moment no es podrà continuar gaudint del passaport andorrà, si no és en mèrits d'atribució de la nacionalitat andorrana, segons el que es preveu en l'article 8 i després d'haver seguit el procediment fixat en aquesta llei.

Quan l'interessat i els seus progenitors interrompin la residència a Andorra, traslladant-la a l'exterior, hauran de retornar el passaport provisional. Igualment, l'hauran de retornar si adquireixen una documentació d'identitat o títols de viatge dels països d'on són nacionals els pares o de països tercers.

Segona

La present Llei Qualificada de la Nacionalitat entrarà en vigor quan sigui publicada en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, una vegada complertes les previsions del l'article 63 de la Constitució.

Tercera

Queden derogades totes les disposicions anteriors contràries a la present llei.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

Lleis Ordinàries

Llei de modificació de la llei de creació de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei de modificació de la llei de creació de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)

Exposició de motius

El M.I. Consell General va aprovar, en sessió ordinària del dia 12 de juny de 1989, la Llei de Creació de l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF), el text de la qual va ser publicat en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra de data 30 de juny de 1989.

L'inici de les activitats d'aquest organisme i els plans d'actuació a curt i mig termini, establerts en funció de les circumstàncies prevalents en el marc general de l'economia andorrana, pública i privada, mostren que és necessari de donar a l'INAF un contingut explícit d'autoritat financera, per tal d'assegurar la realització dels seus objectius fonamentals.

La idea essencial que queda integrada al text legal, mitjançant la present modificació de la Llei és, doncs, que l'INAF queda constituït en autoritat financera, per delegació del Govern.

En l'exercici d'aquesta potestat dues són les línies d'actuació que queden especialment definides.

La primera és que l'INAF, sota la supervisió del Ministeri de Finances, estudiarà l'ordenació de l'àmbit financer del Principat; elaborarà, quan el Govern li ho encomani, els corresponents projectes de reglamentació a aprovar pel Consell General i, quan entrin en vigor, vetllarà pel compliment de les reglamentacions.

La segona és per poder cobrir, amb seguretat i eficàcia, els seus objectius, l'INAF farà aplicar, als bancs i a les altres entitats financeres establertes al Principat, coeficients i garanties determinats, d'obligat compliment, pels conceptes i en les condicions i límits que prèviament fixin el Consell General i el Govern.

El contingut d'aquesta modificació, com tot el conjunt de l'acció de l'INAF, serà desplegat des de la premissa que Andorra ha de mantenir un sistema financer estructuralment sòlid, que gaudeixi sempre del més alt nivell de confiança dels clients i que sigui internacionalment respectat.

El propòsit del M.I. Consell General és que l'INAF sigui un instrument orientat al servei de la globalitat del país; que faciliti la cooperació del sistema financer amb l'administració pública; i que, tot emparant els valors inherents a la dinàmica empresarial privada i al respecte del secret professional, complementi el sistema financer aportant-hi un adequat, i actualment indispensable, component d'autoritat pública.

Per altra banda, també es considera necessari modificar la composició del Comitè Consultiu, ja que les seves funcions, delimitades en l'Article 16 de la Llei, són d'assessorar el Consell d'Administració en la definició i orientació de l'activitat d'una institució pública. Per aital motiu no sembla adient mantenir la possibilitat, per part d'unes entitats privades, que poden veure's directament afectades per l'activitat de l'Institut, d'influir en les orientacions d'àmbit públic d'aquest Organisme.

Article 1

Els articles 2 i 17 de la Llei de creació de l'INAF de 1989, queden redactats de la forma següent:

"Article 2

L'Institut Nacional Andorrà de Finances té personalitat jurídica pròpia i autonomia plena per a la realització dels seus fins. Pot adquirir drets i contreure obligacions, i té plena capacitat d'obrar judicialment i extrajudicial.

En l'exercici de les seves funcions, l'Institut Nacional Andorrà de Finances es constitueix en l'òrgan tècnic executiu de l'autoritat financera del Principat d'Andorra.

Article 17

El Comitè Consultiu té la composició següent:

- dos membres designats pel Consell General.
- dos membres designats pel Govern.
- dos membres designats pels Comuns."

Article 2

Es crea l'article 6 bis, que diu el següent:

"Article 6 bis

L'Institut assumirà, ultra les funcions específiques indicades en l'article 6, les derivades de la seva condició d'òrgan tècnic executiu de l'autoritat financera, en especial:

- Proposant al Govern, a través del Ministeri de Finances, mesures a prendre en relació amb l'ordenació i reglamentació de l'àmbit financer.

- Fent aplicar els coeficients i garanties d'obligat compliment per part dels bancs i de les altres entitats financeres, de conformitat amb el que el Consell General i el Govern ordenin en aquesta matèria.

- Exercint la supervisió i control dels diversos components del sistema financer, d'acord amb el que en el seu moment estableixin les respectives reglamentacions."

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Coprincep d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Coprincep d'Andorra

Llei reguladora de les ordinacions dins el marc de la Constitució

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei reguladora de les ordinacions dins el marc de la Constitució

Amb l'entrada en vigor de la Constitució no procedeix que el Consell General segueixi aprovant Ordinacions Generals. No obstant, aquelles que eren vigents han quedat incorporades a l'ordenament jurídic general en virtut del principi de conservació d'aquest.

Per això, s'ha considerat necessari precisar amb quin rang s'ha fet aquesta incorporació, quedant així definit, per via de conseqüència, quin serà, d'ara endavant, el procediment de modificació. També s'ha cregut necessari determinar quin serà el procediment d'adaptació periòdica.

Article 1

Totes les Ordinacions aprovades pel Consell General que eren vigents en el moment de l'entrada en vigor de la Constitució han quedat incorporades a l'ordenament jurídic general amb rang de llei. La seva modificació s'efectuarà d'acord amb el procediment legislatiu.

Article 2

El Govern fixarà, per mitjà de Decret, aquelles dates i qüestions concretes contingudes en les Ordinacions que han d'ésser objecte d'actualització periòdica.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Copríncep la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

Llei de modificació de les tarifes elèctriques de l'ens Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) per a l'any 1993

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei de modificació de les tarifes elèctriques de l'ens Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA) per a l'any 1993

Exposició de motius

La present Llei actualitza les tarifes elèctriques tenint en compte els costos previstos per a l'any 1993, el pla d'inversions i l'estimació de la demanda d'energia elèctrica.

L'augment global de les tarifes és del 4% que s'aplica a la totalitat de les tarifes vigents.

Article 1

Les tarifes d'electricitat per a tot el territori del Principat, es fixen com segueix:

Tipus	**Tarifes**
A. Subministrament en A.T. (20 KV) a la sortida de l'E.T.R.	9,54 PTA/Kwh.
B. Subministrament en A.T. (20 KV) en xarxa.	10,12 PTA/Kwh.
C. Subministrament en B.T. en les E.T.	10,84 PTA/Kwh.
D1. Subministrament en B.T. en xarxa per contracte normal.	11,84 PTA/Kwh.
D2. Subministrament en B.T. en xarxa per contracte amb discriminació horària.	Hora punta: 20,11 PTA/Kwh. Hora dia: 11,84 PTA/Kwh. Hora nit: 8,25 PTA/Kwh.
Prima fixa.	5.438 PTA/abonat/any.
Facturació del mínim mensual	Potència contractada (en Kw) x 30 hores

Article 2

La tarifa D2, corresponent a subministrament en baixa tensió amb discriminació horària, és una tarifa voluntària que podrà ser adoptada, únicament, per abonats industrials amb potències contractades iguals o superiors a 100 Kw.

Es considera "Hora punta", el següent:

- 6 hores diàries (de 10.00 hores a 13.00 hores i de 18.00 hores a 21.00 hores) tots els dies (excepte diumenges) del període comprès entre el 15 de novembre i el 15 d'abril, ambdós inclosos.

Es considera "Hora nit", el següent:

- Les 24:00 hores de tots els diumenges de l'any.
- Entre les 23:00 hores i les 8:00 hores de tots els dies de l'any.

La resta de les hores són considerades "Hora dia".

Article 3

L'import de la "Prima fixa", prorratejat en cada facturació mensual, serà de 453 PTA/mes.

Article 4

Es facturaran els "mínims" als abonats que registrin consums mensuals inferiors al nombre resultant de multiplicar la potència contractada en Kw per 30 hores.

Disposició final

Aquestes tarifes entraran en aplicació als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Copríncep la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra

Exposició de motius

El desenvolupament econòmic que ha experimentat el nostre país en els últims decennis amb la subsegüent complexitat i la conveniència d'inserir en els corrents comercials exteriors d'Andorra, dins del marc de la Comunitat Econòmica Europea, no són per més temps compatibles amb l'absència d'una vertebració de les activitats econòmiques privades que representi i defensi els interessos generals.

La situació actual fa necessària la confluència dels interessos públics i privats envers una organització representativa de l'economia andorrana que tingui naturalesa pública, però de base privada.

Amb la creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, s'omple el buit actual, dotant a l'Administració pública d'un instrument útil per al sector públic que ha de contribuir a orientar i articular la política econòmica que, constitucionalment, es deixa a les forces de mercat i a la iniciativa privada, però que precisarà d'intervencions administratives, que cal que siguin proporcionades i representatives de la llibertat d'empresa i de comerç. Precisament, aquesta necessitat d'intervencions administratives, compatible amb la llibertat d'empresa i la iniciativa privada, són les que legitimen amb plenitud la previsió d'aquesta llei sobre l'obligatorietat de pertinença a la Cambra, així com les indispensables aportacions econòmiques dels seus membres.

La Cambra participa del caràcter de l'Administració pública, ja que és una creació dels poders públics, dotada de personalitat jurídica pròpia, sotmesa a la tutela del Ministeri que reglamentàriament es determini.

Per tal d'aconseguir una plena efectivitat de la funció pública encomanada a la Cambra, són membres d'aquesta entitat, tant les persones físiques com les persones jurídiques que tinguin inscrit al seu nom una o més activitats comercials, industrials, de serveis o artesanals en el Registre de Comerç i Indústria d'Andorra.

Article 1
Naturalesa i règim jurídic

1. Es crea la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, com a entitat de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, que serà òrgan consultiu de les Administracions públiques, amb les quals col.laborarà.

2. A més de l'exercici de les competències de caràcter públic que li atribueix aquesta Llei i de les que li puguin ésser encomanades o delegades pel Govern o el Ministeri que en tingui la tutela, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra té com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, de la indústria i dels serveis, i la prestació de serveis a aquestes activitats, sense perjudici del dret de creació i funcionament d'organitzacions empresarials, professionals i sindicals.

3. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra es regeix per aquesta Llei, per les normes reglamentàries que dicti el Govern i, amb caràcter supletori, per aquelles disposicions legals sobre règim jurídic i procediment de l'Administració pública del Principat que s'adiguin amb la seva naturalesa i funcions. La contractació i el règim del seu patrimoni s'ajustaran al dret privat.

4. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra està subjecta en l'exercici de la seva activitat a la tutela del Ministeri governamental que reglamentàriament es determini.

Article 2
Funció consultiva

Correspon a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, com a òrgan consultiu no vinculant de l'Administració pública:

a) Ésser consultada pel Govern o els diferents Ministeris a través del Ministeri que en tingui la tutela, i donar compte prèviament a aquest dels informes que emeti.

b) Ésser consultada per qualsevol entitat, institució, organisme o corporació pública, estatal o parroquial, sobre matèries relacionades amb el comerç, la indústria i els serveis i, en general, amb la vida econòmica del País.

c) Informar i presentar esmenes sobre tot projecte de normativa de l'Administració pública que organitzi o incideixi, en qualsevol forma, sobre el sector comercial, industrial o de serveis.

d) Informar, a demanda del Govern o dels Comuns, els projectes de concessió administrativa.

Article 3
Funcions

1. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra té assignades les següents funcions de caràcter públic-administratiu:

a) Portar un cens general propi d'activitats comercials, industrials i de serveis que complementi amb caràcter estadístic i informatiu el Registre de Comerç i Indústria del Govern.

Es declara obligatòria la inscripció dels comerciants, industrials i titulars de serveis en el cens de la Cambra, al qual han de facilitar les dades de la seva activitat relatives a les finalitats estadístiques i d'informació que reglamentàriament es determinin.

b) Fomentar la transparència del mercat, la competència lleial i vetllar per la seva observança.

c) Emetre certificats d'origen de les mercaderies i altres documents relacionats amb el tràfic mercantil, interior o internacional, de conformitat amb les normes que siguin d'aplicació.

d) Crear, organitzar i gestionar òrgans i serveis d'arbitratge destinats a dirimir conflictes en matèria mercantil i industrial i a emetre dictàmens i peritatges sobre aquesta mateixa matèria.

e) Proposar al Govern, a través del Ministeri que en tingui la tutela, aquelles reformes o mesures que esti-

mi escaients per al desenvolupament del comerç, la indústria i els serveis del País.

f) Realitzar totes aquelles funcions que li pugui encomanar o delegar el Govern, a través del Ministeri que en tingui la tutela, o que aquest li encomani o li delegui directament.

g) Ésser concessionària de la gestió de serveis públics de la competència de qualsevol Administració pública del Principat, sempre que es tracti de serveis d'interès per a les activitats econòmiques que la Cambra representa.

h) Promoure i gestionar l'organització de fires i exposicions.

i) Crear i administrar llotges de contractació i borses de valors, amb l'autorització prèvia del Ministeri que en tingui la tutela.

j) Recopilar els costums i usatges mercantils, així com les pràctiques seguides en els negocis, i emetre certificacions sobre la seva existència.

k) Promoure la gestió de l'entorn com una de les prioritats de l'empresa i divulgar que el desenvolupament sostingut demana esforços per fer compatibles el creixement econòmic i la conservació del medi, de tal forma que es puguin satisfer les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les futures generacions de satisfer les seves.

l) Col.laborar amb l'Administració educativa i amb aquells centres de formació professional, públics o privats, en la gestió de la formació pràctica en les empreses.

2. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra pot exercir també les següents funcions:

a) Difondre i promoure l'ensenyament comercial i industrial, tot fomentant la investigació aplicada, segons els requeriments i les circumstàncies de cada cas.

b) Realitzar tota mena d'enquestes, recollida de dades, estadístiques i estudis, i fer publicitat genèrica de les activitats econòmiques, els interessos generals de les quals representa.

c) Promoure directament o col.laborar en l'organització de congressos i, en general, de reunions d'interès per al comerç, la indústria i els serveis.

d) En general, realitzar totes aquelles activitats que contribueixin al desenvolupament de les activitats comercials, industrials i dels serveis i, en concret, establir serveis d'informació i assessorament empresarial.

3. Per a la realització de les seves funcions, tant de les que desenvolupi per iniciativa pròpia com d'aquelles que li encomani o delegui qualsevol Administració pública del Principat, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, per al millor compliment de les seves finalitats i amb l'autorització prèvia del Ministeri que en tingui la tutela, pot promoure o participar en tota mena de societats mercantils, d'economia mixta o d'interès públic, o en associacions, fundacions i altres entitats públiques o privades, així com establir-hi convenis de col.laboració.

Article 4
Electors

1. Són electors de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra:

a) A títol personal, totes aquelles persones físiques que tinguin inscrit al seu nom una o més activitats comercials, industrials, de serveis o artesanals en el Registre de Comerç i Indústria d'Andorra. En cap cas aquestes persones no podran delegar la seva condició o l'exercici dels drets que se'n derivin mitjançant apoderaments o mandats.

b) Les persones jurídiques han d'estar degudament representades pel President, Conseller Delegat, Administrador únic o qualsevol altre que tingui una atribució general de les facultats de representació.

2. La condició d'elector s'entén atribuïda per cadascuna de les activitats inscrites en el Registre de Comerç i Indústria d'Andorra i exercides en diferents sectors comercials, industrials o de serveis.

3. Tant la baixa en el Registre com la condemna penal a resultes de delictes relacionats amb l'exercici del comerç, la indústria i els serveis comportaran la pèrdua de la condició d'elector de la Cambra.

Article 5
Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Cambra són el Ple, el Comitè Executiu i el President.

El Ple i el Comitè Executiu funcionen com a òrgans col.legiats.

Article 6
Organització

1. El Ple és l'òrgan suprem de govern i representació de la Cambra.

2. El Ple està compost per trenta membres, de condició única i indelegable, elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret, entre tots els electors de la Cambra.

3. Els membres del Ple han de provenir de cada un dels sectors econòmics següents: comerç; indústria; serveis de caràcter turístic i altres serveis.

4. Per ésser elegit membre del Ple de la Cambra, s'ha d'ésser elector, portar com a mínim tres anys d'exercici en l'activitat del comerç, de la indústria o dels serveis en el territori del Principat, i s'han d'haver complert totes les obligacions econòmiques vers la Cambra que es disposen en aquesta Llei.

5. Cadascun dels quatre sectors esmentats se subdivideix en activitats. La repartició dels membres del Ple en sectors i, dins d'aquest, en activitats, es fa d'acord amb criteris de proporcionalitat, segons la importància econòmica de cada sector i activitat.

6. Cap dels quatre sectors no podrà tenir un nombre de membres que abasti la majoria absoluta del Ple de la Cambra. Cap de les activitats no pot tenir més de dos membres del Ple.

7. La divisió dels sectors del Ple en activitats i el nombre de membres de cadascuna d'elles ha de figurar en el Reglament de règim intern de la Cambra, el qual, en aquest punt, ha d'actualitzar, amb la periodicitat que es determini, la divisió per tal d'assegurar la proporcionalitat dels interessos generals que la Cambra representa.

8. El Ministeri que en tingui la tutela convoca les eleccions del Ple de la Cam-

bra. En la disposició de convocatòria de les eleccions s'han de fer constar el nombre de col.legis electorals i les regles per a la inscripció dels electors a cadascun d'aquests col.legis.

9. El Ministeri que en tingui la tutela, per tal d'assegurar l'objectivitat i la transparència del procés electoral, ha de constituir una Junta Electoral, amb una composició i unes funcions que s'han de determinar reglamentàriament.

10. El Ministeri que en tingui la tutela ha de convocar els membres del Ple elegits a prendre possessió del seu càrrec i a celebrar la sessió constitutiva del Ple, dins els vint dies que segueixen a les eleccions.

11. El mandat dels membres del Ple té una durada de sis anys. Els membres poden ésser reelegits, però no poden exercir més de dos mandats consecutius.

12. Cada tres anys es renova la meitat del nombre de membres que componen el Ple. La primera renovació es decideix per sorteig entre els membres del Ple que componen cada sector. El membre del Ple que ocupi la Presidència no participa en el sorteig.

13. Tant en la primera renovació de la meitat del Ple que es farà per sorteig, com en les successives, s'elegeixen els membres d'aquelles activitats en les quals hi hagi hagut vacants durant els tres mesos anteriors. La provisió de les vacants produïdes en un altre moment es fa en la forma que determini el Reglament intern.

Article 7
Funcions del Ple

1. Corresponen al Ple de la Cambra les següents funcions de caràcter bàsic:

a) Adoptar acords en relació amb les finalitats previstes a l'article 2 d'aquesta Llei.

b) Aprovar els programes anyals d'activitats i de gestió de la Cambra.

c) Acordar la interposició de tota mena de recursos i accions davant de qualsevol òrgan o jurisdicció.

d) Decidir sobre l'adquisició o disposició de béns. El Ple pot delegar aquesta facultat al Comitè Executiu, si existeix una previsió pressupostària a aquest efecte en el programa anyal.

e) Elegir els càrrecs del Comitè Executiu i cobrir les vacants que s'hagin produït.

f) Constituir comissions de caràcter consultiu.

g) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de la Cambra i les corresponents liquidacions.

h) Elaborar i proposar al Ministeri que en tingui la tutela els Reglaments d'aplicació de la present Llei, a fi que siguin promulgats en la forma que Govern els aprovi.

i) Elaborar el Reglament intern de la Cambra i sotmetre'l al Ministeri que en tingui la tutela per a la seva aprovació definitiva. En aquest Reglament hi han de constar l'estructura del Ple, el nombre i la forma d'elecció dels càrrecs del Comitè Executiu i, en general, les normes de funcionament dels òrgans de govern.

j) Nomenar els vocals cooperadors de la Cambra, als quals fa referència l'article següent.

k) Nomenar, a proposta del Comitè Executiu, el Secretari-lletrat, el Director i els altres càrrecs d'alta direcció.

2. Reglamentàriament poden atribuir-se al Ple de la Cambra altres funcions, sense perjudici de les que la present Llei atribueix al Comitè Executiu.

Article 8
Vocals Cooperadors

1. El Reglament intern de la Cambra pot disposar l'existència de fins a deu vocals cooperadors, nomenats d'entre els electors de la Cambra, o d'entre persones de reconegut prestigi, relacionades amb el comerç, la indústria o els serveis.

2. Els vocals cooperadors tenen dret a assistir, amb veu però sense vot, a totes les reunions del Ple, el qual pot atorgarlos altres drets que han d'expressar-se en el Reglament intern de la Cambra.

3. El càrrec de vocal cooperador té una durada màxima de sis anys i no se sotmet a renovació per meitat del seu nombre.

Article 9
Secretaria

1. La Cambra nomena un Secretari-lletrat, amb veu però sense vot, que redacta les actes de les reunions dels òrgans de govern de l'entitat, i lliura les certificacions dels acords amb el vist i plau del President.

2. El Secretari-lletrat és l'assessor legal ordinari de la Cambra.

Article 10
El Comitè Executiu

1. El Comitè Executiu és l'òrgan permanent de gestió i administració de la Cambra. Es compon d'un President, quatre Vice-Presidents —un per cadascun dels sectors econòmics esmentats al número 3 de l'article 6—, un Tresorer i tres Vocals, tots ells elegits entre els membres del Ple de la Cambra. L'elecció dels càrrecs del Comitè Executiu es fa en la sessió constitutiva del Ple que es convoqui després de les eleccions de conformitat amb allò que disposa el número 9 de l'article 6 i en la forma que determini el Reglament intern.

2. El càrrec de President només pot recaure en aquells membres del Ple que tinguin la nacionalitat andorrana.

3. El Reglament intern de la Cambra ha de regular la forma de renovació parcial dels càrrecs del Comitè Executiu, si es disposa de fer-la alhora que la dels membres del Ple.

4. En el Reglament intern de la Cambra s'ha de determinar les funcions que corresponen al Comitè Executiu, atribuint-li, per a casos d'urgència justificada, la facultat d'adoptar acords en matèries que siguin de la competència del Ple, donantne compte a aquest en la primera reunió que celebri. L'esmentada facultat del Comitè Executiu per a casos d'urgència no pot exercir-se quan es tracti de funcions exclusives de l'òrgan plenari, per raó de la seva naturalesa.

5. Corresponen també al Comitè Executiu totes aquelles funcions no atribuïdes al Ple legalment o reglamentàriament.

Article 11
El President

1. El President té la representació de la Cambra i exerceix la Presidència de tots els seus òrgans col.legiats.

2. Li correspon l'execució dels seus acords, dels quals ha d'assegurar la legalitat així com la supervisió de tots els serveis de l'entitat.

3. Les competències del President a què fa referència l'apartat anterior poden ésser desenvolupades per Reglament del Govern del Principat i, en tot cas, s'han d'especificar en el Reglament intern de la Cambra.

Article 12
El Director

1. El Ple, a proposta del Comitè Executiu, nomena un Director, retribuït, que té el caràcter de càrrec de confiança de l'òrgan plenari.

2. El Director assisteix, amb veu i sense vot, a les reunions del Ple i del Comitè Executiu, gestiona l'execució dels acords de conformitat amb les instruccions que rebi del Comitè Executiu i del President i és el Cap del personal adscrit als serveis de l'entitat, la qual dirigeix.

3. El Director de la Cambra i la resta del personal al servei de l'entitat, queden subjectes a la legislació laboral.

Article 13
Normes bàsiques de funcionament

1. Per Reglament que aprovarà el Govern s'establiran les normes bàsiques necessàries relatives al funcionament i adopció d'acords dels òrgans de govern col.legiats de la Cambra, per virtut de les quals la formulació de la voluntat d'aquells òrgans haurà de seguir procediments democràtics.

2. Les normes bàsiques a què fa referència el paràgraf anterior han d'ésser objecte de desplegament detallat en el Reglament intern de la Cambra, que serà sotmès a l'aprovació del Ministeri que en tingui la tutela.

Article 14
Finançament

1. Per al finançament de les seves activitats la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra disposa dels següents recursos econòmics ordinaris:

a) Les quotes que obligatòriament han de satisfer cada any els electors de la Cambra, en la quantia resultant d'aplicar l'alíquota que es determini en la Llei del Pressupost sobre la taxa d'activitats comercials, mercantils i de serveis. El meritament de la quota s'establirà en la mateixa Llei del Pressupost. Les regles de la prescripció seran les aplicables en la legislació sobre les finances públiques de l'Estat.

Tots els electors que, durant la totalitat o part d'un exercici econòmic tinguin inscrit al seu nom una o més activitats comercials, industrials o de serveis en el cens de la Cambra de Comerç estan obligats a pagar la quota.

b) Els ingressos obtinguts pels serveis prestats i, en general, per l'exercici de les seves activitats.

c) Les aportacions voluntàries dels seus electors.

d) Els productes, les rendes i els increments del seu patrimoni.

2. La Cambra disposa també dels següents recursos econòmics extraordinaris:

a) Els provinents de les transferències assignades en el Pressupost General del Principat, amb la proposta prèvia xifrada de les activitats o serveis de la Cambra als quals s'aplicaran i que, prèviament aprovada pel Ple, s'ha de sotmetre al Govern a través del Ministeri que en tingui la tutela. L'acord del Ple ha de concretar els recursos econòmics propis que la Cambra ha d'aportar per a la realització de les activitats o per a la prestació de serveis de què es tracti.

b) Les subvencions, els llegats i les donacions que rebi.

c) Els procedents de les operacions de crèdit o d'emprèstit que realitzi.

d) Qualsevol altres que li puguin ésser atribuïts o reconeguts per Llei, en virtut de conveni o per un altre procediment lícit.

3. Per a l'exercici de la funció recaptatòria de la quota establerta en l'apartat a) del número 1 d'aquest article, la Cambra ha de seguir el mateix procediment de recaptació en via executiva que l'Administració tributària de l'Estat.

Article 15
Publicitat dels acords

La Cambra ha de publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra tots els acords adoptats pel Ple.

Article 16
Informe econòmic anyal

La Cambra està obligada a elaborar, publicar i trametre anyalment al Govern un informe econòmic descriptiu de l'evolució i les perspectives de les activitats econòmiques en el territori del Principat. En l'elaboració d'aquest informe s'ha de tenir compte les directrius que dicti el Ministeri que en tingui la tutela, que ha de facilitar les dades que necessiti de qualsevol organisme públic o parapúblic, a excepció d'aquelles protegides pel secret establert per la Llei.

Article 17
Relacions externes

La Cambra pot relacionar-se amb tota persona física o jurídica, pública o privada. Tanmateix, qualsevol relació amb òrgans estatals estrangers requereix l'autorització prèvia del Govern.

Article 18
Règim contenciós

Els acords i les resolucions de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra, adoptats en l'exercici de les competències de caràcter público-administratiu, sobre finançament obligatori i els relacionats amb el règim electoral, es poden recórrer davant la Jurisdicció Administrativa, prèvia reclamació formulada davant el Govern. En totes les altres qüestions són competents els Jutges i els Tribunals ordinaris.

Article 19
Tutela administrativa

1. El Ministeri que en tingui la tutela exerceix les potestats administratives d'aprovació i fiscalització dels recursos econòmics i informa dels recursos administratius interposats contra acords i resolucions de la Cambra, i també de les que el Govern reglamentàriament determini, per als supòsits de transgressió greu de l'ordenament jurídic o d'impos-

sibilitat de normal funcionament dels òrgans de la Cambra.

2. El titular del Ministeri governamental que en tingui la tutela pot assistir, personalment o mitjançant delegació acreditada, amb veu però sense vot, a les reunions dels òrgans col.legiats de la Cambra.

Article 20
Pressupostos

1. La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra ha d'elaborar cada any un pressupost ordinari de despeses i d'ingressos i n'ha d'aprovar la liquidació un cop finalitzat l'exercici econòmic, que coincidirà amb l'any natural.

2. Per a la realització d'activitats, obres o serveis sense consignació en el pressupost ordinari, la Cambra ha de formalitzar pressupostos extraordinaris.

3. El Ministeri que en tingui la tutela ha d'aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de la Cambra, controlant llurs liquidacions i donant aquelles instruccions per estimi escaients per confeccionar-los.

Disposicions transitòries

Primera
Amb càrrec al Pressupost General del Principat s'han d'assignar els crèdits necessaris per atendre les despeses de constitució, organització i posada en funcionament de la Cambra.

Segona
Tota persona física o jurídica que en el moment d'entrada en vigor d'aquesta llei tingui inscrit al seu nom una o més activitats comercials, industrials o de serveis en el Registre de Comerç i Indústria del Govern està obligada a inscriure's en el cens de la Cambra, en el termini màxim i improrrogable de sis mesos.

Tercera
Es faculta el Govern perquè en el termini màxim de sis mesos, a comptar de la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, fixi la quota a satisfer per a l'exercici de 1994, i també la seva meritació i la seva liquidació.

Disposicions finals

Primera
En el termini màxim de quatre mesos, des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, el Govern ha d'aprovar i publicar les normes reglamentàries per a la constitució, l'organització, el funcionament i la tutela administrativa de la Cambra.

Segona
Aquesta Llei entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Coprínce d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Coprínce d'Andorra

Llei d'expropiació

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei d'expropiació

Exposició de motius

La falta d'un procediment d'expropiació forçosa per causa d'utilitat pública realment operatiu i adaptat a les necessitats de l'Administració ha estat, durant anys, un dels principals frens al desenvolupament de les obres i els serveis públics del Principat. El vell Decret de 1958, malgrat la modificació efectuada l'any 1974, ha posat de relleu des de ja fa molts anys les seves insuficiències, com ho prova l'ús pràcticament nul que se n'ha fet durant el darrer decenni. Així malgrat la necessitat apressant d'adquirir terrenys per al desenvolupament dels principals serveis públics, el Govern s'ha vist abocat a la negociació com a sola via per a l'adquisició dels terrenys necessaris per a les obres públiques, amb la conseqüència, mantes vegades soferta, que una sola voluntat individual podia paralitzar de forma pràcticament indefinida la satisfacció de l'interès general. L'estat actual de la xarxa de carreteres és un exemple viu i palpable de la nul.la operativitat dels instruments de què disposava l'Administració en la realització de les tasques de servei públic que li són pròpies, i de la necessitat de comptar amb un procediment eficient per adquirir, fins i tot contra la voluntat del propietari, aquells béns i drets que resultin necessaris per a l'execució de les obres i els serveis declarats d'interès general.

Conscient d'aquesta situació, en data 12 d'octubre de 1989, el Consell General del Principat d'Andorra va aprovar per unanimitat una nova llei d'expropiació que introduïa nombroses novetats respecte de la legislació anterior. D'entre elles, la més important era, sense cap mena de dubte, la creació d'un procediment especial per a l'expropiació en els casos de construcció, eixamplament o condicionament de carreteres, vials, places, jardins o parcs públics. A través d'aquest procediment es pretenia obtenir que els propietaris de béns immobles que, per estar situats dins la zona d'influència de l'obra pública que es projecta executar, s'havien de beneficiar, amb particular intensitat, de la plus-vàlua generada per aquesta obra pública, haguessin de contribuir forçosament al seu finançament, amb el benentès que no es tracta d'una obligació de pagar immediatament per una obra que pot no reportar al propietari cap utilitat immediata, sinó que l'obligació de pagar es vincula al moment de realització de la plus-vàlua, que la llei fa coincidir amb el moment en què la finca sigui objecte de venda, o bé amb aquell en què hom sol.liciti permís per edificar-la o realitzar-hi obres.

L'esmentada llei introduïa també altres novetats importants respecte de la legalitat anterior, com ara la possibilitat d'adquirir per expropiació forçosa no únicament la propietat o els drets reals sobre béns immobles, sinó d'adquirir igualment altres drets de contingut patrimonial, sempre per una causa d'interès públic; l'atribució de competència als Comuns per iniciar expedients d'expropiació forçosa; la possibilitat que les entitats parapúbliques puguin ésser, en determinades condicions, beneficiaris d'un procediment d'expropiació forçosa, és a dir, adquirir per aquest mitjà els béns o drets necessaris per a la gestió del servei públic que tenen confiat, satisfent a canvi el preu just o indemnització expropiatòria, i la creació d'un procediment d'urgència que havia de permetre l'ocupació dels béns expropiats en uns terminis brevíssims, en els casos que resultés necessària per raons d'extrema necessitat o de força major.

La llei votada pel Consell General l'any 1989 introduïa aquestes i altres novetats, que l'haurien convertit en un instrument eficacíssim en mans de l'Administració pública. Però en aquella data, la competència per aprovar una llei com la d'expropiació, que afecta de forma directa el dret de propietat, requeria la intervenció dels copríncep. Per això, el Consell General del Principat d'Andorra no pogué promulgar la llei, sinó que, com era d'ús en la legalitat anterior, va trametre-la als delegats permanents dels copríncep que eren l'òrgan institucional competent per fer-ho, a fi que aquests aprovessin i sancionessin la llei. En els tràmits subsegüents de consensuació del text sorgiren algunes dificultats, més de caràcter formal que de fons, que van anar retardant-ne la publicació fins al punt de fer-la impossible.

Una volta aprovada la Constitució, havent adquirit doncs la competència exclusiva per a l'aprovació de les lleis, i conscient de la urgent necessitat que té l'Administració de disposar d'un instrument eficaç d'expropiació forçosa, el Consell General del Principat d'Andorra ha fet de la creació d'aquest instrument una de les seves prioritats. Per aquest mateix motiu, la Comissió legislativa de Serveis Públics, ratificant el contingut del projecte de llei aprovat pel Consell General l'any 1989, ha considerat oportú adaptar-lo al nou marc constitucional, per tal de dotar a les Administracions públiques d'un estri del que és voluntat política d'aquesta Assemblea de no privar per més temps a aquestes Administracions i, sobretot, als ciutadans del Principat, que són, en definitiva, els principals destinataris i beneficiaris en tot procés d'expropiació per causa d'utilitat pública.

Títol I. Disposicions generals

Article 1

1. La present Llei té per objecte la regulació de l'expropiació forçosa. S'entén per expropiació forçosa qualsevol forma de privació singular de la propietat o d'altres drets patrimonials, acordada imperativament.

2. Ningú no pot ésser expropiat si no és per causa justificada d'interès públic, i mitjançant una justa indemnització.

Article 2

1. Els expedients d'expropiació forçosa únicament poden ésser iniciats pel Govern i pels Comuns.

2. Poden ésser beneficiaris de l'expropiació forçosa, a més de l'Estat i la Parròquia, els Quarts i les entitats parapúbliques.

Article 3

1. Les diligències de l'expedient d'expropiació es porten a terme amb el propietari de la cosa o el titular del dret objecte d'expropiació.

2. Sempre que ho sol.licitin, acreditant degudament llur condició, les diligències es porten també a terme amb els titulars de drets reals sobre la cosa expropiable, i també amb els arrendataris, quan es tracti d'immobles rústics o urbans. En aquest últim cas, s'iniciarà per a cada un dels arrendataris el respectiu expedient incidental, per fixar la indemnització que els pugui pertocar.

3. Quan els titulars del domini o de drets reals sobre els béns expropiables siguin menors o incapaços i no estiguin representats per llurs pares o tutors, les diligències es porten a terme amb el Ministeri Fiscal.

Article 4

Quan els béns a expropiar no siguin alienables sense prèvia autorització judicial, aquesta autorització s'entén concedida per ministeri de la llei. En l'expedient d'expropiació, però, hi ha d'intervenir com a part el Ministeri Fiscal, a més dels titulars o administradors dels béns, a l'efecte d'acceptar la decisió que determini la indemnització o recórrer-hi en contra. El seu import, en tot cas, ha d'ésser posat a disposició de l'autoritat judicial, amb intervenció del Ministeri Fiscal, perquè li doni la destinació que legalment correspongui.

Article 5

Les alienacions de finques objecte d'expropiació i la constitució sobre elles de drets reals de qualsevol naturalesa no impedeixen ni paralitzen el seguiment i la resolució de l'expedient d'expropiació. El nou titular es considera subrogat en els drets i les obligacions de l'anterior, a partir del moment en què intervingui en l'expedient, acreditant la seva qualitat.

Article 6

Totes les adquisicions per causa d'expropiació tenen el caràcter d'originàries, i per consegüent:

1. Si l'expropiació té per objecte l'adquisició del domini dels béns expropiats, queden cancel.lades, sense excepció de cap mena, totes les càrregues i gravàmens anteriors a la dita adquisició.

2. Si l'expropiació té per objecte la constitució de servituds o limitacions, perpètues o temporals, sobre els béns dels expropiats, queden cancel.lades totes les càrregues i gravàmens anteriors a la dita constitució que siguin incompatibles o que perjudiquin el dret de l'expropiant, sense perjudici de la indemnització que, per tal raó, els pugui correspondre.

Títol II. El procediment expropiatori general

Capítol primer. Declaracions d'utilitat pública i de necessitat d'ocupació o adquisició

Article 7

1. L'expropiació forçosa requereix la prèvia declaració de la utilitat pública de l'obra projectada i de la necessitat d'ocupació dels immobles o adquisició dels drets patrimonials afectats.

2. Les declaracions d'utilitat pública i de necessitat d'ocupació o adquisició han d'ésser aprovades pel Consell General.

Article 8

Per excepció a allò que disposa l'article anterior, la declaració d'utilitat pública s'entén implícita quan l'expropiació sigui necessària per a l'execució d'un pla d'obres o de serveis que hagi estat aprovat pel Consell General. Si el pla d'obres o de serveis ha estat sotmès a tràmit d'informació pública, i el Consell General ha conegut ja de les observacions formulades pels interessats, s'entén també implícita la declaració de necessitat d'ocupació o adquisició. En tal cas es pot iniciar directament la fase d'execució, en la forma prevista a l'article 19.

Article 9

1. El procediment expropiatori s'inicia amb la preparació per l'expropiant d'un expedient, establert per duplicat, en el qual hi ha d'haver necessàriament els documents següents:

a) Una memòria explicativa, fixant la finalitat, l'objecte i l'abast de l'expropiació i raonant els motius pels quals, al seu judici:

- el projecte mereix la declaració d'utilitat pública.
- resulta necessària l'ocupació total o parcial dels béns compresos en el projecte, i si es tracta d'adquirir-ne la propietat o de constituir-hi servituds o limitacions del domini, la possessió o el gaudiment, detallant concretament els béns o les superfícies afectats i l'abast de l'afectació.

b) Un plànol dels immobles o les propietats l'adquisició o el gravamen dels quals consideri necessària.

c) Un estat detallat dels dits immobles o propietats, amb els pertinents plànols parcel.laris.

d) Una relació justificada de tots els altres béns o drets que siguin també objecte d'expropiació.

e) Altres informes i documentació que, al seu criteri, abonin la pretensió d'expropiació.

2. Quan l'expropiant sigui un Comú, ha de trametre l'expedient al Govern.

3. Quan el procediment expropiatori l'inicii el Govern o un Comú a instància d'una de les entitats a què es refereix l'apartat 2 de l'article 2, aquesta haurà de justificar, en instar l'obertura del procediment, la procedència legal de l'expropiació i la seva qualitat de beneficiari. Després serà oïda com a part en el procediment, i sobre ella recauran exclusivament els resultats favorables o adversos d'aquest procediment, en l'ordre jurídic i en l'ordre econòmic.

Article 10

1. Rebut o bé establert directament pel Govern l'expedient d'expropiació, s'ha de sotmetre a informació pública, dins un termini mínim de quinze dies hàbils, en el Ministeri que es determini i en els Comuns de totes les Parròquies en què es trobin radicats els béns afectats per l'expedient.

2. Durant el termini d'informació pública, els interessats poden consultar, en els llocs en què es trobi l'expedient, els plànols parcel.laris i els restants documents que el componguin i aportar, per escrit, totes les dades que considerin oportunes amb la finalitat de rectificar possibles errors de la relació publicada,

amb les observacions i les al.legacions que creguin convenients, i adjuntant-hi totes les proves documentals que estimin adequades per a la defensa de llurs interessos.

3. Quan l'expropiació impliqui necessitat d'ocupació de solament una part de la finca, de manera que al propietari li pugui resultar antieconòmica o inaprofitable la conservació de la part restant, aquest pot demanar que l'expropiació comprengui la totalitat de la finca.

4. Als efectes d'aquesta llei, hom entén per interessats les persones amb les quals s'hagin de portar a terme les diligències del procediment expropiatori, segons preveuen els articles 3 i 4, i aquelles que, per aplicació de l'article 5, intervinguin en l'expedient com a subrogades en el lloc dels titulars anteriors, i també els mandataris i els administradors d'aquestes persones i els administradors judicials de béns aliens.

Article 11

1. La iniciació de l'expedient d'expropiació s'ha de publicar també al Butlletí Oficial del Principat, amb indicació de l'expropiant, de la finalitat i l'abast de l'expropiació, i del dret que assisteix als interessats de consultar, en els llocs on estigui dipositada, tota la documentació del projecte, i de presentar, per escrit, durant el termini d'informació pública, les observacions i les impugnacions que considerin convenients.

2. La publicació ha de comprendre necessàriament:

a) Una còpia íntegra de la memòria explicativa de l'expedient d'expropiació.

b) Una relació de les finques, béns o drets que l'expropiant es proposi adquirir o sobre els quals pretengui constituir servituds o limitacions, amb el nom dels propietaris, si són coneguts.

Article 12

El Govern ha de cursar, a més, una notificació personal als propietaris afectats, sempre que llur domicili i circumstàncies personals constin en l'expedient, amb les mateixes indicacions que les previstes en l'article anterior.

Article 13

Transcorregut el termini d'informació pública, el Govern ha de trametre al Consell General totes les peces de l'expedient, incloses les observacions i les impugnacions rebudes, adjuntant a aquesta tramesa un informe raonat en el qual proposi l'aprovació o la denegació de les declaracions d'utilitat pública i de necessitat d'ocupació i, així mateix, les modificacions que consideri que s'han d'introduir en el projecte, en virtut de les observacions formulades pels interessats.

Article 14

1. La Sindicatura, prèvia comprovació del compliment de les formalitats i dels requisits establerts en els apartats anteriors, sotmet l'expedient al Ple, en la primera sessió que celebri.

2. Si s'aprecia la inobservança o l'omissió d'alguna formalitat o requisit essencial, es retorna l'expedient al Govern a fi que l'expropiant en reprengui la tramitació a partir del tràmit omès.

Article 15

El Consell General acorda en Ple les declaracions d'utilitat pública i necessitat d'ocupació dels béns o adquisició dels drets de l'expedient d'expropiació.

Article 16

L'acord del Consell General favorable a l'expedient d'expropiació és immediatament executori. En contra no hi ha cap classe de recurs, salvat el d'inconstitucionalitat.

Article 17

L'acord del Consell General es publica en el Butlletí Oficial del Principat i es comunica al Govern, amb l'objecte que procedeixi a publicar-lo en els mateixos llocs en què s'hagués publicat prèviament l'expedient d'expropiació, dins un termini no inferior a 30 dies, i que es notifiqui personalment a tots els interessats, en les condicions previstes a l'article 12.

Capítol segon. Execució de l'expropiació

Secció primera. Òrgans competents i procediment de taxació

Article 18

1. El president del Tribunal de Batlles és l'òrgan competent per a conèixer de l'execució de l'expropiació i de les seves incidències. A l'efecte d'aquesta llei, s'anomena jutge de l'Expropiació.

2. Les indemnitzacions per expropiació es fixen, en defecte d'acord entre les parts, per una Comissió d'Expropiació composta pel jutge de l'Expropiació, que n'és el president, un notari i un perit designat pel Govern.

Article 19

Rebuda la notificació de l'acord del Consell General a què es refereix l'article 17, el Govern tramet al jutge de l'Expropiació l'expedient d'expropiació, perquè n'ordeni l'execució immediata.

Article 20

1. Durant un període de trenta dies, a comptar de la data de la publicació de l'acord del Consell General, tots els interessats poden declarar per escrit, davant del jutge de l'Expropiació, les càrregues, servituds i drets de qualsevol naturalesa que gravin o recaiguin sobre els béns immobles a expropiar: contractes d'arrendament, drets d'ús o de pas, hipoteques, etc., aportant els títols o les proves corresponents.

2. Igualment, els interessats poden adjuntar una estimació escrita, avalada o no pericialment, del valor de la finca o les finques a expropiar i dels drets que les gravin o que es tinguin sobre cadascuna.

3. Quan sobre tots o una part dels béns a expropiar, hi tinguin drets, dominicals o d'altra índole, menors d'edat o incapaços que no compareguin per mitjà dels seus pares o tutors, el jutge ha de promoure l'actuació del Ministeri Fiscal, perquè intervingui en les diligències i defensi llurs interessos.

4. El jutge, durant el mateix període, ha de formar tantes peces o expedients separats com béns s'incloguin a l'expedient d'expropiació, exclosos únicament aquells sobre els quals, amb anterioritat, s'hagi produït transmissió a favor de l'expropiant, per via de transacció amistosa.

Article 21

Conclòs aquest tràmit, el jutge adopta les mesures d'execució següents:

1. Convoca l'expropiant, el propietari o propietaris dels béns expropiables i els restants interessats que hagin comparegut durant el període anterior, per intentar de fer-los posar d'acord, expedient per expedient, com a acte conciliatori i previ a qualsevol altra activitat, sobre l'import de la indemnització. En tot cas, adverteix als interessats que no admetrà cap controvèrsia entre ells sobre el repartiment de la indemnització que es fixi o sobre la validesa o la nul.litat dels títols que emparin els respectius drets, i que els queden reservades totes les accions que els assisteixin davant la jurisdicció ordinària.

2. Respecte de cada peça o expedient en què hi hagi acord sobre la quantia de la indemnització a pagar per l'expropiant, el jutge dicta, immediatament, resolució declarant ferma l'estimació i la conclusió de l'expedient, tot acordant-ne l'execució en els termes de l'article 26 i següents.

3. Respecte de les peces o expedients en els quals no s'assoleixi acord en l'acte previ conciliatori, el jutge dicta, immediatament, resolució ordenant que es procedeixi a determinar la indemnització per via d'autoritat.

4. Contra les decisions previstes en aquest article no hi ha cap mena de recurs.

Article 22

1. En el supòsit previst a l'apartat 3 de l'article precedent, el jutge ha de constituir, en el termini de vuit dies, la Comissió d'Expropiació a què es refereix l'article 18.2.

2. La Comissió d'Expropiació pren les seves decisions per majoria de vots.

3. La Comissió ha de dictar la seva resolució en un termini màxim de dos mesos a comptar de la data de la seva constitució.

Article 23

1. Les resolucions de la Comissió d'Expropiació han de detallar, per a cada expedient o peça separada, la situació i la superfície dels béns que s'hi comprenguin, les càrregues i els drets que els afectin, el valor que atribueixi a cadascun. Aquest valor constitueix l'import de la indemnització. La resolució ha de fixar igualment l'import de les despeses i les costes derivades de l'actuació de la pròpia Comissió.

2. La taxació s'efectua d'acord amb el valor venal que els béns o drets expropiables tenien en el moment del tràmit d'informació pública, sempre que no hagin transcorregut més de dos anys des d'aquell moment, prenent com a base de comparació, sempre que sigui possible, el preu de les alienacions voluntàries d'immobles d'anàlogues característiques i situació, i sense tenir en compte les plus-vàlues derivades del projecte que doni lloc a l'expropiació, ni les previsibles per al futur.

3. Les millores realitzades en els béns expropiables amb posterioritat a la incoació de l'expedient d'expropiació no són indemnitzables, llevat que es demostri que eren indispensables per a la conservació dels béns. La Comissió pot requerir l'expropiat perquè aporti la prova de la necessitat de la millora i la data en què ha estat realitzada. Si no aporta la prova o es considera insuficient, la millora no es té en compte.

4. Quan es tracta de finques arrendades o cedides per contracte de parceria, o altre dret d'ús, la Comissió ha de fixar separadament la indemnització del propietari de la finca i la que hagi de satisfer-se a l'arrendatari, parcer o titular del dret d'ús, per raó de la resolució anticipada del contracte. Per fixar aquesta segona indemnització, la Comissió no tindrà en compte el valor de les collites eventualment perdudes.

Article 24

1. Malgrat el que preveuen els articles anteriors, en qualsevol moment i estat del procediment, l'expropiant i els expropiats poden arribar a la fixació de la indemnització per mutu acord. En tal supòsit, expropiant i expropiat han de comunicar llur acord, conjuntament i per escrit, a la Comissió d'Expropiació.

2. Immediatament després de rebre aquesta comunicació, la Comissió d'Expropiació segueix els tràmits i dicta la resolució prevista a l'article 21.2, i dóna per clos l'expedient o les peces afectades, amb inclusió de les despeses i les costes, que han de satisfer per meitat l'expropiant i els expropiats.

3. Llevat del supòsit esmentat a l'apartat anterior, les despeses i les costes derivades de l'actuació de la Comissió, les ha de pagar íntegrament l'expropiant, junt amb la indemnització.

Article 25

La resolució de la Comissió d'Expropiació, que fixa les indemnitzacions i les despeses i costes de la taxació, és immediatament executòria, en els termes dels articles següents. El jutge de l'Expropiació l'ha de notificar, dintre dels vuit dies següents, a l'expropiant, als expropiats i als restants interessats als quals es refereix l'article 10.4, que estiguin afectats per l'expedient o peça sobre la qual recaigui. També s'ha de publicar en el Butlletí Oficial.

Secció segona. Del pagament i la presa de possessió dels béns

Article 26

Tan aviat com la Comissió d'Expropiació hagi dictat resolució fixant les indemnitzacions i les altres sumes que ha de satisfer l'expropiant, el jutge de l'Expropiació, a instància del mateix expropiant o de l'expropiat, procedeix a la immediata execució, malgrat qualsevol recurs, instància o acció interposats o que les parts interposin per qualsevol via.

Article 27

1. Si és l'expropiant qui demana l'execució, la demanda ha d'anar acompanyada necessàriament de la consignació de la totalitat de les sumes que hagi de pagar, segons la resolució a executar, i malgrat que el mateix expropiant hagi formulat recurs contra la taxació. Sense aquesta consignació, la demanda d'execució no pot ésser presa en consideració.

2. Consignades les sumes, el jutge acorda immediatament l'execució i en el termini de vuit dies, prèvia citació dels expropiats, ha de lliurar a l'expropiant la possessió dels béns compresos en la resolució que s'executi.

3. A aquest efecte, el jutge, assistit d'un secretari, del nunci i del perit topògraf que designi, es constitueix, en el dia i hora assenyalats a la citació, sobre els béns de què es tracti i, seguint la fórmula tradicional, en dóna possessió a l'expropiant, tant si els expropiats hi assisteixen com en cas contrari, tot estenent acta de

l'ocupació, de la qual es tramet una còpia a l'expropiant i als expropiats, i en la qual s'adverteix a aquests que s'abstinguin de qualsevol resistència o violència en la pacífica possessió dels béns expropiats, sota pena d'ésser processats per desacatament i de les restants responsabilitats civils i penals que escaiguin.

4. L'acta d'ocupació i lliurament de la possessió ha de contenir, a més, la descripció, la delimitació i, si escau, la fitació dels béns expropiats, i així mateix totes aquelles circumstàncies que s'estimin útils per precisar l'estat físic i jurídic de les finques en el moment de l'ocupació.

5. Si en el moment del lliurament de la possessió o en qualsevol altre moment posterior, tots els expropiats o algun d'ells exercissin violència o resistència a l'ocupació o a la posterior utilització de la finca, el jutge ordenarà la intervenció de la força pública en suport dels drets de l'expropiant, sense perjudici de les responsabilitats en què incorri o hagi incorregut qui motivi aquesta intervenció.

6. El lliurament de la possessió implica el llançament immediat dels arrendataris i dels altres ocupants de la finca.

Article 28

Quan l'expropiació té per objecte la constitució de servituds o limitacions, perpètues o temporals, del domini o gaudiment de l'expropiat sobre la finca de què es tracti, el lliurament de la possessió consisteix en la tradició figurada de la quasi-possessió dels drets expropiats, amb el compliment, en els seus propis termes, dels restants tràmits i intimacions de l'article anterior, en la mesura que ho exigeixi l'exercici dels drets de l'expropiant.

Article 29

A partir del moment del lliurament de la possessió, l'expropiant pot, per pròpia autoritat, destinar la finca als fins de l'expedient d'expropiació i efectuar, dins d'aquest marc, les obres i transformacions que cregui convenients.

Article 30

Lliurada la possessió a l'expropiant, el jutge continuarà les diligències d'execució, en els termes següents:

1. Respecte dels supòsits en què, conforme als articles 21 i 24, s'hagi produït acord:

a) Procedeix al pagament en els propis termes de l'acord, i en consigna el resultat en la corresponent acta que han de signar tots els interessats i que serveix a l'expropiant d'àpoca i de títol cancel.latori de tots els gravàmens i les càrregues dels béns anteriors a l'expropiació que siguin compatibles amb el caràcter d'adquisició originària que, en tot cas, correspon a l'expropiant.

b) Tot seguit, ha de requerir l'expropiant i l'expropiat perquè, en el termini de quinze dies, compareguin davant de notari a atorgar la pertinent escriptura pública, en la qual s'haurà de protocol.litzar una còpia autèntica de l'acta de pagament a què es refereix l'apartat anterior, juntament amb la d'ocupació, i en què s'hauran de declarar cancel.lats tots els gravàmens i les càrregues anteriors, en els propis termes en què ho faci l'acta de pagament.

c) Ensems, adverteix a l'expropiat o expropiats que, si no compareixen o no atorguen l'escriptura en el termini assenyalat, ho farà directament en nom seu el mateix jutge, sense nova citació ni requeriment, dins els vuit dies següents al dia en què rebi la notificació escrita de l'expropiant segons la qual l'expropiat ha refusat comparèixer o atorgar l'escriptura notarial. L'ha d'advertir igualment que, en aquest cas, les costes a què doni lloc la seva intervenció van a càrrec del mateix expropiat.

d) Els dits requeriments i advertiments s'han de consignar per diligència a l'acta de pagament.

e) En tot cas, les despeses d'atorgament de l'escriptura i les que origini la regularització o la inscripció de la titularitat de l'expropiant als cadastres i registres administratius, van a càrrec de l'expropiant.

2. Respecte de les peces o expedients en què no s'hagi produït acord o s'hagi interposat recurs:

a) El jutge decreta que les sumes consignades per l'expropiant siguin mantingudes en dipòsit, a disposició de qui acrediti tenir-hi dret en mèrits d'acord posterior o de les resolucions que recaiguin.

b) Els restants tràmits relatius al pagament i a l'atorgament de la pertinent escriptura pública queden en suspens fins al moment en què es produeixi acord o recaigui resolució ferma.

Article 31

1. Si l'execució de la resolució prevista a l'article 26 és instada per qualsevol dels expropiats, el jutge ha de requerir immediatament l'expropiant perquè, dins els trenta dies següents al requeriment, procedeixi a consignar la totalitat de les sumes que, dins l'expedient o la peça que hagi estat objecte de la resolució, vagin al seu càrrec.

2. Consignades les sumes, el jutge procedeix en la forma indicada a l'article 27 i següents.

3. Transcorregut sense efecte el termini assenyalat per a la consignació, l'execució queda en suspens, però l'expropiant s'entén, a tots els efectes, constituït en mora a partir del dia següent al d'expiració de l'esmentat termini i, en tal concepte, si més endavant, i abans que caduqui l'expedient de taxació de la indemnització, pretén prosseguir l'execució, haurà de consignar, a més de les sumes determinades en la resolució, l'interès legal que hagin produït des del moment de la mora fins a la consignació efectiva.

Article 32

1. Contra les diligències d'execució previstes en aquesta secció no són possibles altres recursos que els que tinguin per objecte la rectificació d'eventuals errors en la descripció i la fitació dels béns, la cancel.lació de càrregues i el pagament i el repartiment de la indemnització.

2. Els eventuals recursos no tenen mai efectes suspensius.

Títol III. De la caducitat de l'expedient i de la reversió dels béns expropiats

Article 33

Si transcorren dos anys des de la data de la resolució que fixava l'import de la indemnització i de les restants sumes a càrrec de l'expropiant, sense que aquest les hagi pagat o consignat, s'entendrà caducat l'expedient de taxació i haurà de procedir-se novament a l'avaluació dels béns expropiables d'acord amb les normes del Capítol segon del Títol II.

Article 34

1. Si transcorreguts cinc anys i abans que en transcorrin quinze des de la data d'ocupació dels béns expropiats, l'expropiant no ha començat encara l'obra o el servei que motivà l'expropiació, o començada o realitzada totalment l'abandona, o si desafecta els béns de la finalitat de l'expedient d'expropiació, l'expropiat o els seus drethavents poden demanar a l'expropiant la declaració oficial de cessació de l'ocupació o la desafectació.

2. En el termini d'un any a comptar de la data de declaració oficial de cessació de l'ocupació o de la desafectació, l'expropiat o els seus drethavents tenen dret a readquirir els béns expropiats. Per fer ús d'aquest dret, l'expropiat ha de pagar a l'expropiant una indemnització, l'import de la qual, en defecte d'acord previ entre les dues parts, ha d'ésser fixat per la Comissió d'Expropiació, seguint les mateixes normes del Capítol segon del Títol II.

3. El mateix dret de readquisició, dins el termini d'un any a comptar de la desafectació, correspon a l'expropiat o als seus drethavents, si abans de transcórrer els cinc primers anys des de la data d'ocupació dels béns, aquests fossin desafectats oficialment per l'expropiant, o a instància seva, de la finalitat de l'expedient d'expropiació. En aquest cas, però, la indemnització a pagar per part de l'expropiat és la mateixa que, en el seu moment, hagués pagat o consignat l'expropiant.

Títol IV. Procediment d'extrema urgència

Article 35

Amb caràcter excepcional, en els casos que, per raons d'extrema necessitat o força major, sigui necessària l'ocupació immediata dels béns objecte d'expropiació, se segueix el procediment que determinen els apartats següents:

1. El Govern, per iniciativa pròpia o a instància de l'expropiant, declara l'extrema urgència de l'ocupació, forma un expedient simplificat en què han de constar, en tot cas, una memòria explicativa de les raons de força major que justifiquen el recurs a aquest procediment excepcional, i la identificació de les finques que en són l'objecte, i el tramet a la Comissió Permanent del Consell General, notificant-ho al mateix temps als interessats, si en consta el domicili.

2. La Comissió Permanent del Consell General examina l'expedient i resol sobre la urgència de l'ocupació. La resolució s'ha de limitar a aquesta qualificació, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial del Principat i s'ha de notificar immediatament al Govern, amb devolució de l'expedient.

3. El Govern ha de donar trasllat de l'expedient al jutge de l'Expropiació que, sense constituir la Comissió d'Expropiació, però assessorant-se amb els perits que cregui oportú, i oint l'expropiant i l'expropiat sempre que li sigui possible, fixa, dins dels cinc dies següents, l'import del dipòsit que ha de constituir l'expropiant per garantir provisionalment les indemnitzacions expropiatòries, així com les altres que responguin dels danys i perjudicis ocasionats per la urgència de l'ocupació, i les despeses i costes del procediment.

4. Tan aviat com l'expropiant hagi consignat el dipòsit provisional a què es refereix l'apartat anterior, pot sol.licitar la posada en possessió dels béns expropiats. El procediment és el previst per l'article 27 anterior, però el termini es redueix a la meitat.

5. Dins el termini d'un mes a comptar des de la data de publicació de la resolució de la Comissió Permanent declarant la urgència de l'ocupació, el Govern està obligat a completar l'expedient d'expropiació, i a seguir-ne tots els tràmits, d'acord amb el procediment ordinari. També segons aquest procediment es procedeix a la determinació de l'import de les indemnitzacions, que han d'incloure, quan escaigui, la dels danys ocasionats per causa de la urgència de l'ocupació.

6. Si l'expropiació de tots o d'una part dels béns de què l'expropiant ha pres possessió pel procediment d'urgència és abandonada en la tramitació del procediment ordinari subsegüent, el Govern ho ha de comunicar immediatament al jutge de l'Expropiació, a fi que en reintegri la possessió als expropiats. Aquest reintegrament no exclou la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats per l'ocupació que, en defecte d'acord amistós entre les parts, és fixada per la Comissió d'Expropiació, d'acord amb les normes del Capítol segon del Títol II.

Títol V. Del procediment en els casos de construcció, eixamplament o condicionament de carreteres, vials, places, jardins o parcs públics

Article 36

Quan el procediment d'expropiació té per finalitat la construcció, l'eixamplament o el condicionament de carreteres, vials, places, jardins o parcs públics, la seva tramitació s'efectua d'acord amb les modificacions previstes en el present Títol.

Article 37

1. Tenen la condició d'interessats, a més de les persones indicades a l'article 10, tots els propietaris de béns immobles situats dins d'una zona delimitada per dues línies situades a 22 metres de profunditat a banda i banda dels nous límits d'edificació de la carretera, vial, plaça, jardí o parc que s'hagi de construir, eixamplar o condicionar, i paral.leles a aquells nous límits, malgrat que l'obra a

realitzar no suposi l'ocupació ni total ni parcial de llurs finques.

2. La memòria i els plànols previstos a l'article 9 han de comprendre, a més a més, un estat separat i detallat d'aquestes finques no ocupables que, situades a banda i banda de la carretera, vial, plaça, jardí o parc, siguin edificables o estiguin edificades, i també un plànol de les esmentades finques amb la indicació expressa de no-ocupables.

3. La publicació que prescriu l'article 11 ha de comprendre també la relació de finques no-ocupables a què es refereix l'apartat anterior del present article.

4. A l'efecte de l'article 20, el jutge promou també la intervenció del Ministeri Fiscal en les diligències, perquè defensi els interessos dels menors o incapaços que, essent propietaris de finques no-ocupables compreses a l'expedient, no compareguin mitjançant llurs pares o tutors.

5. A l'efecte de l'apartat 4 del mateix article 20, s'exclouen també de les peces o expedients separats que ha de formar la Comissió aquelles finques no-ocupables en les quals s'hagi produït, entre l'expropiant i els propietaris, acord previ sobre la quantia i el pagament de la plus-vàlua que les afecti. Respecte de les restants, els expedients o les peces que les comprenguin han d'esmentar llur qualitat de no-ocupables.

Article 38

Respecte a la peça o les peces que comprenguin les finques no-ocupables, els tràmits dels articles 21 i 26 s'entenen referits a la fixació amistosa o per via d'autoritat de la quantia de la plus-vàlua que les afecti.

Article 39

1. En el procediment especial regulat pel present Títol, la Comissió d'Expropiació taxa separadament el valor de les parcel.les i els edificis a ocupar, i dels no-ocupables compresos dins de la zona de 22 metres a què es refereix l'article 37, i determina també el valor de plus-vàlua per a cadascun d'ells.

Per a les parcel.les o subparcel.les que no tinguin façana als nous límits del vial, carretera, plaça o parc a construir o condicionar es considera un 50% del valor de parcel.les similars amb façana.

2. El valor de plus-vàlua per a cada parcel.la (V_i) es determina per aplicació de la fórmula següent:

$V_i = S_i \times e_i [C / (S_2 \times P_2 + S_3 \times P_3)] = S_i \times e_i \times V$

on:

- s_i= Superfície en metres quadrats (m^2) a expropiar de la parcel.la "i".

- S_i= Superfície en metres quadrats (m^2) de la parcel.la "i" situada dins de la zona de vint-i-dos (22) metres a cada costat, definida a l'article 41.

- e_i= Preu en pessetes per metre quadrat (PTA/m^2) fixat per la Comissió d'Expropiació per a la parcel.la "i".

- P = Valor total d'altres edificis, béns o drets compresos dins de la zona d'expropiació en pessetes (PTA).

- S_1= Superfície en metres quadrats (m^2) ocupada de l'obra a construir.

- P_t= Preu mitjà en pessetes per metre quadrat (PTA/m^2) d'execució de l'obra corresponent a l'any de l'expropiació.

- $S_2 = \sum s_i$: Superfície total d'expropiació en metres quadrats (m^2).

- $P_2 = (\sum s_i \times e_i + P)/S_2$: Preu mitjà d'expropiació en pessetes per metre quadrat (PTA/m^2).

- $S_3 = \sum S_i$: Superfície total dins de la zona de vint-i-dos (22) metres a cada costat, en metres quadrats (m^2).

- $P_3 = \sum S_i \times e_i / S_3$: Preu mitjà de valoració de les zones de vint-i-dos (22) metres a cada costat, en pessetes per metre quadrat (PTA/m^2).

- $C = S_1 \times P_t + S_2 \times P_2$: Cost total de l'obra en pessetes (PTA).

- $V = C/(S_2 \times P_2 + S_3 \times P_3)$: Coeficient de plus-vàlua.

3. El valor de Po l'ha de fixar per decret el Govern durant el primer any de vigència de la present Llei i s'haurà d'actualitzar cada any per aplicació de la fórmula següent:

- $P_t = K_t \times P_o$

- $K_t = 0{,}39\ H_t/H_o + 0{,}20\ E_t/E_o + 0{,}07\ C_t/C_o + 0{,}02\ L_t/L_o + 0{,}17\ S_t/S_o + 0{,}15$

on:

- K_t= Coeficient teòric de revisió per a l'any d'execució t.

- H_o= Índex del cost de la mà d'obra el primer any de vigència de la Llei.

- H_t= Índex del cost de la mà d'obra l'any "t".

- E_o= Índex de cost de l'energia el primer any de vigència de la Llei.

- E_t= Índex de cost de l'energia l'any "t".

- C_o= Índex del cost del ciment el primer any de vigència de la Llei.

- C_t= Índex del cost del ciment l'any "t".

- S_o= Índex del cost dels materials siderúrgics el primer any de vigència de la Llei.

- S_t= Índex del cost dels materials siderúrgics l'any "t".

- L_o= Índex de cost dels lligats bituminosos el primer any de vigència de la Llei.

- L_t= Índex de cost dels lligats bituminosos l'any "t".

Els valors dels índexs de l'any "t", igual que els del primer any de vigència de la Llei, els ha de fixar per decret el Govern.

4. En tots els expedients d'expropiació que hagin de regir-se per aquest procediment, s'hi han d'incloure les dades necessàries que permetin a la Comissió d'Expropiació la determinació del valor de l'expropiació i de la plus-vàlua de cada parcel.la, els plànols parcel.laris, les superfícies S_i, s_i, S_1, S_2, S_3 i el preu P_t.

A l'efecte d'il.lustrar l'aplicació del procediment que determina aquest article s'inclouen, com a annex a la present Llei, dos exemples referents als supòsits d'obertura d'un nou vial, i d'eixamplament d'una carretera ja existent.

Article 40

1. Respecte de les finques ocupables, el valor de plus-vàlua s'ha de deduir de la indemnització a pagar per l'expropiant, sempre que aquest fianci suficientment, a criteri del jutge, la seva devolució, total o parcial, de resultes dels eventuals recursos que s'entaulin contra la taxació.

2. Si, efectuada la compensació, resulta encara alguna diferència a favor de l'expropiant, caldrà atenir-se, per aquesta diferència, al que disposa l'article següent, respecte del pagament del valor de plus-vàlua per part dels titulars de finques no-ocupables.

3. Inversament, la suma resultant a favor dels expropiats, una vegada efectuada la compensació, constitueix la indemnització a pagar per l'expropiant amb motiu de l'expropiació, sense perjudici de les rectificacions que escaiguin de resultes dels eventuals recursos contra la taxació.

Article 41

1. Respecte de les finques no-ocupables, llurs propietaris poden pagar el valor de plus-vàlua dins els tres mesos següents a aquell en què, d'acord amb l'article 25, els hagi estat notificada la resolució de la Comissió d'Expropiació, mitjançant consignació davant el jutge de l'Expropiació, que els lliurarà la pertinent àpoca provisional.

2. Transcorregut el termini indicat, queden automàticament constituïts en mora els titulars que no hagin procedit a consignar el valor de plus-vàlua, i en aquest cas:

a) El valor de plus-vàlua s'incrementa amb un 5% per cada any que transcorri entre la data d'expiració del termini de consignació i la de consignació o pagament efectiu, sense que els increments puguin excedir el 50% del valor inicial.

b) El valor de plus-vàlua, amb els increments pertinents segons l'apartat anterior, constitueix el capital de plus-vàlua, el qual produeix, a favor de l'expropiant, l'interès legal també des del dia següent al de l'expiració del termini de consignació fins a aquell en què sigui efectivament consignat o pagat.

c) No es pot autoritzar cap demanda de construcció, urbanització, venda o disposició de finques subjectes al pagament de la plus-vàlua, si els seus titulars o qui efectuï la sol.licitud no acrediten la prèvia consignació o no paguen en aquell acte a l'expropiant el capital de plus-vàlua amb els interessos legals corresponents.

Article 42

1. El jutge de l'Expropiació ha de remetre a l'expropiant les sumes que, pel concepte de valor de plus-vàlua, li siguin consignades d'acord amb l'article anterior, en el moment que el propi expropiant consigni la indemnització i en fianci suficientment la devolució total o parcial de resultes dels recursos que es puguin entaular contra la taxació.

2. En defecte de fiançament, el jutge ha de mantenir la consignació fins que la resolució hagi quedat ferma per manca de recurs o, si és el cas, fins que recaigui la resolució d'aquest.

Article 43

1. Transcorregut sense efecte el termini per recórrer contra la decisió de taxació i acreditada aquesta circumstància per l'expropiant, el jutge de l'Expropiació ordena la cancel.lació dels fiançaments i fa el pagament definitiu de les sumes que, per plus-vàlua, tingui en consignació. Ensems, lliura als consignants àpoca definitiva que anul.la i substitueix la provisional.

2. Els mateixos efectes respecte de la cancel.lació de fiançaments i lliurament d'àpoques definitives produeix l'execució de les resolucions recaigudes en els recursos eventualment interposats contra la taxació.

Article 44

1. La interposició de recurs contra la taxació no produeix efectes suspensius de l'obligació de consignació del valor de plus-vàlua, ni dels increments i interessos, sense perjudici de les rectificacions que correspongui efectuar una vegada hagi recaigut resolució.

2. La interposició de recursos tampoc no produeix paralització o entorpiment del lliurament a l'expropiant de les sumes consignades per plus-vàlua, quan l'expropiant hagi prestat fiança.

Article 45

1. En els casos en què, havent percebut plus-vàlua, l'expropiant abandoni oficialment el projecte, haurà de retornar a tots els propietaris de finques afectades, ocupades o no, les sumes que hagi percebut en concepte de plus-vàlua, incrementades amb els interessos legals produïts des de la data en què les rebé.

2. El mateix s'entén si, transcorreguts cinc anys des de la percepció, no ha començat encara l'obra.

Títol VI. Recursos

Article 46

Les resolucions de la Comissió d'Expropiació a què es refereixen els articles 23 i 25 posen fi a la via administrativa. Contra aquelles resolucions i, en general, contra les decisions de taxació, tant de la indemnització com de la plus-vàlua, els interessats poden interposar recurs davant la Jurisdicció Administrativa i Fiscal.

Article 47

1. Els recursos formulats davant de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal només tenen efectes devolutius, sense que mai no puguin suspendre, paralitzar o entorpir l'execució de la resolució recorreguda, pel que fa al transferiment de la propietat o a la presa de possessió dels béns expropiats o a la constitució sobre aquests béns de servituds o limitacions en què l'expropiació consisteixi, ni llur utilització als fins de l'expedient d'expropiació.

2. Tampoc no tenen mai efectes suspensius de l'execució de les resolucions del jutge de l'Expropiació o de la Comissió d'Expropiació els procediments i les accions que els interessats puguin promoure davant la jurisdicció ordinària en les matèries, els litigis i les controvèrsies que li són reservats. Les resolucions que recaiguin, només es poden fer efectives sobre les sumes consignades com a indemnització per l'expropiant i sobre els restants béns expropiats que pertanyin al condemnat.

Article 48

L'expropiant no pot formular recurs si, prèviament o simultàniament a la seva interposició, no acredita haver satisfet l'import de les despeses i les costes a què es refereix l'article 23.

Article 49

Les controvèrsies o els litigis sobre propietat de les finques, sobre validesa o nul.litat dels títols dels qui pretenguin drets sobre aquelles, o sobre repartiment de la indemnització entre els propietaris i els titulars de drets de qualsevol natura-

lesa són competència de la jurisdicció ordinària.

Disposicions finals

Primera

La present Llei entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació.

Segona

Queden derogades totes les disposicions anteriors relatives a les matèries regulades per la present Llei i, en especial, el Decret de procediment per expropiació a causa d'utilitat pública, d'11 d'abril de 1958, i la Modificació del Decret d'expropiació a causa d'utilitat pública, de 5 de juliol de 1974.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Coprínce d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Coprínce d'Andorra

Annex

Exemples d'aplicació de l'article 39

Exemple 1. Nova carretera

En el plànol 1 d'aquest annex s'ha representat un tram de carretera de nova construcció de 1000 metres de longitud, 20 metres d'ample i les zones adjacents d'aplicació de plus-vàlua de 22 metres.

El nombre de parcel.les considerat és de 20, numerades de l'1 al 20 i dins de la parcel.la 15 s'han considerat dos edificis, un "E_a" a la zona d'expropiació i l'altre "E_b" a la zona de 22 metres.

Cada parcel.la s'ha dividit en subparcel.les que s'han designat amb la lletra "a" per a la subparcel.la a expropiar, amb la lletra "b" per a les subparcel.les dins de la zona de 22 metres amb façana a la carretera i la lletra "c" per a les mateixes subparcel.les sense façana a la carretera. Per tant, les subparcel.les amb la lletra "a" corresponen a la superfície denominada "si" de l'article 39 i la suma de les subparcel.les amb les lletres "b" i "c" a la superfície denominada "S_i" de l'esmentat article.

A continuació figura el quadre núm. 1 amb les superfícies i els preus de cada subparcel.la d'acord amb els criteris de l'article 39.

Quadre núm. 1

Parcel.la	Sub parcel.la	s_i	e_i	$s_i \times e_i$	S_i	e_i	$S_i \times e_i$
		(m^2)	(PTA/m^2)	(PTA)	(m^2)	(PTA/m^2)	(PTA)
1	1a	1.433	19.500	27.943.500			
	1b				4.246	19.500	82.797.000
	1c				1.899	9.750	18.515.250
2	2a	1.374	15.000	20.610.000			
	2b				2.900	15.000	43.500.000
	2c				280	7.500	2.100.000
3	3a	373	15.750	5.874.750			
4	4a	4.023	12.000	48.276.000			
	4b				3.660	12.000	43.920.000
	4c				280	6.000	1.680.000
5	5c				3.134	6.375	19.979.250
6	6a	509	13.500	6.871.500			
	6b				3.300	13.500	44.550.000
	6c				958	6.750	6.466.500
7	7a	2.736	12.000	32.832.000			
	7b				1.050	12.000	12.600.000
8	8a	17	12.750	216.750			
	8b				396	12.750	5.049.000
	8c				2.100	6.375	13.387.500
9	9a	1.275	15.750	20.081.250			
	9b				243	15.750	3.827.250
10	10c				2.943	7.950	23.396.850
11	11a	1.175	15.000	17.625.000			
	11b				1.320	15.000	19.800.000
	11c				584	7.500	4.380.000
12	12a	131	16.500	2.161.500			
	12b				1.804	16.500	29.766.000
	12c				2.783	8.250	22.959.750
13	13a	3.116	21.495	66.978.420			
	13b				673	21.495	14.466.135
14	14a	273	14.250	3.890.250			
	14b				2.179	14.250	31.050.750
	14c				1.070	7.125	7.623.750
15	15a	2.360	13.500	31.860.000			
	15b				1.011	13.500	13.648.500
	15c				77	6.750	519.750
16	16c				2.176	6.750	14.688.000
17	17c				1.328	7.500	9.960.000
18	18a	430	12.750	5.482.500			
	18b				240	12.750	3.060.000
19	19a	775	12.000	9.300.000			
	19b				390	12.000	4.680.000
	19c				36	6.000	216.000
20	20c				940	8.250	7.755.000
TOTALS		20.000		300.003.420	44.000		506.342.235

- $S_2 = \sum s_i = 20.000\ m^2$

$\sum s_i \times e_i = 300.003.420$ PTA

A aquest valor d'expropiació del terreny s'ha d'afegir el valor d'altres edificis o altres drets situats dins de la zona d'expropiació i que en aquest cas correspon a l'edifici "E_a" de la parcel.la 15, el valor del qual considerem que és de 8.500.000 PTA (P)

- $P = E_a = 8.500.000$ PTA

- $P_2 = 308.503.420/20.000 = 15.425,17$ PTA/m^2

- $S_3 = \sum S_i = 44.000\ m^2$

$S_i \times e_i = 506.342.235$ PTA

A aquest valor no s'ha d'afegir cap altre valor d'edifici o altres drets situats dins de la zona de 22 metres a cada costat.

- $P_3 = 506.342.235/44.000 = 11.507,78$ PTA/m^2

Com a preu de construcció es considera:

$P_t = 35.000$ PTA/m^2

Superfície de l'obra a construir:

$S_1 = 20 \times 1000 = 20.000\ m^2$

Cost total de l'obra:

$C = 20.000 \times 35.000 + 20.000 \times 15.425,17 = 700.000.000 + 308.503.420 = 1.008.503.420$ PTA

Coeficient de plus-vàlua:

$V = 1.008.503.420/814.845.655 = 1,23766$.

A continuació figura el quadre núm. 2 amb el número de la parcel.la, la indemnització que li correspon per l'expropiació del terreny o altres béns o drets, la base per al càlcul de la plus-vàlua, la plus-vàlua i la diferència entre la indemnització i la plus-vàlua.

Quadre núm. 2

Parcel.la	Indemnització per expropiació	Base per al càlcul plus-vàlua	Plus-vàlua (V_i)	Diferència
1	27.943.500	101.312.250	125.390.119	(97.446.619)
2	20.610.000	45.600.000	56.437.296	(35.827.296)
3	5.874.750			5.874.750
4	48.276.000	45.600.000	56.437.296	(8.161.296)
5		19.979.250	24.727.519	(24.727.519)
6	6.871.500	51.016.500	63.141.081	(56.269.581)
7	32.832.000	12.600.000	15.594.516	17.237.484
8	216.750	18.436.500	22.818.119	(22.601.369)
9	20.081.250	3.827.250	4.736.834	15.344.416
10		23.396.850	28.957.345	(28.957.345)
11	17.625.000	24.180.000	29.926.619	(12.301.619)
12	2.161.500	52.725.750	65.256.552	(63.095.052)
13	66.978.420	14.466.135	17.904.157	49.074.263
14	3.890.250	38.674.500	47.865.882	(43.975.632)
15	40.360.000	14.168.250	17.535.476	22.824.524
16		14.688.000	18.178.750	(18.178.750)
17		9.960.000	12.327.094	(12.327.094)
18	5.482.500	3.060.000	3.787.240	1.695.260
19	9.300.000	4.896.000	6.059.583	3.240.417
20		7.755.000	9.598.053	(9.598.053)

Exemple 2. Eixample de carretera

En el plànol 2 d'aquest annex s'ha representat un tram de carretera existent de 8 metres d'ample i 1.000 metres de longitud que s'ha d'eixamplar a 20 metres, així com les zones adjacents d'aplicació de plus-vàlua de 22 metres.

El nombre de parcel.les considerat és de 20, numerades de l'1 al 20 i dins de la parcel.la 15 s'han considerat dos edificis, un "E_a" a la zona d'expropiació i l'altre "E_b" a la zona de 22 metres.

Cada parcel.la s'ha dividit en subparcel.les que s'han designat amb la lletra "a" per a la subparcel.la a expropiar, amb la lletra "b" per a les subparcel.les dins de la zona de 22 metres amb façana a la nova carretera i amb la lletra "c" per a les mateixes subparcel.les sense façana a la nova carretera. Per tant, les subparcel.les amb la lletra "a" corresponen a la superfície denominada "s_i" de l'article 39 i la suma de les subparcel.les amb les lletres "b" i "c" a la superfície denominada "S_i" de l'esmentat article.

A continuació figura el quadre núm. 3 amb les superfícies i els preus de cada subparcel.la d'acord amb els criteris de l'article 39.

Quadre núm. 3

Parcel.la	Sub parcel.la	s_i	e_i	$s_i \times e_i$	S_i	e_i	$S_i \times e_i$
		(m^2)	(PTA/m^2)	(PTA)	(m^2)	(PTA/m^2)	(PTA)
1	1a	1.481	32.500	48.132.500			
	1b				4.246	32.500	137.995.000
	1c				1.899	16.250	30.858.750
2	2a	210	25.000	5.250.000			
	2b				2.900	25.000	72.500.000
	2c				280	12.500	3.500.000
3	3a	323	26.250	8.478.750			
4	4a	2.263	20.000	45.260.000			
	4b				3.660	20.000	73.200.000
	4c				280	10.000	2.800.000
5	5c				3.134	10.625	33.298.750
6	6a	599	22.500	13.477.500			
	6b				3.300	22.500	74.250.000
	6c				958	11.250	10.777.500
7	7a	1.436	20.000	28.720.000			
	7b				1.050	20.000	21.000.000
8	8a	17	21.250	361.250			
	8b				396	21.250	8.415.000
	8c				2.100	10.625	22.312.500
9	9a	635	26.250	16.668.750			
	9b				243	26.250	6.378.750
10	10c				2.943	13.250	38.994.750
11	11a	615	25.000	15.375.000			
	11b				1.320	25.000	33.000.000
	11c				584	12.500	7.300.000
12	12a	131	27.500	3.602.500			
	12b				1.804	27.500	49.610.000
	12c				2.783	13.750	38.266.250
13	13a	1.876	35.825	67.207.700			
	13b				673	35.825	24.110.225

Parcel.la	Sub parcel.la	s_i	e_i	$s_i \times e_i$	S_i	e_i	$S_i \times e_i$
		(m^2)	(PTA/m^2)	(PTA)	(m^2)	(PTA/m^2)	(PTA)
14	14a	273	23.750	6.483.750			
	14b				2.179	23.750	51.751.250
	14c				1.070	11.875	12.706.250
15	15a	1.320	22.500	29.700.000			
	15b				1.011	22.500	22.747.500
	15c				77	11.250	866.250
16	16c				2.176	11.250	24.480.000
17	17c				1.328	12.500	16.600.000
18	18a	250	21.250	5.312.500			
	18b				240	21.250	5.100.000
19	19a	495	20.000	9.900.000			
	19b				390	20.000	7.800.000
	19c				36	10.000	360.000
20	20c				940	13.750	12.925.000
	TOTALS	11.924		303.930.200	44.000		843.903.725

- $S_2 = \Sigma s_i = 11.924\ m^2$

$\Sigma s_i \times e_i = 303.930.200$ PTA

A aquest valor d'expropiació del terreny s'ha d'afegir el valor d'altres edificis o altres drets situats dins de la zona d'expropiació i que en aquest cas correspon a l'edifici "E_a" de la parcel.la 15, el valor del qual considerem que és de 8.500.000 PTA (P).

- $P = E_a = 8.500.000$ PTA

- $P_2 = (\Sigma s_i \times e_i + P) / S_2 = (303.930.200 + 8.500.000) / 11.924 = 312.430.200 / 11.924 = 26.201,7947$ PTA/m^2

- $S_3 = \Sigma S_i = 44.000\ m^2$

$\Sigma S_i \times e_i = 843.903.725$ PTA

A aquest valor no s'ha d'afegir cap altre valor d'edifici o altres drets situats dins de la zona de 22 metres a cada costat.

- $P_3 = 843.903.725 / 44.000 = 19.179,63$ PTA/m^2

Com a preu de construcció es considera:

$P_t = 20.000$ PTA/m^2

Superfície de l'obra a construir:

$S_1 = 11.924\ m^2$

Cost total de l'obra:

$C = S_1 \times P_t + S_2 \times P_2 = 11.924 \times 20.000 + 11.924 \times 26.201,7947 = 238.480.000 + 312.430.200 = 550.910.200$ PTA

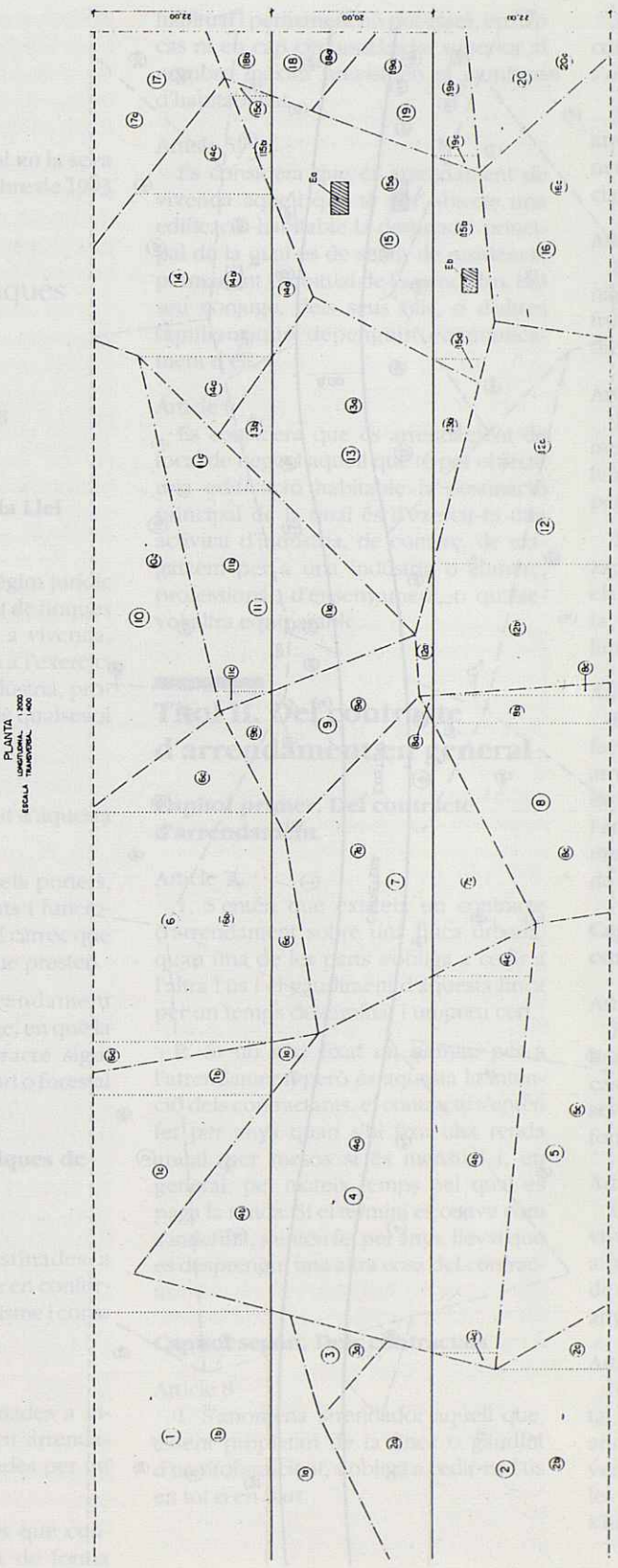
Coeficient de plus-vàlua:

$V = C / (S_2 \times P_2 + S_3 \times P_3) = 550.910.200 / (312.430.200 + 843.903.725) = 0,47643$

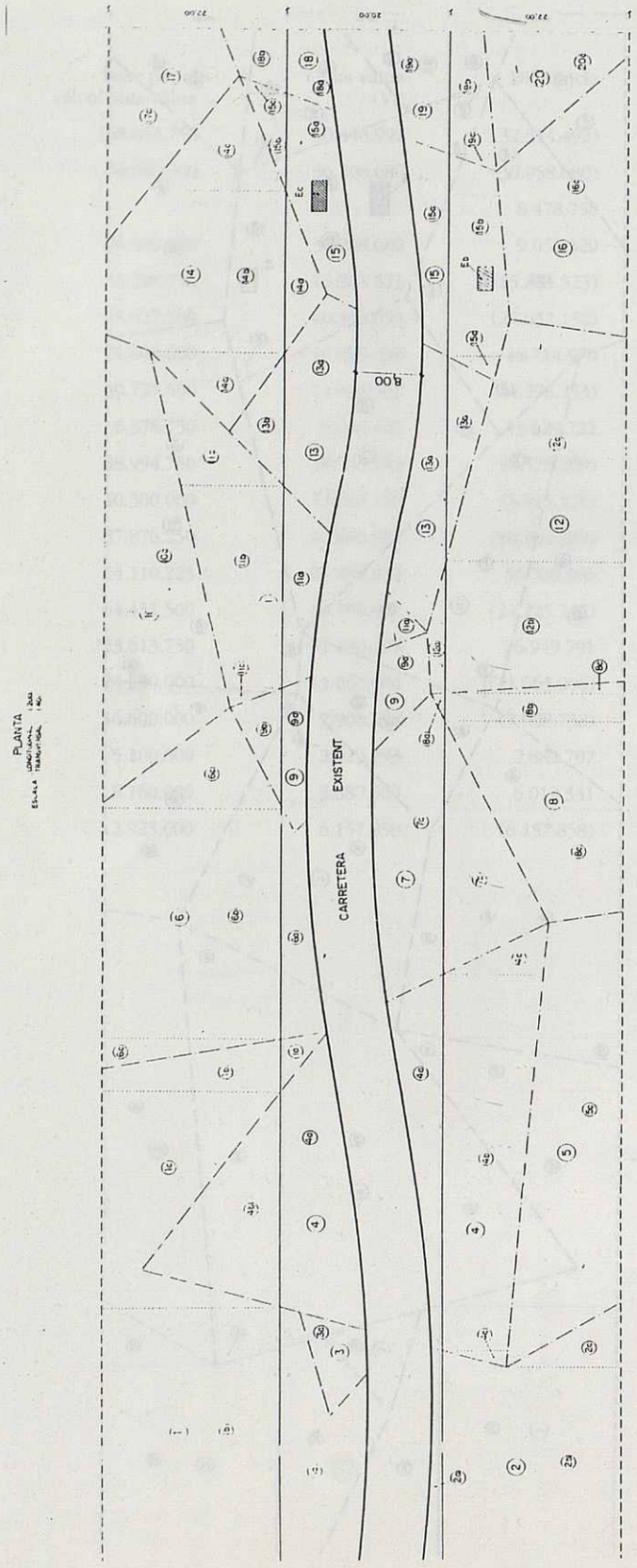
A continuació figura el quadre núm. 4 amb el número de la parcel.la, la indemnització que li correspon per l'expropiació del terreny o altres béns o drets, la base per al càlcul de la plus-vàlua, la plus-vàlua i la diferència entre la indemnització i la plus-vàlua.

Quadre núm. 4

Parcel.la	Indemnització per expropiació	Base per al càlcul plus-vàlua	Plus-vàlua (V_i)	Diferència
1	48.132.500	168.853.750	80.446.992	(32.314.492)
2	5.250.000	76.000.000	36.208.680	(30.958.680)
3	8.478.750			8.478.750
4	45.260.000	76.000.000	36.208.680	9.051.320
5		33.298.750	15.864.523	(15.864.523)
6	13.477.500	85.027.500	40.509.652	(27.032.152)
7	28.720.000	21.000.000	10.005.030	18.714.970
8	361.250	30.727.500	14.639.503	(14.278.253)
9	16.668.750	6.378.750	3.039.028	13.629.722
10		38.994.750	18.578.269	(18.578.269)
11	15.375.000	40.300.000	19.200.129	(3.825.129)
12	3.602.500	87.876.250	41.866.882	(38.264.382)
13	67.207.700	24.110.225	11.486.834	55.720.866
14	6.483.750	64.451.500	30.709.487	(24.225.737)
15	38.200.000	23.613.750	11.250.299	26.949.701
16		24.480.000	11.663.006	(11.663.006)
17		16.600.000	7.908.738	(7.908.738)
18	5.312.500	5.100.000	2.429.793	2.882.707
19	9.900.000	8.160.000	3.887.669	6.012.331
20		12.925.000	6.157.858	(6.157.858)



PLANOL - 1



PLANOL - 2

Llei d'arrendaments de finques urbanes

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat la següent:

Llei d'arrendaments de finques urbanes

Títol I. Disposicions comuns

Capítol primer. Àmbit de la Llei

Article 1

La present Llei regula el règim jurídic dels contractes d'arrendament de finques urbanes, tant les destinades a vivenda, com aquelles que es destinen a l'exercici d'una activitat de comerç, indústria, professional, d'ensenyament, o de qualsevol altra classe.

Article 2

Queden exclosos de l'àmbit d'aquesta Llei:

1r. L'ús de les vivendes pels porters, guardians, vigilants, assalariats i funcionaris que l'ocupen per raó del càrrec que desenvolupen o del servei que presten.

2n. Els contractes d'arrendament d'una finca amb casa-habitatge, en què la finalitat principal del contracte sigui l'aprofitament agrícola, pecuari o forestal de la finca.

Capítol segon. Característiques de la finca arrendable

Article 3

Les finques urbanes destinades a arrendament han de trobar-se en conformitat amb les normes d'urbanisme i construcció estatals i locals.

Article 4

Les finques urbanes destinades a vivenda no poden donar-se en arrendament si no es troben emparades per un certificat d'habitabilitat.

El nombre de les persones que conviuen en la finca arrendada de forma habitual i permanent no pot ésser, en cap cas ni en cap circumstància, superior al nombre màxim previst en el certificat d'habitabilitat.

Article 5

Es considera que és arrendament de vivenda aquell que té per objecte una edificació habitable la destinació principal de la qual és de servir de residència permanent i habitual de l'arrendatari, del seu cònjuge, dels seus fills, o d'altres familiars que depenguin econòmicament d'ell.

Article 6

Es considera que és arrendament de local de negoci aquell que té per objecte una edificació habitable la destinació principal de la qual és d'exercir-hi una activitat d'indústria, de comerç, de magatzem per a una indústria o comerç, professional, d'ensenyament, o qualsevol altra equiparable.

Títol II. Del contracte d'arrendament en general

Capítol primer. Del contracte d'arrendament

Article 7

1. S'entén que existeix un contracte d'arrendament sobre una finca urbana, quan una de les parts s'obliga a cedir a l'altra l'ús i el gaudiment d'aquesta finca per un temps determinat i un preu cert.

2. Si no s'ha fixat un termini per a l'arrendament, però és aquesta la intenció dels contractants, el contracte s'entén fet per anys quan s'hi fixa una renda anual, per mesos si és mensual i, en general, pel mateix temps pel qual es paga la renda. Si el termini es convé com a indefinit, s'entén fet per anys, llevat que es desprengui una altra cosa del contracte.

Capítol segon. Dels contractats

Article 8

1. S'anomena arrendador aquell que, essent propietari de la finca o gaudint d'un títol suficient, s'obliga a cedir-ne l'ús en tot o en part.

2. S'anomena arrendatari aquell que es compromet a adquirir l'ús de la finca, i s'obliga a pagar la renda.

3. La capacitat per ésser arrendador i arrendatari es regeix per les normes generals de la contractació, i per les especials que estableix aquesta Llei.

Article 9

Es consideren títols suficients per donar una finca en arrendament els d'usufructuari, emfiteuta, superficiari, i tot altre dret de natura anàloga.

Article 10

1. Els pares poden donar en arrendament els béns dels fills menors per un termini no superior a aquell que els falti per arribar a la majoria d'edat.

2. El tutor o curador necessita autorització judicial per donar en arrendament els béns de les persones subjectes a tutela. Regeix, quan sigui el cas, la mateixa limitació establerta a l'apartat 1.

Article 11

En el cas que el contracte se celebri a favor de més d'una persona, tots els coarrendataris gaudeixen dels drets i han de complir les obligacions derivades de l'arrendament. Responen tots solidàriament front a l'arrendador del pagament de les rendes.

Capítol tercer. De la forma del contracte

Article 12

El contracte d'arrendament pot celebrar-se en forma verbal o escrita. En el cas que s'hagi celebrat verbalment, qualsevol de les parts pot compel.lir l'altra a formalitzar-lo per escrit.

Article 13

Quan el contracte d'arrendament de vivenda es pacti per un termini superior a tres anys, o el d'arrendament de local de negoci per un termini superior a cinc anys, s'han de formalitzar per escrit.

Article 14

Si la finca s'arrenda amb mobles o instal.lacions especials, s'ha d'afegir com a annex al contracte el corresponent inventari. Es presumeix que els mobles o les instal.lacions estan en bon estat si no s'ha fet constar altra cosa.

Capítol quart. De la fiança

Article 15

1. Les parts poden pactar la prestació d'una fiança que en cap cas no pot ser superior a tres mensualitats de renda. L'import pot actualitzar-se cada any, al mateix temps que la renda.

2. La fiança té per objecte garantir que l'arrendatari compleixi les seves obligacions arrendatàries, i els danys que pugui ocasionar a la finca arrendada.

3. La fiança queda en possessió de l'arrendador, que està obligat a retornar-la a la fi del contracte, en rebre les claus de la finca arrendada, llevat que hagi d'aplicar-se a les finalitats previstes a l'apartat 2.

Capítol cinquè. De la durada de l'arrendament

Article 16

El contracte d'arrendament acaba a la fi del termini pactat, sense necessitat de requeriment.

Article 17

1. Si una volta acabat el termini pactat, l'arrendatari roman 15 dies més gaudint de la finca sense oposició expressa de l'arrendador, s'entén que existeix tàcita reconducció del contracte. Quan aquesta Llei o les parts no estableixen altra cosa, la tàcita reconducció ho és per un període de igual al pactat per al pagament de la renda.

2. En el cas de tàcita reconducció, cessen les obligacions a què s'hagués compromès un tercer per a la seguretat del contracte principal, salvat pacte contrari.

Article 18

1. Els arrendaments atorgats per usufructuaris, superficiaris, i altres persones que tinguin un dret anàleg sobre la finca s'extingeixen amb la mort de l'arrendador si l'arrendatari coneix aquella circumstància al temps de la celebració del contracte.

2. La regla de l'apartat precedent s'aplica també als arrendaments atorgats per compradors amb pacte de retro o propietaris de finques hipotecades.

3. Si l'arrendatari no coneix que l'arrendador es trobava en les condicions indicades als apartats anteriors, el contracte no s'extingeix fins a la fi del període pactat.

Article 19

L'arrendatari pot renunciar unilateralment al contracte d'arrendament abans que transcorri el termini pactat però, en aquest cas, ha d'indemnitzar l'arrendador amb una quantitat equivalent a una mensualitat de la renda en vigor per cada any que queda per complir.

Capítol sisè. De la renda

Article 20

Les parts en el contracte pacten lliurement la renda.

Article 21

1. La renda es paga en la forma pactada. En defecte de pacte es paga per mesos, i dins dels cinc primers dies de cada un d'ells.

2. El domicili per al pagament és el de l'arrendador, llevat que se n'hagi designat un altre, o que s'hagi convingut el pagament per qualsevol altre procediment que acrediti en forma fefaent l'efectiu compliment d'aquesta obligació.

3. L'arrendador està obligat, en tot cas, a lliurar el corresponent rebut.

Article 22

Durant el termini contractual, i en el cas que no s'hagi convingut cap altre sistema d'actualització, l'arrendador i l'arrendatari poden actualitzar la renda a la fi de cada any contractual, atenent a la variació percentual que experimenti l'índex general de preus al consum.

Article 23

1. A més a més de la renda, l'arrendatari està obligat a pagar les despeses que originen els serveis i els subministraments complementaris que existeixen a l'immoble i que pot usar. Tenen aquesta consideració els derivats de l'ús dels elements comuns de l'immoble, els del servei de porteria, i els subministraments d'aigua, llum, calefacció, aire condicionat, telèfon i altres anàlegs.

2. Per efectuar-ne el cobrament, l'arrendador ha de justificar a l'arrendatari la quantitat que li correspon pagar per aquests serveis i subministraments. Per determinar el cost individual de cada servei, si les finques que en gaudeixen són més d'una, el cost total es distribueix entre elles en funció de la superfície de cada finca, llevat que estiguin fixades quotes de participació per a cada pis o local, en quin cas s'apliquen aquestes.

3. No s'aplica allò que preveu l'apartat anterior quan existeixen comptadors individuals, en aquest cas l'arrendatari paga en funció del consum que indica cada comptador.

4. Es vàlid el pacte en què es convé el pagament d'una suma preufetera per a tots els serveis, o per a només alguns.

5. L'import dels serveis és complementari a la renda, però s'hi assimila als efectes de desnonament per manca de pagament.

Article 24

1. En el cas que es pacti el servei de calefacció, o el d'aigua calenta, s'ha d'especificar en el contracte:

a) El període de l'any, i les hores del dia en què ha de prestar-se. En cas de no fixar-se s'entén que l'aigua calenta es presta durant tot l'any, i les 24 hores del dia, i la calefacció, entre el 1r de novembre i el 30 d'abril, i des de les 6 fins a les 24 hores.

b) El cost del servei per al primer any, i les bases de l'actualització per als successius, atenent necessàriament al cost de l'energia emprada i als altres factors que influeixen en el cost.

2. Si algun dels serveis a càrrec de l'arrendador no es presta, o bé es presta de forma notòriament irregular o deficient, sigui quina sigui la causa, fins i tot si era per força major, l'arrendatari no ha de satisfer l'import del servei durant el temps de la prestació deficient. Si la falta de prestació del servei era deguda a dol, culpa o negligència de l'arrendador, l'arrendatari tindrà, a més a més, dret a rebre una indemnització igual al 20% de l'import del servei. El dret a rebre la indemnització no eximeix, en cap cas, de l'obligació de pagar la renda.

Article 25

1. La realització per l'arrendador d'obres de millora en la cosa arrendada o en els elements i serveis comuns de la finca, interiors o exteriors, li dóna dret, excepte si hi ha un pacte contrari, a elevar la renda anual en la suma que resulti

d'aplicar, al capital invertit en la millora, el tipus d'interès legal del diner en el moment de l'acabament de les obres incrementat en tres punts, però l'augment no pot excedir el 20% de la renda.

2. En el cas de diversos arrendataris d'una mateixa finca, el repartiment es duu a terme en proporció a la superfície, llevat que estiguin fixades quotes de participació per a cada pis o local, cas en el qual s'apliquen aquestes.

3. Si en la mateixa finca existeixen vivendes i locals de negoci, l'increment de la renda no s'aplica a aquests darrers quan les millores beneficien únicament els ocupants de les vivendes, i viceversa.

4. Es consideren obres de millora totes aquelles que no són necessàries per conservar la cosa arrendada en estat de servir per a l'ús convingut.

Capítol setè. De les obligacions de les parts

Article 26

L'arrendador està obligat a:

1r. Lliurar a l'arrendatari la finca objecte del contracte, de forma que estigui en condicions de servir a l'ús a què està destinada.

2n. Facilitar a l'arrendatari informació suficient sobre les característiques tècniques, les instal.lacions i els serveis de la vivenda o local.

3r. En el cas d'arrendament de vivenda, lliurar a l'arrendatari una còpia del certificat d'habitabilitat.

4rt. Efectuar en la finca arrendada, i en les seves instal.lacions, les reparacions necessàries perquè pugui continuar destinant-se a la finalitat per a la qual va ésser arrendada. Se n'exceptuen aquelles reparacions que exigeixi el desgast per l'ús, o siguin conseqüència dels danys a què es refereix l'apartat 10è de l'article següent, que són a càrrec de l'arrendatari. A títol purament enunciatiu, es consideren reparacions a càrrec de l'arrendador les que afecten l'estructura de l'immoble, la coberta, la façana, les instal.lacions generals i els elements d'ús comú.

L'arrendador no està però obligat a efectuar les esmentades reparacions quan el valor és superior al 50 per 100 del valor de la finca arrendada, sense comptar el valor del solar.

5è. Tenir subscrita i mantenir vigent una pòlissa d'assegurança que cobreixi suficientment els danys i perjudicis que puguin ocasionar-se a l'arrendatari i a tercers.

6è. Mantenir a l'arrendatari en el pacífic ús i gaudiment de la cosa arrendada, durant tot el temps del contracte. L'arrendador no està obligat a respondre de la simple pertorbació de fet que un tercer pugui ocasionar en l'ús de la finca arrendada, però l'arrendatari té acció directa contra el pertorbador.

7è. Consentir la instal.lació d'antenes de ràdio i de televisió, en la forma prevista per l'òrgan administratiu competent i d'acord amb la normativa vigent, i sempre en la forma que menys perjudiqui l'estètica de l'edifici.

8è. Pagar les despeses de redacció del contracte d'arrendament.

Article 27

L'arrendatari està obligat a:

1r. Pagar la renda o el preu de l'arrendament i, quan escaigui, les quantitats complementàries, en els termes pactats i, en defecte de pacte, en la forma prevista en els articles 21, 22 i 23 d'aquesta Llei.

2n. Usar la finca arrendada i les instal.lacions i serveis amb la diligència pròpia d'un bon pare de família, destinant-la a l'ús pactat i, en tot cas, a aquell que resulti de la seva naturalesa i de la finalitat per la qual fou bastida.

3r. Efectuar en la finca arrendada aquelles reparacions que siguin conseqüència del desgast per l'ús normal o anormal de la finca, o de les seves instal.lacions i serveis.

4rt. En el cas d'arrendament de vivendes, donar-se d'alta en el comú de la parròquia en què estigui situada la finca dins dels 15 dies següents a la firma del contracte.

5è. Consentir l'entrada de l'arrendador a la finca arrendada, per tal d'inspeccionar-la.

6è. Tolerar les reparacions necessàries en la finca arrendada, i en els elements i serveis comuns. Si la reparació dura més de 40 dies, l'arrendatari té dret que se li disminueixi la renda, durant el temps de la reparació, en proporció a la part de la finca de què s'hagi vist privat.

7è. Posar en coneixement de l'arrendador qualsevol usurpació o novetat danyosa que es produeixi a la finca arrendada.

8è. Concertar una pòlissa d'assegurances que cobreixi, almenys, els riscos d'incendi, explosió, filtracions o escapaments d'aigua i responsabilitat civil per danys.

9è. Retornar la finca a la fi de l'arrendament tal com l'ha rebut, salvat el deteriorament causat pel pas del temps o per causa inevitable. Si en el contracte no s'expressa quin era l'estat de la finca al temps de l'arrendament, s'entén que estava en bon estat, salvada prova en contrari.

Mentre la devolució no es dugui a terme, i sempre que no s'hagi pactat expressament un règim diferent, l'arrendatari està obligat a continuar pagant les rendes, actualitzades quan escaigui, a títol d'indemnització per l'ocupació indeguda.

10è. Respondre dels danys ocasionats a la finca arrendada, llevat que provi que s'ha ocasionat sense culpa seva ni de les persones que amb ell conviuen.

11è. En els arrendaments de vivenda, comunicar a l'arrendatari i a les autoritats comunals qualsevol canvi que es produeixi en els familiars o altres persones que conviuen en la finca arrendada de forma habitual i permanent.

Article 28

1. Si l'arrendador o l'arrendatari incompleixen les obligacions que els imposen els articles anteriors, la part afectada per l'incompliment pot demanar la resolució del contracte i la indemnització dels danys i perjudicis que li hagi ocasionat l'incompliment, o únicament aquesta segona, deixant el contracte subsistent. Perquè es produeixi la rescissió, cal que l'incompliment afecti una condició essencial.

2. L'arrendatari pot, en tot cas, rescindir el contracte, si l'obra que hagi d'efectuar-se a la finca arrendada la fa inhabitable o inhàbil per a l'activitat que s'hi duu a terme.

Article 29

Quan en l'arrendament s'hi incloguin mobles o instal.lacions, s'entén que la durada de l'arrendament d'aquests és la mateixa que la de la finca.

Capítol setè. De la suspensió de l'arrendament

Article 30

Quan per ordre de l'autoritat hagin d'executar-se obres que impedeixin que la finca continuï ocupada, el contracte d'arrendament queda en suspens pel termini que durin aquelles, i queda igualment suspesa l'obligació del pagament de les rendes. Això no obstant, en aquest supòsit l'arrendatari pot optar per la rescissió del contracte, si ho prefereix, però ha de comunicar-ho a l'arrendador, com a més tard, dins dels 30 dies següents a l'inici de la suspensió.

Capítol novè. De l'extinció i la resolució de l'arrendament

Article 31

1. L'arrendament s'extingeix per les causes següents:

a) Expiració del termini pactat.

b) Pèrdua o destrucció de la finca arrendada. S'entén que es produeix pèrdua quan la finca deixa de servir per a la destinació per a la qual fou construïda, o quan el valor de la reconstrucció és superior al 50% del seu valor venal, sense comptar-hi el valor del solar.

c) Alienació de la finca arrendada, sempre que hagi vençut el termini de duració mínim previst per aquesta Llei, quan sigui el cas, i sense perjudici de la indemnització a què pugui donar lloc.

d) Execució d'hipoteca, en el cas que el contracte d'arrendament s'hagi celebrat amb posterioritat a la constitució de la hipoteca sobre la finca i sense coneixement de l'hipotecant.

e) Extinció de l'usdefruit, si l'usufructuari havia atorgat el contracte d'arrendament i l'arrendatari coneixia aquesta circumstància.

f) Declaració de ruïna de la finca arrendada.

g) Expropiació forçosa de la finca.

2. La mort de l'arrendatari no és causa d'extinció del contracte fins que s'arriba al termini pactat, si el cònjuge, els ascendents o els descendents que hagin conviscut amb l'arrendatari en la vivenda, prefereixen continuar l'arrendament durant el termini esmentat.

3. El comprador amb pacte de retro no pot usar de la facultat de desnonar l'arrendatari fins que hagi transcorregut el termini per exercir el retracte.

Article 32

Ultra les previstes a l'article anterior, l'arrendador pot donar per resolt l'arrendament i demanar el desnonament de l'arrendatari, per les causes següents:

1a. La manca de pagament de la renda, dels seus increments, i de les quantitats complementàries assimilades a ella per serveis o subministraments. Aquesta causa no opera quan allò que ha existit no és manca de pagament, sinó manca de cobrament per l'arrendador.

2a. El sots-arrendament, o la cessió total o parcial de la finca arrendada, sense autorització de l'arrendador.

3a. El canvi de destinació pactada.

4a. L'incompliment per l'arrendatari de les condicions essencials del contracte o de les que s'hagin pactat amb caràcter d'essencials.

5a. Que l'arrendatari, o les persones que introdueixi a la finca, hi ocasionin danys per dol o per imprudència temerària, o bé que hi duguin a terme, sense consentiment de l'arrendador, obres que modifiquin la configuració de la finca arrendada, o els elements comuns de l'immoble, o que debilitin la natura o resistència dels materials emprats en la construcció.

6a. Que l'arrendatari, o les persones que hi convisquin, duguin a terme activitats que resultin notòriament immorals, perilloses, incòmodes o insalubres a l'interior de la finca arrendada o en els elements comuns.

S'entén que es produeix incomoditat notòria quan l'arrendatari, amb l'activitat que duu a terme en la finca arrendada o amb la seva forma de comportar-se públicament o privada, pertorba la pacífica convivència dels altres estadants de l'immoble.

7a. L'autorització de demolició de la finca concedida per l'autoritat competent.

8a. El no ús de la finca d'acord amb la destinació pactada durant més de sis mesos en el curs d'un any.

Article 33

En les finques que es trobin en règim de parcel.lació cúbica o propietat horitzontal és causa de resolució, a més a més de les previstes per l'article anterior, la infracció per l'arrendatari o per les persones que hi conviuen de les prohibicions que consten en el reglament o els estatuts de la copropietat.

Article 34

L'arrendatari pot resoldre el contracte abans del transcurs del termini pactat, sense haver de satisfer cap indemnització, per qualsevol de les causes següents:

1a. L'incompliment per l'arrendador de les condicions que s'hagin pactat en el contracte d'arrendament amb caràcter d'essencials.

2a. Les pertorbacions de fet o de dret que l'arrendador realitzi en la finca arrendada.

3a. La manca d'execució per l'arrendador de les reparacions necessàries que siguin al seu càrrec.

4a. La manca de prestació per l'arrendador dels serveis que resulten especificats en el contracte.

5a. Si l'ocupant d'altre pis o local de l'immoble duu a terme activitats immorals, incòmodes, perilloses o insalubres que l'afectin de qualsevol forma.

Capítol desè. Del sots-arrendament

Article 35

1. Existeix sots-arrendament quan l'arrendatari cedeix a un tercer l'ús de la finca arrendada per temps determinat i un preu cert.

2. El sots-arrendament exigeix necessàriament l'autorització escrita de l'arrendador.

Article 36

Entre sots-arrendador i sots-arrendatari regeix el principi de llibertat de pactes.

Article 37

El sots-arrendador no pot, al seu torn, sots-arrendar tota o una part de la finca. El contracte de sots-arrendament que celebri el sots-arrendatari amb un tercer és nul.

Article 38

Es aplicable al contracte de sots-arrendament la normativa referida al contracte d'arrendament, substituint els termes "arrendador" i "arrendatari" per "sots-arrendador" i "sots-arrendatari".

Títol III. De l'arrendament de vivendes

Capítol primer. De l'arrendament de vivenda per a residència habitual i permanent

Article 39

Es comprenen en aquest capítol els arrendaments de les vivendes a què es refereix l'article 5 d'aquesta Llei.

Article 40

El fet que l'arrendatari o el seu cònjuge exerceixin dins de la vivenda, amb autorització de l'arrendador, una professió o funció pública, no fa perdre la condició d'arrendament de vivenda per a residència habitual i permanent, sempre que ho sigui efectivament.

Article 41

Les normes d'aquest capítol únicament són aplicables als arrendataris de nacionalitat andorrana i als estrangers legalment residents a Andorra.

Article 42

Les normes del present capítol no s'apliquen als arrendaments regulats en els capítols segon i tercer d'aquest títol.

Article 43

1. El termini de durada de l'arrendament de vivendes per a residència habitual i permanent no pot ésser inferior a tres anys, llevat que l'arrendatari sigui un estranger amb permís de residència temporal inferior a aquest termini, cas en el qual el termini màxim és el de durada del permís de residència. El termini es compta des de la data de celebració del contracte, o des de la posada a disposició de la vivenda, si és posterior.

2. Els arrendaments per als quals s'hagi convingut una durada inferior a tres anys, o aquells per als quals no s'hagi fixat cap termini es consideren fets per un termini de tres anys.

3. Acabat el termini mínim de vigència, el contracte es prorroga tàcitament per períodes d'un any, salvat que una part no avisi l'altra de la seva voluntat de donar-lo per resolt amb una antelació mínima de tres mesos a la fi del termini principal o de qualsevol de les pròrrogues.

Article 44

En els supòsits de nul.litat del matrimoni, separació o divorci de l'arrendatari, el cònjuge adquireix per ministeri de la llei l'ús de la vivenda, o se subroga en l'arrendament, si així ho decideix l'òrgan judicial competent.

Article 45

1. En cas de defunció de l'arrendatari, pot subrogar-se en el contracte, per la part que falti del termini pactat, el cònjuge de l'arrendatari que hi convisqui en el moment de la defunció; els descendents i els ascendents que hi convisquessin, essent necessari, en aquest darrer supòsit, que la convivència s'hagi produït amb una antelació mínima d'un any a la data de la defunció.

2. Quan són diversos els beneficiaris del dret de subrogació, únicament pot exercir-lo un d'entre ells. A manca d'acord entre els interessats, se segueix l'ordre indicat al paràgraf precedent, amb preferència, dins de cada grup, a la proximitat de grau. Els casos d'igualtat es resolen a favor del que tingui majors càrregues familiars.

3. La subrogació, per ser vàlida, ha de notificar-se a l'arrendador dins dels 60 dies següents a la data de defunció de l'arrendatari. En la notificació s'hi han de fer constar les circumstàncies personals del subrogat.

Article 46

1. La renda es pacta lliurement entre l'arrendador i l'arrendatari.

2. L'actualització de la renda, si es pacta, no pot practicar-se més d'una vegada cada any contractual, i es fa atenent a la variació que hagi experimentat l'índex general de preus al consum durant l'any natural anterior i prenent com a base la renda que es paga en el moment que neix el dret a la revisió. Qualsevol altre sistema de revisió de rendes que pactin les parts és nul.

3. El dret de revisió de la renda en cas de realització d'obres de millora a què es refereix l'article 25, únicament és exercitable quan hagi transcorregut el termini mínim legal de durada de l'arrendament.

Article 47

1. Si l'arrendatari, el seu cònjuge o un dels familiars que hi conviuen pateix d'una minusvàlua, està autoritzat, per ministeri de la llei, a realitzar les obres que siguin indispensables per adequar la vivenda a aquella condició.

2. A la fi de l'arrendament, i respecte d'aquelles obres que no constitueixin millores de l'immoble, l'arrendatari està obligat a reposar la vivenda al seu estat anterior, si així li ho demana l'arrendador.

Article 48

Els pactes que modifiquen en perjudici de l'arrendatari les normes del present capítol són nuls i es tenen per no fets.

Article 49

Les normes que recull el títol II d'aquesta Llei per al contracte d'arrendament en general són aplicables als arrendaments a què es refereix el present capítol en tot allò que no el contradiguin.

Capítol segon. De l'arrendament de vivendes que no serveixin de residència habitual i permanent

Article 50

Els arrendaments de vivendes que no serveixin de residència habitual i permanent es regeixen per les normes previstes al títol II d'aquesta Llei per als contractes d'arrendament de finques urbanes en general.

Capítol tercer. De l'arrendament de vivendes per a vacances i turístiques

Article 51

Es consideren arrendaments de vivendes per a vacances o turístiques els contractes en què es cedeix l'ús d'una vivenda amb mobiliari per temps no su-

perior a un mes. Si, com a conseqüència de pròrrogues o renovacions l'arrendament es perllonga per termini superior a un mes, l'arrendament perdrà la seva consideració de vacacional o turístic.

Article 52

Els arrendaments de vivendes per a vacances i turístiques es regeixen per les mateixes normes aplicables als hotels, aparthotels i pensions. L'arrendador pot desallotjar l'arrendatari usant els mateixos sistemes que s'empren per a aquells.

Títol IV. De l'arrendament de locals per a negoci

Article 53

Es comprenen en aquest títol els arrendaments a què es refereix l'article 6 d'aquesta Llei.

Article 54

En l'arrendament de locals per a negoci regeix el principi de llibertat de pactes, llevat quan aquesta Llei disposa el contrari.

Article 55

1. El termini de durada del contracte d'arrendament de local per a negoci és aquell que convinguin les parts, però no poden convenir-se terminis inferiors a cinc anys.

2. S'entenen fets per un període de cinc anys els arrendaments per als quals s'hagi convingut una durada inferior, o aquells per als quals no s'hagi fixat cap termini.

3. Acabat el termini mínim de vigència, el contracte es prorroga tàcitament per períodes d'un any, salvat que una part no avisi l'altra de la seva voluntat de donar-lo per resolt amb una antelació mínima de sis mesos a la fi del termini principal o de qualsevol de les pròrrogues.

Article 56

La renda es pacta lliurement entre l'arrendador i l'arrendatari. L'actualització de la renda està subjecta a les mateixes limitacions que estableix, per a l'arrendament de vivendes, l'apartat 2 de l'article 46.

Article 57

L'arrendatari pot renunciar unilateralment al contracte d'arrendament, mitjançant un pre-avís de dos mesos per cada any o fracció que falti per a la fi del contracte, amb un mínim de sis mesos. A més a més, haurà d'indemnitzar l'arrendador amb una quantitat equivalent a dues mensualitats de la renda per cada any que quedés per complir.

Article 58

La normativa prevista en aquest títol no s'aplica en els supòsits següents:

1r. Si l'objecte del contracte no és només el local, sinó també la indústria o el negoci que hi són establerts, quan es doni una unitat patrimonial amb vida pròpia i susceptible d'ésser explotada immediatament, únicament pendent de formalitats administratives.

2n. Si l'objecte del contracte és l'explotació del negoci durant una o diverses temporades.

Article 59

El traspàs del local de negoci exigeix sempre el consentiment de l'arrendador, i es regeix pel que estipulen les parts.

Article 60

1. Durant el termini pactat de durada de l'arrendament d'un local per a negoci pot subrogar-s'hi l'hereu o hereus del negoci, sempre que l'esmentat negoci estigui en activitat a la mort del titular. Però aquesta subrogació acaba en extingir-se l'arrendament pel transcurs del termini.

2. En cas que els hereus siguin més d'un, poden posar-se d'acord perquè la subrogació es produeixi únicament a favor d'un d'ells, sempre que ho notifiquin per escrit a l'arrendador dins dels 60 dies següents a la data de la defunció. Si no ho fan així, tots els hereus se subroguen en l'arrendament i, en cas que mori un d'ells, segueixen en l'arrendament com a subrogats els altres. Tots estan obligats solidàriament al compliment de les obligacions de l'arrendatari i al pagament de la renda.

Article 61

Les normes que recull el títol II d'aquesta Llei per al contracte d'arrendament en general són aplicables als arrendaments a què es refereix el present títol en tot allò que no el contradiguin.

Títol V. Arrendaments mixtos de vivenda i local per a negoci

Article 62

Els contractes d'arrendament de finques urbanes amb la finalitat d'ésser destinades alhora a vivenda i local de negocis es regeixen per les normes aplicables a allò que en constitueixi l'objecte essencial.

Disposició addicional

Als efectes derivats d'aquesta Llei, la persona unida extramatrimonialment amb l'arrendatari, que hi convisqui maritalment de forma estable, s'equipararà al cònjuge.

Disposicions transitòries

Primera

El que estableix la present Llei és d'aplicació als contractes que se celebrin a partir de la seva entrada en vigor. Això no obstant, les disposicions dels articles 46.2 i 56 relatives a l'actualització de la renda, són aplicables immediatament.

Segona

La llei establirà un procediment abreujat i urgent per resoldre sense dilacions les accions que s'exercitin amb l'objecte de resoldre les relacions arrendatícies en vivendes o locals de negoci.

Provisionalment, mentre que no s'hagi promulgat la llei a què es refereix l'apartat anterior, i a partir del moment en què entri en funcionament la nova organització de l'Administració de Justícia prevista per la Llei Qualificada de la Justícia, totes les reclamacions que tinguin per objecte la resolució de contractes d'arrendament de vivenda o de locals per a negoci se substanciaran pel procediment sumari següent:

1. Són part legítima per exercitar l'acció els que tinguin la possessió real a títol de propietaris, usufructuaris o per qualsevol altre concepte que els doni dret a gaudir-ne, i llurs causa-havents.

2. La demanda pot adreçar-se:

a) Contra els arrendataris

b) Contra els administradors, encarregats, porters, guardes o altres persones que l'arrendador hagi posat dins de les seves finques.

3. En la demanda l'actor hi ha de fer constar el seu nom i domicili, el nom i domicili del demandat, els fets i els fonaments de dret en què basa la seva pretensió i la concreta petició que adreça a l'òrgan jurisdiccional.

4. Presentada la demanda, amb tantes còpies com demandats, el Batlle manarà citar les parts a judici verbal, assenyalant a l'efecte dia i hora, que no podrà alterarse si no és per causes excepcionals. En la citació s'hi farà constar que, en l'acte del judici, el demandat ha de contestar la demanda.

La data del judici s'assenyalarà dins els 13 dies següents al de la presentació de la demanda, i hauran de mitjar sempre 5 dies, com a mínim, entre la citació del demandat i el judici.

5. Si el dia assenyalat per al judici no comparegués l'actor, se'l tindrà per desistit de la demanda, condemnant-lo en totes les costes del judici, i a que indemnitzi al demandat que hagués comparegut els perjudicis que li hagués ocasionat. Si no comparegués el demandat, es continuarà el judici en rebel.lia, sense tornar-lo a citar.

6. En l'acte del judici, les parts exposaran per torn les seves pretensions, després el jutge decidirà sobre l'admissió de les proves que es proposin, i s'uniran als autes els documents que s'acompanyin en aquell moment.

7. Si s'admetien proves que no eren practicables en el mateix acte, el termini per a practicar-les no pot excedir en cap cas el de catorze dies comptats des de la data de celebració del judici. El Batlle pot també acordar d'ofici la pràctica de les proves que consideri oportunes.

8. Practicades les proves o esgotat el termini per a fer-ho, el Batlle dóna a les parts un termini de 7 dies, perquè presentin conclusions.

9. Presentades les conclusions, el Batlle dicta Sentència en el termini improrrogable de deu dies. En l'acte de la notificació s'adverteix les parts del dret a recórrer en apel.lació i del termini per a fer-ho.

10. La Sentència imposarà les costes al demandat, si s'ha donat lloc a la demanda, o a l'actor en cas contrari.

11. Contra la Sentència de primera instància es pot interposar recurs d'apel.lació, que es presenta directament davant del Batlle, en el termini de vuit dies des de la notificació de la Sentència. En l'escrit d'apel.lació, l'apel.lant ha de fonamentar motivadament la seva pretensió de revocació.

12. El mateix Batlle dóna trasllat de l'escrit a la part apel.lada perquè al.legui allò que estimi procedent en el termini improrrogable de set dies.

13. Practicades les actuacions a què es refereix l'apartat anterior, el Batlle eleva els autes a l'òrgan competent per a entendre de l'apel.lació, d'acord amb les normes generals, i aquest, sense més tràmits, dictarà Sentència dins dels quinze dies a comptar de la recepció. Contra aquesta sentència no s'hi pot interposar cap altre recurs.

14. Totes les excepcions i incidents que se suscitin durant la tramitació en primera o segona instància han de ser resoltes en la sentència.

15. No es pot admetre el recurs que interposi l'arrendatari, si no acredita estar al corrent de pagament de la renda o haver consignat judicialment el seu import. L'arrendatari està obligat al pagament o consignació de les rendes que vagin vencent durant la substanciació del recurs. L'incompliment d'aquesta obligació dóna lloc a la caducitat del que hagués interposat sempre que, requerit pel jutge o tribunal que el conegui, no compleixi aquesta obligació en el termini improrrogable de cinc dies.

16. Quan la resolució de l'arrendament fos per manca de pagament de la renda o quantitats assimilades, es tenen en compte, a més a més, les normes següents:

a) El desnonament pot ésser enervat per l'arrendatari mitjançant la consignació de les rendes adeutades durant el període comprès entre la citació i la data assenyalada per a la celebració del judici verbal.

b) No es produeix aquesta enervació quan se'n hagués produït una altra en els dotze mesos immediatament anteriors.

c) Si el demandat es troba en rebel.lia, serà suficient que la sentència es notifiqui mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

17. La Sentència que es dicti, en els supòsits en què disposi la resolució del contracte d'arrendament, serà executada pel Batlle que hagi conegut del litigi en primera instància, i en la forma següent:

a) Quan sigui ferma la sentència que condemni al desnonament, i rebuts els autes a la Batllia en cas d'apel.lació, es procedirà a l'execució a instància de l'actor, ordenant el Batlle que s'apercebeixi el demandat de desnonament per al cas que no desallotgi la finca en el termini de 15 dies.

b) La providència ordenant l'execució de la sentència i el llançament, quan escaigui, es notifica al demandat en els mateixos termes en què se li hagués fet la citació, si es trobava dins del Principat. En cas contrari es notifica per mitjà de la publicació en el Butlletí Oficial, amb els mateixos efectes que si s'hagués notificat personalment.

c) Transcorregut el termini assenyalat sense que l'inquilí hagi desallotjat la finca, es procedeix al llançament, sense pròrroga de cap classe, i a despeses d'aquest.

d) Les apel.lacions que poguessin interposar-se en període d'execució no impediran que aquesta es dugui a terme.

e) En executar el llançament, es retindran i constituiran en dipòsit els béns més fàcilment realitzables que es trobin, en quantitat suficient per cobrir les costes del judici i de les diligències posteriors que siguin de càrrec del demandat.

f) També es retindran i embargaran en el moment del llançament, si ho demana l'actor, els béns necessaris per cobrir l'import de les rendes o lloguers que estigui adeutant el demandat i els desperfectes que hagués ocasionat a la finca. Aquest embargament quedarà nul de ple dret si dins del termini que

s'assenyali en el mateix acte no presenta l'actor la corresponent demanda i sol.licita la ratificació de l'embargament.

Tercera

Les especialitats processals establertes per aquesta Llei s'aplicaran als litigis que s'inicïin a partir del moment que entri en funcionament la nova organització de l'Administració de Justícia prevista per la Llei qualificada de la Justícia.

Quarta

1. El Govern ha de determinar reglamentàriament les normes substantives i procedimentals que regeixen per a l'obtenció del certificat d'habitabilitat a què es refereix aquesta Llei. Aquesta reglamentació discrimina les finques en funció de la data de construcció, i estableix els terminis de què disposen els propietaris per obtenir el certificat d'habitabilitat, podent establir també uns terminis discriminats en funció de la data de construcció. En tot cas, el certificat d'habitabilitat té una vigència de cinc anys.

2. Mentre no s'hagi promulgat aquesta normativa, queden en suspens les obligacions referides a l'obtenció i el lliurament del certificat d'habitabilitat.

Cinquena

El Govern ha de prendre les disposicions necessàries per tal que un institut o entitat pública o parapública determini i publiqui periòdicament un índex general de preus al consum del Principat d'Andorra.

Mentre no es publiqui aquell índex, el Govern, atenent als índex dels països veïns i als altres paràmetres econòmics que consideri significatius, ha de determinar periòdicament, per decret, un indicador que compleixi les funcions d'aquell, als efectes previstos per la present Llei.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions anteriors que s'oposin al que estableix la present Llei.

Disposició final

Aquesta Llei entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Copríncep la sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Copríncep d'Andorra

Reglament del Consell General

Atès que el Consell General en la seva sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 ha aprovat el següent:

Reglament del Consell General

Títol I
De l'organització del Consell General
Capítol I
De la sessió constitutiva del Consell General
Capítol II
Dels Consellers Generals
Capítol III
Del Síndic General i de la Sindicatura
Secció 1ª
De les funcions del Síndic General i de la Sindicatura
Secció 2ª
De l'elecció del Síndic General i de la Sindicatura
Capítol IV
Dels Grups Parlamentaris i de la Junta de Presidents
Secció 1ª
Dels Grups Parlamentaris
Secció 2ª
De la Junta de Presidents
Capítol V
Del Ple
Capítol VI
De la Comissió Permanent
Capítol VII
De les Comissions

Títol II
Del funcionament del Consell General
Capítol I
De les sessions
Capítol II
De l'ordre del dia
Capítol III
Dels debats
Capítol IV
De les votacions
Capítol V
Dels terminis
Capítol VI
De la declaració d'urgència
Capítol VII
De la caducitat de les iniciatives i tràmits parlamentaris
Capítol VIII
De l'elecció de persones

Capítol IX
De l'acord del Consell General per a la convocatòria de referèndum
Capítol X
De l'ordre parlamentari
Capítol XI
De les publicacions

Títol III
Del procediment legislatiu
Capítol I
Del procediment legislatiu comú
Secció 1ª
Dels projectes de llei
Secció 2ª
De les proposicions de llei
Secció 3ª
De la sol.licitud del Govern prevista a l'art. 62.2 de la Constitució
Secció 4ª
De la retirada dels projectes i de les proposicions de llei
Capítol II
Dels procediments especials
Secció 1ª
De la Llei del Pressupost General
Secció 2ª
De les lleis qualificades
Secció 3ª
De la legislació d'extrema urgència i necessitat
Secció 4ª
De les lleis de lectura única
Secció 5ª
De la reforma constitucional
Capítol III
Dels Tractats internacionals

Títol IV
De l'impuls i control de l'acció política de Govern.
Capítol I
De l'elecció de Cap de Govern
Capítol II
De la moció de censura
Capítol III
De la qüestió de confiança
Capítol IV
De les preguntes
Capítol V
Dels debats sobre l'orientació política del Govern
Capítol VI
Dels programes, plans i comunicats del Govern
Capítol VII
De les sessions informatives
Capítol VIII
Del control de la legislació delegada
Capítol IX
De les propostes d'acord

Disposicions finals

Títol I. De l'organització del Consell General

Capítol primer. De la sessió constitutiva del Consell General

Article 1

El Consell General es constituirà el quinzè dia posterior a la proclamació dels resultats electorals a les dotze hores del migdia.

Article 2

1. La sessió constitutiva del Consell General serà presidida pel Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo, que serà assistit pel Secretari General del Consell General. Actuarà com a Secretari el Conseller General de menys edat.

2. El Conseller General de més edat de la Parròquia de Canillo, en qualitat de President provisional, declararà oberta la sessió i tot seguit es procedirà a l'elecció de la Sindicatura, d'acord amb l'establert en aquest Reglament.

Capítol segon. Dels Consellers Generals

Article 3

La condició de Conseller General s'adquireix per elecció popular. La plenitud dels drets i deures de Conseller General s'adquireix després d'haver presentat la credencial corresponent a la Secretaria del Consell General i d'haver prestat jurament o promesa d'acatament a la Constitució en la primera sessió a què assisteixi.

Article 4

1. Els Consellers Generals tenen el dret d'assistir a totes les sessions del Consell General i el dret d'emetre el vot en el Ple i en les Comissions de què formin part. Poden fer ús de la paraula, segons les disposicions d'aquest Reglament, després d'haver-la demanat al Síndic General i d'haver-los estat concedida.

2. Els Consellers Generals tenen el dret i el deure de pertànyer a una Comissió.

Poden assistir, sense veu ni vot, a les sessions d'aquelles Comissions de les quals no formen part.

Article 5

Per al compliment de l'activitat parlamentària, els Consellers Generals tenen el dret a que l'Administració Pública els faciliti les dades, informes o documents que obren en el seu poder. La sol.licitud es realitzarà a través del Síndic General.

Article 6

Els Consellers Generals tenen el deure d'assistir a totes les sessions del Ple i de les Comissions en què estiguin integrats, i de complir les funcions i obligacions que els imposa aquest Reglament.

Article 7

Els Consellers Generals tenen l'obligació d'observar la cortesia deguda i de respectar les normes d'ordre i de disciplina establertes en aquest Reglament. El seu acompliment és garantit pel Síndic General, que cridarà a l'ordre al Conseller General que no s'hi atengués. Tenen també l'obligació de guardar secret sobre les actuacions o resolucions que tinguin aquest caràcter, d'acord amb la Constitució i aquest Reglament.

Article 8

Els Consellers Generals no poden invocar o utilitzar la seva condició per a l'exercici d'activitats comercials, industrials o professionals.

Article 9

1. Els Consellers Generals rebran una remuneració que determinarà el Consell General a càrrec del Pressupost d'aquest.

2. El Conseller General que, sense justificació suficient o sense autorització de la Sindicatura, deixi d'assistir a tres sessions consecutives del Consell General o a cinc d'alternes durant un any natural podrà ésser privat del dret a percebre l'assignació econòmica corresponent a dos trimestres.

Article 10

1. Els Consellers Generals no poden ésser sotmesos a cap procediment judicial o disciplinari, ni se'ls pot exigir cap tipus de responsabilitat fora del Consell

General pels vots i opinions emesos en l'exercici del càrrec.

2. En el cas de detenció o retenció, inculpació o processament d'un Conseller General, el Síndic General n'informarà immediatament al Consell General.

Article 11

Els Consellers Generals perdran la seva condició per les causes següents:

a) per extinció del mandat, en expirar el del Consell General, excepte els membres de la Comissió Permanent, que la mantindran fins que estigui constituït el nou Consell General.

b) per decisió ferma que anul.li la seva elecció o proclamació.

c) per defunció.

d) per incapacitat judicialment declarada.

e) per l'exercici d'un càrrec públic incompatible amb el de Conseller General.

f) per sentència ferma que l'inhabiliti per a l'exercici de càrrecs públics per un temps superior al del període de mandat que li resta.

g) per renúncia, expressada per escrit al Síndic General i ratificada personalment davant la Sindicatura.

Article 12

La condició de Conseller General queda suspesa:

a) per sentència ferma que l'inhabiliti per a l'exercici de càrrecs públics per un temps inferior al que li resta de mandat.

b) per haver estat processat o haver estat condemnat per sentència ferma a penes distintes a la d'inhabilitació per a l'exercici de càrrecs públics, quan el Consell General ho acordi per majoria de tres cinquenes parts, atesa la naturalesa de la pena o la gravetat dels fets.

c) quan el Ple del Consell General, així ho decideixi, d'acord amb les previsions del Capítol desè del present Reglament.

Article 13

En el cas que un Conseller General deixi vacant el seu escó per qualsevol de les causes de l'art. 11, aquesta vacant serà coberta d'acord amb la llei.

Capítol tercer. Del Síndic General i de la Sindicatura

Secció primera. De les funcions del Síndic General i de la Sindicatura

Article 14

1. La Sindicatura, com a òrgan rector del Consell General, està integrada pel Síndic General, el Subsíndic General i dos Secretaris.

2. La Sindicatura és presidida, dirigida i coordinada pel Síndic General.

3. La Sindicatura pren els seus acords per majoria. En cas d'empat, el Síndic General té vot de qualitat.

4. Els càrrecs de Síndic General i de Subsíndic General són incompatibles amb qualsevol altre càrrec o funció pública.

Article 15

1. El Síndic General representa el Consell General, assegura els seus treballs, ordena i dirigeix amb imparcialitat els debats de la Cambra, i compleix i fa complir el Reglament, que en cas de dubte interpreta.

2. El Síndic General vetlla pel manteniment de l'ordre dins de totes les dependències del Consell General. A aquests efectes, en el seu interior n'és l'autoritat màxima i pot prendre totes les mesures que consideri pertinents.

3. Exerceix també totes les altres funcions que la Constitució, aquest Reglament o les lleis li atribueixen.

Article 16

1. El Subsíndic General substitueix el Síndic General per vacança, absència o impediment. En aquest cas té la plenitud de drets, deures i atribucions que corresponen al Síndic General.

2. Pot ostentar, per delegació del Síndic General, la representació del Consell General.

Article 17

Els Secretaris:

a) autoritzen, per torn, amb el vist-i-plau del Síndic General, les actes del Ple, de la Sindicatura i de la Junta de Presidents, i n'expedeixen les certificacions;

b) donen lectura als documents que hagin d'ésser comunicats al Consell General;

c) col.laboren, sota la direcció del Síndic General, en la realització dels treballs del Consell General;

d) asseguren la correcció de la crida i recompte en les votacions.

Article 18

1. Es competència de la Sindicatura:

a) aplicar el Reglament; i suplir-lo en cas d'omissió, escoltada la Junta de Presidents;

b) adoptar les decisions necessàries per a la realització dels treballs parlamentaris;

c) executar el pressupost del Consell General;

d) d'acord amb el Reglament, qualificar els escrits i documents de caràcter parlamentari, declarar-ne l'admissibilitat i decidir-ne la tramitació;

e) totes les altres que li siguin encomanades per aquest Reglament.

2. Si un Conseller General discrepés d'una decisió de la Sindicatura corresponent a l'apartat d) pot sol.licitar per escrit la seva revisió davant la mateixa Sindicatura. La resolució aleshores, haurà d'ésser motivada i tindrà caràcter definitiu.

Article 19

La Sindicatura es reuneix a convocatòria del Síndic General. És assessorada pel Secretari General qui en redacta les actes i atén a l'execució dels seus acords, sota la direcció del Síndic General. El Secretari General és nomenat pel Síndic General, escoltada la Sindicatura, entre persones titulades en Dret.

Secció segona. De l'elecció del Síndic General i de la Sindicatura

Article 20

1. El Ple elegeix, entre els seus membres, el Síndic General i els altres membres de la Sindicatura en la sessió constitutiva. El seu mandat comprendrà tota la legislatura.

Article 21

1. Es procedirà en primer lloc a l'elecció conjunta del Síndic General i del Subsíndic General. Una cinquena part dels Consellers Generals podran presentar, fins a vint-i-quatre hores abans de l'inici de la sessió, les candidatures. Cada candidatura contindrà el nom i l'acceptació de les dues persones que la formen. Cada Conseller General només podrà signar una sola candidatura.

2. Després de donar lectura dels noms que composen cadascuna de les candidatures presentades, es procedirà tot seguit a la votació, que serà secreta per papereta. Cada Conseller General votarà una sola candidatura i resultarà elegida aquella que obtingui la majoria absoluta del Consell General. Si cap candidatura l'assolís, es procedirà a una segona votació entre les dues candidatures que hagin estat més votades i serà elegida aquella que obtingui més vots. Si es produís un empat, es procedirà a una nova votació i, si en aquesta encara es mantingués, resultarà elegida aquella en què el candidat a Síndic General sigui de major edat.

3. Anunciat el resultat de la votació conjunta de Síndic General i Subsíndic General, el Consell General procedirà tot seguit a l'elecció dels Secretaris de la Sindicatura. Cada Conseller General votarà un sol nom i resultaran elegits els dos que obtinguin més vots. Si es produís un empat, es procedirà com en el cas anterior, però arribat el cas, resultarà elegit Secretari el de menor edat.

Article 22

Realitzades de manera ininterrompuda totes les votacions i escrutinis per cobrir els càrrecs de la Sindicatura, el Síndic General electe prestarà jurament o promesa d'acatament a la Constitució i a continuació ocuparà el seu lloc. Després prestaran jurament o promesa el Subsíndic General i els dos Secretaris, que ocuparan tot seguit el seu lloc. Finalment, després de prestar el jurament o promesa la resta de Consellers Generals presents, el Síndic General aixecarà la sessió constitutiva.

Article 23

Si durant la legislatura es produís la vacant del càrrec de Síndic General o de Secretari, es procedirà a una nova elecció d'acord amb el procediment de l'article 21. Si la vacant es produís en el càrrec de Subsíndic General, el Síndic General proposarà un candidat que haurà d'ésser elegit pel Ple.

Capítol quart. Dels Grups Parlamentaris i de la Junta de Presidents

Secció primera. Dels Grups Parlamentaris

Article 24

1. Durant els primers cinc dies hàbils després de la constitució del Consell General, un mínim de quatre Consellers Generals poden constituir un Grup Parlamentari, mitjançant una declaració signada pels seus membres amb indicació del nom del Grup Parlamentari, que serà traslladada al Síndic General.

2. El Consell General posarà a disposició dels Grups Parlamentaris els mitjans i recursos econòmics necessaris per a la realització de les seves funcions, en proporció al nombre de membres de cadascun d'ells.

3. Cada Conseller General només pot formar part d'un Grup Parlamentari.

Article 25

1. Els Consellers Generals que en el termini establert no hagin quedat integrats en cap Grup Parlamentari poden incorporar-se a un d'ells, prèvia acceptació del seu President, durant els sis primers dies de cada període de sessions, amb igualtat de drets i deures que els Consellers Generals que l'haguessin constituït.

2. Els Consellers Generals que no es trobin incorporats a cap Grup Parlamentari són Consellers Generals no adscrits. Quan hi hagi més de dos Consellers Generals que no estiguessin incorporats a un Grup Parlamentari, tots els qui es trobin en la mateixa situació quedaran incorporats a un Grup Mixt. La participació del Grup Mixt en les activitats del Consell General és anàloga a la dels altres Grups Parlamentaris.

Article 26

Cada Grup Parlamentari remetrà a la Sindicatura la llista dels Consellers Generals que l'integren i indicarà el nom del President i del President suplent, així com el seu reglament intern. El seu President comunicarà a la Sindicatura les altes i baixes que puguin produir-se en el Grup Parlamentari.

Article 27

Els Consellers Generals que accedeixin al seu càrrec després de la sessió constitutiva hauran d'incorporar-se a un Grup Parlamentari en els cinc dies posteriors al seu jurament o promesa, amb l'acceptació del seu President. En el cas que no es realitzi la incorporació, esdevindrà Conseller General no adscrit o, en el seu cas, quedarà incorporat al Grup Mixt.

Article 28

La separació d'un Conseller General d'un Grup Parlamentari comporta la pèrdua de la presència en les Comissions de què formava part.

Article 29

Si, com a conseqüència de les baixes produïdes, un Grup Parlamentari arriba a tenir dos o menys de dos Consellers Generals, el Grup Parlamentari quedarà automàticament dissolt i els seus integrants esdevindran Consellers Generals no adscrits o, en el seu cas, quedaran incorporats al Grup Mixt.

Secció segona. De la Junta de Presidents

Article 30

Els Presidents dels Grups Parlamentaris formen la Junta de Presidents, que és presidida pel Síndic General, assistit per un Secretari de la Sindicatura. El Secretari General aixeca acta de les sessions. Els Presidents dels Grups Parlamentaris poden ésser substituïts pel President suplent. Poden assistir-hi els altres

membres de la Sindicatura i un representant del Govern, i a aquest efecte seran informats de les seves reunions. El Síndic General pot convocar-hi, si s'escau, els Presidents de les Comissions.

Article 31

La Junta de Presidents és convocada pel Síndic General a petició de dos Grups Parlamentaris o a iniciativa pròpia. La Junta de Presidents es reunirà, com a mínim, una vegada al mes durant els períodes de sessions.

Article 32

En cas de votació els vots es computaran pel sistema ponderat i, per tant, cada President de Grup Parlamentari tindrà tants vots com Consellers Generals integren el seu Grup Parlamentari.

Article 33

Sens perjudici de les altres atribucions que li atorga aquest Reglament, les funcions de la Junta de Presidents són:

a) establir els criteris per ordenar i facilitar els debats i les tasques del Consell General;

b) determinar la Comissió competent per a conèixer les iniciatives parlamentàries;

c) fixar el nombre de membres de cada Grup Parlamentari en les Comissions;

d) assignar els escons que corresponen a cada Grup Parlamentari en la Sala de Sessions.

Capítol cinquè. Del Ple

Article 34

El Ple és l'òrgan suprem del Consell General. És convocat pel Síndic General per iniciativa pròpia o a sol.licitud del Cap de Govern, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals.

Article 35

1. Els Consellers Generals seuen sempre al mateix lloc en la Sala de Sessions. Els membres del Govern hi disposaran d'un lloc especialment destinat i podran intervenir d'acord amb el present Reglament.

2. Només tenen accés a la Sala de Sessions els Consellers Generals, els membres del Govern, els funcionaris del Consell General en l'exercici de la seva funció i les persones autoritzades de manera expressa pel Síndic General.

Article 36

El Consell General queda constituït quan els Consellers Generals es reuneixen a convocatòria del Síndic General per tractar d'un ordre del dia d'acord amb la Constitució i el present Reglament. La llista dels Consellers Generals presents quedarà incorporada a l'acta de la sessió.

Capítol sisè. De la Comissió Permanent

Article 37

1. El Consell General nomenarà una Comissió Permanent encarregada de vetllar pels poders de la Cambra quan aquesta estigui dissolta o en el període entre sessions. La Comissió Permanent està integrada pel Síndic General, tres Consellers Generals elegits pels Consellers Generals electes en col.legi nacional i tres elegits pels Consellers Generals electes en col.legis parroquials.

2. La Comissió Permanent vetlla pel compliment de les normes sobre incompatibilitats dels Consellers Generals. Demanaran als Consellers Generals que declarin els càrrecs que ocupen i, si fos el cas, a quin dels càrrecs incompatibles renuncien, i a aquest efecte podran reclamar la documentació que sigui necessària.

3. La Comissió Permanent exercirà aquelles competències que li siguin atribuïdes per llei.

4. La Comissió Permanent acompanyarà el Síndic General en la recepció dels juraments i en les preses de possessió que hagin de realitzar-se davant d'ell.

5. La Comissió Permanent és convocada pel Síndic General a iniciativa pròpia o a sol.licitud de tres Consellers Generals o del Cap de Govern.

6. La Comissió Permanent donarà compte al Consell General dels afers tractats i de les decisions adoptades en la primera sessió en què aquest es reuneixi.

Capítol setè. De les Comissions

Article 38

Les Comissions del Consell General estaran formades pel nombre de Consellers Generals establert per la Sindicatura, d'acord amb la Junta de Presidents, proporcional al nombre de Consellers Generals de cada Grup Parlamentari. Els Consellers Generals seran designats pels Grups Parlamentaris.

Article 39

Els membres de les Comissions poden ésser substituïts per Consellers Generals del mateix Grup Parlamentari, prèvia comunicació pel seu President al Síndic General. Quan la substitució serà per una sola vegada és suficient la comunicació al President de la Comissió a l'inici de la reunió, i els substituts seran admesos com a membres de la Comissió.

Article 40

Les Comissions podran convocar els membres del Govern a les seves reunions. Els membres del Govern podran demanar l'assistència a les mateixes. En ambdós casos hi tindran veu, així com dret a obtenir una còpia de l'acta que reculli la seva compareixença.

Article 41

Les Comissions han d'elegir un President i un Vice-president. El Vice-president substituirà el President en cas d'absència. Tots dos hauran d'ésser elegits en la primera reunió ordinària que celebri la Comissió, després d'haver-se produït la vacant.

Article 42

Les presidències de les Comissions seran distribuïdes per la Sindicatura d'acord amb la Junta de Presidents entre els Grups Parlamentaris de manera proporcional en funció del nombre de Consellers Generals de cadascun.

Article 43

Els membres de la Sindicatura no poden presidir cap Comissió, a excepció del Síndic General que és President de dret de totes elles.

Article 44

El President convoca les reunions de la Comissió a iniciativa pròpia, a petició de dos Grups Parlamentaris o de dues cinquenes parts dels seus membres, amb un

ordre del dia. Les Comissions no poden reunir-se al mateix temps que el Ple. Per tractar temes relatius al procediment legislatiu sotmès al tràmit d'urgència les Comissions poden ésser convocades en els períodes entre sessions.

Article 45

Les Comissions intervenen en tots aquells temes, projectes o propostes que, segons el Reglament, els encarregui la Sindicatura, d'acord amb la Junta de Presidents. Han de realitzar el seu treball en el període màxim de tres mesos, excepte quan la Sindicatura els autoritzi a allargar aquest termini, atesa la singularitat de la tasca o el volum de l'activitat.

Article 46

Hi hauran vuit Comissions Legislatives permanents: 1) Interior, 2) Política Exterior, 3) Economia (Agricultura, Indústria, Comerç i Turisme), 4) Finances i Pressupost, 5) Política Territorial i Urbanisme, 6) Sanitat i Medi Ambient, 7) Afers Socials, 8) Educació, Recerca, Cultura i Esports.

Cada Comissió Legislativa permanent comptarà amb un mínim de cinc Consellers Generals. Cada Conseller General pot ésser membre de tres Comissions Legislatives permanents com a màxim.

Article 47

Les Comissions Legislatives permanents examinaran totes les propostes legislatives que els corresponguin per raó de la matèria i que els trameti la Sindicatura d'acord amb la Junta de Presidents. També examinaran totes aquelles propostes no legislatives, informacions o temes que per raó de la matèria els trameti el Síndic General.

Article 48

1. El Consell General podrà crear en cada legislatura Comissions d'estudi o d'enquesta sobre qualsevol qüestió d'interès públic, a proposta del Síndic General, de dos Grups Parlamentaris o d'una tercera part dels consellers.

2. Pel mateix procediment podran crear-se Comissions de Legislatura de caràcter legislatiu o de tipus especial.

3. Les conclusions de les Comissions d'estudi o d'enquesta quedaran reflectides en un dictamen que ha de ser debatut pel Consell General. El Síndic General té la facultat d'ordenar el debat, de concedir les paraules i de fixar el temps de les intervencions.

4. Les conclusions aprovades pel Consell General han d'ésser comunicades al Govern, sens perjudici que el Síndic General les pugui posar en coneixement del Ministeri Fiscal.

Article 49

Les Comissions, a través del Síndic General poden:

a) demanar al Govern i a qualsevol altra autoritat o funcionari públic la informació i documentació que considerin necessària per a la realització de llur tasca, que els haurà d'ésser facilitada.

b) requerir la presència davant seu dels membres del Govern, de les autoritats electes, dels funcionaris públics que en depenguin perquè informin d'aquelles qüestions que corresponen als temes que tracten. Se n'exceptuen els membres del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional. D'acord amb la llei, podran reclamar també la presència de qualsevol ciutadà.

Títol II. Del funcionament del Consell General

Capítol primer. De les sessions

Article 50

El Consell General es reuneix anualment durant dos períodes ordinaris de sessions compresos entre el primer de març i el 30 de juny, i entre el primer de setembre i el 31 de desembre.

Article 51

1. El Síndic General convoca totes les sessions del Ple del Consell General, siguin tradicionals, ordinàries o extraordinàries. Les sessions de les Comissions són convocades pel seu President.

2. Les sessions extraordinàries només poden ésser convocades: a) per acord de la Comissió Permanent; b) a petició del Cap de Govern, de dos Grups Parlamentaris o d'una quarta part de Consellers Generals. En l'acord o petició ha de constar l'ordre del dia, que no pot ésser ni reduït ni ampliat.

Article 52

Una sessió comprèn totes les reunions necessàries per a tractar un ordre del dia. El Síndic General obre i tanca les sessions i determina el contingut de les reunions.

Article 53

1. Les sessions del Consell General són públiques. Les sessions de les Comissions no són públiques quan preparen informes per elevar al Ple.

2. A iniciativa de la Sindicatura, de dos Grups Parlamentaris o d'una quarta part de Consellers Generals, el Consell General pot acordar per majoria absoluta dels seus membres celebrar una sessió secreta del Ple del Consell General.

Article 54

1. De totes les sessions del Ple i de les Comissions del Consell General se n'aixecarà una acta que contindrà una relació succinta de les matèries debatudes, de les persones que hi han intervingut, de les incidències esdevingudes i dels acords adoptats.

2. Les actes seran signades pel Síndic General i un dels Secretaris de la Sindicatura o, en el seu cas, pel President i el Vice-president corresponent, per ésser dipositades en el Consell General i trameses als Consellers Generals. Si en els vuit dies posteriors al dipòsit no existís cap reclamació escrita, l'acta es donarà per aprovada. En cas de reclamació escrita, decidirà la Sindicatura que podrà sotmetre la decisió final a la primera sessió ordinària del Ple o de la Comissió.

3. Quan una sessió hagi estat secreta, es realitzarà una única acta que serà custodiada pel Síndic General. Per a la seva aprovació se seguirà el mateix procediment de l'apartat anterior.

Article 55

El públic assistent a les sessions del Consell General és obligat a mantenir silenci i ordre, i no li són permeses cap mena de manifestacions d'aprovació o de desaprovació.

Capítol segon. De l'ordre del dia

Article 56

1. L'ordre del dia del Consell General és fixat pel Síndic General, d'acord amb la Junta de Presidents. L'ordre del dia pot ser modificat o alterat per acord del Ple

del Consell General a proposta del Síndic General, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals.

2. L'ordre del dia de les Comissions és fixat pel seu President, el qual el comunicarà al Síndic General. L'ordre del dia de les Comissions pot ésser alterat o modificat per acord de la Comissió a proposta del President o d'una cinquena part dels Consellers Generals.

3. Si hom vol introduir en l'ordre del dia del Ple o d'una Comissió un nou tema, aquest haurà d'haver complert els tràmits reglamentaris.

Article 57

El Govern pot demanar que en una sessió s'inclogui un assumpte amb caràcter prioritari, sempre que aquest hagi complert els tràmits reglamentaris. En aquest sentit haurà de comunicar-ho al Síndic General.

Capítol tercer. Dels debats

Article 58

Llevat d'un acord en sentit contrari de la Sindicatura, no podrà començar cap deliberació o debat sobre una determinada qüestió si amb una antelació mínima de cinc dies no ha estat distribuïda a cada Conseller General la documentació relativa a la qüestió objecte de la deliberació o debat.

El mateix procediment regirà per a les deliberacions de les Comissions.

Article 59

1. D'acord amb l'establert en el present Reglament, els Consellers Generals han de sol.licitar del Síndic General l'ús de la paraula. Si un Conseller General cridat pel Síndic General a intervenir no hi fos present, s'entendrà que renuncia a fer-ne ús. Els Consellers Generals parlaran des del seu escó.

2. Igualment, el Cap de Govern i els Ministres han de sol.licitar del Síndic General l'ús de la paraula.

Article 60

Els Consellers Generals, el Cap de Govern i els Ministres no poden ésser interromputs mentre realitzin les intervencions orals. Només el Síndic General té la facultat de fer-ho per avisar l'intervinent que ha consumit el temps, per retirar la paraula o per cridar a l'ordre. Els Consellers Generals seran cridats a atenir-se a la qüestió, sempre que se n'apartin.

Article 61

Si en una sessió del Consell General es fan al.lusions a la persona o a la conducta d'un Conseller General o al Cap de Govern o a un Ministre, el Síndic General podrà concedir la paraula a l'al.ludit per tal que, sense entrar en el fons de la qüestió i durant un breu espai de temps, pugui contestar les al.lusions. Només poden ser contestades les al.lusions dins la mateixa sessió.

Article 62

El Consell General, a iniciativa del Síndic General i sense debat, pot posar fi a una deliberació o debat, quan entengui que la qüestió ja ha estat degudament tractada. Si un Grup Parlamentari ho sol.licités, el Síndic General pot concedir un torn a favor i un en contra de cinc minuts cadascun i ho sotmetrà tot seguit a votació.

Article 63

Si el present Reglament no disposa altrament, en cada debat hi haurà un torn a favor i un torn en contra. La durada de les intervencions no pot sobrepassar els deu minuts. El dret a consumir un torn en contra es manté si s'ha realitzat el torn a favor, encara que la proposta hagi estat retirada.

Article 64

En els debats de totalitat les intervencions seran de quinze minuts per Grup Parlamentari. Els Consellers Generals no adscrits poden intervenir per cinc minuts.

Article 65

En cada debat, tot Conseller General o membre del Govern que sigui contradit per un o més oradors tindrà dret de rectificar una sola vegada per un temps no superior a cinc minuts.

Article 66

En qualsevol moment del debat, un Conseller General pot demanar al Síndic General l'observança del Reglament i haurà d'invocar amb precisió l'article que reclama que s'apliqui. El Síndic General resoldrà i la seva decisió haurà d'ésser acatada.

Article 67

En qualsevol cas, el Síndic General té plenes facultats per a l'ordenació del debat.

Article 68

El President de les Comissions, en les sessions d'aquestes, té les mateixes facultats d'ordenació del debat que el Síndic General.

Capítol quart. De les votacions

Article 69

Si arribat el moment d'una votació o realitzada aquesta no hi fos present la meitat dels membres del Consell General, el Síndic General posposarà la votació i anunciarà una hora dins la mateixa sessió per realitzar-la. Si arribats a aquesta hora, tampoc no hi hagués quòrum suficient per procedir a la votació, aquesta quedarà ajornada per a un proper Ple, però el debat no es reiterarà.

Article 70

1. Els acords seran vàlids quan hagin estat aprovats per la majoria simple dels Consellers Generals presents, sens perjudici de les majories especials determinades per la Constitució, les lleis o el present Reglament.

2. Hi ha majoria simple quan els vots positius superen els negatius. Hi ha majoria absoluta quan el nombre de vots a favor supera la meitat del total de membres efectius del Consell General.

Article 71

El vot és personal i indelegable. Cada Conseller General té un sol vot. Ningú no pot prendre part en les votacions que afectin al seu estatut personal com a Conseller General.

Article 72

Les votacions públiques poden ésser: ordinària i oral per crida. D'acord amb el Reglament i a proposta del Síndic General, es pot votar per assentiment. Les votacions secretes seran amb papereta.

Article 73

En la votació pública oral per crida, la Sindicatura cridarà els Consellers Generals que respondran sí, no o declararan que s'abstenen. L'elecció de Cap de Go-

vern, la moció de censura i la qüestió de confiança són sempre votacions orals per crida.

Article 74

En la votació pública ordinària el Síndic General demanarà els vots a favor dels Consellers Generals presents, els vots en contra i les abstencions.

Article 75

Es consideraran aprovades per assentiment les propostes del Síndic General quan, després d'haver estat anunciades, no susciten cap objecció o oposició.

Article 76

La votació secreta es farà sempre per crida nominal als Consellers Generals i mitjançant paperetes introduïdes dins d'una urna. La votació serà secreta quan ho exigeixi aquest Reglament o quan ho acordi el Consell General, a proposta de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals.

Article 77

Si en una votació es produís un empat, aquella es repetirà i si encara persistís es considerarà desestimada la proposta.

Article 78

En el cas de les votacions públiques ordinària, per crida o per assentiment, una vegada realitzada la votació, anunciat el resultat i finalitzat el punt corresponent de l'ordre del dia, els Grups Parlamentaris podran explicar breument el seu vot. També podrà fer-ho el Conseller General que ha votat de manera diferent al seu Grup Parlamentari i, en el cas que no hagin intervingut en el debat, els Consellers Generals no adscrits. El Síndic General pot atorgar també aquesta possibilitat quan en un debat, subdividit en diverses parts diferenciades, s'hagi acabat una d'elles.

Capítol cinquè. Dels terminis

Article 79

El còmput dels terminis no establerts en la Constitució i regulats per aquest Reglament es computaran amb els dies hàbils compresos en els períodes ordinaris de sessions. De manera excepcional, la Sindicatura podrà habilitar com a hàbils a efectes determinats els dies dels períodes entre sessions, per raons d'urgència.

Article 80

La Sindicatura a iniciativa pròpia, d'un Grup Parlamentari o d'una cinquena part de Consellers Generals pot acordar la pròrroga dels terminis establerts per aquest Reglament.

Article 81

Els documents parlamentaris dirigits al Consell General o a qualsevol òrgan de la Cambra hauran de lliurar-se al Registre de la Secretaria General en els dies i hores que disposi el Síndic General, però en tot cas caldrà que en quedi garantit el registre de tal manera que puguin exhaurir-se els terminis dels dies i hores establerts.

Capítol sisè. De la declaració d'urgència

Article 82

1. A petició del Govern, de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals, la Sindicatura pot acordar que una qüestió tingui el procediment d'urgència a partir del tràmit següent a aquell en curs.

2. La declaració d'urgència implica la reducció de tots els terminis i la prioritat en la tramitació. Si la Sindicatura no indica altrament, els terminis quedaran reduïts a la meitat.

Capítol setè. De la caducitat de les iniciatives i tràmits parlamentaris

Article 83

Totes les iniciatives i tràmits parlamentaris realitzats en les qüestions no concloses caduquen en finalitzar la legislatura.

Capítol vuitè. De l'elecció de persones

Article 84

Per a les eleccions de persones que la Constitució o les lleis encomanin al Consell General i que no estiguin previstes de manera expressa en aquest Reglament, els Grups Parlamentaris podran presentar en el Registre de la Secretaria General, fins quatre dies abans del Ple en què s'hagi de procedir a la votació, les candidatures que reuneixin els requisits establerts en cada cas, juntament amb un currículum de les persones proposades. El Síndic General n'informarà als Consellers Generals el dia següent, els quals podran formular-hi objeccions en les següents vint-i-quatre hores. El dia abans del Ple la Sindicatura proclamarà els candidats.

Capítol novè. De l'acord del Consell General per a la convocatòria de referèndum

Article 85

Quan el Cap de Govern, fent ús de la facultat que li concedeix l'art. 76 de la Constitució, pretengui convocar un referèndum sobre una qüestió d'ordre polític, sol.licitarà l'acord del Consell General. A aquest fi, s'adreçarà a la Sindicatura perquè convoqui el Ple per celebrar un debat, que serà de totalitat. Finit el debat, es procedirà a la votació de l'acord, que serà pública i oral per crida.

Capítol desè. De l'ordre parlamentari

Article 86

1. Dins totes les dependències del Consell General, els Consellers Generals, el Cap de Govern, els Ministres i el públic estan sotmesos als poders disciplinaris del Síndic General, que els exerceix d'acord amb el present Reglament.

2. Tothom qui en les dependències del Consell General promogui desordres greus en serà expulsat de manera immediata. Si es tracta d'un Conseller General, la Sindicatura el suspendrà temporalment com a tal fins a un termini màxim d'un mes, sens perjudici que el Consell General, a proposta de la Sindicatura, pugui ampliar la sanció.

3. A iniciativa de la Sindicatura, el Ple pot sancionar amb suspensió temporal del Conseller General que incorri en els supòsits del paràgraf anterior o que de manera continuada i greu es negui a acatar una decisió ferma del Síndic General o dels òrgans del Consell General.

Article 87

El Síndic General pot suspendre la sessió del Consell General en cas d'aldarull o desobediència obstinada d'algun Conseller General o membre del Govern, sens perjudici d'aplicar les sancions que en Dret hi hagi lloc, ja sigui en la mateixa sessió o en la subsegüent. Abans de la suspensió de la sessió, el Síndic General advertirà de la possibilitat d'adoptar aquestes mesures.

Article 88

El Síndic General pot ordenar l'expulsió immediata de les persones que, entre el públic, no s'atinguin a allò que disposa l'art. 55. Si una persona del públic comet una infracció greu serà conduïda davant l'Autoritat competent. En cas de desordre el Síndic General pot ordenar el desallotjament del públic present a la Sala del Consell General.

Capítol onzè. De les publicacions

Article 89

El "Diari Oficial del Consell General" reproduirà totes les intervencions, incidències i acords adoptats en les sessions públiques del Consell General.

Article 90

El "Butlletí del Consell General" publicarà tots els projectes i proposicions de llei, les esmenes ordenades pel Ponent i l'informe de les Comissions legislatives amb les esmenes i vots particulars que hagin de debatre's en el Ple, els acords de les Comissions i del Ple, les propostes de resolució, les preguntes i les respostes, les comunicacions i els acords que el Govern trameti al Consell General, i qualsevol altre text o document que exigeixi aquest Reglament o que ordeni el Síndic General, atès el seu interès en la tramitació parlamentària.

Article 91

Per raons d'urgència el Síndic General pot ordenar que, per tal que siguin debatuts i votats els documents a què es refereix el paràgraf anterior, aquests puguin ser reproduïts per un altre mitjà mecànic i repartits als membres de l'òrgan del Consell General que els hagi de conèixer. En tot cas hauran d'ésser publicats en el "Butlletí del Consell General".

Títol III. Del procediment legislatiu

Capítol primer. Del procediment legislatiu comú

Secció primera. Dels projectes de llei

Article 92

1. Els projectes de llei aprovats pel Govern seran tramesos pel Cap de Govern al Consell General acompanyats d'una exposició de motius, així com de la documentació i antecedents necessaris perquè el Consell General s'hi pugui pronunciar.

2. La Sindicatura ordenarà la seva publicació en el "Butlletí del Consell General" i obrirà un període de quinze dies per a la presentació d'esmenes. Aquestes poden ésser presentades pels Consellers Generals i pels Grups Parlamentaris mitjançant un escrit dirigit a la Sindicatura.

Article 93

1. Les esmenes poden ésser a la totalitat o a l'articulat. Són esmenes a la totalitat les que postulen el retorn del projecte de llei al Govern i aquelles en què es presenta un text articulat alternatiu. Només poden ésser presentades pels Grups Parlamentaris o per un Conseller General amb la signatura de dos més.

2. Les esmenes a l'articulat poden ésser de supressió, de modificació o d'addició. En els dos darrers casos, contindran el text que es proposa.

Article 94

En el cas que s'haguessin presentat esmenes a la totalitat, el Síndic General les inclourà en l'ordre del dia de la primera sessió plenària. El debat serà de totalitat i es desenvoluparà d'acord amb allò que estableix aquest Reglament. Un cop finalitzat, el Síndic General sotmetrà a votació les esmenes a la totalitat presentades, començant per aquelles que proposin la devolució al Govern.

Article 95

1. Si el Ple acordés la devolució del projecte, el Síndic General ho comunicarà al Govern. En cas contrari, escoltada la Junta de Presidents, el remetrà juntament amb les esmenes a l'articulat a la Comissió corresponent per a la seva tramitació.

2. Si el Ple aprovés una esmena a la totalitat amb text alternatiu, el procediment legislatiu seguirà i el Síndic General obrirà un període d'esmenes a aquest text, que només podran ésser a l'articulat.

Article 96

Si les esmenes presentades només fossin a l'articulat, el Síndic General les trametrà juntament amb el text del projecte, a la Comissió corresponent.

Article 97

La tramitació en Comissió s'iniciarà amb l'elecció d'un Ponent que ordenarà les esmenes per tal que, en un termini de quinze dies, siguin examinades per la Comissió.

Article 98

1. Realitzat l'examen de les esmenes i del text del projecte de llei, el President convocarà novament la Comissió i els esmenants per tal de debatre les esmenes presentades i votar aquestes i el text del projecte.

2. La votació es farà article per article. Les esmenes corresponents a un article seran debatudes i votades prèviament a la votació de l'article. Per a cada esmena hi haurà un torn a favor i un torn en contra.

Article 99

Durant el debat de la Comissió, el President podrà admetre a tràmit esmenes transaccionals que presentin els seus membres adreçades a assolir un acord entre les ja formulades i el text de l'article. La seva presentació haurà de comportar la retirada de les esmenes respecte a les quals es transigeix.

Article 100

1. Els acords de la Comissió constitueixen l'informe, que serà signat pel President de la Comissió i el Vice-president per ser presentat al Ple pel Ponent. Els Consellers Generals i els Grups Parlamentaris, dins de les quaranta-vuit hores següents a la finalització dels treballs de la Comissió, hi podran reservar les esmenes que hagin presentat i formular vots particulars per al Ple mitjançant un escrit adreçat al Síndic General.

2. El Síndic General ordenarà la publicació immediata en el "Butlletí del Consell General" de l'informe, els vots particulars, les esmenes i, en el seu cas, de la sol.licitud del Govern prevista a l'art. 62 de la Constitució.

Article 101

1. El debat del projecte de llei en el Ple s'iniciarà amb la presentació, per part del Ponent, de l'informe adoptat per la Comissió. Aquesta intervenció no podrà excedir de quinze minuts.

2. La votació es realitzarà article per article. Abans de procedir a la votació de l'article, es debatrà cadascuna de les esmenes i vots particulars que hagin estat mantinguts amb un torn a favor i un torn en contra, i després es votarà cadascuna d'elles pel mateix ordre. Finida la votació d'un article, es passarà al següent. Finida la votació de tots els articles, es votaran els Annexes, l'Exposició de Motius i el Títol de la llei.

3. Si les característiques del text ho permeten, el Síndic General pot proposar l'ordenació de les votacions per grups d'articles o paràgrafs.

Secció segona. De les proposicions de llei

Article 102

Les proposicions de llei poden ésser tramitades a iniciativa de:

a) un Grup Parlamentari.

b) tres Consellers Generals.

c) tres Comuns, de manera conjunta.

d) una desena part del cens electoral nacional, d'acord amb la llei.

Article 103

1. Les proposicions de llei es presentaran per mitjà d'un escrit dirigit a la Sindicatura, acompanyades d'una exposició de motius i dels antecedents necessaris per poder-s'hi pronunciar.

2. Exercida la iniciativa, la Sindicatura ordenarà la publicació de la proposició i la remetrà al Govern perquè, en el termini de quinze dies, manifesti el seu criteri.

Article 104

1. Transcorreguts quinze dies des de la seva publicació, la proposició podrà ésser inclosa en l'ordre del dia del Ple perquè sigui presa en consideració pel Consell General. El debat serà de totalitat i s'iniciarà amb la lectura del criteri del Govern, si n'hi hagués. Acabat el debat, el Síndic General preguntarà si el Consell General pren en consideració o no la proposició de llei.

2. En cas afirmatiu, el Síndic General la trametrà a la Comissió corresponent i s'obrirà un termini d'esmenes, que no podran ésser a la totalitat. La proposició seguirà el tràmit previst per als projectes de llei.

Secció tercera. De la sol.licitud del Govern prevista a l'art. 62.2 de la Constitució

Article 105

El President de la Comissió legislativa encarregada d'examinar un projecte de llei, a través del Síndic General, trametrà les esmenes presentades al Govern, el qual disposarà de deu dies per sol.licitar, mitjançant escrit adreçat a la Sindicatura, que no siguin debatudes aquelles que comportin un increment de despeses o disminució d'ingressos en relació amb els previstos en la Llei del Pressupost General. Si el Govern fes ús de la sol.licitud prevista en l'art. 62.2 de la Constitució, el Síndic General ho comunicarà al President de la Comissió i ordenarà la publicació de la sol.licitud al "Butlletí del Consell General". En aquest cas, la Comissió s'abstindrà de tractar les esmenes afectades.

Article 106

Si el Govern hagués plantejat la sol.licitud esmentada en l'article anterior, un Grup Parlamentari o un Conseller General amb la signatura de dos més podrà proposar, mitjançant escrit adreçat al Síndic General fins dos dies abans del Ple, que aquest s'oposi a la sol.licitud amb una moció motivada acordada per majoria absoluta. Si la moció prosperés, l'esmena afectada serà debatuda en el Ple.

Article 107

Dins del mateix termini previst a l'art. 103, el Govern podrà sol.licitar que no sigui discutida una proposició de llei en cas que comporti un increment de despeses o disminució d'ingressos en relació amb els previstos en la Llei del Pressupost General. Si el Govern hagués plantejat la sol.licitud, es podrà procedir igual que en l'art. 106.

Secció quarta. De la retirada dels projectes i de les proposicions de llei

Article 108

1. El Govern pot retirar qualsevol projecte de llei del Consell General sempre que la discussió de l'informe no hagi estat inclosa en l'ordre del dia del Ple.

2. Les proposicions de llei podran ésser retirades a iniciativa del proposant abans de l'acord de la presa en consideració. Un cop produïda aquesta, la retirada només pot ésser efectiva si és acceptada pel Ple.

Capítol segon. Dels procediments especials

Secció primera. De la Llei del Pressupost General

Article 109

1. En l'examen i aprovació del projecte de Llei de Pressupost General s'aplicarà el procediment legislatiu comú excepte en el que estableix aquesta secció.

2. El projecte de Llei de Pressupost General tindrà preferència en la tramitació respecte d'altres qüestions i treballs de la Cambra.

Article 110

Les esmenes al projecte de Llei del Pressupost General que proposin augment de crèdit en algun concepte només seran admeses a tràmit si alhora proposen una baixa d'igual o superior quantia en un altre concepte de la mateixa secció.

Article 111

1. El debat de totalitat del projecte de Llei del Pressupost General tindrà lloc en el Ple abans de la tramitació en Comissió. Els torns seran de trenta minuts.

2. Els torns de debat de les esmenes a l'articulat i a la totalitat de les seccions o serveis pressupostaris seran de vint minuts.

Secció segona. De les lleis qualificades

Article 112

1. Els projectes i proposicions de llei qualificades, un cop la Sindicatura els haurà atribuït aquest caràcter d'acord amb la Constitució, es tramitaran pel procediment legislatiu comú. Finalitzat aquest, es procedirà a una votació final en el Ple sobre el conjunt del text, que serà anunciada amb antelació pel Síndic General. La seva aprovació requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Consell General, feta excepció de les lleis que, segons l'art. 57.3 de la Constitució, requereixen la majoria absoluta dels Consellers Generals elegits en circumscripció parroquial i la majoria absoluta dels Consellers Generals elegits en circumscripció nacional. En aquesta cas, la votació serà pública i oral per crida.

2. Si a un projecte o proposició de llei ordinària li fossin presentades esmenes relatives a matèries reservades a llei qualificada, la Sindicatura no podrà admetreles a tràmit si prèviament no hagués estat atribuït aquest caràcter al projecte o proposició.

Secció tercera. De la legislació d'extrema urgència i necessitat

Article 113

1. Quan el Govern presenti al Consell General un text articulat per ésser aprovat com a llei d'acord amb l'article 60.1 de la Constitució, n'indicarà el seu caràcter d'extrema urgència i necessitat. Qualificat el document per la Sindicatura, el Síndic General convocarà directament el Ple en el termini de quaranta-vuit hores des de la seva recepció. Si la Sindicatura no li atorgués el caràcter d'extrema urgència i necessitat, una tercera part dels Consellers Generals pot demanar el debat incidental regulat en l'apartat 3 d'aquest article.

2. El debat s'iniciarà amb la presentació del text articulat per un membre del Govern i serà ordenat d'acord amb els debats de totalitat. El conjunt del text es sotmetrà a una única votació.

3. Si una cinquena part de Consellers Generals o un Grup Parlamentari discrepés del caràcter d'extrema urgència i necessitat del text proposat pel Govern, pot presentar una moció en aquest sentit abans de l'inici del Ple. En aquest cas, tindrà lloc un debat incidental amb torn a favor i torn en contra. Finit el debat, es votarà la moció presentada. Cas d'ésser aprovada, el text articulat serà tramitat pel procediment legislatiu comú, a menys que el Govern el retiri. Cas de no ésser aprovada, es procedirà al seu debat, d'acord amb el paràgraf segon.

Secció quarta. De les lleis de lectura única

Article 114

Quan la naturalesa d'un projecte o proposició de llei ho aconselli, la seva simplicitat de formulació ho permeti, i no hagin estat presentades esmenes al text, el Consell General, a proposta del Síndic General escoltada la Junta de Presidents, podrà acordar que la iniciativa es tramiti directament davant del Ple per a la seva deliberació i votació en lectura única. En aquest cas, es procedirà a un debat de totalitat i es sotmetrà el conjunt del text a una única votació.

Secció cinquena. De la reforma constitucional

Article 115

1. Els Coprínceps de forma conjunta, o una tercera part dels membres del Consell General podran presentar propostes de reforma constitucional. Aquestes s'adreçaran per escrit a la Sindicatura i, un cop admeses, es tramitaran com a proposicions de llei pel procediment comú.

2. Si el Consell General prengués en consideració la proposició, es constituirà una Comissió especial, de la qual en formaran part, en tot cas, els Presidents de Grup Parlamentari, per elaborar l'informe que es debatrà en el Ple. Finit el debat i la votació de les esmenes, dels vots particulars i del text de l'informe, el Síndic General anunciarà amb antelació la votació sobre el conjunt de la reforma que serà pública i oral per crida. Es considerarà aprovada la reforma pel Consell General si obté el vot favorable de les dues terceres parts dels membres de la Cambra.

Capítol tercer. Dels Tractats internacionals

Article 116

Els Tractats internacionals que hagin de ser aprovats pel Consell General es tramitaran com a projectes de llei, amb les peculiaritats d'aquest capítol, i es consideraran aprovats d'acord amb allò que estableix la Constitució.

Article 117

Les propostes presentades pels Consellers Generals i els Grups Parlamentaris tindran la consideració d'esmenes a la totalitat de devolució, quan refusin l'aprovació del Tractat o bé quan proposin reserves o declaracions no previstes en aquest.

Article 118

En els casos de denúncia previstos en l'art. 64.3 de la Constitució, s'utilitzarà el mateix procediment que en l'article 117.

Article 119

El Consell General suspendrà la discussió sobre l'aprovació d'un Tractat quan aquest hagi estat objecte del requeriment de dictamen previ d'inconstitucionalitat previst a l'art. 101 de la Constitució, i el Tribunal Constitucional l'hagi admès a tràmit. La resolució estimatòria d'inconstitucionalitat farà decaure la seva tramitació.

Títol IV. De l'impuls i control de l'acció política del Govern

Capítol primer. De l'elecció del Cap de Govern

Article 120

Després de cada renovació del Consell General o en els supòsits en què quedi vacant el càrrec de Cap de Govern, la seva elecció es realitzarà d'acord amb les previsions d'aquest Capítol.

Article 121

1. Les propostes de candidat a Cap de Govern han d'ésser presentades davant la Sindicatura dins dels cinc dies següents

a la sessió constitutiva. L'escrit de proposta ha de contenir el nom i l'acceptació del candidat, així com la signatura dels Consellers Generals que el presenten. Admeses a tràmit aquelles propostes que compleixen els requisits exigits, la Sindicatura proclamarà els candidats a Cap de Govern.

2. En el termini de vuit dies següents a la sessió constitutiva, es celebrarà la sessió plenària per a l'elecció del Cap de Govern, a la qual seran convocats els candidats que no tinguin la condició de Conseller General.

3. En el supòsit en què quedi vacant el càrrec de Cap de Govern, els terminis anteriors es comptaran des del dia en què s'ha produït la vacança.

Article 122

1. La sessió s'iniciarà amb la lectura per un Secretari dels candidats proclamats i dels Consellers Generals que els presenten.

2. A continuació, cada candidat presentarà, de manera successiva, el seu programa sense límit de temps. Les intervencions seran ordenades segons el nombre de Consellers Generals que el presentin, de major a menor. En cas d'igual nombre, s'ordenaran segons el moment de presentació de la candidatura. Un cop hauran finalitzat les presentacions dels candidats, els Grups Parlamentaris intervindran, per ordre de menor a major nombre de Consellers Generals, durant trenta minuts. A continuació, podran intervenir els Consellers Generals no adscrits per un temps màxim de cinc minuts cadascun.

3. Els candidats, si ho sol.liciten, podran intervenir novament durant quinze minuts i, en aquest cas, s'obrirà un nou torn de deu minuts per a cada Grup Parlamentari.

Article 123

1. La votació dels candidats a Cap de Govern tindrà lloc dins les vint-i-quatre hores següents a la finalització del debat. El Síndic General anunciarà en el Ple, després de la darrera intervenció, l'hora en què es realitzarà la votació.

2. La votació serà pública i oral per crida, i en ella cada Conseller General expressarà el nom del candidat a qui vota o l'abstenció. Un cop celebrat l'escrutini, el candidat que hagi obtingut la majoria absoluta del Consell General serà proclamat Cap de Govern pel Síndic General, qui comunicarà als Coprínceps el nom del candidat elegit.

Article 124

1. En cas que cap dels candidats hagués obtingut la majoria absoluta, el Síndic General fixarà la data per celebrar una segona votació, que haurà de tenir lloc dins dels set dies següents. A aquest efecte, proclamarà com a candidats els dos que hagin obtingut els millors resultats en la primera votació.

2. Els dos candidats proclamats presentaran el seu programa davant el Ple sense límit de temps. A continuació, els Grups Parlamentaris fixaran la seva posició durant quinze minuts. Finalitzat el debat, es procedirà a la votació, que serà pública i oral per crida. El candidat que obtingui més vots serà proclamat Cap de Govern. El Síndic General comunicarà als Coprínceps el nom del candidat elegit.

Capítol segon. De la moció de censura

Article 125

1. La moció de censura ha d'ésser presentada almenys per una cinquena part dels Consellers Generals en un escrit motivat dirigit a la Sindicatura en el qual es farà constar les causes de la moció.

2. La Sindicatura, un cop comprovat que la proposta reuneix els requisits exigits, l'admetrà a tràmit, ho comunicarà al Cap de Govern i als Grups Parlamentaris i als Consellers Generals en un termini no superior a les vint-i-quatre hores, i convocarà, entre el tercer i el cinquè dia posterior a la seva presentació, una sessió del Consell General que tindrà com a únic punt de l'ordre del dia la deliberació i votació de la moció de censura.

Article 126

1. El debat de la moció s'iniciarà amb la seva defensa per part d'un dels signataris en una exposició de trenta minuts, a la qual li seguirà una intervenció del Cap de Govern també de trenta minuts. El Síndic General podrà suspendre la sessió per un termini no superior a les vint-i-quatre hores abans de donar pas a les intervencions dels Grups Parlamentaris, que no podran excedir de quinze minuts. El Síndic General concedirà la paraula als Consellers Generals no adscrits que ho sol.licitin per un màxim de cinc minuts.

2. Finalitzat el debat, es procedirà a la votació, que serà pública i oral per crida. Per tal que la moció de censura prosperi cal el vot favorable de la majoria absoluta del Consell General.

Capítol tercer. De la qüestió de confiança

Article 127

La qüestió de confiança ha d'ésser presentada pel Cap de Govern mitjançant un escrit motivat adreçat a la Sindicatura acompanyat del programa, la declaració de política general o la decisió de transcendència especial que se sotmet al Consell General. Un cop admesa a tràmit, el Síndic General ho comunicarà als Grups Parlamentaris i als Consellers Generals. El Ple per a la seva deliberació i votació tindrà lloc entre el tercer i el cinquè dia a partir de la comunicació.

Article 128

1. El debat de la qüestió de confiança s'iniciarà amb una exposició del Cap de Govern sense límit de temps, acabada la qual el Síndic General podrà acordar la suspensió de la sessió per un termini no superior a les vint-i-quatre hores. El debat seguirà amb la intervenció dels Grups Parlamentaris, per un temps de quinze minuts. El Síndic General concedirà la paraula als Consellers Generals no adscrits que ho sol.licitin per un màxim de cinc minuts.

2. Un cop finalitzat el debat, se sotmetrà a votació la qüestió de confiança. La votació ha d'ésser pública i oral per crida. La confiança s'entendrà atorgada quan obtingui la majoria simple.

Capítol quart. De les preguntes

Article 129

1. Els Consellers Generals poden adreçar preguntes al Govern sobre temes de política general o bé relatives a un fet, situació o informació concreta, per tal de saber si aquell en té coneixement, i quina posició manté al respecte.

2. Les preguntes s'han de presentar mitjançant un escrit dirigit a la Sindicatu-

ra, tot indicant si se sol.licita una resposta oral o escrita. S'entén que la resposta ha d'ésser escrita llevat que es faci constar el contrari. El Govern ha de trametre la resposta escrita en el termini de trenta dies a partir de la seva publicació. Si se sol.licita resposta oral s'entendrà que aquesta ha de tenir lloc davant del Ple.

3. En cap cas s'admetran les preguntes en interès exclusivament privat del formulant o de qualsevol persona.

4. Les preguntes seran admeses a tràmit per la Sindicatura que en manarà la seva publicació immediata.

Article 130

1. Les preguntes que sol.licitin una resposta oral, podran ésser incloses en l'ordre del dia del Ple a partir del setè dia de la seva publicació.

2. A cada sessió ordinària, el Consell General reservarà una hora per a la substanciació de preguntes al Govern. El Síndic General podrà ampliar aquest temps quan ho estimi necessari. L'ordre de substanciació es farà d'acord amb l'ordre de prioritat en la presentació.

3. Per a la substanciació, el Conseller General formularà la pregunta que serà contestada per un membre del Govern. El Conseller General disposarà d'un torn de rèplica i en aquest cas el membre del Govern disposarà d'un torn de dúplica. En cap cas el temps total per substanciar una pregunta pot excedir de vuit minuts, dividits en parts iguals. Finida la resposta del membre del Govern, si un Conseller General ho sol.licita, el Síndic General li concedirà la paraula per un minut per tal que formuli una repregunta estrictament sobre la mateixa matèria. El membre del Govern disposarà per a la resposta del mateix temps.

4. Acabada una intervenció, el Síndic General donarà la paraula de manera immediata a qui haurà d'intervenir a continuació o bé passarà a la qüestió següent.

Article 131

En cada període de sessions cadascun dels Grups Parlamentaris té dret a obtenir la declaració d'urgència de tantes preguntes de resposta oral en el Ple com Consellers Generals tinguin adscrits. El mateix dret correspon al Conseller General no adscrit, si no existís Grup Mixt. Les preguntes de les quals se sol.licita declaració d'urgència poden ésser presentades fins a vint-i-quatre hores abans de l'inici del Ple. La publicitat quedarà assegurada per la seva distribució a l'inici de la sessió, sens perjudici de la posterior publicació en el "Butlletí del Consell General".

Article 132

1. Les preguntes amb resposta oral poden menar a una moció en què el Consell General manifesti la seva posició. Aquesta moció en cap cas serà de censura al Govern.

2. La moció serà presentada davant la Sindicatura pel Conseller General que ha formulat la pregunta i dos Consellers Generals més, o un Grup Parlamentari l'endemà de la substanciació de la pregunta, i s'inclourà en l'ordre del dia de la sessió següent. El debat i votació es faran d'acord amb allò establert per a les propostes d'acord.

Capítol cinquè. Dels debats sobre l'orientació política del Govern

Article 133

1. Anualment, el Consell General celebrarà un debat sobre l'orientació política global del Govern. El debat s'iniciarà amb la intervenció del Cap de Govern que presentarà l'informe pertinent davant el Ple.

2. Realitzada l'exposició del Cap de Govern, el Síndic General pot suspendre la sessió per un termini no superior a vint-i-quatre hores. Tot seguit, s'obrirà un torn d'intervencions dels Grups Parlamentaris per un temps de quinze minuts per a cadascun. El Cap de Govern i els Ministres podran fer ús de la paraula tantes vegades com ho sol.licitin. Cada intervenció comportarà l'obertura d'un torn de rèplica per un temps proporcional.

3. Finalitzat el debat, el Síndic General fixarà un termini no superior a vint-i-quatre hores per tal que els Grups Parlamentaris puguin presentar propostes de resolució que han d'ésser congruents amb la matèria objecte de debat i que no poden incloure una moció de censura.

4. Les propostes admeses es discutiran segons l'ordre de presentació. Podran ésser defensades per un temps no superior als deu minuts per Grup Parlamentari. Acabat el torn, cada Grup Parlamentari podrà indicar la seva posició sobre les altres propostes presentades i precisarà el text que sotmet a votació.

5. Un cop finalitzada la discussió, cada proposta se sotmetrà a votació en el mateix ordre en què han estat exposades. Aprovada una proposta, totes les altres es votaran només en allò que faci referència als punts que no siguin idèntics o que no siguin contradictoris amb aquella.

Article 134

1. Prèvia sol.licitud del Cap de Govern poden celebrar-se debats sobre l'acció política i de govern. També poden sol.licitar-los una quarta part dels Consellers Generals, cadascun dels quals només en podrà instar un en cada període de sessions. El Síndic General convocarà el Ple a aquests efectes en els quinze dies següents. Igualment podran tenir lloc aquests debats si així ho decideix la Sindicatura d'acord amb la Junta de Presidents, a iniciativa d'un Grup Parlamentari.

2. El debat s'iniciarà en tots els casos amb la intervenció d'un membre del Govern i es realitzarà d'acord amb allò que disposa l'article anterior.

Capítol sisè. Dels programes, plans i comunicats del Govern

Article 135

1. Si el Govern enviava al Consell General un programa, un pla o una comunicació en relació amb els quals desitgés que el Consell General es pronunciés, la Sindicatura n'ordenarà la publicació o la distribució entre els Consellers Generals i l'inclourà en l'odre del dia corresponent per ésser debatut en el Ple.

2. El debat s'iniciarà amb la intervenció d'un membre del Govern. Seguidament, podran fer ús de la paraula els Grups Parlamentaris per un temps de quinze minuts.

3. Finit el debat, els Grups Parlamentaris podran presentar propostes de resolució que seran tramitades d'acord amb les normes del Capítol IX d'aquest Títol.

Capítol setè. De les sessions informatives

Article 136

1. A petició del Consell General o d'una Comissió, o bé per iniciativa pròpia, el Cap de Govern o qualsevol dels Ministres compareixeran per tenir una sessió informativa davant del Consell General o d'una comissió, prèvia inclusió del tema en l'ordre del dia.

2. La sessió constarà d'una exposició oral del Cap de Govern o d'un dels Ministres. Represa la sessió, els Consellers Generals podran formular preguntes o fer observacions. La sessió es clourà amb la resposta del Cap de Govern o del Ministre.

Capítol vuitè. Del control de la legislació delegada

Article 137

1. Quan, d'acord amb allò establert a l'art. 59 de la Constitució, el Govern aprovi un decret legislatiu, aquest serà tramès a la Sindicatura que n'ordenarà la seva publicació al "Butlletí del Consell General".

2. Si durant el mes següent cap Conseller General ni cap Grup Parlamentari hi formulen objeccions, s'entendrà que el Govern ha exercit correctament la funció legislativa que li havia delegat el Consell General. Si, per contra, un Conseller General o un Grup Parlamentari formulés alguna objecció, s'adreçarà a la Sindicatura, que en donarà trasllat a la Comissió legislativa competent per tal que emeti un informe. Aquest serà debatut i votat en el Ple.

3. Aquest procediment de control no s'aplicarà quan la llei de delegació prevegi un procediment propi.

Capítol novè. De les propostes d'acord

Article 138

1. Un Grup Parlamentari o un Conseller General amb la signatura de dos membres de la Cambra, poden presentar al Ple propostes d'acord sobre matèries no legislatives.

Les propostes seran adreçades per escrit a la Sindicatura que, un cop admeses a tràmit, n'ordenarà la publicació i en trametrà còpia al Govern. Publicada la proposta, s'obrirà un període de quinze dies durant el qual els Grups Parlamentaris hi podran presentar esmenes. Exhaurit aquest període, s'inclourà en l'ordre del dia del Ple.

2. El debat de les propostes d'acord s'iniciarà amb una exposició d'un dels proposants per un màxim de deu minuts. A continuació s'obrirà un torn per als Grups Parlamentaris que han presentat esmenes i un altre per a aquells que no ho han fet. Un cop finalitzades aquestes intervencions, el Grup Parlamentari o els Consellers Generals proposants indicaran les esmenes que accepten i el text final que sotmeten a votació.

Disposició transitòria

Mentre que no es puguin efectuar les publicacions en el "Butlletí del Consell General" previstes en el present Reglament, tindrà els mateixos efectes la publicació realitzada pel procediment tradicional d'edictes, això per un termini màxim de sis mesos a comptar de la data d'entrada en vigor del present Reglament.

Disposicions finals

Primera

La reforma d'aquest Reglament es durà a terme exclusivament per iniciativa del Consell General, a proposta de dos Grups Parlamentaris o d'una cinquena part dels Consellers Generals que hauran de presentar a la Sindicatura un text articulat amb les modificacions que es pretenen.

La reforma del Reglament es tramitarà com a proposició de llei, sense possibilitat d'intervenció del Govern.

Si el Ple la prengués en consideració, es crearà una Comissió especial de la qual en formaran part, en tot cas, els Presidents dels Grups Parlamentaris.

L'aprovació de la reforma requerirà la majoria absoluta dels membres del Consell General en una votació de totalitat.

Segona

El Consell General es regirà exclusivament per les normes de la Constitució, les d'aquest Reglament i les contingudes en les lleis.

Tercera

Aquest Reglament serà publicat en el "Butlletí del Consell General" i en el "Butlletí Oficial del Principat d'Andorra". Entrarà en vigor el dia 1 de gener de 1994.

Casa de la Vall, 3 de setembre de 1993

Jordi Farràs Forné
Síndic General

Nosaltres els Coprínceps el sancionem i promulguem i n'ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

François Mitterrand
President de la República Francesa
Coprínce d'Andorra

Joan Martí Alanís
Bisbe d'Urgell
Coprínce d'Andorra

Actes dels Coprínceps i del Consell General

Coprínceps

Decret

El President de la República Francesa, Copríncep d'Andorra,

Vista la Constitució del Principat d'Andorra, especialment els seus articles 46 i 48,

Decreta

Article 1

Els poders conferits al Copríncep per la Constitució del Principat d'Andorra, que no estiguin estrictament reservats per aquesta al seu exercici personal, són delegats al Representant Personal del Copríncep a Andorra.

Article 2

El present Decret serà publicat en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

París, 22 de setembre de 1993

François Mitterrand
President de la República Francesa
Copríncep d'Andorra

Butlletí
Oficial del
**Principat
d'Andorra**

Preu de l'exemplar 65 PTA
Subscripció anual 2.900 PTA

Dipòsit legal
And-15-1989

ISSN 1013-7777
Any 5

PAPER 100% ECOLÒGIC Impressió Impremta Solber

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

Parliamentary Assembly
Assemblée parlementaire

15 septembre 1994
FDOC7152
14031309947F

Doc. 7152

RAPPORT

sur la demande d'adhésion de la principauté d'Andorre au Conseil de l'Europe

(Rapporteur: M. REDDEMANN, Allemagne, Groupe du parti populaire européen)[1]

Résumé

Le 4 mai 1993 est entrée en vigueur la Constitution de la principauté d'Andorre qui a doté ce pays pyrénéen des caractéristiques d'un Etat de droit et expressément reconnu le principe en vertu duquel toute personne placée sous la juridiction andorrane doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les élections législatives, au suffrage universel, libre et direct, du 12 décembre 1993 ont permis aux Andorrans d'élire démocratiquement leur parlement. Celui-ci, conformément à la Constitution, a élu le gouvernement de la principauté.

A l'heure actuelle, l'Andorre apparaît comme remplissant les conditions pour adhérer au Conseil de l'Europe. Dans son avis, l'Assemblée recommande donc au Comité des Ministres d'inviter la principauté d'Andorre à devenir membre de l'Organisation.

---

1. Ce projet de rapport a été établi en coopération avec M. Hagård (Suède, GDE), rapporteur pour avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, et M. Kovács (Hongrie, SOC), ancien membre de l'Assemblée et rapporteur pour avis de la commission des relations avec les pays européens non membres au moment de la visite en Andorre.

I. Projet d'avis

1. L'Assemblée a reçu du Comité des Ministres, conformément à la Résolution statutaire (51) 30 A adoptée par le Comité des Ministres le 3 mai 1951, une demande d'avis sur l'adhésion de la principauté d'Andorre au Conseil de l'Europe (Doc. 6988).

2. Elle se félicite de l'entrée en vigueur, le 4 mai 1993, de la Constitution andorrane qui fait de la principauté un Etat de droit et garantit les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Elle considère que les autorités andorranes ont ainsi donné suite à l'invitation que l'Assemblée leur avait adressée dans sa Résolution 946 (1990) relative à la situation en Andorre.

3. Elle note que des élections parlementaires au suffrage universel libre et direct ont eu lieu en Andorre, le 12 décembre 1993, et ont été observées par une commission *ad hoc* de l'Assemblée.

4. Elle attache une grande importance à l'engagement des autorités andorranes à signer au moment de l'adhésion et à ratifier, normalement dans un délai d'un an, la Convention européenne des Droits de l'Homme, ainsi que ses protocoles additionnels, et à reconnaître le droit de requête individuelle auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme (article 25 de la Convention) ainsi que la juridiction obligatoire de la Cour européenne des Droits de l'Homme (article 46). Elle attend en outre des autorités andorranes qu'elles signent et ratifient rapidement la Charte sociale.

5. Elle considère aussi comme très important que les autorités andorranes s'engagent à signer et à ratifier la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Convention européenne d'extradition et la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées. Elle attend des autorités andorranes qu'elles signent et ratifient l'Accord général sur les privilèges et immunités et son protocole additionnel.

6. Elle attache une grande importance aux obligations découlant de l'adhésion au Conseil de l'Europe qui implique aussi la disposition à régler les différends internationaux par des moyens pacifiques.

7. La situation andorrane, où la population autochtone est inférieure en nombre à la population immigrée, est unique en Europe. L'Assemblée s'attend à ce que les législateurs andorrans, tout en tenant compte du contexte particulièrement sensible où s'inscrit cette question, procèdent à une nouvelle rédaction des articles de la loi qualifiée de la nationalité, annulés par le Tribunal constitutionnel andorran, rendant plus facile l'accès à la nationalité andorrane, notamment aux personnes considérées comme intégrées par une longue période de résidence en Andorre.

8. L'Assemblée considère que la principauté d'Andorre a la capacité et la volonté:

i. d'observer les dispositions de l'article 3 du Statut, selon lequel «tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales»;

ii. de collaborer sincèrement et efficacement à la réalisation des objectifs du Conseil de l'Europe tels qu'ils sont précisés au chapitre 1er du Statut de celui-ci, et de remplir ainsi les conditions d'adhésion au Conseil de l'Europe telles que stipulées à l'article 4 du Statut;

iii. de s'acquitter de ses autres obligations découlant du Statut y compris les obligations financières.

9. En conséquence, gardant à l'esprit sa Résolution 1031 (1994) relative au respect des engagements pris par des Etats membres au moment de leur adhésion ainsi que la procédure prévue dans la Directive n° 488 (1993), l'Assemblée recommande au Comité des Ministres, lors de sa prochaine réunion:

i. d'inviter la principauté d'Andorre à devenir membre du Conseil de l'Europe;

ii. d'attribuer à la principauté d'Andorre deux sièges à l'Assemblée parlementaire.

II. Exposé des motifs par M. REDDEMANN

Table des matières

		Paragraphes
I.	Introduction	1-4
II.	Relations entre l'Assemblée et la principauté d'Andorre	5-9
III.	Bref rappel historique	10-18
IV.	La Constitution andorrane	19-29
V.	Questions relatives aux droits de l'homme	30-34
VI.	Autres questions	35-38
VII.	Conclusion	39-43

Annexe: Programme de la visite des rapporteurs

I. Introduction

1. Le 22 novembre 1993, le Gouvernement andorran a adressé au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une lettre dans laquelle il a exprimé le souhait de la principauté d'Andorre d'être invité à devenir membre de l'Organisation et s'est déclaré prêt à respecter les principes énoncés à l'article 3 du Statut.

2. Le 6 janvier 1994, les Délégués des Ministres ont adopté la Résolution (94) 1 sur la principauté d'Andorre, dans laquelle ils ont invité l'Assemblée parlementaire à exprimer son avis sur cette demande d'adhésion (voir Doc. 6988). L'Assemblée a renvoyé cette demande à la commission des questions politiques et, pour avis, à la commission des questions juridiques et des droits de l'homme et à la commission des relations avec les pays européens non membres.

3. Selon les instructions de ces commissions, les rapporteurs se sont rendus en Andorre les 30 et 31 mai 1994. Le programme de leur visite figure en annexe. Les rapporteurs expriment leur reconnaissance aux autorités, aux parlementaires et aux différentes personnalités qu'ils ont rencontrés en Andorre, pour leur accueil ainsi que pour leur coopération. Les informations recueillies au cours de cette visite ont été précieuses pour la rédaction de ce rapport.

4. Auparavant, conformément à la pratique introduite en 1991, le Bureau de l'Assemblée a demandé à M. Lopes Rocha, juge à la Cour européenne des Droits de l'Homme, et à M. Geus, membre de la Commission européenne des Droits de l'Homme,

d'établir un rapport sur la législation de la principauté d'Andorre. Ils se sont rendus en Andorre les 26 et 27 avril 1994. Leur rapport a été rendu public le 27 mai 1994 (voir Addendum III au Doc. 7080).

II. Relations entre l'Assemblée et la principauté d'Andorre

5. La Conférence des régions pyrénéennes, organisée par l'Assemblée parlementaire et la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, en juin 1982, à Jaca (Espagne) a permis à la principauté d'Andorre de s'associer, pour la première fois, à une activité de l'Assemblée. Non seulement des représentants andorrans ont participé à la conférence mais le groupe de travail chargé de sa préparation a tenu une réunion dans la principauté en avril 1982. Dans la Résolution 791 (1983) relative à la Conférence des régions pyrénéennes, adoptée à l'issue de la discussion du rapport de MM. Ahrens et Cuatrecasas (Doc. 4991), l'Assemblée a exprimé «le souhait que la coopération transfrontalière dans les Pyrénées puisse s'étendre aussi à la principauté d'Andorre». Ce vœu a été exaucé car, depuis l'adoption de ce texte, l'Andorre a participé activement aux travaux de la Communauté de travail des Pyrénées avec les sept régions pyrénéennes espagnoles et françaises.

6. En mai 1987, M. Elmquist et plusieurs de ses collègues ont déposé une proposition de résolution relative à la situation politique en Andorre (Doc. 5742) qui a été à l'origine du rapport que MM. Pontillon et de Puig (Doc. 6146) ont soumis à l'Assemblée en mai 1990. A l'issue du débat sur ce rapport, l'Assemblée a adopté la Résolution 946 (1990) relative à la situation en Andorre, dans laquelle elle a invité les coprinces et le Conseil général des vallées (le Parlement andorran) notamment à doter le pays «d'une constitution écrite qui fixerait les droit et libertés des citoyens tels que définis dans les traités internationaux sur la protection des droits de l'homme, ainsi qu'à proposer son adoption au peuple andorran par le moyen d'un référendum». L'Assemblée a adopté à la même occasion la Résolution 947 (1990) et la Recommandation 1127 (1990) relatives à la principauté d'Andorre, dans lesquelles elle a demandé respectivement l'établissement de contacts réguliers entre l'Assemblée et l'Andorre, et la participation de la principauté à certaines activités du Conseil de l'Europe.

7. Cette même année de 1990, les coprinces et le Conseil général des vallées ont entamé les discussions pour engager les réformes institutionnelles préconisées par l'Assemblée. En avril 1991 s'est ouverte une période constituante qui devait aboutir, en février 1993, à l'adoption par le Parlement andorran d'un projet de Constitution. Le 14 mars 1993, le peuple andorran a approuvé ce texte par référendum. 75 % des Andorrans ont voté en faveur de cette première Constitution écrite de la principauté. Aucun parti politique n'a proposé le rejet du texte, seules certaines personnes, à titre individuel, ont prôné une telle attitude. Les résidents étrangers qui n'ont pas participé au vote, étaient également largement favorables au projet de Constitution. La commission des questions politiques a suivi de très près l'évolution de la situation politique en Andorre et n'a pas manqué de souligner les progrès accomplis pendant la période constituante. La Constitution de la principauté d'Andorre est entrée en vigueur le 4 mai 1993. Deux jours plus tard, M. Ribas, chef du Gouvernement andorran, a officiellement transmis le texte au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

8. Le 7 octobre 1993, M. Farràs, Syndic général (président du parlement), s'est adressé au Président de l'Assemblée pour inviter des représentants de l'Assemblée à observer les élections qui ont eu lieu le 12 décembre 1993. Le Bureau de l'Assemblée a décidé, le 3 novembre 1993, de donner suite à cette invitation et a constitué une

commission *ad hoc* composée de représentants des groupes politiques. Le rapport d'information sur les élections en Andorre a été publié le 19 janvier 1994 (voir Addendum I au Doc. 6996).

9. Des délégations du Parlement andorran se sont rendues à Strasbourg au cours des sessions de l'Assemblée de septembre 1993 et d'avril 1994. Conduites par le Syndic général, M. Farràs en septembre et M. Dalleres en avril, les délégations se sont entretenues avec le Président de l'Assemblée, les présidents des commissions concernées par la demande d'adhésion, les rapporteurs et des représentants des groupes politiques.

III. Bref rappel historique

10. La première référence historique à l'Andorre apparaît dans l'acte de consécration de la cathédrale de la Seu d'Urgell, située dans le versant sud des Pyrénées, en 839. Ce texte signale que les paroisses d'Andorre font partie du territoire du comte d'Urgell. En 1133, le comte d'Urgell cède ses droits sur les paroisses andorranes à l'évêque d'Urgell. Celui-ci pour faire face aux hostilités des seigneurs féodaux voisins signe, en 1159, un traité avec un de ses puissants vassaux du versant nord des Pyrénées, la maison de Caboet. Cet accord reconnaît la souveraineté de l'évêque d'Urgell sur l'Andorre mais octroie à la maison de Caboet des droits féodaux sur le territoire. Par voie de mariage, le comte de Foix hérite de ces droits.

11. En septembre 1278, l'évêque d'Urgell et le comte de Foix, après de nombreux conflits au sujet de leurs droits respectifs sur l'Andorre, signent un paréage (*pareatge*), sorte de sentence arbitrale, qui constitue le premier document constitutionnel d'Andorre et définit les compétences économiques, judiciaires et militaires des deux seigneurs ainsi que les tributs (*quèstia*) que les Andorrans devront verser alternativement à l'évêque d'Urgell et au comte de Foix. En 1288, un deuxième paréage est venu compléter le précédent. Ces deux textes qui ne seront plus modifiés par la suite, règlent définitivement les différences entre les seigneurs, devenus les coprinces, et reconnaissent la neutralité de l'Andorre.

12. En 1419, faisant suite aux demandes des Andorrans, les deux coprinces leur octroient le privilège de créer un «Conseil de la terre». Ses membres sont élus une fois par an au sein de chaque paroisse mais doivent prêter serment devant les représentants des coprinces. Le Conseil de la terre qui allait devenir avec le temps le «Conseil général des vallées», est présidé par un Syndic général. Ce conseil est en fait la première instance parlementaire andorrane.

13. Au XVI^{e} siècle, les droits du comte de Foix sont transférés à la Couronne de France. Ainsi les droits sur l'Andorre sont partagés à titre personnel entre l'évêque d'Urgell et le roi de France, ce dernier en tant que successeur du comte de Foix.

14. La Révolution française entraîna une suspension du fonctionnement de cette structure institutionnelle. En effet, en 1793, les autorités du département de l'Ariège ont refusé de recevoir la *quèstia* qu'elles considéraient comme un vestige du régime féodal, contraire aux droits de l'homme et des nations. Mais, en mars 1806, à la demande des Andorrans, Napoléon I^{er} rétablit le statut de la principauté et devient le coprince français. Ce titre, avec les fonctions qu'il comporte, revient par la suite au Président de la République française.

15. En 1866, le coprince épiscopal promulgue le décret de «nouvelle réforme» établissant la composition du Conseil de la terre et des conseils de paroisse, le mode de scrutin et le fonctionnement des différentes institutions. Le Conseil de la terre devient Conseil général des vallées et le droit de vote est accordé aux chefs de famille (*Caps de casa*).

16. Face aux revendications des Andorrans, le suffrage universel masculin pour l'élection du Conseil général est établi, par décret des coprinces, en juillet 1933. En avril 1970, le droit de vote est accordé aux femmes.

17. En janvier 1981, à la demande des Andorrans, les coprinces adoptent un décret sur «le processus de réforme des institutions» qui permet notamment la création d'un Gouvernement andorran. Celui-ci est présidé par un chef de gouvernement (*Cap de Govern*), élu par le Conseil général. Il est composé de quatre à six ministres (*Consellers de Govern*) et assume les fonctions exécutives exercées auparavant par la Commission permanente du Conseil général.

18. Comme il a été signalé au paragraphe 7, en juin 1990, le Conseil général entame les négociations avec les coprinces en vue de doter la principauté d'une constitution écrite. En avril 1991 commencent les travaux de rédaction qui prennent fin en décembre 1992. En février 1993, le Conseil général adopte, à l'unanimité, le projet de Constitution qui, une fois approuvé par référendum, entre en vigueur le 4 mai 1993.

IV. La Constitution andorrane

19. Le rapporteur n'a nullement l'intention de répéter, dans ce chapitre sur la Constitution de l'Andorre, ce qui est contenu dans le rapport sur la législation de la principauté d'Andorre établi par MM. Lopez Rocha et Geus, déjà cité au paragraphe 4. Il se limitera donc à souligner les aspects les plus importants du texte constitutionnel.

20. Le préambule de la Constitution rappelle la tradition démocratique d'Andorre et signale que les institutions andorranes ont leur origine dans les paréages (*pareatges*). Ce même préambule affirme la volonté du peuple andorran de se doter des mécanismes susceptibles de garantir la sécurité juridique dans l'exercice des droits fondamentaux de la personne, de persévérer dans la promotion de valeurs telles que la liberté, la justice, la démocratie et le progrès social et de maintenir et renforcer les relations harmonieuses de l'Andorre avec le reste du monde.

21. Le titre I de la Constitution définit l'Andorre comme un état de droit indépendant, démocratique et social qui respecte et promeut, dans son action, les principes de liberté, d'égalité, de justice, de tolérance, de défense des droits de l'homme, ainsi que la dignité de la personne. A l'article 3, il est indiqué que «l'Andorre reconnaît les principes de droit international public universellement admis» et que «les traités et les accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique andorran (...) et ne peuvent être modifiés ou abrogés par la loi». Ceci implique donc que la ratification de la Convention européenne des Droits de l'Homme par l'Andorre aura pour conséquence que ses dispositions seront intégrées au droit juridique interne andorran.

22. Le titre II est consacré aux droits et aux libertés. Parmi les principes généraux qui figurent au chapitre I de ce titre figure la reconnaissance de l'égalité de toutes les personnes devant la loi et l'interdiction de toute discrimination «notamment pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d'origine, de religion, d'opinion ou de toute autre condition». Le chapitre II sur la nationalité andorrane prévoit qu'une loi qualifiée (dont

l'adoption requiert une majorité renforcée) déterminera les règles d'acquisition et de perte de la nationalité. En raison des particularités de la situation de la population andorrane en matière de nationalité, cette question sera évoquée ultérieurement.

23. Le chapitre III de ce titre II porte sur les droits fondamentaux de la personne et les libertés publiques. Le rapporteur ne peut que se féliciter du fait que les droits garantis par ce chapitre de la Constitution andorrane correspondent avec ceux reconnus par la Convention européenne des Droits de l'Homme et ses protocoles. Le chapitre IV est consacré aux droits politiques des Andorrans et reconnaît expressément le droit de créer librement des partis politiques. Le chapitre V contient des dispositions visant à assurer des droits et des principes économiques, sociaux et culturels qui vont souvent au-delà de la protection généralement accordée dans les Etats membres du Conseil de l'Europe. Le chapitre VI fait état des devoirs des Andorrans et des étrangers et le chapitre VII garantit l'exercice des droits et des libertés reconnus dans les chapitres précédents.

24. Le titre III de la Constitution porte sur le rôle et les compétences, conjointes et individuelles, des coprinces. Selon la tradition institutionnelle d'Andorre, ils constituent le chef de l'Etat (*Cap de l'estat*). La Constitution rappelle même leur origine historique et établit qu'ils sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité de l'Andorre. La Constitution a fortement réduit les pouvoirs des coprinces, ainsi que la dépendance des autorités andorranes à leur égard. Ainsi, par exemple, si l'un d'eux ne sanctionne pas une loi dans le délai prévu, celle-ci entre néanmoins en vigueur à l'expiration de ce délai si elle est signée par l'autre coprince et contresignée par le chef du gouvernement ou le Syndic général. La Constitution prévoit que chaque coprince désigne un représentant personnel en Andorre.

25. Le titre VI de la Constitution est consacré au Conseil général, l'organe parlementaire. Les membres du Conseil sont élus au suffrage universel libre, égal, direct et secret pour une durée de quatre ans. La moitié d'entre eux sont élus à raison d'un nombre égal pour chacune des sept paroisses et l'autre moitié par circonscription nationale. A l'heure actuelle, le Conseil général comprend vingt-huit membres.

26. Le titre V de la Constitution comporte une série d'articles concernant le pouvoir exécutif qui est exercé par un gouvernement dont le chef (*Cap de govern*) est élu par le Conseil général et nommé ensuite par les coprinces. Le titre VI porte sur l'organisation territoriale de l'Andorre et définit notamment les compétences des communes.

27. L'organisation de la justice est régie par le titre VII de la Constitution. Ce titre, ainsi que la loi qualifiée sur la justice du 3 septembre 1993 ont doté l'Andorre d'institutions judiciaires tout à fait comparables à celles des Etats membres du Conseil de l'Europe. La fonction juridictionnelle est exercée par les juges de première instance (*batlles*), le tribunal de *batlles*, le tribunal de *Corts* et le Tribunal supérieur de justice. Les *batlles* et le tribunal des *batlles* jugent, en première instance, les délits mineurs en matière pénale, civile et administrative. Le tribunal de *Corts* juge en première instance les délits majeurs et, en appel, les contraventions et les délits mineurs. Le Tribunal supérieur de justice est compétent pour juger tous les recours introduits contre les décisions judiciaires rendues par les *batlles* et le tribunal des *batlles* en matière civile et administrative, et par le tribunal des *Corts* en matière pénale. La Constitution prévoit en outre un Conseil supérieur de la justice, composé de cinq membres désignés, un par chaque coprince, un par le syndic général, un par le chef de gouvernement et un par les juges, chargés de représenter, de diriger et d'administrer l'organisation judiciaire et de veiller à l'indépendance et au fonctionnement de la justice. L'article 89 de la Constitution dispose que tous les membres du Conseil supérieur de la justice sont de nationalité andorrane.

28. Le titre VIII de la Constitution est consacré au Tribunal constitutionnel qui occupe dans l'ordre juridique andorran une place distincte du pouvoir judiciaire. Il est l'interprète suprême de la Constitution. Il connaît des recours en inconstitutionnalité contre les lois, des demandes d'avis préalable sur la constitutionnalité des droits et des traités internationaux, des procédures de protection constitutionnelle (recours d'empara), et des conflits de compétence entre des organes constitutionnels. Il peut être saisi aussi de questions préjudicielles qui lui sont adressées par les tribunaux. Le Tribunal constitutionnel est composé de quatre magistrats, désignés un par chaque coprince et deux par le Conseil général. Leur mandat est de huit ans et n'est pas immédiatement renouvelable. Parmi les quatre magistrats élus pour le premier mandat, un seul est de nationalité andorrane, les autres étant de nationalité française (un) et espagnole (deux). Ceci est perçu par les Andorrans comme un gage de l'indépendance du tribunal. Toutefois, la loi qualifiée sur le Tribunal constitutionnel prévoit que les magistrats non andorrans bénéficient de la nationalité andorrane pendant la durée de leur mandat.

29. Pour conclure ce chapitre, le rapporteur souhaite uniquement signaler que, à son avis, la Constitution andorrane est largement conforme aux principes qui animent le Conseil de l'Europe.

V. Questions relatives aux droits de l'homme

30. Puisque le rapport de MM. Lopez Rocha et Geus examine en détail les questions relatives aux droits de l'homme en Andorre, il ne semble donc pas nécessaire de revenir ici sur les aspects strictement juridiques. Toutefois, le rapporteur souhaite aborder brièvement la question de l'accès à la nationalité andorrane des étrangers résidant en Andorre. Cette question, évoquée par certains des interlocuteurs rencontrés au cours de la visite en Andorre, revêt un caractère essentiellement politique, l'accès à la nationalité impliquant l'accès aux droits politiques reconnus par la Constitution.

31. En effet, selon les statistiques de population disponibles, en 1992, la population résidant en Andorre s'élevait à 61 599 personnes. Elle se composait de 10 881 Andorrans (17,6 %), 6 563 personnes nées en Andorre (10,6 %), 28 556 Espagnols (46,4 %), 6 853 Portugais (11 %), 4 662 Français (7,5 %) et 1 089 Britanniques (1,7 %). Le reste, 2 995 personnes, incluait un nombre assez important de citoyens marocains.

32. Cette situation est le résultat du développement économique qu'a connu l'Andorre à partir des années 60 et qui a provoqué une importante immigration. A titre de comparaison, il suffit de rappeler qu'en 1960, la population en Andorre s'élevait à 8 392 personnes.

33. En septembre 1993, le Conseil général a approuvé une loi qualifiée de la nationalité qui avait pour but de faire coïncider autant que possible la population de fait avec la population de droit et d'élargir considérablement les possibilités d'acquérir la nationalité andorrane. Cependant, en décembre 1993, le chef du gouvernement a saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours en inconstitutionnalité contre certains articles jugés très restrictifs de cette loi. Dans son arrêt du 15 mars 1994, le Tribunal constitutionnel a annulé certaines dispositions de la loi sur la nationalité et formulé certaines indications qui devraient conduire le Conseil général à procéder à une nouvelle rédaction des articles annulés qui devrait assouplir considérablement les conditions d'acquisition de la nationalité.

34. Les entretiens avec les différents interlocuteurs ont laissé apparaître une orientation générale favorable à l'octroi plus généreux de la nationalité andorrane, notamment aux personnes considérées comme intégrées de par une longue période de résidence en Andorre. Certes, les législateurs devront tenir compte du contexte particulièrement sensible où s'inscrit ce problème car, tout en facilitant l'accès à la nationalité andorrane, ils doivent tenir compte du souhait légitime des Andorrans de préserver leur identité nationale. La situation andorrane où la population autochtone est inférieure en nombre à la population immigrée, constituant donc une minorité dans son propre pays, est unique en Europe.

VI. Autres questions

35. Depuis l'entrée en vigueur de la Constitution, le Conseil général est confronté à une tâche considérable: doter le pays d'un ordre juridique interne compatible avec le nouveau texte fondamental. Les lois qualifiées du Tribunal constitutionnel sur la justice, sur le régime électoral et le référendum, et la loi sur la nationalité constituent un exemple du travail accompli par les législateurs andorrans. Mais beaucoup reste encore à légiférer, notamment en matière de droit d'association, droits des résidents étrangers, politique d'immigration, etc. Les rapporteurs espèrent que les groupes politiques représentés au Conseil général feront l'effort nécessaire pour arriver à des accords leur permettant l'adoption des lois qualifiées nécessaires pour développer la Constitution.

36. Les représentants des médias ont déclaré avoir connu des problèmes sous le régime existant avant l'entrée en vigueur de la Constitution. Actuellement, l'exercice de leur profession n'est soumis à aucune contrainte.

37. Les représentants d'organisations non gouvernementales actives dans le domaine humanitaire ont informé les rapporteurs des garanties dont bénéficient les détenus. Le centre de détention, totalement indépendant de la police, offre des conditions de vie jugées très acceptables. En Andorre, toute personne a le droit, après cinq heures d'arrestation, de prévenir sa famille ou ses autorités consulaires et de passer une visite médicale. La détention provisoire est d'une durée de quatre mois, renouvelable une seule fois, et ce malgré la difficulté d'instruire certains délits qui exigent des commissions rogatoires internationales.

38. Certains résidents étrangers ont informé les rapporteurs de conflits ponctuels avec les autorités locales dans leur commune de résidence. Il s'agit toutefois de situations tout à faire comparables à celles existant dans les Etats membres et qui devront être tranchées par les tribunaux.

VII. Conclusion

39. Le rapporteur voudrait tout d'abord souligner que toutes les personnes rencontrées en Andorre se sont déclarées à l'unanimité en faveur de l'adhésion de la principauté au Conseil de l'Europe. Le fait que sa Constitution se soit largement inspirée de la Convention européenne des Droits de l'Homme est la meilleure preuve de la volonté andorrane de remplir les conditions essentielles pour adhérer à notre Organisation.

40. La Constitution du 4 mai 1993 a doté l'Andorre des caractéristiques d'un Etat de droit et a expressément reconnu le principe en vertu duquel toute personne placée sous la juridiction andorrane doit jouir des droits et libertés fondamentales. Certes, l'édifice constitutionnel andorran doit encore être complété, mais le rapporteur fait confiance au Parlement andorran pour accomplir cette tâche.

41. Celui-ci, issu des élections législatives du 12 décembre 1993, observées par l'Assemblée, représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif et élit et contrôle le gouvernement. Ces fonctions correspondent à celles de tout parlement élu dans un système pluraliste de représentation politique.

42. En ce qui concerne la protection des droits de résidents étrangers, le rapporteur voudrait noter que les ambassadeurs de la France et de l'Espagne se sont tous les deux déclarés convaincus qu'ils seraient mieux protégés si l'Andorre devenait membre du Conseil de l'Europe. En effet, dès que signée et ratifiée, la Convention européenne des Droits de l'Homme aura valeur constitutionnelle dans l'ordre juridique interne andorran.

43. La principauté d'Andorre, Etat indépendant, apparaît donc comme remplissant les conditions essentielles pour adhérer au Conseil de l'Europe. Par conséquent, la commission pourrait recommander à l'Assemblée l'adoption d'un avis favorable sur la demande d'adhésion de l'Andorre.

ANNEXE

Programme de la visite des rapporteurs en Andorre (30-31 mai 1994)

Lundi 30 mai 1994

10 h 00 Réunion avec la Sindicatura (Bureau du Parlement andorran)

10 h 30 Réunion avec les représentants des groupes parlementaires

10 h 30 Agrupament Nacional Democràtic
11 h 00 Grup Lliberal
11 h 30 Nova Democràcia
12 h 00 Coalicio Nacional Andorrana
12 h 30 Agrupament Canillo-Massana
13 h 00 Grup Mixt

13 h 30 Déjeuner avec les présidents des groupes parlementaires

16 h 00 Réunion avec la Commission législative de politique extérieure

17 h 30 Réunion avec le chef du gouvernement et le ministre des Relations extérieures

20 h 30 Dîner avec le chef du gouvernement

Mardi 31 mai 1994

10 h 00 Réunion avec l'ambassadeur de France

10 h 45 Réunion avec l'ambassadeur d'Espagne

11 h 30 Réunion avec le président du Conseil supérieur de la Justice

12 h 15 Réunion avec le président du Tribunal constitutionnel

13 h 00 Déjeuner avec les présidents du Tribunal constitutionnel et du Conseil supérieur de la justice

15 h 45 Réunion avec le représentant du coprince français

16 h 30 Réunion avec le représentant du coprince épiscopal

17 h 15 Réunion avec des organisations non gouvernementales et des associations

17 h 15 Barreau
18 h 00 Caritas/Croix-Rouge

18 h 30 Réunion avec les représentants des médias andorrans

19 h 30 Conférence de presse

20 h 30 Dîner offert par la Sindicatura

Commission chargée du rapport: commission des questions politiques.

Commissions saisies pour avis: commission des questions juridiques et des droits de l'homme et commission des relations avec les pays européens non membres.

Implications budgétaires pour l'Assemblée: à examiner par la commission du budget et du programme de travail intergouvernemental.

Renvoi en commission: Doc. 6988 et Renvoi n° 1915 du 24 janvier 1994.

Projet d'avis adopté à l'unanimité par la commission le 8 septembre 1994.

Membres de la commission: M. *Reddemann (Président)*, M^me^ *Baarveld-Schlaman (Vice-Présidente)*, Lord *Finsberg (Vice-Président)*, MM. Álvarez-Cascos, *Antretter*, Baumel *(Remplaçant: Jung)*, Bernardini, *Björn Bjarnason*, *Bokov*, *Bratinka*, *Büchel*, Dimas, Espersen, *Fassino*, Fogaš, *Galanos*, *Gricius*, *Güner*, *Hagard*, M^mes^ Haller, *Halonen*, MM. Hardy *(Remplaçant: Banks)*, Hellström, Irmer, Iwinski, *Kalus*, Kaspereit, Kelam, *Kelchtermans*, Kenneally, *König*, La Loggia, M^me^ *Lentz-Cornette*, MM. *van der Linden*, Machete *(Remplaçant: Roseta)*, *Martins*, Masseret, *Mimaroğlu*, *Muehlemann*, Pahor, Panov, M^me^ Papandreou *(Remplaçant: Kapsis)*, MM. Pozzo, de Puig *(Remplaçant: Borderas)*, Radulescu Botica *(Remplaçant: Botis Griguta)*, Schieder, Seeuws, *Severin*, Sir Dudley Smith, MM. *Špaček*, M^me^ Suchocka, MM. Szent-Iványi, *Thoresen*, Vella.

N.B.: Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont imprimés en italique.

Secrétaires de la commission: MM. Hartland, Kleijssen et M^me^ Chatzivassiliou.